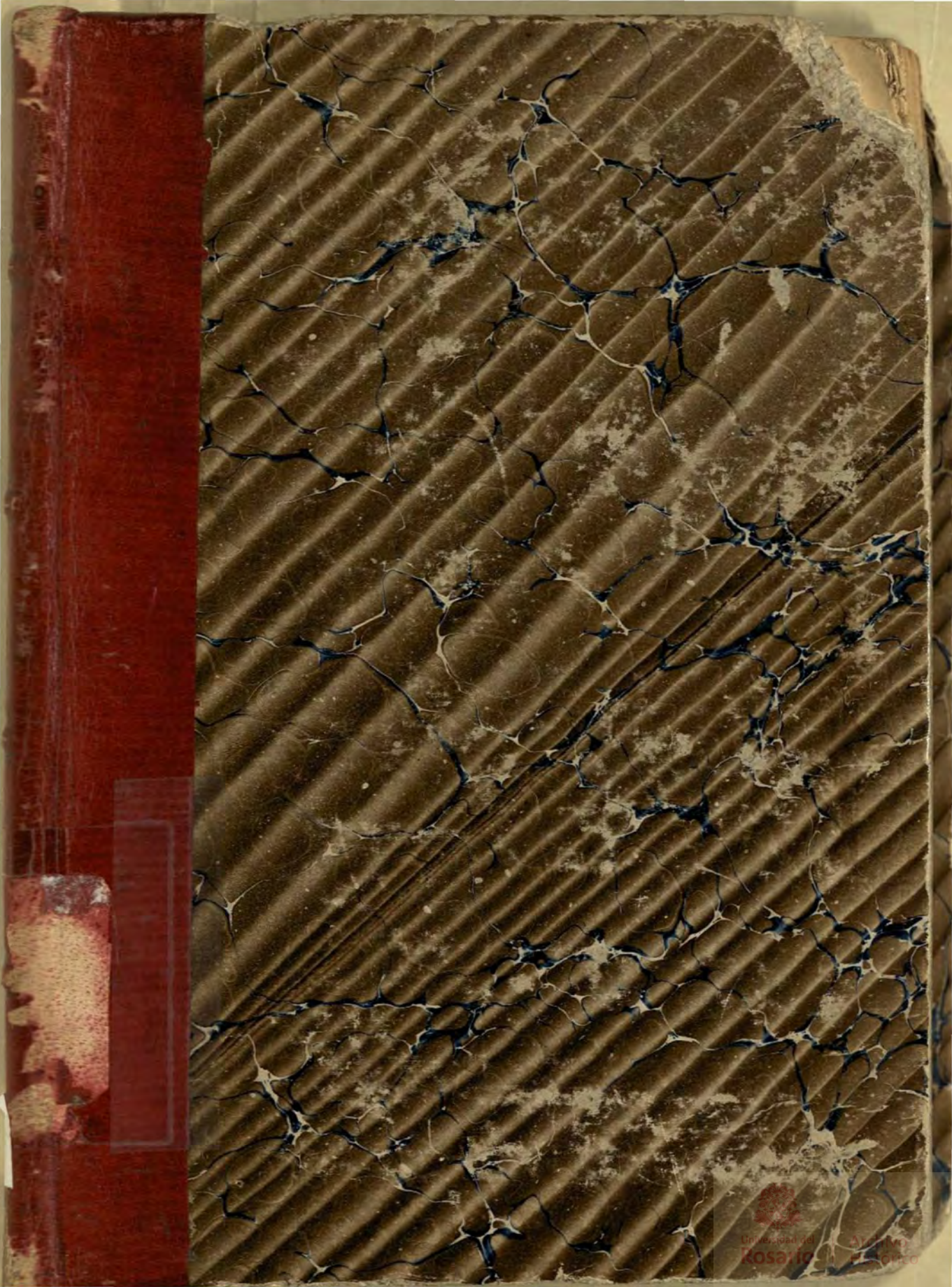


E30 N046 V.2 Ej.1

FECHA DE VENCIMIENTO

Universidad del Rosario
Archivo Histórico

DR. A. DUQUE RAMÍREZ
ABOGADO

349.861
C655s

SUPLEMENTO

DE LA

06923

CODIFICACION NACIONAL

POR

MANUEL J. ANGARITA

1891

6923

DE VENTA EN BOGOTÁ.

Almacén del señor Nicolás Campuzano, número 154,
frente al BANCO NACIONAL.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

Imprenta de *La Luz*, calle 13, número 100. Apartado 160.

AL LECTOR

I

El autor ha incurrido en las omisiones y yerros que va á indicar, y que corrige así:

Página 24.—Comentario del artículo 3.°—tercer renglón,
Dice: 2.ª Porque es inconveniente.
Léase: 2.ª Porque no es prudente.

Página 43.—A continuación del artículo 11 debió hacerse esta cita:
Ley 118 de 1890, artículo 45.

Página 157.—Al pie del artículo 368 se cita el 338; debió citarse el 388.

Página 158.—Artículo 370 ordinal 2.°—cuarto renglón del comentario,
Dice:.....del artículo que precede?
Debió decirse:.....del presente artículo?

Página 176.—Ley 118.—OBSERVACIÓN IMPORTANTE. Se dice:
Leyes 6.ª y 102 **de 1890.** Está demás lo que aquí va de tipo negro.

Página 204,—*Modelo* de la escritura de venta, al fin de él, se omitió lo siguiente:
"Se pagaron los derechos de registro, como consta de la boleta que aquí se agrega, y dice (aquí ella)."

Tales son las principales omisiones y los yerros en que ha incurrido el autor. Las otras imperfecciones tipográficas que este libro contenga,

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

son, de seguro, enteramente secundarias, y las corregirá el buen sentido del lector; quien debe proceder *inmediatamente* á hacer al margen de las respectivas páginas las correcciones yá indicadas.

II

Las anotaciones relativas á varios artículos de la Constitución se refieren, unas á las leyes expedidas por el Congreso de 1890, y otras á las leyes anteriores; las que se refieren á éstas debieron figurar en la Codificación Nacional: por inadvertencia del autor se omitieron.

III

Para las Resoluciones del Ministerio de Gobierno que se refieren al Código Político y Municipal, se examinaron los números del *Diario Oficial* hasta el correspondiente al 31 de Diciembre de 1890.

En la Ley 39, página 29, á continuación del artículo 5.°, se reproduce una Resolución del Ministerio de Justicia sobre pago de impuesto de registro, en los casos de cancelación de ciertos instrumentos, y de otorgamiento de escrituras de asociación. Resolución que se publicó en el mes de Enero de 1891.

IV

En la formación de los Modelos para extender algunos de los instrumentos que pasan ante los Notarios, se han consultado los que en la actualidad se usan, é introducido reformas sustanciales en los relativos á Testamento abierto—Escritura de capitulaciones matrimoniales—Escritura de recibo de los bienes que la mujer aporta al matrimonio—Escritura de venta—Escritura de permuta—Escritura de arrendamiento—Escritura de cesión de derechos—Escritura de mutuo con fianza ó hipoteca—Acta de protesto de una letra de cambio y Escritura de poder general para negocios. Llamamos la atención al modelo relativo á esta última escritura, especialmente á la nota marcada: (a).

CONSTITUCION NACIONAL

ANOTACIONES

relativas á varios artículos de la misma.

Artículo 7.°

La Ley 6.ª de 1890 créa algunas provincias en el departamento de Antioquia.

La Ley 102 de 1890 se refiere á algunas provincias del departamento del Cauca, y reconoce la del Caquetá en el mismo Departamento.

La Ley 118 versa sobre división territorial judicial.

Artículo 10.

La Ley 145 de 1888, sobre extranjería y naturalización, ha sido reglamentada por Decreto del Gobierno, de fecha 18 de Octubre de 1890. *Diario Oficial* número 8,218.

Artículo 11.

La Ley 10 de 1886 concede á los extranjeros *únicamente* el derecho de que sus reclamaciones por empréstitos, suministros y expropiaciones, ó daños causados en la guerra de 1885 á 1886, se consideren y resuelvan administrativamente.

Artículo 16.

El Senado de la República otorgó rehabilitación de los derechos políticos á varios individuos que la solicitaron. *Diario Oficial* de 1.° de Agosto y de 13 de Noviembre de 1890, números 8,140 y 8,234.

Artículo 28.

Véase el inciso segundo del comentario relativo á este artículo, y los artículos 3.° y 4.° de la Ley 23 de 1890, relativos al establecimiento de un Cuerpo de Policía nacional.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

Artículo 31.

La Ley 56 de 1890 versa sobre expropiaciones por causa de utilidad pública. Por esta ley se derogan todas las relativas á la materia. La Ley 119 de 1890 es reformatoria de la 56, mencionada.

Artículo 33.

El artículo 10 de la Ley 145 de 1888 se refiere al 33 de la Constitución; pero habiendo juzgado, como juzgamos, que la cita no es pertinente, nos abstuvimos de hacerla cuando nos ocupamos en el examen de este artículo constitucional.

Artículo 35.

La Ley 31 de 1886 aprueba la convención entre Colombia y España sobre propiedad intelectual, en virtud de la cual el derecho de propiedad se garantiza á los autores ó traductores de los dos países durante quince años, prorrogables en su oportunidad por un plazo igual.

La Ley 32 de 1886, sobre *propiedad literaria y artística*, reconoce á los autores de obras literarias y artísticas el derecho de explotar sus obras, previas ciertas formalidades, durante su vida. Después de su fallecimiento pasa este derecho á los legítimos dueños de ellas por el término de ochenta años. Esta ley regla íntegramente la materia.

Artículo 36.

La Ley 11 de 1886, por la cual se determina cómo debe regirse la Casa de educación de Jesús, María y José de Chiquinquirá, está en consonancia con el artículo 36 de la Constitución.

Artículo 62.

175 de la Constitución.

Artículo 64.

En el artículo 12 de la Ley 68 de 1887 se dispone que ningún empleado que deje de prestar sus servicios tendrá derecho de recibir sueldo del Tesoro público, á menos que sea por causa de enfermedad aguda y grave, legalmente comprobada, caso en el cual sólo podrá abonarse la mitad del sueldo que tenga asignado el empleo que desempeñe, y por un tiempo no mayor de tres meses en cada año.

El artículo 330 del Código Político y Municipal derogó, implícitamente, el 12 de la mencionada Ley 68 de 1887, y así lo ha declarado el Ministerio de Gobierno. Véase en este Suplemento la Resolución II, relativa al Código Político y Municipal.

Artículo 65.

116 de la Constitución.

Artículo 74.

290 del Código Político y Municipal, y 47, ordinales 9.°, 10.° y 11. del Código de Organización.

Artículo 76, *ordinal* 7.°

La Ley 29 de 1888 faculta al Gobierno para organizar una Oficina de Estadística; y la 110 de 1890 dio desarrollo á la primera.

Por la Ley 111 de 1890 se autorizó al Gobierno para crear Cámaras de Comercio.

Hacemos mención aquí de estas tres leyes en consideración á su importancia.

Artículo 76, *ordinal* 11.

La Ley 116 de 1890 estableció un impuesto de consumo sobre los naipes, y lo cedió á los municipios. Véase en el tomo principal el comentario relativo á este ordinal.

Artículo 76, *ordinal* 12.

La Ley 75 de 1890 aprueba, con algunas modificaciones, el convenio de 17 de Junio de 1889, relativo á la deuda exterior de la República.

Artículo 76, *ordinal* 15.

La Ley 1.ª de 1888 prohibió la acuñación de monedas de plata á la ley de 0'500. En la misma ley se reconoce la obligación de reemplazar ulteriormente por monedas de plata de 0'835 de ley, toda moneda de ley inferior, emitida ó que se emita con autorización del Gobierno, y los billetes del Banco Nacional.

Artículo 76, *ordinal* 16.

Entre los varios asuntos de que trata la Ley 124 de 1887 llama la atención, además del indicado en el comentario del mencionado ordinal 16.°, el relativo al máximum de la cantidad de níquel que el Gobierno puede poner en circulación, en el bienio de 1887 á 1888, á saber: la suficiente para completar un total de tres millones quinientos mil pesos ($ 3.500,000).

Artículo 76, *ordinal* 18.

Es digna de mención la Ley 30 de 1886 que crea una Junta Central de Higiene en la capital de la República, y otras departamentales para el mismo objeto, con residencia en las capitales de los Departamentos ó en sus ciudades principales.

La Ley 84 de 1886 aprobó un contrato celebrado por el Ministerio de Fomento con el señor Nicolás J. Casas, en virtud del cual el señor Casas debe establecer en el país las fábricas necesarias para la producción de los artículos conocidos en el comercio con los nombres de ácido sulfúrico, estearina y soda. El Gobierno no apoya esta empresa con subvención alguna; únicamente le ha otorgado algunas concesiones razonables, relativas á la libre introducción de las máquinas necesarias, y á la de la materia prima durante un período de seis años.

El artículo 2.° de la Ley 14 de 1887 dice qué empresas son de importancia nacional, para el efecto de que puedan ser auxiliadas ó fomentadas por la Nación. El artículo 3.° de esta misma ley se halla íntimamente relacionado con el segundo.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

Entre las varias autorizaciones que confiere al Gobierno la Ley 23 de 1887, relativa á empresas útiles, figura—artículo 1.°, ordinal 2.°—la de fomentar la apertura y composición de los caminos de herradura que conduzcan á las márgenes de los ríos Minero, Carare y Cesar; fomento que consiste, según el artículo 5.° de la misma ley, en permitir á los empresarios de dichos caminos que cobren durante cierto tiempo, y como derecho de tránsito, determinado peaje, conforme á tarifa convenida con el Gobierno; y en concederles tierras baldías en proporción á la extensión del camino abierto, no pudiendo exceder dicha concesión de mil hectáreas por cada legua de camino nuevo. En el artículo 8.° de la ley en que nos ocupamos se dispone que "las autorizaciones concedidas al Gobierno por el artículo 1.° de esta ley, *podrán extenderse* á los demás ríos, caminos ú obras que, á juicio del Gobierno, se hallen en circunstancias semejantes y puedan considerarse como vías que conducen al interior."

La Ley 62 de 1887 establece varias prohibiciones relativas á la ocupación de los caminos públicos por las vías férreas. También prohibe la importación de chinos para cualesquiera trabajos en el territorio colombiano, sin perjuicio de lo estipulado con determinadas compañías antes de la expedición de la misma ley.

Por la Ley 65 de 1887 se autoriza al Gobierno para conceder á las empresas industriales que fueren nuevas en el país, y que por su seriedad é importancia merezcan apoyo transitorio, exenciones de derechos de importación, hasta por el término de cinco años, para la introducción de la maquinaria. La misma ley dispone que todo artesano ó agricultor que viniere á trabajar en el país tiene derecho á introducir, libres de impuesto, además de su equipaje, hasta cien kilogramos de peso en las herramientas necesarias para su oficio, á juicio del Gobierno. Igualmente se autoriza á éste para gravar con un derecho hasta de cinco centavos por kilogramo la exportación de los nuevos artículos; impuesto que tiene por único objeto otorgar una prima de cinco mil á diez mil pesos al descubridor del artículo. Este impuesto es distinto del fluvial. Véase la Ley 77 de 1887, que lo establece.

La Ley 66 de 1887 reputa de utilidad pública las empresas de teléfonos á grandes distancias, que se establezcan en el territorio de la República, y las declara, *en consecuencia*, exentas de toda clase de impuestos y contribuciones nacionales, departamentales y municipales. Véase en el comentario del artículo 32 de la Constitución—página 53—el inciso que principia así: "En varias leyes, la 43 y la 72 de 1886...."

La Ley 77 de 1887 establece un impuesto fluvial de veinte centavos por cada carga de ciento veinticinco kilogramos de productos nacionales que con destino á la exportación baje por el río Magdalena, exceptuados determinados productos; y uno de cincuenta centavos por cada carga de mercancías extranjeras de igual peso que se introduzca. Este impuesto se destina principalmente para la canalización del río Magdalena, y una parte, á juicio del Gobierno, para la del rio Lebrija, en la sección comprendida entre Estación Santander y Peñas Blancas.

La Ley 74 de 1888 dispone que cuando la ley ó el contrato respectivo no fijen término especial para dar principio á las obras materiales privilegiadas, éstas deberán iniciarse á la expiración de seis meses, contados desde la sanción de la ley ó la fecha del contrato, pues de no iniciarse, caduca el privilegio. La misma ley dice qué se entiende por dar principio á una obra.

La Ley 8.ª de 1890 autoriza al Gobierno para que proceda como á bien tenga al resolver la adhesión definitiva de la República al Dictamen internacional firmado en Washington sobre continuación de un ferrocarril que ligue todas ó la mayor parte de las naciones que estuvieron representadas en aquella ciudad en el Congreso Internacional de 1889 y 1890.

La Ley 2.ª de 1887 aprobó un contrato celebrado entre el Gobierno y el señor Manuel María Paz, relativo á la publicación de un atlas geográfico de la república de Colombia, una carta geográfica de la misma, un libro de texto, y un mapa de la República, sencillo y claro, para el uso de las escuelas. La Ley 93 de 1890 autorizó al Gobierno para ampliar el contrato de que trata la mencionada Ley 2.ª de 1887, y destinar $ 20,000 para aumentar la edición de las obras de que habla el contrato.

De las varias leyes sobre fomento de empresas útiles ó benéficas, expedidas por el Congreso de 1890, son dignas de mención las siguientes:

La 16, aprobatoria del contrato celebrado entre el Gobierno y James L. Cherry, sobre construcción del ferrocarril de Buenaventura á Manizales.

La 23, que concede varias autorizaciones al Gobierno. De éstas, las más importantes son la relativa á la construcción de edificios adecuados para la Administración de la Aduana de Barranquilla, y para la Administración principal de las Salinas de Cundinamarca; y la referente á la canalización del brazo de Mompós. Para tales obras se destinan, respectivamente, estas cantidades: $ 60,000, $ 40,000 y $ 110,000.

La 29, que concede un auxilio de $ 20,000 para el camino que conduce de la ciudad del Carmen—departamento de Bolívar—á dos distritos del mismo Departamento, á orillas del río Magdalena.

La 30, que fomenta varias obras útiles, como la conservación y mejora de la vía del Quindío; la construcción de varios puentes en los departamentos del Cauca, Antioquia y Tolima; la navegación por vapor del río Cesar; la canalización del brazo del río Magdalena en las inmediaciones de la ciudad de Barranquilla, y algunas otras obras. Para la construcción de las especialmente mencionadas aquí se destinan los derechos de peaje y pontazgo que se cobran en la vía del Quindío, y además $ 63,000, los cuales deben distribuírse de la manera que la misma ley fija.

La 31, que concede auxilios á las ciudades de Ocaña ($ 20,000); Santa Rosa de Antioquia ($ 8,000); Neiva ($ 6,000), y San Juan de Córdoba, en el de Magdalena ($ 10,000), para que se provean de agua potable.

La 36, que auxilia dos establecimientos de Beneficencia, uno de los cuales es el Asilo de San José, para niños desamparados (Cundinamarca). Los auxilios concedidos á este establecimiento son: $ 11,000 que deben ser entregados á la sanción de la misma ley—$ 5,000 cada bienio, á partir del 1.° de Enero de 1891, por años anticipados—y $ 1,700 mensuales para atender á la alimentación y al pago de empleados.

La 37, que autoriza el establecimiento de un Monte de Piedad bajo la suprema inspección y dirección del Ilustrísimo Señor Arzobispo de la Arquidiócesis, y concede un auxilio de $ 50,000.

La 43, que auxilia los establecimientos de Beneficencia de la República. Destínase con tal objeto la cantidad de $ 116,780 para cada vigencia económica.

La 45, que aprueba el contrato celebrado por el Gobierno con el señor José Bonnet sobre establecimiento de la navegación por vapor de los ríos Orinoco y Meta.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

La 47, que aprueba el contrato celebrado entre el Gobierno y los señores Enrique Cortés & C.° Limited, de Londres, para la construcción y explotación de un camino de hierro, servido por vapor, entre Puerto Wilches, en el río Magdalena, y la ciudad de Bucaramanga.

La 50, relativa á la construcción de ferrocarriles y explotación de hulleras en la Costa Atlántica. En esta ley se otorga á los Departamentos, con arreglo á determinadas condiciones, un auxilio de $ 5,000 por cada kilómetro de vía férrea. La empresa de explotación de hulleras se auxilia con $ 20,000.

La 52, que declara vía nacional la que partiendo del municipio del Chaparral, en el departamento del Tolima, termine en Tuluá ó Buga, en el departamento del Cauca. Esta empresa se auxilia con $ 50,000 y 40,000 hectáreas de tierras baldías.

La 66, aprobatoria del contrato celebrado entre el Gobierno y el señor Ramón González Valencia para la construcción y explotación del ferrocarril de Cúcuta al río Magdalena.

La 67, que concede un auxilio para la construcción del ferrocarril de Antioquia. El auxilio consiste en una subvención hasta de $ 5,000 por kilómetro, en oro; ó la mitad del interés que se estipule.

La 68, que concede un auxilio al departamento de Boyacá, para la apertura del camino llamado de Occidente, hacia el río Magdalena, partiendo de la ciudad de Chiquinquirá. Esta empresa se auxilia con $ 100,000 y 100,000 hectáreas de tierras baldías.

La 69, que ordena la creación de un taller-modelo en la capital de la República. Para esta empresa se destinan $ 50,000.

La 70, que autoriza al Gobierno para conceder una prórroga á la Compañía Universal del canal interoceánico de Panamá. La Ley 107 de 1890 aprueba el contrato relativo á la apertura del canal de Panamá. En el artículo 9.° de este contrato se declara subsistente el de 23 de Marzo de 1878, sin más limitaciones ni modificaciones que las estipuladas en el nuevo contrato. Con la Ley 107 está relacionada la 112 de 1890, que versa sobre un contrato celebrado con el representante de la Compañía del ferrocarril de Panamá.

La 85, que destina la cantidad de $ 200,000 para los gastos de las obras de defensa de la ciudad de Cartagena contra las invasiones del mar; y las de $ 50,000 y $ 12,000 para atender á las obras de los puertos de Panamá y Tumaco, respectivamente.

La 91, que aprueba el contrato celebrado entre el Gobierno y el señor Manuel Ponce de León sobre prolongación del ferrocarril de *La Dorada* hasta Conejo, por el Norte; y hasta Los Manzanos, por el Sur, por la vía de Cambao.

La 99, que aprueba el contrato celebrado por el Gobierno con el señor Marco A. Fonseca para abrir y explotar un canal que ponga en comunicación la ciudad de Barranquilla con la bahía de Sabanilla.

La 100, que aprueba el contrato celebrado con el señor Rafael Fernández M. para la construcción y explotación de un camino de hierro servido por vapor entre la ciudad de Ocaña y el río Magdalena.

La 103, que autoriza al Gobierno para crear misiones y policía en la región regada por los ríos Putumayo, Caquetá y sus afluentes.

La 104, que dispone se tomen ciertas medidas higiénicas relacionadas con los Lazaretos.

La 108, que aprueba un contrato sobre establecimiento de un cable subfluvial.

La 117, aprobatoria de un contrato relativo al servicio de los correos en el río Magdalena.

Artículo 76, *ordinal* 20.

La Ley 1.ª de 1886 aprobó el Protocolo firmado en París el 24 de Mayo de 1886, relativo al asunto Cerruti. La Ley 26 del mismo año aprobó igualmente el Protocolo firmado en París el 25 de Agosto de 1886, adicional al de que se acaba de hablar.

La Ley 148 de 1888 aprobó el Tratado de recíproca extradición de reos entre la República y la Gran Bretaña.

Artículo 76, *ordinal* 22.

Con fecha 26 de Septiembre de 1890, el Presidente de la República dictó un Decreto en que se reglamenta la posesión de las tierras baldías que se adjudiquen. Dicho Decreto se halla publicado en el *Diario Oficial* de 12 de Octubre de 1890, números 8,207 y 8,208.

Artículo 78, *ordinal* 5.°

La Ley 18 de 1890 determina los casos en que se pueden conceder auxilios por causa de calamidades públicas.

Artículo 81.

La Ley 70 de 1888, que *subroga* la 44 del mismo año, exige el voto de las *cuatro quintas* partes de los miembros del Congreso, que estuvieren presentes, para conceder en casos extraordinarios recompensas distintas y mayores que las que permiten leyes anteriores vigentes.

A propósito de leyes vigentes sobre la materia, véanse estas: 50 de 1886--91 de 1887 y 84 (artículo 78) de 1890.

Artículo 98.

El artículo 11 de la Ley 7.ª de 1888, sobre elecciones populares, dispone que el Senado nombre cada cuatro años dos de los seis miembros que deben componer el Consejo electoral. Los otros cuatro miembros los nombran la Cámara de Representantes y el Presidente de la República, en número igual cada uno. La Ley 41 de 1890 reforma los artículos 11, 18 y 217 de la mencionada Ley 7.ª de 1888.

Artículo 102.

Conforme á la Ley 24 de 1886, el Jurado de Aduanas se compone del Ministro de Hacienda, del respectivo Contador de la Oficina de Cuentas y de un comerciante nombrado, cada dos años, por la Cámara de Representantes. La misma Cámara debe nombrar tres comerciantes suplentes para que, por su orden, reemplacen al principal cuando ocurra falta de éste, absoluta ó temporal. Si la Cámara no hiciere oportunamente dichos nombramientos, el Gobierno procederá á hacerlos libremente.

El artículo 11 de la Ley 7.ª de 1888, sobre elecciones populares, dispone que la Cámara de Representantes nombre cada cuatro años dos de los seis miembros que deben componer el Consejo electoral. Los otros

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

cuatro miembros los nombran el Senado y el Presidente de la República, en número igual cada uno. La Ley 41 de 1890 reforma el citado artículo 11 de la Ley 7.ª de 1888, y también los artículos 18 y 217 de esta misma ley.

Artículo 120, *ordinal* 6.°

En el artículo 7.° de la Ley 46 de 1887 se declara que á virtud de lo establecido en el presente ordinal 6.° de la Constitución, corresponde al Gobierno el nombramiento de Revisor del Banco Nacional.

El artículo 11 de la Ley 7.ª de 1888, sobre elecciones populares, dispone que el Presidente de la República nombre cada cuatro años dos de los seis miembros que deben componer el Consejo electoral. Los otros cuatro miembros los nombran la Cámara de Representantes y el Senado, en número igual. La Ley 41 de 1890 reforma los artículos 11, 18 y 217 de la citada Ley 7.ª de 1888.

Artículo 120, *ordinal* 10.

Por Decreto del Presidente de la República, de fecha 9 de Octubre de 1890—*Diario Oficial* número 8,218—se promulgó como ley de la República un Acuerdo diplomático entre Colombia y el Perú, sobre profesiones liberales.

Nos inclinamos á creer que dicho Convenio debió someterse á la aprobación del Congreso, reunido á la sazón, porque conforme á la disposición constitucional citada, el Presidente de la República no tiene facultad para aprobar los Convenios sino en el caso de que las Cámaras estén en receso.

Artículo 120, *ordinal* 15.

La Ley 53 de 1890 créa en la ciudad de Bogotá un nuevo establecimiento nacional de educación secundaria, denominado *Liceo Nacional*.

Las Leyes 122 y 126 de 1890 son adicionales á las de Instrucción Pública.

Artículo 132.

La Ley 13 de 1890 divide en ocho Ministerios el Despacho administrativo del Gobierno, á saber: Gobierno, Relaciones Exteriores, Justicia, Hacienda, Guerra, Instrucción Pública, Tesoro y Fomento.

Por Decreto número 774 de 20 de Noviembre de 1890—*Diario Oficial* número 8,255—se determinan los negocios que corresponden á los Ministerios de Justicia y Gobierno.

Artículo 151, *ordinal* 1.°

Los artículos 366 á 411 de la Ley 105 de 1890 versan sobre los recursos de casación y revisión.

Artículo 162.

La Ley 57 de 1887, artículos 236 á 262, instituye el Jurado. El artículo 98 del Código de Organización determina los asuntos de que conocen los Jueces Superiores de Distrito con intervención del Jurado. El artículo 9.° de la Ley 72 de 1890 reforma el 98 del Código de Organización.

Artículo 169.

La Ley 84 de 1890 versa sobre recompensas militares. Esta ley es muy importante; por ella se derogan todas las relativas á recompensas y pensiones militares.

La Ley 96 de 1890 créa el Monte Pío Militar.

La Ley 101 de 1890 versa sobre asignaciones militares.

Artículo 175.

62 de la Constitución.

Artículo 181.

La Ley 41 de 1890 reforma la 7.ª de 1888, que versa sobre elecciones populares. La reforma se refiere al nombramiento de los Consejeros electorales.

Artículo 185.

El artículo 6.° de la Ley 14 de 1887 autorizó á los Gobernadores para ejercer las atribuciones propias de las Asambles, en todo el tiempo anterior á la primera reunión constitucional de éstas; pero debiendo los Gobernadores consultar determinadas providencias suyas con el Gobierno, ó someterlas luégo á su aprobación en caso de urgencia en cumplirlas. Esta facultad conferida á los Gobernadores terminó el 20 de Junio de 1888, día en que debían reunirse las Asambleas Departamentales, á virtud de lo establecido en el artículo 219 de la Ley 7.ª de 1888, sobre elecciones.

Artículo 201.

La Ley 33 de 1890 adiciona y reforma la 83 de 1888, sobre legislación especial para la Administración del departamento de Panamá, y desarrolla el mencionado artículo 201 de la Constitución.

El Ministerio de Gobierno fijó, por resolución de fecha 18 de Julio de 1890, el término de las sesiones ordinarias de la Asamblea del departamento de Panamá—*Diario Oficial* número 8,128.

Artículo 205.

Los artículos 6.° y 7.° de la Ley 36 de 1886 son muy importantes, pues por lo dispuesto en ellos la reforma sucesiva de la tarifa de Aduanas se verificará á virtud de los estudios é indicaciones que deben hacer siete Comisiones nombradas para tal objeto, compuestas cada una de tres comerciantes notables, con residencia en determinadas plazas comerciales de la República.

En la Ley 21 de 1890, que versa sobre derechos de importación, se dispone que la misma sea ejecutada conforme al artículo 205 de la Constitución.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

MINISTERIO DE GOBIERNO

RESOLUCIONES

sobre puntos relativos al Código Político y Municipal.

En este Suplemento se hallan todas las Resoluciones del Ministerio de Gobierno sobre los puntos indicados, correspondientes al año de 1890.

Las Resoluciones dictadas en los años anteriores figuran en el tomo principal de la Codificación Nacional.

I

CONTRIBUCIONES

Corresponde á los Consejos Municipales determinar la cuantía de las contribuciones que les es lícito imponer, cuando la ley ó la ordenanza no la han fijado.

A virtud de consulta de la Municipalidad de Bogotá, el Ministerio de Gobierno resolvió:

Que conforme á la Ley 48 de 1887 (1) los Concejos no pueden crear nuevas rentas sin permiso de la respectiva Asamblea Departamental; que si ésta lo concede, pero no fija la cuantía del impuesto, "no por eso debe privarse á los Concejos del derecho que les dé la ordenanza correspondiente, y que, como consecuencia, es facultad suya la fijación de la cuota que por esos impuestos ha de cobrarse."

[Del *Diario Oficial* de 15 de Febrero de 1890, número 7,990].

[1] Véase el artículo 239 del Código Político y Municipal, que subroga el correspondiente (el 15) de la Ley 48 de 1887.

II

LICENCIAS

Licencias que pueden concederse á los empleados públicos—prórroga de las mismas. No hay derecho á sueldo cuando se está en uso de licencia.

Habiendo consultado los puntos indicados el Ministerio de Hacienda al de Gobierno, éste resolvió:

1.° Que la licencia á que tiene derecho todo empleado público, conforme al artículo 328 del Código Político y Municipal, está comprendida dentro del año común, es decir, el que se cuenta de 1.° de Enero á 31 de Diciembre; por lo cual tiene derecho de pedir nueva licencia de sesenta días, á partir de 1.° de Enero, el empleado que ha estado en uso de otra hasta el 31 de Diciembre inmediatamente anterior.

2.° Que es privativo de los respectivos funcionarios conceder, á parte de la legal, otras licencias, cuando lo estimen justo y conveniente.

3.° Que no pudiendo establecerse cuadro completo de justas causas para prorrogar las licencias, por ser muy variadas, debe dejarse al juicio y recto criterio de los funcionarios que deben otorgar las prórrogas, el apreciar y decidir una petición sobre este punto.

4.° Que el artículo 330 del Código Político y Municipal derogó el 1217 del Fiscal y el 12 de la Ley 68 de 1887. En consecuencia, que el empleado que obtenga licencia "no tiene derecho á parte alguna de sueldo, *en ningún caso*," pues así lo dispone el mencionado artículo 330 del Código Político y Municipal.

(Del *Diario Oficial* de 16 de Febrero de 1890, números 7,987 y 7,988).

III

EMPLEOS MUNICIPALES

¿Deben crearse nuevamente los empleos municipales yá establecidos por leyes de los extinguidos Estados, no derogadas? ¿Quién nombra los empleados que deben servir dichos empleos?

El Prefecto de la provincia de Oriente, en el departamento de Antioquia, resolvió, y el Ministerio de Gobierno aprobó: que teniendo tales leyes el carácter de Ordenanzas, conforme al artículo 321 de la Ley 153 de 1887, ellas regían en lo que no fuera contrario á la Constitución y leyes de la República, por lo cual no era el caso de crear dichos empleos; y que el nombramiento de los respectivos empleados correspondía hacerlo á la entidad á quien se hubiera atribuído en las mismas leyes.

(Del *Diario Oficial* de 23 de Febrero de 1890, números 7,992 y 7,993).

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

IV

MULTAS

El Ministerio de Hacienda, en nota circular de fecha 9 de Agosto de 1890, ha dispuesto que los empleados nacionales que impongan multas tienen el deber de dar inmediatamente aviso al expresado Ministerio del valor de cada multa, del nombre y apellido del individuo multado, del empleado de Hacienda nacional comisionado para hacer efectiva aquélla, y del resultado de la imposición de las multas, es decir, si se han pagado, ó conmutado, ó relevado de ellas.

(Del *Diario Oficial* de 12 de Agosto de 1890, número 8,150).

El Ministerio de Gobierno ha resuelto que las multas que impongan los funcionarios del ramo judicial deben ingresar al Erario nacional.

(Del *Diario Oficial* de 11 de Septiembre de 1890, número 8,176).

V

CONSEJEROS MUNICIPALES

Los empleados del Orden Judicial y los del Ministerio Público pueden desempeñar el cargo de Consejeros Municipales.

A virtud de consulta del Fiscal del Juzgado Superior de Panamá, el Ministerio de Gobierno resolvió:

"La ley ha establecido claramente la incompatibilidad entre los cargos del Orden Judicial y del Ministerio Público entre sí y con cualquiera otro retribuído, así como con el ejercicio de puestos emanados de elección popular para Asambleas ó Congresos, que no tienen carácter permanente en sus sesiones, pues se expresa en estos términos: 'Mientras éstas (las Corporaciones citadas) no estén reunidas,' frase que excluye á los Consejos Municipales.

Por tanto, se declara:

Los empleados del Orden Judicial y del Ministerio Público pueden, sin que esto les haga perder el destino, desempeñar el cargo de Consejeros Municipales."

(Del *Diario Oficial* de 20 de Octubre de 1890, número 8,215).

RESOLUCIONES

sobre asuntos civiles.

En este suplemento figuran las Resoluciones del Gobierno sobre la materia indicada, publicadas en el *Diario Oficial* correspondiente al año de 1890 y posteriores á las que se hallan en el tomo principal de la *Co-*

dificación Nacional; menos las que versan sobre puntos que han sido resueltos por la Ley 39 de 1890, y que por esto mismo no hay objeto en reproducir.

VI

NOTARIATO

MATRIMONIO

1.° El Notario que tiene conocimiento de la celebración de un matrimonio que no ha presenciado, ¿debe dar aviso de ello á alguna autoridad?

2.° El matrimonio católico celebrado sin la presencia del Notario produce efectos civiles.

El Ministerio de Gobierno, con fecha 19 de Marzo de 1890, aprobó la siguiente resolución de la Gobernación de Medellín.

"La Ley 35 de 27 de Febrero de 1888 no consagra ninguna disposición que obligue á los Notarios, ó en su defecto ó los Secretarios de los Consejos Municipales, á dar cuenta á la autoridad eclesiástica ó civil de que se haya verificado algún matrimonio católico sin su presencia, por no habérsele notificado previamente; porque se supone que los cónyuges han de llenar cumplidamente ese deber, señalado por el artículo 17 de la Ley 35, yá citada.

"Todas las dificultades á este respecto quedan allanadas con encarecerle al señor Cura párroco, ó á quien haga sus veces, que ordene á los contrayentes cumplan religiosamente con el deber que la ley les señala de dar aviso oportuno y previo al empleado civil en referencia, con el objeto de que él presencie el matrimonio y haga la inscripción en el registro civil.

"Respecto del segundo punto, el matrimonio católico produce efectos civiles aun cuando haya sido celebrado sin la intervención del Notario. Así está resuelto por el Ministerio de Gobierno. Véase el *Diario Oficial* número 7,901 de 19 de Octubre de 1889."

(Del *Diario Oficial* de 22 de Marzo de 1890, número 8,011).

Véanse en la *Codificación Nacional*.—Tratado primero, Código Civil—las Resoluciones sobre Matrimonio, especialmente la VI.

VII

ESCRITURAS

¿Son válidas las escrituras otorgadas por los Secretarios de los Consejos Municipales que han ejercido funciones de Notario sin autorización del Gobierno?

El Secretario de Gobierno del departamento de Santander resolvió que las escrituras otorgadas por los expresados Secretarios Municipales con anterioridad á la promulgación de la Resolución del Ministerio de Gobierno de fecha 4 de Marzo de 1890—*Diario Oficial* números 8,002 y 8,003—son válidas.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

Sometida á la consideración del Gobierno la expresada resolución, éste dijo:

Como sea "función atribuída al Poder Judicial la de declaratoria de validez ó nulidad de los actos á que se contrae la resolución que antecede, y eso en cada caso particular que se le presente, este Ministerio se abstiene de aprobarla."

Véanse en la *Codificación Nacional*, Tratado primero, las Resoluciones XXVI. LXXXI y las en ella citadas.

(Del *Diario Oficial* de 18 de Octubre de 1890, número 8,212).

REGISTRO

SECCIÓN PRIMERA

Registro de títulos relacionados con las sucesiones.

VIII

Libros en que deben registrarse las cartillas de hijuelas.

El Ministerio de Gobierno, con fecha 17 de Marzo de 1890, resolvió:

"Es claro que las cartillas de hijuela requieren ser inscritas en el libro que manda llevar el artículo 38 de la Ley 57 de 1887. Mas como estos documentos sean títulos traslaticios del dominio de la propiedad, según lo ha resuelto terminantemente el Gobierno, ellas deben ser registradas en los libros 1.° y 2.°, ó en ambos, según el caso, de acuerdo con lo que pidan los interesados, que es á quienes incumbe hacerlo y no por resolución ó capricho del Registrador."

(Del *Diario Oficial* de 23 de Marzo de 1890, números 8,012 y 8,013).

Véase en la *Codificación Nacional*, Tratado primero, la Resolución XXXII y en el mismo Tratado el número 273 de orden, que corresponde al artículo 38 de la Ley 57 de 1887.

IX

Los Registradores no deben registrar las hijuelas en tanto que no se haya protocolizado la respectiva cuenta de partición.

El Ministerio de Gobierno aprobó la resolución del Gobernador del departamento de Panamá en que se previene que los Registradores de instrumentos públicos no registren los títulos de hijuela si no se halla protocolizada la cuenta de partición de los bienes de la respectiva sucesión.

(Del *Diario Oficial* de 3 de Agosto de 1890, números 8,142 y 8,143).

X

Las sentencias aprobatorias de las particiones en juicios de sucesión deben registrarse, aunque los bienes de la sucesión se hallen embargados.

El Ministerio de Gobierno aprobó el 27 de Agosto de 1890—*Diario Oficial* número 8,176—una resolución del Secretario de Hacienda del Gobierno departamental de Antioquia, en que se establece que la sentencia de partición en un juicio de sucesión no debe registrarse si algunos de los bienes de ésta estuvieren embargados. Pero el mismo Ministerio revocó dicha resolución por otra que dictó con fecha 9 de Octubre de 1890.

(*Diario Oficial* de 10 de Octubre de 1890, número 8,205).

SECCIÓN SEGUNDA

Registro de documentos privados.

XI

No puede registrarse un documento privado si no concurren al acto del registro las partes contratantes, ó sus legítimos herederos.

El Ministerio de Gobierno, con fecha 10 de Abril de 1890, aprobó la siguiente resolución de la Gobernación del departamento del Cauca:

.....

"SE RESUELVE:

"1.° A la solemnidad del registro deben concurrir las partes contratantes, como lo dispuso Su Señoría el Ministro de Gobierno, con fecha 25 de Junio de 1888 (*Diario Oficial* número 7,104). Mas si una ó más partes contratantes han fallecido, cree el infrascrito que deben representarlas en el acto sus herederos legalmente constituídos.

(Del *Diario Oficial* de 14 de Abril de 1890, número 8,027).

SECCIÓN TERCERA

Resoluciones varias sobre registro, todas muy importantes.

XII

No puede registrarse el testimonio de una escritura pública de venta de una finca raíz en tanto que se halle embargada, aunque el comprador de la finca sea el mismo acreedor que solicitó el embargo de ella.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

El Ministerio de Gobierno dictó la siguiente resolución, con fecha 17 de Marzo de 1890.

"El Gobierno entiende que el objeto de la ley al establecer la formalidad del registro de los autos de embargo de las fincas raíces y de las demandas civiles sobre propiedad de inmuebles, es hacer efectivos los derechos del acreedor ó dueño, evitar que el juicio se haga ilusorio en sus efectos, y amparar, además, á terceros que pudieran proceder á celebrar contratos prohibidos, por la ignorancia de los hechos. En los casos, pues, en que los contratos sobre bienes embargados ó en litigio no sean ilícitos, al tenor de los incisos 3.° y 4.° del artículo 1,521 del Código Civil, parece natural que no pueda prohibirse ni impedirse lo que la misma ley declara ser lícito y permitido, y que de consiguiente los Registradores no debieran denegarse á inscribir las escrituras respectivas; mas como esto también pudiera prestarse á fraudes en perjuicio de terceros, lo más regular y justo es que una vez que acreedor y deudor, ó demandante y demandado, en su caso, han llegado á un acuerdo, pidan conjuntamente al Juez la cancelación del embargo, antes de registrar la escritura de venta ó dación en pago que tengan otorgada." ....

(Del *Diario Oficial* de 20 de Marzo de 1890, número 8,010).

XIII

El pago del derecho de registro, en caso de remate de un inmueble, se verifica en la Oficina de Recaudación de Hacienda del Distrito donde se celebra el remate. Excepción de esta regla.

El Ministerio de Gobierno, con fecha 2 de Abril de 1890, resolvió:

....

"2.° El derecho de registro debe pagarse en la Oficina de Recaudación de Hacienda del Distrito en donde tenga lugar el remate de la finca, salvo lo que sobre el particular haya dispuesto la Asamblea ó el Gobernador de Cundinamarca, por ser el punto consultado materia de reglamentación de una renta departamental." .....

(Del *Diario Oficial* de 12 de Abril de 1890, número 8,024).

XIV

El amparo de pobreza no se extiende á la exención de los derechos de registro.

El Gobernador del departamento del Cauca aprobó la siguiente resolución del señor Prefecto de Buga, la cual fue aprobada, á su vez, por el Ministerio de Gobierno, con fecha 7 de Abril de 1890:

"El amparo de pobreza judicialmente declarado no comprende los derechos de registro estatuídos por la Ley 34 de 1887, los cuales deben pagarse en toda forma de derecho por el interesado."

(Del *Diario Oficial* de 15 de Abril de 1890, número 8,028).

XV

Las escrituras de donación entre vivos, relativas á bienes raíces, están sujetas al pago del derecho de registro.

El Ministerio de Gobierno aprobó, con fecha 14 de Abril de 1890, la siguiente resolución de la Gobernación del departamento de Bolívar.

.....

"Llegado el caso de otorgar la escritura de que trata el artículo 1457 del Código Civil, debe aplicarse, sin excepción, para el cómputo del derecho de registro, la disposición referente á los reconocimientos por instrumentos públicos, cual es el ordinal 1.° del artículo 4.° de la Ley 34 de 1887." (1)

(Del *Diario Oficial* de 27 de Abril de 1890, números 8,041 y 8,042).

XVI

Cuando una misma escritura debe registrarse en dos Circuitos, se causa el derecho doble si no se registra en ambos dentro de los veinte días fijados por la ley.

El Prefecto de Buga dijo, respecto de este punto, que el artículo 3.° de la Ley 34 de 1887 no admite ninguna excepción, y que el doble registro de una escritura no es motivo para que deje de hacerse oportunamente alguna de las inscripciones.

Fundado en esta razón, el mencionado Prefecto resolvió:

"Que en el caso propuesto deben pagarse derechos dobles para registrar la escritura en el Circuito de Buga."

La presente resolución fue acogida por el Gobernador del Cauca, y ésta aprobada por el Ministerio de Gobierno.

(Del *Diario Oficial* de 10 de Mayo de 1890, número 8,056).

XVII

Resolución sobre un caso análogo al de que trata la que precede.

El Ministerio de Gobierno dictó, con fecha 1.° de Mayo de 1890, la siguiente resolución:

"Cuando—como en el caso del presente memorial—se extienden escrituras que requieren el ser inscritas en dos Círculos distintos, no basta, para que el registro quede perfeccionado, el que se haya hecho en uno de ellos, y pueda dejarse para cuando se quiera, sin pagar doble derecho, la verificación del otro. El artículo 3.° de la Ley 34 de 1887 no hace exclu-

(1) Dicho ordinal 1.° corresponde al 1.° del artículo 4.° de la Ley 39 de 1890.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

siones, como no podía hacerlas, y es terminante. En consecuencia, toda vez que sea imputable á los interesados la mora y dejen transcurrir los veinte días dentro de los cuales debe hacerse el registro de instrumentos públicos, se cae bajo la sanción de la ley y hay que abonar el derecho duplicado."

(Del *Diario Oficial* de 11 de Mayo de 1890, números 8,057 y 8,058).

XVIII

1.° Cuando un instrumento público contiene dos ó más actos ó contratos diferentes debe pagarse derecho de registro por cada uno.

2.° Si no se paga íntegramente el derecho de registro, el Registrador debe abstenerse de verificar el registro.

El Ministerio de Gobierno aprobó una resolución del Secretario de Hacienda del Gobierno departamental de Antioquia, la cual es aprobatoria de otra del Prefecto de la provincia de Occidente. En esta resolución se establecen, con relación á un instrumento que contenía dos poderes, los principios que nosotros acabamos de formular en términos *generales*, y que constituyen el cuestionario que se halla á la cabeza de estos conceptos.

(Del *Diario Oficial* de 3 de Agosto de 1890, números 8,142 y 8,143).

XIX

El derecho de registro para el otorgamiento de escrituras relativas á contratos en que se especifique moneda extranjera, debe pagarse teniendo en consideración la equivalencia de ésta respecto de la legal.

El Prefecto de la provincia de Barranquilla resolvió:

"Que en todo contrato ó reconocimiento por escritura pública ó documento privado que se registre, los valores que ellos expresen deben ser en moneda del país, y en todo caso debe pagarse el derecho de registro equivalente á la moneda que figure."

El Ministerio de Gobierno aprobó esta resolución en los siguientes términos:

"Apruébase lo dispuesto por el Prefecto de la provincia de Barranquilla en el punto de que se trata. Para determinar la equivalencia de monedas extranjeras de que tratan los instrumentos públicos con el billete nacional, se solicitará la certificación jurada de dos comerciantes respetables de la localidad en que el instrumento se otorgue, nombrado el uno por el interesado y el otro por el Registrador."

(Del *Diario Oficial* de 4 de Septiembre de 1890, número 8,170).

XX

Para el otorgamiento de escrituras públicas relativas á fincas raíces no es necesaria la comprobación de que éstas no están embargadas.

El Ministerio de Gobierno aprobó la siguiente resolución del Prefecto de la Provincia de Cartagena:

"No habiendo disposición alguna que ordene á los Notarios que para extender las escrituras es indispensable la presentación del certificado del Registrador en que se compruebe que la finca no está embargada, aquellos empleados pueden extender dichos documentos sin este requisito."

(Del *Diario Oficial* de 23 de Septiembre de 1890, número 8,186).

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

LEYES DE 1890

Relacionadas con las que contiene el tomo principal de la Codificación Nacional

---

LEY 4.ª

(10 DE SEPTIEMBRE),

que deroga una disposición y reforma otra del Código de Organización Judicial.

(Se publicó en el *Diario Oficial* de 13 de Septiembre de 1890, número 8,177).

El Congreso de Colombia

DECRETA :

Art. 1.° Derógase la atribución diez y ocho (18) del artículo 47 del Código de Organización Judicial.

La atribución que se menciona es la que autorizaba á la Corte Suprema de Justicia para resolver las dudas que se le consultaran sobre la inteligencia de las leyes relativas á la organización y procedimiento judicial, y á los vacíos que se notaran en las mismas leyes.

Art. 2.° Cada Tribunal tendrá un Secretario, un Oficial Mayor, tantos Escribientes como Magistrados, y uno más, y un Portero-Escribiente, todos de libre nombramiento y remoción del mismo Tribunal.

Cuando el Tribunal se divida en dos Salas, cada una de éstas tendrá, fuera del Portero común y de los escribientes para los Magistrados, un Secretario, un Oficial Mayor y un Oficial-Escribiente.

Cuando el Tribunal se reúna en pleno será Secretario el de la Sala de lo civil.

En el Tribunal Superior de Cundinamarca habrá dos Oficiales-Escribientes en la Secretaría de lo civil, y uno en la de lo criminal, y un Portero-Escribiente para cada Sala.

Queda así reformado el artículo 71 del Código de Organización Judicial.

Dada en Bogotá, á tres de Septiembre de mil ochocientos noventa.

El artículo 6.° de la Ley 118 sobre división territorial judicial, dispone que el personal subalterno de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial será el que establece el artículo 2.° de esta ley.

LEY 6.ª

(20 DE SEPTIEMBRE),

por la cual se créan algunas provincias en el departamento de Antioquia.

(Se publicó en el *Diario Oficial* de 25 de Septiembre de 1890, número 8,188).

El Congreso de Colombia

DECRETA :

Art. 1.° Créanse en el departamento de Antioquia las siguientes provincias :

La de Occidente, compuesta de los distritos municipales de Antioquia, que será su cabecera, Anzá, Betulia, Buriticá, Cañasgordas, Dabeiba, Frontino, Giraldo, Pavarandocito y Urrao.

La de Sudoeste, compuesta de los distritos municipales de Jericó, que será su cabecera, Andes, Bolívar, Concordia, Jardín, Nueva Caramanta, Támesis y Valparaíso.

La de Noroeste, compuesta de los distritos municipales de Yarumal, que será su cabecera, Angostura, Campamento, Ituango y Randal.

Art. 2.° El personal de dichas provincias se compondrá de un Prefecto, un Secretario, un Oficial-Escribiente y un Portero-Escribiente.

Art. 3.° Los demás distritos municipales de la antigua provincia de Occidente continuarán formando una provincia que se denominará "Provincia de Sopetrán."

Art. 4.° El Gobernador del departamento de Antioquia señalará por decreto especial, mientras se reúne la Asamblea Departamental, las asignaciones de que deben disfrutar los expresados empleados de las nuevas provincias, y los gastos de material y escritorio de las respectivas Oficinas.

Art. 5.° Las asignaciones de que habla el artículo anterior no serán mayores de las que tienen los empleados de igual clase en la actualidad.

Art. 6.° Segrégase de la provincia de Oriente el municipio de Santa Bárbara y agrégase á la del Centro.

Art. 7.° Esta Ley comenzará á regir el 1.° de Enero de 1891. El Gobernador del departamento de Antioquia dictará en oportunidad las disposiciones convenientes para que en esa fecha funcione el régimen político y municipal en las nuevas provincias. Entre tanto, los distritos municipales segregados continuarán perteneciendo á sus respectivas provincias, y adminiinistrados como hasta el presente.

Dada en Bogotá, á quince de Septiembre de mil ochocientos noventa.

Véase en el tomo principal de la *Codificación Nacional* el cuadro sobre división territorial correspondiente al departamento de Antioquia.

El artículo 3.° de la Ley 33 de 1890, relativa á Panamá, dispone que la capital de la provincia de Los Santos se traslade á la ciudad de Pesé.

La Ley 102 de 1890 introduce modificaciones en la división territorial del departamento del Cauca.

La Ley 118 de 1890 versa sobre división territorial judicial.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

LEY 14

(13 DE OCTUBRE),

por la cual se da una autorización al Gobierno.

(Se publicó en el *Diario Oficial* de 14 de Octubre de 1890, número 8,210).

El Congreso de Colombia

DECRETA :

Artículo único. Autorízase al Gobierno para conceder á los Bancos particulares que lo soliciten, un plazo hasta de dos años para recoger los billetes que actualmente tengan en circulación.

Dada en Bogotá, á trece de Octubre de mil ochocientos noventa.

Véanse en la *Codificación Nacional*, Tratado segundo, el número 46 de orden y los en él citados.

LEY 33

(7 DE NOVIEMBRE),

por la cual se adiciona y reforma la 83 de 1888, sobre legislación especial para la Administración del departamento de Panamá; y se desarrolla el artículo 201 de la Constitución.

(Se publicó en el *Diario Oficial* de 14 de Noviembre de 1890, número 8,235).

El Congreso de Colombia

DECRETA :

Art. 1.° El puerto franco de Bocas del Toro, en la comarca del mismo nombre, queda habilitado para el comercio de importación y exportación, y gozará de la excepción que el inciso 2.° del artículo 32 del Código Fiscal ha hecho para los puertos de Panamá y Colón.

Art. 2.° Autorízase al Gobierno para que permita el comercio franco de cabotaje y costanero en los puertos del golfo de San Blas, en la costa atlántica del departamento de Panamá, y para que establezca y reglamente el sistema tributario á que debe sujetarse ese comercio.

Art. 3.° Trasládase, desde la promulgación de la presente Ley, la capital de la provincia de Los Santos, en el departamento de Panamá, de la ciudad de la Villa de Los Santos á la de Pesé.

Asimismo, el Juzgado de Circuito que actualmente tiene su asiento en la Villa de Los Santos, pasará á la nueva capital de la provincia.

Las Leyes 6.ª, 102 y 118 de 1890, versan sobre división territorial.

Art. 4.° La cuantía de que puede conocer el Juez de Comercio de Panamá será la que exceda de doscientos pesos.

Véase en la *Codificación Nacional*, Tratado intitulado *Legislación especial de Panamá*, pág. 339, el inciso tercero del artículo 13 de la Ley 83 de 1888.

Art. 5.° Desde el mes de Enero de 1891 continuará el departamento de Panamá recibiendo directamente de la Compañía del ferrocarril de Panamá la suma de veinticinco mil pesos ($ 25,000) en oro americano, que le asignó la Ley 46 de 1867, por la cual se aprueba un contrato.

El Gobierno dará el oportuno aviso á la Compañía del ferrocarril de Panamá, á fin de que lo dispuesto por este artículo se cumpla en la fecha expresada en él.

Art. 6.° Desde el 1.° de Enero de 1891, la Contaduría General del departamento de Panamá constará de un Contador General y un Secretario, de libre nombramiento del Gobierno.

Este artículo subroga, respecto de Panamá, al 4.° de la Ley 140 de 1887, que dice:

"En cada uno de los Departamentos nacionales habrá un solo Contador encargado del examen de las cuentas que no quedan centralizadas, y será nombrado por el Poder Ejecutivo Nacional."

Art. 7.° Las disposiciones legislativas dictadas por el Congreso y las que dicte en adelante, en los ramos civil, comercial, penal, de minas, judicial, fiscal, militar y de instrucción pública, regirán en el departamento de Panamá en cuanto no estén en contradicción con el artículo 13 de la Ley 48 de 1887 (fiscal) y con las disposiciones de la Ley 83 de 1888. En consecuencia, las leyes especiales de que trata la última parte del artículo 201 de la Constitución, comprenderán solamente los ramos administrativo y fiscal del Departamento.

Véase en la *Codificación Nacional*, Tratado intitulado *Legislación especial de Panamá*, pág. 343, el artículo 49 de la Ley 83 de 1888, el cual se modifica por el presente.

Las Leyes 48, artículo 13, y 83, que se citan, se hallan en el mencionado Tratado de la *Codificación Nacional*.

Art. 8.° Autorízase al Gobierno para que suprima uno de los dos Juzgados de lo civil de la ciudad de Panamá, cuando á su juicio baste no solamente para la buena administración de justicia.

Conforme á los artículos 4.°, ordinal 3.°, y 13 de la Ley 83 de 1888—*Codificación Nacional*, Tratado intitulado *Legislación especial de Panamá*—hay cuatro Jueces en el Circuito de Panamá, con residencia en la ciudad del mismo nombre, de los cuales dos conocen de los asuntos civiles, uno de los de comercio y uno de los criminales.

La Ley 118 sobre división territorial judicial—artículo 31—dispone, en consonancia con la 83 mencionada, que en la cabecera del circuito de Panamá haya cuatro Jueces; á los cuales no les es aplicable lo que dispone el artículo 45 de la misma Ley 118, á virtud de lo prescrito en el artículo 7.° de la presente.

Art. 9.° Quedan en los términos de la presente ley reformado el artículo 4.° de la Ley 140 de 1887, y adicionadas y reformadas la Ley 83 de 1888 y todas las demás disposiciones que le sean contrarias.

Dada en Bogotá, á cuatro de Noviembre de mil ochocientos noventa.

El artículo 4.° de la Ley 140 de 1887, que se cita en el 9.° de la presente, se halla subrogado, respecto de Panamá, por el 6.° de esta Ley. Véase el comentario de este artículo.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

LEY 37

(13 DE NOVIEMBRE),

por la cual se autoriza el establecimiento de un Monte de Piedad, y se concede un auxilio.

(Se publicó en el *Diario Oficial* de 18 de Noviembre de 1890, número 8,240).

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Art. 1.° Autorízase el establecimiento de un Monte de Piedad en esta capital, bajo la suprema inspección y dirección del Ilustrísimo Señor Arzobispo de la Arquidiócesis, quien tendrá la personería y representación del establecimiento, por sí ó por medio del Gerente; y reconócese su existencia de acuerdo con los estatutos y bases que el mismo Ilustrísimo Señor debe someter al Poder Ejecutivo para su aprobación.

Art. 2.° El Monte de Piedad podrá empezar á funcionar tan luego como el Poder Ejecutivo imparta la aprobación de que se habla en el artículo precedente.

Art. 3.° Reconócese al Monte de Piedad la facultad de proceder al remate de las prendas que se le depositen para seguridad de sus operaciones, de la manera como lo establezca en sus estatutos, sin ingerencia de la autoridad judicial, y sin tener que sujetarse á las prescripciones sobre remates de prendas consignadas en los artículos 2422 y 2425 del Código Civil, Sección 1.ª, Capítulo 1.°, Título XI, Libro II del Código Judicial y Título XV del Código de Comercio.

Estimamos inconveniente este artículo por las razones siguientes: 1.ª Porque la venta, por medio de remate, de las prendas de que se habla es asunto que por su naturaleza es peculiar del Poder Judicial; 2.ª Porque es inconveniente que se confiera á la misma entidad interesada en el remate de las prendas la facultad de dictar las reglas que hayan de regir; 3.ª Porque no es conforme á la Constitución que el legislador delegue á entidad alguna las atribuciones que le son propias. A virtud de lo dispuesto en el artículo, la Autoridad eclesiástica dictará las disposiciones que estime convenientes, y éstas subrogarán á las leyes que han regido y rigen respecto de los demás acreedores prendarios, lo cual es un precedente que nos parece funesto, porque las leyes no deben subrogarse sino por leyes; al mismo legislador le es prohibido, y con razón, hacerlo de otro modo; menos podrá verificarlo una autoridad distinta, y mucho menos una que no tiene carácter civil; 4.ª Finalmente, porque si las leyes que rigen en esta materia son defectuosas, ha debido modificarlas el legislador, en beneficio de todos, y no conferir á este respecto un privilegio en favor de determinada institución, porque ello la hace odiosa.

Art. 4.° Toda mutación ó modificación de los estatutos deberá someterse á la consideración del Poder Ejecutivo, y necesitará la aprobación de éste para su validez.

Art. 5.° Exímese al Monte de Piedad de todo gravamen, impuesto ó contribución que pueda pesar sobre él, ora sean establecidos por leyes, ordenanzas, ó por cualquiera otra autoridad que tenga facultad para ello.

Art. 6.° Auxíliase del Tesoro público, por una sola vez, al Monte de Piedad de que trata esta Ley, con la suma de cincuenta mil pesos

($ 50.000), que se entregarán al Ilustrísimo Señor Arzobispo y que se considerarán incluídos en el Presupuesto de Gastos de la próxima vigencia.

Dada en Bogotá, á ocho de Noviembre de mil ochocientos noventa.

——

LEY 39

(12 DE NOVIEMBRE),

por la cual se establecen los derechos de registro de instrumentos públicos y privados.

(Se publicó en el *Diario Oficial* de 22 de Noviembre de 1890, número 8,244).

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Art. 1.° Los Registradores de instrumentos públicos llevarán, además de los libros prescritos en el artículo 2641 del Código Civil, uno titulado *Libro de registro de instrumentos privados*, para la inscripción de todos los documentos de esta clase que los interesados quieran revestir de la formalidad del registro, con el fin de darles mayor autenticidad y obtener la prelación que las leyes confieren á los documentos privados que tengan aquella formalidad.

El registro de los documentos privados se hará insertando éstos íntegramente en las diligencias de inscripción, las cuales firmarán los interesados que suscriban el documento y el Registrador, con dos testigos.

4.° ordinal 1.° al fin, y 16 también al fin.

El artículo 2641 del Código Civil, citado, determina los libros que debe llevar el Registrador.

En cuanto á la prelación que las leyes confieren á los documentos privados *registrados*, respecto de los que no lo están, véase la *Codificación Nacional*, Tratado primero, número 243 de orden.

Véase también en el mismo Tratado primero el artículo designado con el número 273 de orden, que está vigente; y en este Suplemento, la Resolución del Ministerio de Gobierno, número XI.

El inciso segundo de este artículo subroga al 99 de la Ley 153 de 1887, *Codificación Nacional*, Tratado primero, número 272 de orden.

Art. 2.° El registro de los actos ó documentos públicos que se otorguen ó protocolicen en el país, ante Notario, se hará dentro de los sesenta días siguientes al de la fecha del otorgamiento ó protocolización.

Si el otorgamiento ó protocolización tuviere lugar en país extranjero, el término para el registro será de ciento veinte días, contados desde la fecha en que se firme el instrumento.

4.°

Dentro de estos mismos términos debe verificarse la inscripción de la hipoteca: inciso segundo del artículo 3.° de esta ley.

Léase el comentario que está al fin del presente artículo.

El registro de las sentencias definitivas se hará dentro de los se-

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

senta días siguientes á aquel en que se dictaren, ó en que queden ejecutoriadas.

4.° ordinales 2.° y 7.°—2652 ordinal 2.° del Código Civil.

Juzgamos que los sesenta días para el registro de una sentencia deben contarse, *en todo caso*, desde el siguiente al de su ejecutoria, pues conforme al mencionado ordinal 2.° del artículo 2652 del Código Civil, las sentencias definitivas deben registrarse cuando están *ejecutoriadas*. Además, no hay para qué registrar una sentencia que por no estar ejecutoriada puede ser reformada ó revocada.

El registro de títulos de minas y de patentes ó títulos de privilegio exclusivo, se hará dentro de los cuarenta días siguientes al de su expedición.

7.°

Por el presente inciso se modifica el artículo 99 del Código de Minas, que fija veinte días para el registro.

El registro de las diligencias de remate de que trata el inciso 7.° del artículo 2652 del Código Civil, se hará dentro de los cuarenta días siguientes á la aprobación de tales remates.

4.° ordinal 8.°

El inciso 7.° del artículo 2652 del Código Civil se refiere á las diligencias de remate de bienes raíces.

Los cuarenta días deben contarse desde el siguiente al en que se halle ejecutoriado el auto de aprobación del remate; tál es nuestro concepto.

Los testamentos cerrados y los otorgados ante testigos, se registrarán dentro de los cuarenta días contados desde que se publiquen, ó sean declarados judicialmente nuncupativos.

4.° ordinal 3.°

Véase en la *Codificación Nacional*, Tratado primero, la Resolución del Ministerio de Gobierno designada con el número X, y las citadas al fin de la misma.

Disponiendo como dispone el Código Civil que ninguno de los títulos sujetos á la inscripción ó registro hace fe en juicio ni ante ninguna autoridad, empleado ó funcionario público si no ha sido inscrito en la respectiva ó respectivas oficinas; que ninguno de los mismos produce efecto legal sino *desde* la fecha de la inscripción ó registro, y que la tradición no se verifica ni se adquiere la posesión de los inmuebles, ni se constituyen los derechos de usufructo, uso, habitación é hipoteca sino mediante tal formalidad, es claro que la persona á quien se expida uno de los mencionados títulos debe tener grandísimo interés en que se registre en breve. Esta consideración determinó sin duda al legislador, cuando expidió el Código Civil, á no fijar término alguno para el registro de los títulos que á él estaban sujetos, con excepción de los hipotecarios; pero habiéndose observado que ni los inconvenientes y peligros de la omisión del registro, ni las ventajas de practicarlo eran suficiente motivo para que la inscripción se hiciese oportunamente—por lo cual la institución de que hablamos no producía todos sus buenos efectos—se estimó conveniente fijar, como se fijan en el presente artículo, términos prudenciales para el registro de las diferentes especies de títulos; y además, establecer una sanción para el caso de retardo, consistente en un aumento de impuesto, sanción que, desde que se estableció en la Ley 34 de 1887, ha dado excelentes resultados, pues nadie duda de su aplicación, se la ve próxima, y afecta de un modo muy sensible á todo el mundo; al par que la importancia de los efectos civiles de que se ha hablado no está al alcance de todos: en unos por ignorar en absoluto las disposiciones civiles, y en otros, porque eso de *tradición, posesión y efectos respecto de tercero* son cosas que no comprenden y que creen inciertas, ó por lo menos lejanas. Desde que se estableció un recargo de impuesto en el caso de mora no ha

habido yá quien no se preocupe seriamente en el sentido de verificar el registro aun mucho antes de que se venza el término de la ley. Ha habido, pues, acierto en el legislador al proceder de la manera indicada; no así en lo relativo á la inscripción de los títulos en que se constituye hipoteca, porque respecto de ellos se ha reconocido y aceptado la sanción que el Código Civil establece, á saber: la necesidad de otorgar un nuevo instrumento de hipoteca si el yá otorgado no se inscribe en el respectivo registro dentro del término legal. Nos inclinamos á creer que el legislador de 1890 se ha dejado guiar en esto por la fuerza del hábito, y nó por convencimiento, pues si se reflexiona se verá que no hay razón para estatuír respecto de los títulos hipotecarios una sanción especial, demasiado severa y que suele ser en extremo perjudicial. Repárese que los efectos de la constitución de la hipoteca no se producen respecto de tercero sino *desde* la fecha de la inscripción; y que si el temor de la celebración de un contrato fraudulento que perjudique al mismo acreedor ó á tercero es el motivo por que se ordena el otorgamiento de nueva escritura, el mal no se previene con semejante remedio, porque siempre que haya término para verificar el registro de la hipoteca—y fuerza es concederlo—el fraude es posible cuando falta la virtud de la probidad. El mismo temor y el deseo de prevenir los males consiguientes al fraude debieron determinar al legislador á establecer idéntica disposición que respecto de la hipoteca—si tan buena y eficaz es—tratándose de la venta de un inmueble, como que en este caso también puede haber fraude, pues si el dueño lo vende por segunda ó más veces á diferentes personas antes de que se registre la primera venta, sabido es que la última prevalece sobre las anteriores si se registra primero. ¿Qué se diría si para prevenir este fraude se hubiera ordenado el otorgamiento de nueva escritura si el registro no se practicaba oportunamente? Semejante prevención habría causado escándalo, y con razón se afirmaría que en muchos casos, lejos de prevenirse el fraude, se daría ocasión á él, como sucede hoy respecto de la hipoteca, pues un deudor sin probidad á quien se requiere para que otorgue nueva escritura porque la constituída no tiene valor legal respecto de la hipoteca, bien puede establecer primeramente otra, ó no prestarse á firmar el nuevo instrumento.

La disposición del Código Civil relativa á la hipoteca no se estableció precisamente, en nuestro concepto, como medio *preventivo* del fraude, sino como *sanción* para que el registro se hiciese dentro de un breve término (1): pero como esta sanción es muy grave, y en muchos casos funesta, juzgamos que los títulos hipotecarios no debieran constituír excepción de la regla general establecida para los demás títulos.

Art. 3.° Los actos y documentos de que trata el artículo anterior podrán registrarse en cualquier tiempo; pero si se ha dejado transcurrir el término señalado para cada uno, respectivamente, se pagará además un recargo del cincuenta por ciento computado sobre el derecho primitivo.

Exceptúanse de la disposición anterior los títulos constitutivos de hipoteca, los cuales, en lo referente á ésta, no podrán ser registrados transcurridos los términos señalados en el artículo anterior.

4.°, 6 incisos primero y segundo del artículo 2.°

Véanse en la *Codificación Nacional*, Tratado primero, las Resoluciones del Ministerio de Gobierno designadas con los números XLVI, XLVII á XLIX, LII, y LVII.

El derecho de registro se paga en la Oficina de Hacienda de la residencia del Notario. Véase en la *Codificación Nacional*, Tratado primero, la Resolución LXXI; y en este Suplemento la Resolución XIII.

El presente inciso modifica el tercero del artículo 2665 del Código Civil en cuanto al término para la inscripción de la hipoteca, que era, en todo caso, de veinte días, contados desde el otorgamiento; y que hoy es de sesenta ó ciento veinte días, según que la escritura se otorgue en el país ó fuera de él.

Léase el comentario que está al fin del artículo anterior.

---

(1) Por cuanto la institución del registro no llena satisfactoriamente su objeto si no se registran todos los títulos sujetos á tal formalidad, y si ésta no se practica en el menor tiempo posible.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

Art. 4.° Por los documentos que deben registrarse conforme á la ley se cobrará un impuesto denominado *Derecho de Registro*, según la tarifa siguiente :

1.° Veinte centavos por cada cien pesos del valor de todo acto, contrato ó instrumento escriturario, estimable en dinero, que se otorgue ante Notario, y por cada cien pesos de los documentos privados ;

Ordinales 3.°, 4.°, 6.°, 8.° al fin, 11, 12 y 13 de este artículo; y artículos 5.°, 6.°, 8.°, 9.°, 11 y 16 al fin.

Véase en este Suplemento la Resolución del Ministerio de Gobierno designada con el número XIX.

Cuando en la misma escritura se constituye hipoteca deben pagarse diez centavos más por cada cien pesos de la cantidad á que se refiere la hipoteca, conforme al ordinal 5.°

2.° Dos pesos por toda sentencia definitiva y por todo decreto judicial de obligatorio registro, con excepción de las sentencias aprobatorias de partición de herencia ó de división judicial de bienes comunes de que trata el número 7.° ;

2.° inciso tercero y comentario.

3.° Dos pesos por cada testamento de cualquiera clase que se otorgue en la República ó en el Extranjero ;

Segundo inciso del ordinal 12 de este artículo, y artículo 6.°

4.° Un peso por todo poder general, y cincuenta centavos por los poderes especiales, sustituciones de poderes y revocación de los mismos, siempre que todo se haga ante Notario.

Los poderes para pleitos, sea que se otorguen en Colombia ó en país extranjero, no están sujetos á la formalidad del registro ;

5.° Diez centavos por cada cien pesos del valor de los títulos constitutivos de hipoteca, sin perjuicio de causar por una sola vez los derechos correspondientes por los contratos á que la hipoteca acceda ;

Ordinal 1.° de este artículo, y artículos 5.° y 9.°

Véase en este Suplemento la Resolución del Ministerio de Gobierno designada con el número XVIII.

6.° Ochenta centavos por toda cancelación ;

Véanse en la *Codificación Nacional*, Tratado primero, las Resoluciones XLII, XLIII y LXXVI.

El Ministerio de Justicia ha dictado la Resolución que aquí se reproduce á continuación del artículo 5.°

7.° Un peso por las sentencias ó aprobaciones judiciales de partición de herencia ó de bienes comunes, cuando el valor de dichos bienes no exceda de mil pesos : si excediere de esta suma, se pagará, además, un recargo á razón de diez centavos por cada cien pesos.

En este derecho queda comprendido el de las hijuelas que la partición contenga ;

Ordinal 2.° de este artículo.

Véanse en la *Codificación Nacional*, Tratado primero, las Resoluciones del Ministerio de Gobierno, números LVIII á LXX; pero téngase en cuenta que el inciso segundo de este ordinal 7.° infirma las siguientes Resoluciones: LXI á LXIII, LXVIII y LXX. en lo relativo á los derechos de registro de las cartillas de hijuelas.

8.° Veinte centavos por cada cien pesos del valor de los remates de bienes raíces ; pero si éstos se elevaren á escritura pública, no se cobrará nuevo impuesto ;

Ordinal 1.° de este artículo.

9.° Diez pesos por cada título de propiedad de obras literarias y científicas y por la patente de privilegio de inventos industriales ;

Véanse los artículos 31 y 32 de la Ley 32 de 1886, sobre Propiedad literaria y artística, y la Ley 35 de 1869, especialmente el artículo 13 de esta última.

10. Cincuenta pesos por las patentes de cualesquiera otros privilegios ;

11. Un peso por todo acto ó contrato que pase ó se otorgue ante Notario y que por su naturaleza no tenga valor en dinero, como reconocimiento de hijos naturales, legitimación y otros semejantes ;

Ordinales 1.°, 3.° á 6.°, 12 y 13 de este artículo, y artículos 8.° y 11.

Véase en la *Codificación Nacional*, Tratado primero, la Resolución XL

12. Un peso por toda protocolización.

Los testamentos no otorgados ante Notario pagarán separadamente el derecho de inscripción y el de protocolización ; y

Ordinal 3.° de este artículo.

13. Dos pesos por la escritura de prórroga de sociedades civiles ó de comercio, por la de disolución ó liquidación de las mismas sociedades, por la de capitulaciones matrimoniales y por la de división extrajudicial de bienes comunes.

Ordinal 11 de este artículo.

Las escrituras sobre constitución de sociedades están comprendidas en el ordinal 1.° de este artículo.

Véase la parte final de la Resolución del Ministerio de Gobierno que se halla reproducida á continuación del artículo 5.°

Art. 5.° No se pagará derecho alguno por el registro de las escrituras de fianza ó hipoteca que se otorguen para asegurar el manejo de los caudales públicos.

Tampoco causará derecho fiscal el registro de las demandas civiles y de los autos de embargo, ni las escrituras que tengan por objeto asegurar los capitales de los establecimientos de Instrucción pública ó de Beneficencia.

4.° ordinal 5.°, y artículos 9.° y 12.

Véanse en la *Codificación Nacional*, Tratado primero, las Resoluciones XLII, XLIII y LXXVI,

A solicitud del Notario 1.° de este Circuito, el Ministerio de Justicia ha dictado la siguiente Resolución :

"1.° Sólo por la cancelación de escrituras que no tengan por objeto asegurar el manejo de caudales públicos se cobrará el derecho establecido en el ordinal 6.° del artículo 4.° de la Ley 39 del año próximo pasado. Las demás cancelaciones no causarán derecho.

"2.° Por las escrituras de asociación se cobrará el derecho que señala el ordinal 1.° del citado artículo 4.° "—*Diario Oficial* de 29 de Enero de 1891, número 8,317.

Art. 6.° Los derechos de que trata el artículo 4.° se pagarán aun cuando los documentos que los causen hayan sido otorgados fuera de la República.

Art. 7.° El derecho de registro que debe pagarse por los títulos de propiedad de las minas es el mismo que con la denominación de *Derecho de título* se menciona en el Código de la materia.

Este derecho no corresponde á los Departamentos, y continuará cobrándose en las capitales de ellos por el respectivo Administrador Nacional.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

70, 72, 82 inciso segundo, 98, 99, 142 y siguientes del Código de Minas; pero adviértase que el artículo 99 citado está modificado por el inciso cuarto del artículo 2.° de esta Ley.

Art. 8.° En las permutas se cobrará el derecho atendiendo al valor de la cosa permutada que se estime en mayor precio; y en los contratos de arrendamiento que se eleven á escritura pública, el impuesto se cobrará deduciéndolo del valor que importe en un año el arrendamiento, si llegare á este término; ó en proporción, si no alcanzare.

4.° ordinales 1.° y 11.°, y artículo 11.

Art. 9.° Por los contratos accesorios de fianza ó prenda sólo se cobrarán derechos de registro cuando se hagan constar en instrumento diferente de aquél en que conste el contrato principal.

4.° ordinal 5.°, y artículo 5.°

Esta disposición es opuesta á la Resolución del Ministerio de Gobierno de fecha 22 de Mayo de 1890—*Diario Oficial* número 8,075—en que se disponía que en conformidad á lo dispuesto en el ordinal 1.° del artículo 4.° de la Ley 34 de 1887, siempre que en una escritura se consignaran dos contratos, uno principal y otro accesorio, el derecho de registro debía deducirse de cada uno de ellos.

Art. 10. Cuando no se hubiere registrado un instrumento dentro del término legal, y deba cobrarse el derecho con el recargo que establece esta Ley, se liquidará con arreglo á la que regía cuando se otorgó el instrumento.

3.° y 17.

Art. 11. Cuando de los contratos ó actos expresados en el ordinal 1.° del artículo 4.° de esta Ley, no aparezca cantidad determinada, el interesado ó interesados graduarán el valor del contrato, título ó derecho adquirido para la deducción del respectivo tanto por ciento. Esta graduación se hará constar en la boleta de registro que expida el respectivo Recaudador. Cuando los interesados no hagan esta graduación, el derecho de registro será de diez pesos.

4.° ordinal 11, y artículo 8.°

Art. 12. El Fisco Nacional, el de los Departamentos y Municipios, los establecimientos de Instrucción pública y los de Beneficencia, no pagarán derechos de registro en ningún caso.

5.°

Véanse en la *Codificación Nacional*, Tratado primero, las Resoluciones XLII y XLIII, especialmente la parte de esta última que se halla en la página 86 de dicho Tratado, la cual contiene los conceptos emitidos por el Subsecretario de Hacienda de la Gobernación de Medellín, Doctor José J. Hoyos.

Art. 13. La deficiencia en el cobro ó pago de derechos de registro, siempre que aparezca la respectiva boleta del Recaudador, no prodnce nulidad en el acto ó contrato ni en el correspondiente instrumento.

Este artículo está en oposición con el 16, y aun consigo mismo, y caso de no estarlo es enteramente inútil. En efecto, enél se dispone que debe aparecer "la *respectiva* boleta del Recaudador" como condición indispensable para que no haya nulidad. Ahora bien: ¿cuál es la *respectiva* boleta del Recaudador de que habla este artículo? Si es la que se refiere simplemente al contrato ó acto de que se trate, aunqne en ella *no conste que se ha pagado la totalidad del derecho*, caben dos preguntas: 1.ª ¿A qué fin exigir que aparezca tal boleta? Porque si debiendo pagarse un derecho de registro de veinte pesos, por ejemplo, aparece que se pagó uno de quince, ó de diez, ó de uno solamente, y la boleta en que esto consta es la *respectiva*, no hay objeto en que se presente: pruébese ó nó el pago del impuesto correspondiente, el resultado es uno mismo, á saber:

que la nulidad no se produce por cuanto aparece una boleta relativa al acto ó contrato. Esto es inadmisible. 2.ª Los Notarios á quienes se presente una boleta en que conste que se ha pagado un derecho inferior al debido, ¿deben otorgar la escritura que se les exige? Si la otorgan, por cuanto estiman que tal boleta es la respectiva en razón de que se refiere al acto ó contrato que se va á hacer constar, violan el artículo 16, que prohibe el otorgamiento de cualquiera escritura si no se comprueba el pago del derecho correspondiente. Luego la boleta respectiva de que habla el artículo 13, no es simplemente la que se refiere al acto ó contrato, sino la que comprueba *que se ha pagado el impuesto correspondiente*; pero si ésta es la boleta respectiva, entonces no hay armonía entre la primera parte del artículo en que nos ocupamos y la segunda del mismo, porque es claro que no puede haber *deficiencia* en el pago del derecho si en la boleta aparece que se ha pagado el *correspondiente*. Para que haya deficiencia, ó pueda estimarse que la hay, es necesario que en la boleta que se presente conste que se ha pagado un derecho menor que el debido; pero si esto consta en la boleta que aparece, ella no es la *respectiva*. Las dospartes que constituyen el artículo 13 son, pues, inconciliables.

Pudiera decirse:

Es cierto que la *respectiva* boleta es aquella que acredita el pago del impuesto de registro correspondiente al acto ó contrato que se quiere elevar á escritura pública; pero bien puede suceder que por inadvertencia ó error se pague un derecho menor, y es para este caso para el que se dispone que no se anulará el instrumento por *deficiencia* en el pago, si aparece la boleta respectiva, pues no sería equitativo que la falta de un centavo en el pago del impuesto anulara el instrumento de un contrato que puede valer muchos miles de pesos. Indudablemente esto no sólo no es equitativo, sino inconveniente é injusto; pero, ya sea por inadvertencia ó error, si la boleta no comprueba el pago de *todo* el derecho que se debe satisfacer, ella no es la *respectiva*, como se ha visto, y no siéndolo, se produce la nulidad, porque conforme al mismo artículo 13 es preciso para que el instrumento no se anule que aparezca la *respectiva* boleta.

Más aún, se dirá: el artículo 13 no se halla en oposición con el 16, ni consigo mismo, porque tiene por objeto establecer que en el caso de que no se haya pagado en realidad el derecho correspondiente, si el Recaudador expide la boleta en que consta el pago no se produce la nulidad del acto ó contrato, ni del respectivo instrumento. Esta interpretación del artículo 13 se funda en la creencia de que el no pago del derecho debido es la causa de la nulidad, lo cual es inexacto, porque la nulidad proviene de que contra la expresa *prohibición* del artículo 16 se otorgue un instrumento sin haber *comprobado* previamente el pago del impuesto, pues el artículo 6.° del Código Civil, dice: "..... En materia civil son nulos los actos ejecutados contra *expresa prohibición* de la ley, si en ella misma no se dispone otra cosa." Así pues, puede suceder en alguna ocasión que no se pague al Recaudador un centavo del impuesto, y que no obstante esto se expida la boleta respectiva, caso en el cual el Notario está en el deber de otorgar el instrumento, y si lo otorga es perfectamente válido; así como sería nulo, aunque realmente se hubiese pagado el impuesto correspondiente, si en la boleta se expresara otra cosa. Si esta ha sido la mente del legislador, es decir, si se quiso establecer que siempre que aparezca la boleta respectiva no se anula el instrumento, aunque en realidad no se haya pagado el impuesto, se estableció una prescripción del todo inútil, porque, como hemos dicho, la nulidad es efecto de la violación de la ley *prohibitiva*, y nó de la falta de pago del impuesto.

Penetrados de la intención que se tuvo al acordar la disposición en que nos ocupamos, juzgamos que para que aquélla fuera efectiva debió prescindirse de la disposición, conservar la prohibición del artículo 16, y en un inciso de este artículo establecer, en consonancia con el 6.° del Código Civil, una sanción distinta de la nulidad para el caso de contravención.

Creemos haber justificado lo que dijimos al principio, á saber: que el artículo 13 está en oposición con el 16, y aun consigo mismo; y que caso de interpretarlo de manera que desaparezca la oposición, él es del todo inútil.

El artículo 16 prevalece, sin duda, respecto del 13 no sólo por ser aquél posterior, sino porque el 13 es inaplicable por constar de dos partes que son inconciliables entre sí. En consecuencia, todo instrumento que otorguen los Notarios sin que se les compruebe con la boleta del Recaudador que se ha verificado el pago del impuesto, *de todo él*, es un instrumento nulo.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

Art. 14. Los derechos de registro de las escrituras de venta y otros contratos los pagarán los vendedores ú otorgantes de tales escrituras, á no ser que las partes hayan convenido expresamente en otra cosa. Los de los poderes los pagarán los poderdantes, y los de las sustituciones los que las hagan. Los de cancelaciones los pagarán los que las otorguen. Los de los remates públicos se pagarán por los rematadores. Los de las sentencias ejecutoriadas y decisiones de árbitros, por la parte á cuyo favor hubieren sido pronunciadas (salvo el derecho para repetir contra quien hubiere sido condenado en costas). Los de los testamentos ó codicilos se pagarán por los testadores ó por los albaceas ó herederos, con cargo á la testamentaría. El derecho de registro de las sentencias definitivas que favorezcan á más de una persona, se pagará por cualquiera de los interesados, quien tendrá derecho para ejecutar á los demás por sus respectivas cuotas.

Véase en la *Codificación Nacional*, Tratado primero, la Resolución designada con el número LXXX. El artículo 7.° de la Ley 34 de 1887, que se cita en esta Resolución, es idéntico al presente.

Art. 15. Hasta dos meses después de regir esta Ley, podrán registrarse, sin pagar nuevos derechos de registro, los documentos otorgados antes de la vigencia de la Ley 34 de 1887, excepto los títulos hipotecarios por lo que respecta á la hipoteca. Transcurrido este término, se cobrará el recargo.

Véase el comentario que se halla al fin del artículo 2.°

Art. 16. Los Notarios no autorizarán escrituras ni protocolizarán documentos sin que se compruebe haber pagado el derecho de registro respectivo, y en las copias que expidan insertarán la boleta que compruebe el pago. Los Registradores de instrumentos públicos no harán en sus libros las inscripciones de documentos privados sin que se compruebe haberse pagado el derecho de registro que hayan causado.

13, y 4.° ordinal 1.° al fin.

Véase el comentario del artículo 13.

Art. 17. El recargo de que trata el artículo 3.° de esta Ley, se pagará en cualquiera de las oficinas de Recaudación del Departamento donde el registro deba verificarse; y si éste debiere surtirse en más de un Departamento, basta que el pago se haga en aquel donde la formalidad del registro se surta primeramente.

Como se ve, este artículo se refiere al caso de que haya recargo. En cuanto al derecho primitivo debe hacerse la consignación de él en la Oficina de Hacienda de la residencia del Notario, pues así lo dispone una Resolución del Ministerio de Hacienda que se halla en la *Codificación Nacional*, Tratado primero, bajo el número LXXI. Véase en este Suplemento la Resolución XIII.

Art. 18. Los derechos de registro que se causen en el departamento de Panamá se cobrarán en la misma especie de moneda que exprese el documento respectivo.

Véase en este Suplemento la Resolución del Ministerio de Gobierno designada con el número XIX.

Art. 19. Quedan derogadas la Ley 34 de 5 de Marzo de 1887, y todas las demás disposiciones sobre derechos de registro que se opongan á la presente Ley, y reformado el inciso 3.° del artículo 2665 del Código Civil.

Dada en Bogotá, á veinticinco de Octubre de mil ochocientos noventa.

El inciso 3.° del artículo 2665 del Código Civil, que se cita en el artículo 19, dispone que no se registre el título constitutivo de hipoteca cuando se presente al Registrador después del vigésimo día, contado desde el otorgamiento del mismo título.

La prevención que este artículo contiene y que con tanta frecuencia se pone en el final de las leyes, á saber: "quedan derogadas todas las disposiciones que sean contrarias á la presente," es del todo inútil é insuficiente: inútil, porque la regla general que sobre esto rige es que ley posterior deroga la anterior que le es contraria; insuficiente, porque una ley queda derogada por otra posterior, aunque no le sea contraria, si la última regula íntegramente la materia á que la anterior se refería.

Léase el comentario relativo al artículo 3.° de la Ley 153 de 1887, que se halla en la página 492 de nuestra edición del Código Civil.

LEY 56

(18 DE NOVIEMBRE),

sobre expropiaciones por causa de utilidad pública.

(Se publicó en el *Diario Oficial* de 29 de Noviembre de 1890, número 8,252.)

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Art. 1.° Son graves motivos de utilidad pública para decretar la enajenación forzosa de la propiedad, en tiempo de paz, según el inciso segundo del artículo 32 de la Constitución, los siguientes:

1.° La construcción de fortificaciones de cualquiera clase y en cualquier punto, para la defensa de la Nación, ó para la conservación del orden público;

2.° La adquisición de elementos de guerra y de medios de movilización, alojamiento, subsistencia y equipo de las fuerzas de mar y tierra;

3.° La adquisición ó construcción de cuarteles, parques y en general oficinas militares de cualquiera clase para el alojamiento del Ejército, para la conservación de los elementos de guerra y equipo, ó para la asistencia de los militares heridos ó enfermos;

27 á 32.—12 á 16 de la Ley 119 de 1890.

4.° El establecimiento de hospitales transitorios, casas de aislamiento ó de socorro, y ambulancias de toda especie, en los casos de epidemia;

12 á 16 de la Ley 119 de 1890.

5.° La construcción de obras que tengan por objeto evitar inundaciones ó precaver á una población, caserío ú obra pública de cualquiera calamidad;

12 á 16 de la Ley 119 de 1890.

6.° La apertura, ensanche, variación ó mejora de toda clase de vías públicas de comunicación nacionales, departamentales ó municipales, ya sean terrestres ó acuáticas, comprendiéndose las calles y plazas de las poblaciones, los puentes ó viaductos, las ferias y todas las servidumbres y obras necesarias para esos objetos;

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

7.° La adquisición ó construcción de faros, muelles, dársenas, arsenales y bodegas en los puertos marítimos ó fluviales;

8.° La adquisición ó construcción de edificios para oficinas públicas de todas clases, ó para el ensanche, reforma y mejora de las ya existentes;

9.° El establecimiento de pararrayos, y el de telégrafos, teléfonos ó cualquiera otro medio de comunicación excepcionalmente rápida, así como el de las oficinas necesarias para esa clase de empresas;

17 de la Ley 119 de 1890.

10.° La construcción de acueductos ó de fuentes públicas á beneficio de las poblaciones ó caseríos, lo mismo que la adquisición de las aguas necesarias para el abastecimiento de dichas poblaciones ó caseríos;

11. La construcción de obras que tengan por objeto desecar pantanos ó remover causas notorias de insalubridad;

12. La adquisición, construcción, ensanche, reforma y mejora de escuelas, cárceles, cementerios, hospitales, hospicios, y en general establecimientos públicos de castigo, de beneficencia ó de caridad;

13. Cualquiera otro caso, definido especialmente en una ley que esté en vigor, ó en un contrato aprobado por ley, ó celebrado á virtud de ella, con estipulación especial y expresa del derecho de expropiación;

Derogado por el artículo 19 de la Ley 119 de 1890.

14. La construcción, ensanche, reforma y mejora de las iglesias catedrales ó parroquiales de la comunión católica, ó de los cementerios, ó de los establecimientos de educación, beneficencia y caridad, pertenecientes á la misma comunión, ó á cualquiera asociación docente ó piadosa, formada en su seno y aprobada por la autoridad eclesiástica.

Aunque está reconocido en la legislación de todos los países civilizados que la propiedad debe ser inviolable, también lo está que un propietario puede ser obligado á ceder la suya cuando ocurre conflicto entre intereses privados, como en los casos de *accesión*, y en algunos de *servidumbre;* ó cuando el bien general exige el sacrificio del interés particular. En esta última circunstancia es cuando puede verificarse lo que se llama *expropiación por causa de utilidad pública.*

En dondequiera se exigen los siguientes requisitos para llevar á efecto una expropiación:

1.° Que exista la utilidad pública, como que sólo ella puede justificar el sacrificio que se impone á un propietario.

2.° Que se otorgue á éste justa y previa indemnización.

Siendo la utilidad pública uno de tales requisitos, es claro que en cada caso que ocurra debe declararse si existe ó nó dicha utilidad. Veamos los sistemas que sobre esto rigen generalmente.

Tanto en Francia como en España la declaración de utilidad pública es objeto de una ley cuando se trata de obras de grande importancia nacional. En los demás casos corresponde al Poder Ejecutivo ó al Gobierno, por medio de su Ministro, Gobernador ó Prefecto respectivos, hacer la declaración; pero esta regla tiene excepciones, pues hay obras para las cuales no se necesita ley especial, sino que se hallen comprendidas en una de carácter general.

En ambos países hay sobre el asunto de que hablamos leyes protectoras de los derechos individuales: en Francia deben preceder á la declaración, ya la dicte el legislador ó el Poder Ejecutivo, varias informaciones y procedimientos administrativos que acrediten la utilidad de la obra; y aunque el Tribunal que luégo debe resolver sobre la expropiación no puede decidir si existe ó nó dicha utilidad, por no ser punto de su competencia y hallarse resuelto, sí debe examinar si se han cumplido las formalidades prescritas por la ley. Si lo han sido, lo hace constar en sentencia; en la misma, decreta la expropiación necesaria, y designa el Magistrado que debe presidir el Jurado encargado de fijar la tasa de la indemnización.

En España, cuando la expropiación es del resorte del Gobernador de Provincia, exige la ley el conocimiento previo del dictamen de la Diputación provincial, quien debe darlo en vista del informe del Ayuntamiento respectivo. Exígese también, en este último país, respecto de todo caso de expropiación, que declarada una obra de utilidad pública se resuelva si para su ejecución es *necesario* el *todo* ó *parte* del inmueble; resolución que sin duda no se dictará sino con conocimiento de causa.

Están, pues, conformes las legislaciones de ambos países en estos puntos fundamentales:

1.° Que la declaración de que una obra es de utilidad pública la dicta en unos casos el legislador mismo, y en otros el Poder Ejecutivo;

2.° Que deben preceder á la declaración, ó seguir á ella, ciertos requisitos protectores del derecho de los propietarios.

Este es uno de los sistemas adoptados para la enajenación forzosa de la propiedad.

En nuestro país rige un procedimiento distinto, á virtud de lo establecido en el inciso segundo del artículo 32 de la Constitución, que consiste en definir previamente por medio de una ley y de un modo abstracto, los graves motivos de utilidad pública que pueden servir de fundamento á la enajenación forzosa, correspondiendo al Poder Judicial resolver sobre cada caso de expropiación que ocurra. Tál es la razón por que en el presente artículo se determinan dichos motivos.

Desde luego es evidente que la Constitución asegura en lo posible el derecho de propiedad, en cuanto á la enajenación forzosa de ella, pues para que ésta pueda verificarse es preciso que el legislador haya definido los *motivos* de utilidad pública en que puede fundarse; que dichos motivos sean *graves;* que en cada caso particular *decrete* la expropiación el Poder Judicial, y que se *indemnice previamente* el valor de la propiedad (1). Esto dispone el artículo 32 de la Constitución. Pero todo ello es inútil si el legislador, al dar desarrollo á esta disposición, no se inspira en el sentimiento del respeto profundo que debe tenerse por el derecho de propiedad y califica como motivos *graves* muchos que no lo son, es decir, si da una extensión exagerada á los motivos de expropiación; y tal cosa nos parece ha sucedido respecto de algunos de los catorce motivos definidos en el artículo 1.° de esta ley. Por ejemplo, los casos 2.° y 3.° tienen, en nuestro concepto, un alcance indebido, pues repárese que se refieren á tiempo de paz. Los casos 6.° y 8.° tienen también grande amplitud, en cuanto se refieren á *toda clase* de vías de comunicación y de oficinas públicas. Los ordinales 9.°, en su parte final, 10, 12 y 14 debían limitarse, estableciendo siquiera la concurrencia de algunas circunstancias. La extensión que se ha dado á los graves motivos de utilidad pública desvirtúa, evidentemente, la disposición constitucional de que hablamos; pero hay algo mucho más grave, y es la práctica que el legislador mismo ha comenzado á establecer, y de la cual vamos á hablar.

Si conforme á la Constitución deben definirse previamente, como se hace en el presente artículo, los graves motivos de utilidad pública; y si conforme á la misma corresponde al Poder Judicial decretar la expropiación en *cada caso* particular, es indudable que no puede declararse por medio de ley especial y para determinadas obras el grave motivo de utilidad pública, como se ha declarado yá en varias leyes.

A lo expuesto sobre esta materia en nuestro comentario relativo al artículo 32 de la Constitución—véase la *Codificación Nacional*—nos parece conveniente agregar estas reflexiones. Si la obra pública cuya construcción se ordena por una ley se halla en alguno de los casos del presente artículo 1.°, por ejemplo, si se trata de un canal, de un ferrocarril ó de cualquiera otra vía de comunicación, es claro que no hay objeto en declarar en la misma ley la utilidad pública. Si la obra no se halla en ninguno de dichos casos, tampoco hay para qué hacer declaración especial, por cuanto el Poder Judicial no podría, á virtud de ésta, decretar ninguna expropiación que fuera necesaria para la realización de la obra. En efecto, supóngase que una ley ordenara la construcción

(1) La indemnización de que habla el artículo constitucional debió extenderse al perjuicio que se cause al propietario.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

de un edificio, en determinada ciudad, para espectáculos públicos, y que la misma ley declarase que tal obra era de utilidad general; pues bien, si para llevarla á cabo fuera necesario hacer alguna expropiación, el Poder Judicial no debería decretarla, por no fundarse en ninguno de los graves motivos de utilidad pública definidos por la ley. *En esto consiste precisamente la garantía que otorga el artículo constitucional*, pues no es probable que en una ley como la presente se califique como grave motivo de utilidad general la construcción de obras en que indudablemente no se consulta dicha utilidad; pero en una ley especial y para un caso concreto no hay dificultad en hacer declaraciones tales, porque entonces se halla comprometido el interés particular, cuyo poder es inmenso. Establecida semejante práctica, abundarían las declaraciones de utilidad pública, en los casos mismos en que más lejos se estuviese de ella.

Afortunadamente el legislador ha advertido que la práctica indicada es por lo menos inconveniente, pues ha derogado expresamente, por el artículo 19 de la Ley 119 de 1890, el ordinal 13 del presente artículo 1.°, y el segundo inciso del artículo 2.° de esta ley; ordinal é inciso en que se reconocía la facultad de hacer en leyes especiales declaraciones de utilidad pública, respecto de casos particulares.

En el comentario del artículo que sigue nos ocuparemos en el examen de las funciones que al Poder Judicial corresponde ejercer.

Art. 2.° La presunción legal establecida en el artículo anterior, de que hay graves motivos de utilidad pública en la construcción de ciertas obras ó adquisición de ciertos objetos, admite prueba en contrario en cada caso particular; y si ella fuere plenamente satisfactoria, á juicio del Juez ó Tribunal respectivo, no se decretará la expropiación.

Se exceptúa el caso en que una ley haya declarado de pública utilidad la obra especial de que se trata.

7 á 10.—18 de la Ley 119 de 1890.

Derogado expresamente el inciso segundo de este artículo por el 19 de la mencionada Ley 119 de 1890.

La importancia de este artículo es grandísima por cuanto se declara que los graves motivos yá definidos constituyen apenas una *presunción* de utilidad pública, que admite prueba en contrario; y porque se autoriza al Poder Judicial para estimar ésta y no decretar la expropiación si la prueba no fuere plenamente satisfactoria. A virtud de la indicada autorización es dable á dicho Poder reducir á justos límites la extensión que se ha dado á los casos definidos en el artículo 1.°, no decretando expropiación alguna que no consulte real y debidamente el bien general.

En nuestra opinión, al Poder Judicial corresponde, en cada caso, dar solución á estas cuestiones:

¿La expropiación solicitada se funda en alguno de los casos definidos en la presente ley?

Si no se fundare en alguno de ellos, es claro que debe resolverse negativamente la demanda; mas si se fundare, debe examinarse y decidirse esta otra cuestión:

¿Se consulta realmente la utilidad pública con la realización de la obra, ó la adquisición de la cosa que se pretende?

Veamos á este respecto un caso concreto, por ejemplo, la construcción de una vía pública de comunicación. Como las obras de esta clase constituyen uno de los graves motivos de utilidad definidos en el artículo 1.°, se *presume* desde luego que su realización consulta dicha utilidad; pero si en determinado caso se acredita que los beneficios que de la obra ha de obtener el público son de muy poca importancia, ó que el objeto de ella es servir intereses particulares, estableciendo, vervigracia, una vía fácil de comunicación para los predios de personas que, careciendo del derecho de establecer servidumbre de tránsito sobre la propiedad ajena, ocurren simuladamente á la expropiación, es claro que el Poder Judicial está en el deber de impedir semejante pretensión, y amparar al demandado.

Débese resolver otra cuestión cuando las dos primeras han sido resueltas afirmativamente. En efecto, si la expropiación que se demanda se funda en uno de los graves motivos definidos en la Ley, y si, además, es manifiesta la utilidad pública—por no haberse presentado prueba en contrario—es indudable, á nuestro juicio, que para decretar la enajenación forzosa demandada, aun debe examinarse un punto que estimamos de la mayor importancia, á saber: ¿la cosa que se pretende expropiar es la *única* que puede servir *convenientemente* para el fin deseado? Porque si hubiere otras que se hallen en igualdad de circunstancias, no hay razón para que se decrete la expropiación de la cosa demandada sin haber seguido juicio previo con todos los propietarios que estén en condiciones análogas, á fin de que con entero conocimiento de causa pueda determinarse el objeto que debe ser expropiado. Mas aún, puede suceder que aunque la cosa que se pretende sea la más conveniente, también haya otras que puedan satisfacer la misma necesidad, con un costo no superior á la indemnización que se deba al propietario de aquélla, quien puede ser más perjudicado que otro alguno, y tener, en consecuencia, derecho á mayor indemnización, que si no se otorgara cumplida, ellodaría el carácter de expoliación al hecho de tomar por la fuerza la propiedad ajena. Es sin duda el Poder Judicial quien debe resolver estos puntos, si de veras se quiere que en la expropiación se consulte siempre la utilidad pública.

El poco tiempo de que disponemos para estos comentarios nos impide entrar en ampliaciones. Unicamente agregaremos que para evitar inconvenientes en la práctica, la demanda de expropiación debe dirigirse siempre contra todos los propietarios que se hallen en las condiciones dichas.

Si á voluntad del demandante se dirige el juicio contra cierta persona, en el caso en que puede extenderse á otras, y el Poder Judicial hubiera de abstenerse de resolver sobre los puntos indicados en la última cuestión, la presente ley serviría no pocas veces para satisfacer odios personales ó de partido, con menoscabo del carácter benéfico que debe distinguirla.

En cuanto al inciso final del artículo en que nos ocupamos, debemos decir que se le derogó, sin duda alguna, porque, estimado en relación con el ordinal 13 del artículo 1.°, se juzgó que entrañaba la idea de que por medio de leyes especiales, en que se declarasen de utilidad pública las obras ordenadas, se autorizaba cualquiera expropiación, no comprendida en los graves motivos de utilidad definidos por la ley; procedimiento que el mismo legislador estimó luégo indebido. Nosotros juzgamos que debió subrogarse dicho inciso por otro en que se consignase un principio diferente, á saber: que decretada por una ley la construcción de una obra, si para su realización fuere necesario hacer alguna expropiación, ésta se verifique si se *funda* en alguno de los motivos yá definidos por la ley general; pero que no se *presuma* la utilidad de la obra, sino que se considere real, evidente, limitándose la intervención del Poder Judicial á los puntos de la última cuestión. Fúndase esta opinión en que sería irregular que las declaraciones del Poder Judicial se hallasen en pugna con las del legislativo: que aquél declarase que no había utilidad en la realización de una obra, cuando el segundo la había decretado precisamente por estimar que se consultaba dicha utilidad.

Art. 3.° Caso de no destruírse la presunción á que alude el artícnla anterior, se decretará la expropiación contra quien corresponda; seo individno particular, sociedad, corporación ó comunidad de cualquiera clase, ó entidad política ó municipal, salvo los derechos, exenciones ó inmunidades reconocidos en leyes ó en tratados públicos.

No obstante, los bienes nacionales no están sujetos á expropiación; los departamentales lo están sólo á beneficio directo de la Nación, y los municipales á beneficio de la Nación ó del Departamento.

Véase el comentario del artículo 2.°

Art. 4.° Cuando se trate de expropiar una misma cosa, para dos ó más empresas de entidades políticas, será preferida, en primer lugar, la obra ó empresa nacional; en segundo, la departamental; y en tercero, la municipal.

Art. 5.° Habrá derecho á expropiación en las obras que se ejecuten por cuenta y riesgo de las entidades del orden político ó municipal, annque tales obras se ejecuten por individuos particulares ó asociaciones de cualquiera clase, mediante contrato especial.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

Pero para empresas que se ejecuten por cuenta y riesgo de personas particulares ó asociaciones de cualquiera clase, bien sea por razón de privilegio ó de contrato con alguna entidad política ó municipal, no se podrá estipular derecho á expropiación sino á virtud de disposición expresa de ley, de ordenanza ó de acuerdo que haya sido aprobado expresamente por quien corresponde.

En este caso la obra se reputará nacional, departamental ó municipal, según que sea autorizada por ley, ordenanza ó acuerdo.

No conocemos la ley que determine la autoridad que debe *aprobar* una Ordenanza ó un Acuerdo en que se permita estipular derecho á expropiación.

Art. 6.° Todo asunto de expropiación, en casos comunes, debe principiar por una resolución en la que se exprese claramente qué es lo que se debe expropiar, con qué objeto y por qué motivo. Se expresarán también los pasos que se hayan dado para conseguir lo que se necesita por contrato libremente celebrado con el respectivo interesado. Esta resolución se dictará por el Gobierno, si se tratare de asunto nacional; por el Gobernador del Departamento, si se tratare de asunto departamental; por el Alcalde, si el asunto es municipal; y finalmente, por el Ordinario eclesiástico, en los casos del número 14 del artículo 1.°

Derogado expresamente por el artículo 19 de la Ley 119 de 1890, y subrogado por el 18 de la misma Ley.

Art. 7.° Antes ó después de dictada la resolución de que habla el artículo anterior, se reunirán los documentos ó informaciones necesarios para justificar la necesidad ó utilidad de la expropiación, la autorización que hay para emprender la obra de que se trate, y quiénes son las personas contra quienes debe dirigirse la acción, y por qué motivo.

Cuando se presenten ó agreguen informaciones han de constar de cinco declaraciones, por lo menos; los testigos han de ser propietarios, vecinos de la respectiva localidad, mayores de treinta años, de buena fama, y deben declarar sobre hechos de los cuales se deduzca claramente la circunstancia que se quiera comprobar.

Las cualidades del testigo serán certificadas por el funcionario que reciba la declaración.

Véase la nota del artículo que precede.

Art. 8.° La resolución y los documentos ó informaciones de que hablan los artículos anteriores, se pasarán á quien tenga derecho de representar á la entidad política ó religiosa para que promueva la correspondiente acción ante la autoridad judicial competente.

12, ordinal 3.° de la Ley 72 de 1890.—181, ordinal 1.° del Código de Organización.

Art. 9.° Si al representante de la autoridad respectiva le pareciere la prueba deficiente, deberá hacerla ampliar ó complementar debidamente antes de promover la acción judicialmente.

Art. 10.° Si el Juez ó Tribunal ante quien se promueva la demanda encontrare deficiente la prueba exhibida junto con ella, en puntos en su concepto sustanciales, exigirá que se complemente explicando con claridad qué es lo que falta.

12, ordinal 3.° de la Ley 72 de 1890.

Art. 11. El juicio se seguirá por los trámites de la vía ordinaria.

El presente artículo y los tres siguientes—12 á 14—se derogaron por el 19 de la Ley 119 de 1890, y se subrogaron por los artículos 1.° á 11 de la mencionada Ley 119.

Art. 12. En el mismo juicio en que se ventile la expropiación se ventilará el monto de la indemnización que deba concederse al respectivo interesado. Si fuere imposible, por la naturaleza de las cosas, ó por las circunstancias, fijar la cantidad precisa en la sentencia, se expresarán con entera claridad, precisión y minuciosidad, las operaciones que deban ejecutarse para determinar dicha cantidad.

Véase la nota del artículo 11.

Art. 13. Decretada definitivamente una expropiación, y pagado ó consignado el valor de la indemnización, el Juez ó Tribunal respectivo dictará las disposiciones necesarias para que se lleve á efecto la expropiación.

Véase la nota del artículo 11.

Art. 14. Concluído el término probatorio, si lo hubiere habido, ó contestada la demanda en su caso, ó pasado el término dentro del cual debe contestarse, se citará á las partes para sentencia, la que se pronunciará dentro de los veinte días siguientes.

Pronunciada sentencia firme en que se reconozca la justicia de la expropiación, se procederá á verificar el avalúo de la cosa ú objeto por medio de peritos nombrados por el Juez ó Tribunal de primera instancia. Para hacer el avalúo ó estimación se tendrán en cuenta únicamente el valor de la cosa al tiempo de verificarse la expropiación y los perjuicios que por razón de ella se ocasionen al demandado.

El Juez ó Tribunal, para fijar el valor de la indemnización, tendrá en cuenta el dictamen de los peritos, y si lo juzga conveniente, recibirá declaraciones de testigos conocedores y se proporcionará los demás datos que tenga á bien. Si creyere exagerado el avalúo en cualquier sentido, deberá señalar la cuota de la indemnización como lo juzgue de justicia.

Véase la nota del artículo 11.

Art. 15. Cuando el interesado no quisiere recibir el precio de la indemnización, se depositará en la persona ó establecimiento que ofrezcan mayores garantías y un interés más considerable.

11 de la Ley 119 de 1890.

Art. 16. Si se decretare expropiación sobre un inmueble gravado con hipoteca ó censo, el precio de la indemnización no se entregará al demandado mientras no acredite la cancelación del gravamen, y entre tanto se pondrá en depósito á interés con las seguridades suficientes para que sustituya la hipoteca ó censo. De este procedimiento se dará noticia al acreedor, á fin de que pueda hacer uso de su derecho.

Art. 17. En los casos de los números 1.°, 2.° y 3.° del artículo 1.°, si hubiere temores fundados de perturbación de la paz pública; en el caso del número 4.° del mismo artículo en épocas de epidemia ó cuando haya fundados temores de que se desarrolle; y en el caso del número 5.°, cuando el peligro sea grave, se observarán las reglas especiales detalladas en los artículos siguientes.

El presente artículo y los nueve siguientes—18 á 26—se derogaron por el 19 de la Ley 119 de 1890, y se subrogaron por los artículos 12 á 16 de la mencionada Ley 119.

Art. 18. Luégo que el representante de la respectiva entidad tenga en su poder la resolución de que habla el artículo 6.°, y las pruebas ne-

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

cesarias, pedirá al Juez ó Tribunal competente que decrete la expropiación.

Art. 19. Si el Juez ó Tribunal creyere que faltan algunas pruebas de las que deben presentársele, las exigirá, especificándolas claramente. Luégo que estén completas decretará la expropiación.

Art. 20. Para fijar el monto de la indemnización, el Juez ó Tribunal oirá previamente el parecer de peritos, y se practicarán las demás diligencias que se estimen convenientes.

Art. 21. Fijado el monto de la indemnización, y pagado ó consignado, se procederá como se dispone en el artículo 8.°

Art. 22. Si al interesado le pareciere infundado el auto que ordena la expropiación, puede pedir revocatoria de él dentro de los tres días siguientes al en que se le notifique. Tiene derecho de presentar pruebas en apoyo de su reclamación; y si ésta fuere negada, puede apelar del auto de expropiación, pero sólo en el efecto devolutivo. La apelación se substanciará como si fuere de sentencia definitiva.

Art. 23. Si se decreta la revocatoria, puede apelar de esa providencia la parte contraria, y el superior decidirá si es ó nó el caso de decretar la expropiación, y los demás puntos secundarios y consecuenciales relacionados con ella.

Art. 24. Si se negare la solicitud sobre expropiación, puede apelarse ante el superior, y la apelación se substanciará como la de auto interlocutorio.

Art. 25. Si el auto en que se negó la expropiación fuere revocado, puede, el que figure como demandado, pedir revocatoria y apelar de la providencia del superior en los términos del artículo 23, como si dicha providencia hubiera sido dictada por el inferior; pero en este caso tiene que presentar pruebas en apoyo de la solicitud de revocatoria.

Art. 26. Las disposiciones de los artículos 14, 15 y 16 son aplicables á los casos de que se trata en los anteriores.

Art. 27. En el caso de guerra, sea civil ó internacional, puede ser ocupada la propiedad para los efectos detallados en los tres primeros números del artículo 1.° por las autoridades del orden político ó militar, y sin previa indemnización, en conformidad con las órdenes que expida el Gobierno directamente ó por medio de las autoridades á quienes delegue expresa y especialmente esa facultad.

Art. 28. Todo jefe de una fuerza que obre en un teatro que esté incomunicado directamente con el Gobierno y con las autoridades á quienes éste haya facultado para expropiar, y que no depende de alguna autoridad política, está autorizado para expropiar lo que sea indispensable para el sostenimiento y movilización de su fuerza, á fin de ejecutar con la debida oportunidad, provecho y eficacia las operaciones militares convenientes para el restablecimiento del orden ó para la defensa de la Nación.

Art. 29. La misma autorización de que habla el artículo anterior tiene toda autoridad política que gobierne un territorio incomunicado directamente con el Gobierno. Dicha autoridad puede delegar esa autorización á sus subalternos ó á los jefes militares, con las restricciones ó instrucciones convenientes para evitar abusos.

Art. 30. Todo jefe militar á quien se dé la orden de ejecutar ciertas operaciones militares, se entiende autorizado para expropiar los elementos que sean absolutamente indispensables para cumplir su encargo; siempre que obre en territorio donde no haya autoridad política que

deba proveerle de lo necesario, ó que por la extraordinaria premura de las circunstancias sea imposible ocurrir á ella.

Art. 31. En los casos de los tres artículos anteriores, tratándose de elementos ó vehículos de movilización, sólo se expropiará el uso de ellos por el tiempo indispensable para alcanzar el objeto que se desea.

Art. 32. De toda expropiación que se verifique en tiempo de guerra, sea por las autoridades políticas ó por las militares, se dejará la debida constancia, y se entregará al interesado el documento respectivo que le sirva de prueba legal para hacer valer sus derechos oportunamente. Si eso fuere absolutamente imposible en el momento de la expropiación, se verificará en la primera oportunidad.

La suma á que ascienda la expropiación será pagada seis meses después de restablecido el orden público, y ganará el interés del 12 por 100 anual, mientras se haga el pago.

Art. 33. Quedan derogadas todas las leyes relativas á esta materia.

Art. 34. La presente Ley tendrá también aplicación en el Departamento de Panamá.

Dada en Bogotá, á doce de Noviembre de mil ochocientos noventa.

7.° de la Ley 33 de 1890, relativa á Panamá.

LEY 65

(21 DE NOVIEMBRE),

por la cual se reforma el artículo 31 del Código de Comercio.

(Se publicó en el *Diario Oficial* de 29 de Noviembre de 1890, número 8,252).

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Art. 1.° El artículo 31 del Código de Comercio quedará así:

"Art. 31. Los libros enunciados en los tres primeros incisos del artículo 27 estarán encuadernados, forrados y foliados; sus hojas serán rubricadas por el Juez de Comercio y su Secretario, y en la primera de ellas se pondrá una nota fechada y firmada por ambos que indique el número total de hojas y la persona á quien pertenece el libro.

"En los Distritos donde no haya Tribunal de Comercio, cumplirán estas formalidades el Juez del Circuito ó el del Distrito, y sus respectivos Secretarios."

Dada en Bogotá, á diez y seis de Noviembre de mil ochocientos noventa.

Véase en el Tratado segundo de la *Codificación Nacional* la Resolución que se halla en la página 146, y lo que respecto de aquélla se dice en la página 147.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

LEY 72

(21 DE NOVIEMBRE),

que reforma la 147 de 1888, sobre organización judicial.

[Se publicó en el *Diario Oficial* de 1.° de Diciembre de 1890, número 8,255].

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Art. 1.° Los cargos del orden judicial y los del Ministerio Público no son acumulables, y son incompatibles con el ejercicio de cualquiera otro cargo retribuído. Dichos cargos son igualmente incompatibles con toda participación en el ejercicio de la abogacía. Pero los empleados del Ministerio Público pueden ser nombrados catedráticos en los establecimientos de Instrucción Pública.

Este artículo subroga al 2.° del Código de Organización.

Art. 2.° En los negocios en que conocen en la Sala de Acuerdo los Tribunales Superiores de Distrito, del impedimento ó recusación de algún Magistrado, conocen los Magistrados no impedidos ó recusados.

En los que se deciden en Sala de dos ó más Magistrados, del impedimento ó recusación de uno de ellos conocen los demás que componen la Sala.

En los que se deciden por un solo Magistrado, del impedimento ó recusación de éste, conoce el que le sigue en turno.

Cuando un Tribunal esté dividido en dos Salas y faltaren en alguna de ellas Magistrados que deban decidir sobre impedimentos ó recusaciones, se llamará de la otra Sala al Magistrado ó Magistrados que faltan, designándolos á la suerte.

A falta de Magistrados, se sortearán Conjueces.

Ley 105, artículos 83 á 87.

El Código Judicial nada dispone sobre la materia de que es objeto este artículo, porque dicho Código es el mismo que se expidió para el régimen federal, en el año de 1872, y que se adoptó por la Ley 57 de 1887.

Art. 3.° Los Conjueces de la Corte Suprema ó de los Tribunales no devengarán sueldo; pero gozarán de estos honorarios: por la sentencia definitiva, treinta pesos; por la lectura del expediente, diez centavos por cada foja; por la asistencia á las audiencias ó conferencias, un peso por cada hora. Honorarios que se les satisfarán del Tesoro de la Nación.

Art. 4.° Cuando el Conjuez reemplace al Magistrado que sustancia la causa, será sustanciador el Magistrado que sigue en turno al impedido, ó el que elija el Presidente de la Corte ó Tribunal, cuando el Conjuez intervenga por motivo de desacuerdo.

53 del Código de Organización.

Art. 5.° Del impedimento ó recusación del Secretario del Tribunal conoce el Magistrado sustanciador.

763 á 765 del Código Judicial.—47 ordinal 4.°; 75 ordinal 4.° del Código de Organización.

Art. 6.° Las reclamaciones que se hagan sobre condenación en costas, corresponde oírlas y decidirlas al Magistrado ó Magistrados que hayan conocido ó estén conociendo del asunto en que se hubieren causado, lo mismo que aprobar la respectiva liquidación.

47 ordinales 5.° y 6.°; 75 ordinales 5.° y 6.° del Código de Organización.

Art. 7.° El castigo de que trata el ordinal 7.° artículo 75 de la Ley 147 de 1888, será aplicado por la Sala desobedecida ó irrespetada.

La Ley 147 que se cita es el Código de Organización, que se halla en la *Codificación Nacional*.

Art. 8.° Los Magistrados de los Tribunales pueden también castigar individualmente con penas correccionales de multa, que no pase de cincuenta pesos, ó arresto, que no pase de cuatro días, á los que les desobedezcan en el ejercicio de sus funciones ó falten al debido respeto.

334 de la Ley 105.

Art. 9.° Los Jueces Superiores de Distrito Judicial conocerán en lo sucesivo, con intervención del Jurado, del delito de hurto que sea ó exceda de doscientos pesos ($ 200): y no conocerán de los delitos de que trata el artículo 98 de la Ley 147 de 1888, cuando la pena señalada sea arresto ó alguna no corporal.

La Ley 147, que se cita, es el Código de Organización.

Art. 10.° En el Distrito Judicial de Cundinamarca continuarán los dos Juzgados Superiores de Distrito que hoy existen, cada uno con el siguiente personal: un Juez, un Secretario, dos escribientes, un portero alguacil y los agentes de policía que fueren necesarios.

90 Código de Organización.—*Codificación Nacional*, Tratado cuarto, número 24 de orden, y observación.

Art. 11. Considérase derogada cualquiera disposición legal ó resolución de carácter obligatorio en cuanto se oponga al inmediato y eficaz cumplimiento del artículo 111 de la Ley 147 de 1888.

La Ley 147, que se cita, es el Código de Organización, cuyo artículo 111 dispone que puede separarse el despacho de lo civil del de lo criminal en ciertos Circuitos judiciales.

Art. 12. En lo sucesivo los Jueces de Circuito conocerán en primera instancia de los negocios siguientes:

1.° De los asuntos contenciosos en que tenga parte la Nación, con excepción de los que se expresan en el artículo 40 de la Ley 147 de 1888, en caso que el interés de aquélla en el asunto ó pleito no exceda de mil pesos;

Este ordinal modifica al 2.° del artículo 73 del Código de Organización. En consecuencia, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial continuarán conociendo en *primera instancia* de los asuntos contenciosos de que trata dicho ordinal 2.°, en el caso en que el interés de la Nación en el asunto *exceda* de mil pesos. En segunda instancia conocerá siempre la Corte Suprema, exceda ó nó de mil pesos el interés de la Nación en el asunto ó pleito, de conformidad con lo estatuído en el último inciso del presente artículo 12, y en consonancia con el ordinal 3.° del artículo 151 de la Constitución. Véase el artículo 2.° de la Ley 105 de 1890.

2.° De los juicios entre los Gobiernos de los Departamentos y los particulares, cuando el interés de la acción no pase de mil pesos;

Este ordinal modifica al 4.° del artículo 73 del Código de Organización. En consecuencia, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial continuarán conociendo en *primera instancia* de los juicios entre los Gobiernos de los Departamentos y los particulares, cuando el interés de la acción *pase* de mil pesos. Véase el artículo 2.° de la Ley 105 de 1890.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

3.° De los juicios de expropiación ;

Este ordinal subroga al 3.° del artículo 73 del Código de Organización. En consecuencia, los Jueces de Circuito conocerán en *primera instancia* de *todos* los juicios de expropiación. En *segunda instancia* conocerán los respectivos Tribunales Superiores, menos en el caso en que la Nación tenga interés, porque entonces conoce la Corte Suprema en *segunda*, sea cual fuere la cuantía, de conformidad con lo dispuesto en el último inciso del presente artículo 12, y en consonancia con el ordinal 3.° del artículo 151 de la Constitución.

4.° De los juicios de amparo de pobreza. En estos juicios no habrá lugar á consulta.

La Corte Suprema de Justicia conocerá en segunda instancia de los asuntos á que se refieren los ordinales 1.° y 4.° de este artículo, y de los que se mencionan en el ordinal 3.°, cuando en ellos tenga interés la Nación.

En estos juicios conoce en *segunda instancia* la Corte Suprema, á virtud de lo dispuesto en el inciso último del presente artículo 12, y en consonancia con el ordinal 3.° del artículo 151 de la Constitución.

Art. 13. Los Jueces Municipales de los Municipios que sean cabecera ó capital de Distrito Judicial, conocerán en lo sucesivo de los juicios de que trata el ordinal 2.° del artículo 122 de la Ley 147 de 1888, cuando la cuantía no exceda de quinientos pesos.

La Ley 147, que se cita, es el Código de Organización. Véase el ordinal 2.°, que se cita, y también el artículo 2.° de la Ley 105 de 1890.

Art. 14. El ordinal 4.°, artículo 122, del Código de Organización Judicial quedará así: 4.° Conocer en primera, ó en única instancia, según los casos, de las causas criminales que se sigan por extracción ó apertura indebida de la correspondencia por particulares ; por heridas, golpes, ó malos tratamientos de obra, cuando la incapacidad no pase de ocho días ; por el delito de riña ; por el de hurto de cosa cuyo valor exceda de diez pesos y no pase de veinte ; por los de estafa y abuso de confianza, cuando la cuantía no exceda de veinte pesos ; por daños en propiedades ajenas, exceptuando los que provengan de incendio y los que se castiguen con pena de presidio ó reclusión ; salvo los casos que tengan señalada pena de presidio ó reclusión y por uso de propiedades ajenas, sin el consentimiento del dueño.

De los hurtos de menos de diez pesos, conocerá la policía.

Art. 15. Jurisdicción en lo judicial es la facultad de administrar justicia, y corresponde al Poder Judicial. La Jurisdicción se divide en ordinaria y especial, en privativa y preventiva, en prorrogable é improrrogable, y en contenciosa y voluntaria. Queda así reformado el artículo 139 de la Ley 147 de 1888.

La Ley 147, que se cita, es el Código de Organización. Creemos que el mencionado artículo 139 está subrogado por el 15, en que nos ocupamos, pues aunque éste habla expresamente de la jurisdicción *en lo judicial*, en lo cual difiere de aquél, es claro que el artículo 139 no puede referirse á otra especie de jurisdicción, por cuanto el Código de que hace parte versa sobre la organización del *Poder Judicial*.

Art. 16. Suprímese el ordinal 3.° del artículo 151 de la Ley 147 de 1888, el cual dice así : "3.° Por admitir un destino ó una comisión incompatible con el ejercicio de la Magistratura ó Judicatura."

La Ley 147, que se cita, es el Código de Organización, cuyo artículo 151 principia así:

" La jurisdicción se pierde absolutamente por cualquiera de las causas que privan del destino de Magistrado ó de Juez, y se *suspende* para todos los pleitos:

1.° .....
2.° .....
3.° (Este es el ordinal que se suprime).

Estimamos conveniente la supresión de este ordinal, porque á virtud de la aceptación de un destino ó comisión incompatible con el ejercicio de la Magistratura ó Judicatura, se pierde absolutamente la jurisdicción, no se suspende simplemente.

Art 17. El Juez que conoce del juicio de sucesión es también competente para conocer, por separado, de los que promuevan los acreedores hereditarios contra ella mientras esté pendiente dicho juicio ; lo cual es sin perjuicio de que los acreedores hereditarios promuevan su acción ante cualquiera de los jueces que serían competentes si la hubieran ejercitado contra la persona del deudor difunto, ó ante cualquiera de los jueces que también son competentes para conocer de las demandas de dichos acreedores.

Art. 18. Restablécese la vigencia del Capítulo único, Título VIII, Libro primero del Código Judicial, edición de 1897, sobre gastos judiciales.

A continuación de la presente ley reproducimos el capítulo sobre *gastos judiciales*.

Art. 19. Siempre que un Juez Superior, ya sea la Corte Suprema, ú otra entidad judicial, conozca de algún asunto por apelación ó consulta, y haya de reformar ó revocar un auto ó sentencia del inferior por no estar ajustados á las leyes, ya sea en cuanto al procedimiento, ya en cuanto á la apreciación de pruebas ó la aplicación del derecho, dictará el auto ó sentencia superior de modo que en éstos se resuelva el punto y no tenga que volverlo á decidir el Juez inferior.

Art. 20. Declárase en su fuerza y vigor los artículos 17 y 18 de la Ley 102 de 1888, y por consecuencia modificado el artículo 101 de la Ley 147 del mismo año.

El Poder Ejecutivo fijará el sueldo que deben gozar respectivamente el Oficial Mayor y Escribientes de que trata el artículo 18 citado, mientras se señala la dotación legal.

Codificación Nacional, Tratado cuarto, números 61 y 62 de orden.

Art. 21. En los términos de la presente Ley queda reformada y adicionada la Ley 147 de 1888.

Dada en Bogotá, á trece de Noviembre de mil ochocientos noventa.

Tomamos del Libro primero del Código Judicial el Título relativo á Gastos Judiciales, cuya vigencia se restablece por el artículo 18 de la ley precedente :

TÍTULO VIII

CAPITULO UNICO

Gastos judiciales.

Art. 193. Es prohibido á todos los funcionarios del Poder Judicial y del Ministerio Público de la Unión, cobrar derechos por las diligencias en que intervengan, ó por los autos ó resoluciones que firmen ó autoricen, ó por las vistas ó conceptos que emitan en el ejercicio de sus atribuciones

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

legales. Dichos funcionarios sólo tienen derecho, por vía de remuneración, al sueldo señalado por la ley al respectivo destino.

Art. 194. Cuando se pidan copias de procesos, y se disponga su compulsa á costa del interesado, éste pagará los gastos de escribiente, á razón de veinte centavos por foja, si se valiere de alguno de los escribientes del Tribunal ó Juzgado que ordenó la expedición de la copia. En dicho caso, cada plana debe constar de veinticuatro renglones, y cada renglón de ocho palabras.

Art. 195. Cuando se pidan certificaciones, informes y exposiciones fuera de juicio, se pagará por el interesado un peso por toda certificación que no pase de medio pliego escrito por ambos lados, y veinte centavos por cada plana más que ella contenga.

Art. 196. A las personas que intervengan en los juicios, no por razón de empleo asalariado, se les pagarán los derechos siguientes:

A los intérpretes un peso por cada plana de traducción; y por cualquiera otra diligencia, un peso por la primera hora, y cincuenta centavos por cada una de las siguientes.

A los peritos en cualquier género de industria ó profesión, por su asistencia á una inspección ocular, un avalúo, un reconocimiento ú otra diligencia, un peso, si no pasare la ocupación de una hora, y si pasare, cincuenta centavos por cada una de las siguientes. El Juez, sin embargo, puede aumentar prudencialmente este precio si así lo exigiere la importancia del asunto.

Siempre que en alguno de los casos de los dos incisos anteriores, la diligencia haya de practicarse fuera del lugar, se dará además á los intérpretes y peritos las caballerías ó embarcaciones que fueren necesarias.

En el caso especial de tasación de costas, se pagará á los peritos tasadores cinco centavos por cada foja de los autos.

Al que sea nombrado curador *ad litem*, se le pagará lo que el Juez regule prudencialmente atendido el trabajo del curador.

Al pregonero que no tenga sueldo periódico, se le pagarán veinte centavos por cada pregón.

A los depositarios judiciales ó secuestres se les pagará:

1.° Por dinero ó alhajas de cualquier clase que entren en su poder, el medio por ciento de su valor.

2.° Por toda clase de bienes muebles que no exijan una activa y constante administración, el medio por ciento de su valor.

3.° Por el depósito de toda especie de animales, el dos por ciento de su importe, más el valor módico de los pastajes y alimentos.

4.° Por el depósito y administración de fincas urbanas, el seis por ciento de sus alquileres.

5.° Por el depósito y administración de haciendas de labor, el seis por ciento de sus productos.

6.° Por el depósito y administración de otra clase de haciendas, el tres por ciento de sus productos y alquileres.

7.° Por el depósito y administración de fábricas ó establecimientos industriales, el seis por ciento de su producto neto.

Cuando al depósito no hubiere administración anexa, el depositario sólo tendrá derecho á la mitad de los derechos asignados al depósito con administración.

Art. 197. Los derechos expresados en el artículo anterior los pagará la parte que los hubiere causado, ó aquella en cuyo favor se hubiere prestado el servicio, inmediatamente que se causen; si fueren varias, se re-

partirán entre ellas, salvo el derecho de la que ó las que pagaron, contra la parte que en definitiva fuere condenada en costos y costas.

Si una parte pagare lo que le corresponde á otra ú otras, se anotará así en el expediente, para que pueda reclamársele sin demora.

Art. 198. Cuando hayan de practicarse diligencias judiciales fuera del lugar de la residencia del respectivo Juez ó Magistrado, la parte ó las partes interesadas en la práctica de dichas diligencias, suministrarán las caballerías ó embarcaciones necesarias, salvo su derecho contra la parte condenada en costas y costos.

LEY 77

(19 DE NOVIEMBRE),

por la cual se devuelve una facultad á los Bancos particulares y Compañías anónimas.

(Se publicó en el *Diario Oficial* de 1.° de Diciembre de 1890, número 8,255).

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Art. 1.° Desde la promulgación de la presente Ley, los Bancos particulares y Compañías anónimas podrán fijar libremente la rata de sus descuentos, intereses y comisiones.

Codificación Nacional, Tratado segundo, número 39 de orden.

Art. 2.° Dichos Bancos y Compañías anónimas publicarán, por la imprenta, y en avisos que mantendrán fijos en sus Oficinas, las ratas de que trata el artículo anterior.

Estas ratas no podrán ser alteradas hasta noventa días (90) después de su publicación; y en caso de contravención, el propietario ó Director del Banco ó Administrador de Compañías anónimas, pagará una multa hasta de cinco mil pesos ($ 5,000).

Art. 3.° Los Bancos establecidos ó que se establezcan podrán prestar dinero á interés sobre fincas raíces

Codificación Nacional, Tratado segundo, número 38 de orden.

Art. 4.° Los Bancos particulares conservarán en moneda legal en sus Cajas un veinte por ciento (20 °/o), cuando menos, del importe de los depósitos disponibles y cuentas corrientes, y de los billetes en circulación.

Codificación Nacional, Tratado segundo, número 32 de orden, y los en él citados.

Art. 5.° Por virtud de la presente Ley quedan derogados el artículo 56 de la Ley 57 de 1887 y los artículos 213, 214 y 215 de la Ley 153 del mismo año.

El artículo 36 de la Ley 57 de 1887, que se cita, corresponde en la *Codificación Nacional*, Tratado segundo, al número 39 de orden; y los artículos 213, 214, y 215 de la Ley 153 de 1887, que también se citan, corresponden en la *Codificación Nacional*, Tratado tercero, á los números 125, 126 y 127 de orden.

Dada en Bogotá, á quince de Noviembre de mil ochocientos noventa.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

LEY 84

(20 DE NOVIEMBRE),

sobre recompensas militares.

(Se publicó en el *Diario Oficial*, de 5 de Diciembre de 1890, número 8,259).

El Congreso de Colombia

DECRETA:

TITULO I

Qué son recompensas militares, por qué causas se conceden y cuantía con que se pagan.

Art. 1.° Son recompensas militares, pagaderas por el Tesoro público, las concedidas ó que en adelante se concedan á los miembros de la fuerza armada de la Nación, por notorios é importantes servicios prestados á la patria.

Pueden obtenerse ya por el mismo agraciado, ya por su viuda, hijos menores de edad, ó que aunque hayan salido de ella, se hallen incapacitados por sus enfermedades ó defectos físicos para trabajar, ya por sus hijas solteras ó que siendo viudas estén muy pobres, ó por sus padres ó hermanas célibes, de acuerdo con lo que esta Ley establece.

Art. 2.° Tienen también derecho á recompensas los nietos legítimos de los militares de la Independencia, en los casos del artículo anterior.

Art. 3.° Los comprobantes para obtener la recompensa ó pensión serán análogos á los que se exigen á los militares por los artículos anteriores.

Art. 4.° Las recompensas antedichas se dividen en dos clases distintas: una que consiste en la entrega de una cantidad fija por una sola vez; y otra que consiste en una pensión ó renta mensual que se pagará al acreedor por el tiempo que esta Ley determina.

Art. 5.° Hay ocho causales que dan derecho á recompensas militares, á saber:

1.ª Por servicios prestados durante la guerra de la Independencia;

2.ª Por muerte recibida en el campo de batalla ú ocasionada por heridas causadas en acción de guerra ó en desempeño de alguna función del servicio ó á manos de enemigos armados del Gobierno legítimo de la Nación;

3.ª Por motivo de inutilidad ó invalidez absoluta producida por heridas recibidas en el campo de batalla en defensa del Gobierno;

4.ª Como premio de acción distinguida de valor;

5.ª Por inutilidad absoluta adquirida en alguna función del servicio;

6.ª Por motivo de enfermedades contraídas en el servicio de las armas, de manera que imposibiliten por completo al paciente para trabajar y proporcionarse la subsistencia, siempre que tales enfermedades no provengan de mala conducta;

7.ª Por razón de tiempo ó sea de antigüedad en el servicio militar; y

8.ª Por invalidez temporal ó parcial producida por heridas en el campo de batalla defendiendo el Gobierno constitucional, ó por cualquiera otra causa, siempre que sea proveniente de asuntos del servicio.

Las causales 1.ª á 6 y 8.ª de este artículo dan derecho á *recompensa unitaria definitiva*, nó á pensión. Los artículos 11, 43 y 44 establecen excepciones á esta regla.

La causal 7.ª da derecho á *pensión vitalicia*, nó á recompensa unitaria definitiva. Véase el artículo 10.

Art. 6.° Las recompensas unitarias definitivas no pueden otorgarse sino por una sola vez, con las excepciones que adelante se determinarán.

Cuando se otorguen á personas distintas del mismo agraciado, es decir, á las que según lo determina la presente Ley les toque heredar esos derechos, la suma correspondiente se dividirá por partes iguales entre los hijos, si no hubiere cónyuge sobreviviente; pero en caso de haberlo, la viuda tomará la mitad de aquélla, quedando la otra para ser distribuída entre los hijos que tengan el mismo derecho, y si no es sino una sola la persona quien lo represente, ella asumirá el total de tal asignación.

13, 41, 61 á 64.

Otorgada una recompensa militar al individuo mismo que prestó sus servicios, ó á sus deudos, ni aquél tiene derecho á que se le recompensen de nuevo, ni los deudos, sean los mismos yá recompensados ó distintos de éstos, lo tienen para pedir otra recompensa, sino en los casos especiales que la ley expresamente establezca. Véanse los comentarios de los artículos 13 y 63.

En consecuencia, los nietos de los militares de la Independencia no tienen derecho á recompensa si yá la recibieron sus progenitores. Tampoco tienen derecho á ella los expresados nietos durante la vida de sus padres, aunque éstos no hayan sido recompensados, porque los padres son llamados en primer lugar; y concedida recompensa á los nietos no se les podría otorgar á los padres que la pidiesen luégo, no obstante su mejor derecho, á menos que se revocase la concedida á aquéllos, lo cual no autorizan las leyes. Además, el presente artículo establece similitud entre el derecho á recompensa y el hereditario, y sabido es que el heredero llamado en primer lugar excluye á los que lo serían si él no existiera.

Repárese que conforme á este artículo los hijos y la viuda, ó aquéllos ó ésta, excluyen á los padres y hermanas.

Art. 7.° Las hermanas célibes asumirán el derecho de la recompensa en el caso de que sus hermanos que hayan muerto en el campo de batalla ó con motivo de heridas recibidas en él ó en alguna función del servicio, nó hayan dejado hijos, padres ó viudas sobrevivientes, y siempre que se compruebe que la subsistencia de ellas dependía del hermano que perdieron.

Del contexto de este artículo se deduce que á falta de hijos y viuda son los padres únicamente quienes tienen derecho á la recompensa; y á falta de éstos, las hermanas célibes en quienes concurran las condiciones que el mismo artículo establece.

Art. 8.° Cuando respecto de un mismo individuo ocurrieren dos ó más de las causales que conforme al artículo 5.° de esta Ley dan derecho á recompensa unitaria definitiva, sólo se hará efectiva íntegramente respecto de una de ellas; acordada la primera recompensa sólo habrá derecho á un veinticinco por ciento (25 por 100) más, por cada una de las nuevas causales, salvo lo que adelante se determine en esta Ley.

El hecho de hablar este artículo expresa y únicamente de la recompensa unitaria definitiva; la incompatibilidad que entre ésta y la pensión establece el artículo 61, y la excepción que consagra el 63, nos determinan á creer, sin

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

dejarnos duda, que obtenida recompensa unitaria definitiva no se tiene derecho para solicitar pensión vitalicia. Véase el final del comentario del artículo 63.

Art. 9.° De acuerdo con lo que se dispone en los artículos anteriores de la presente Ley, salvo los casos que ella misma determina, por una de las causales expresadas, que dan derecho á recompensa unitaria definitiva, recibirán los agraciados, ó quienes sus derechos representen, una suma igual al monto ó alcance de cuatro años del sueldo íntegro del último empleo que tenga el reclamante, ó del que se le había concedido antes ó después de morir, si los reclamantes son sus deudos.

29.

Art. 10.° Las causales por que se le asignan á un militar agraciado una renta ó pensión mensual vitalicia, quedarán sujetas á las prescripciones siguientes:

Para conseguir el pago del sueldo íntegro del último empleo que tenga el reclamante, haber servido en la carrera de las armas por veinte años;

Para obtener las dos terceras partes, haber servido por quince años;

Para obtener medio sueldo, haber servido diez años;

Para obtener una tercera parte, haber servido ocho años; y

Para obtener una cuarta parte, haber servido cinco años.

El servicio de campaña, para los efectos de esta Ley, se computará doble.

Art. 11. Las personas designadas en el artículo 1.° tienen derecho á pedir recompensa ó pensión, en los términos de la presente Ley, cuando la muerte ó invalidez haya ocurrido en defensa de los principios que informan las actuales instituciones, antes ó después de su planteamiento, ó en defensa del Gobierno de la Confederación Granadina, hasta el 8 de Mayo de 1863.

Las pruebas indispensables para obtener la gracia en los casos del presente artículo, deben ser análogas á las que se exigen en los demás casos de esta Ley, ó las supletorias respectivas.

Se ha creído que este artículo tiene por objeto conceder recompensa, en caso de muerte ó invalidez, á los militares—ó á sus deudos—que combatieron contra el Gobierno constitucional en alguna de las guerras anteriores á la de 1885, en defensa de los principios á que se ha dado forma sustancial en las instituciones que hoy rigen, y en consecuencia se interpreta el artículo en consonancia con dicho objeto. Nosotros estimamos inaceptable esta interpretación, pues no lo permite el tenor literal de la disposición, ni su propio espíritu. No su tenor literal, porque el artículo se reduce á *limitar* el derecho á recompensa, disponiendo que cuando el motivo que se alegue sea muerte ó invalidez, hayan ocurrido una ú otra en defensa de los principios que informan las actuales instituciones: de manera que si se solicita recompensa por alguna de estas dos causales, es preciso se acredite que la causal ha ocurrido *en defensa de tales principios*, porque de no acreditarlo, la recompensa no debe concederse. En esto, precisamente, consiste la limitación que el artículo establece, que sin ella, el derecho á recompensa sería más amplio.

Si aquel hubiese sido el objeto del artículo, el legislador se habría expresado en estos ó semejantes términos:

"Tienen para sí ó para sus deudos derecho á recompensa, en caso de muerte ó invalidez, y conforme á la presente ley, los que hayan combatido contra el Gobierno en alguna de las guerras anteriores á la de 1885, defendiendo los principios que informan, etc."

Tampoco permite el espíritu de la disposición que se la interprete en armonía con el indicado objeto: ya porque no se sabe, ni puede saberse, cuáles de las guerras anteriores á la de 1885 tuvieron por objeto la defensa de los *mismos*

principios que informan las actuales instituciones; ya porque no es posible aceptar que la ley consagre el principio anárquico de que tienen derecho á recompensa los que en defensa de ciertos principios hacen revoluciones armadas contra los Gobiernos constitucionales. La circunstancia de conceder el mismo artículo recompensa á los que en defensa del Gobierno de la Confederación Granadina combatieron hasta el 8 de Mayo de 1863, y sólo hasta esa fecha, revela de un modo indudable que al expedirse esta disposición no se tuvo en mira el conocido objeto, pues fue precisamente el 8 de Mayo, que se cita, cuando se expidió la Constitución de Rionegro, y cuando, en consecuencia, asumió carácter constitucional el Gobierno de hecho que existía. No ha estado, pues, en la mente del legislador otorgar recompensas á los que hayan combatido contra el Gobierno constitucional anterior al existente. Si justo fuera concederlas, ¿por qué razón se dispone en el ordinal 1.° del artículo 66 de esta ley que pierden el derecho á la recompensa de que gocen los que tengan participación en algún alzamiento ó sedición contra el Gobierno legítimo de la Nación?

El artículo dice: "..... cuando la muerte ó invalidez haya ocurrido en defensa de los principios que informan las actuales instituciones, *antes* ó *después* de su planteamiento...." ¿Por qué el *antes* ha de referirse á guerras anteriores á la de 1885, y no á ésta únicamente, siendo notorio que es debido á ella el planteamiento de las actuales instituciones?

Si se interpreta el artículo en el sentido que acabamos de indicar; si el único objeto que se le asigna es conceder recompensa á los que en la guerra de 1885 sostuvieron al Gobierno y defendieron los principios que informan las actuales instituciones, es claro, se nos dirá, que la disposición es del todo inútil, porque no hay necesidad de ella para reconocer derecho á recompensa á los militares que combatieron en defensa del Gobierno en la expresada guerra. Es cierto que no hay necesidad de la disposición, si se la interpreta de esta manera; pero ¿cuál es la ley, cuál el principio de hermenéutica legal que permite asignar á una disposición un objeto que es incompatible con su tenor literal y con su espíritu, á fin de que tenga aplicación?

Además, el mismo artículo establece que las personas á que él se refiere "tienen derecho á pedir recompensa ó pensión, en los *términos* de la presente ley, cuando la muerte ó la invalidez hayan ocurrido...." Pues bien, conforme á la presente ley no hay derecho á pedir *pensión* en caso de muerte ó invalidez; se concede por *antigüedad en el servicio*. Sólo hay dos casos en que se concede pensión, temporal, por invalidez también temporal, y son los designados en los artículos 43 y 44; para tales casos los mismos artículos determinan la pensión á que se tiene derecho, no así en el presente, pues únicamente se dice que se tiene derecho á recompensa ó pensión *en los términos de esta ley*. Esto y lo dicho anteriormente demuestra que el artículo 11 no está en armonía con el espíritu de la ley, ni con el contexto de sus disposiciones, lo cual no es de extrañar, pues entendemos que se introdujo en el curso del debate.

TITULO II

Servicios prestados á la causa de la Independencia.

Art. 12. Las recompensas que se otorguen con motivo de servicios prestados á la causa de la Independencia, sólo favorecen á los militares que sirvieron á dicha causa desde 1810 hasta 1826, inclusive, y en la Marina de guerra hasta 1827; respecto de ellos ó de quienes sus derechos representen, la recompensa unitaria definitiva se hará efectiva cualquiera que fuere el tiempo que sirvieron en aquella época, siendo para el caso abonables las campañas hechas y las acciones de guerra tenidas por los militares colombianos en la república del Perú.

No ha debido decirse que "la recompensa unitaria definitiva se hará efectiva *cualquiera que fuere el tiempo* que sirvieron en aquella época ...," porque la *recompensa unitaria* no se concede en razón de la antigüedad en el servicio.

Art. 13. Los deudos de los militares de la Independencia que no

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

se hallen en el goce de pensión, y que hubieren sido recompensados en virtud de los servicios prestados á la República por sus padres, maridos, etc., de acuerdo con lo que disponía sobre el particular la Ley 153 de 1887, tienen derecho á que se les declare comprendidos en la gracia que determina el artículo 9.° de la presente Ley, pero debiendo deducírseles precisamente del alcance ó monto que en tal virtud deban percibir, la suma que en calidad de recompensa tenían recibida yá.

41, 61 á 64.

Los deudos de los militares de la Independencia, que se hallen en el caso especial del presente artículo, son las únicas personas que en esta ley constituyen excepción de la regla general consignada en el comentario del artículo 6.°, pues se les otorga nueva recompensa por servicios *yá recompensados.*

Los demás militares que hayan sido recompensados con arreglo á la Ley 153 de 1887, no tienen derecho á recompensa *unitaria definitiva*, pues así lo dispone expresamente el artículo 61. Sin embargo, el artículo 63 establece una excepción respecto de los deudos de los militares cuyas acciones distinguidas de valor no hayan sido recompensadas. Véase el comentario de dicho artículo 63.

TITULO III

Casos diversos de inutilidad ó invalidez absoluta, relativa ó parcial, y modo de comprobarla.

Art. 14. Los militares que hayan sido inutilizados de una manera absoluta con motivo de heridas recibidas en acción de guerra, tienen derecho á que se les asigne el máximum de la recompensa unitaria definitiva, ó sea el alcance de los cuatro años mencionados.

Art. 15. Para los efectos del artículo anterior, se entiende por inutilidad absoluta la pérdida completa de la vista, del oído ó del habla; el haber quedado mutilado de una ó ambas piernas; de una ó ambas manos; de uno ó ambos pies; ó bien el que por causa de alguna grave lesión recibida en el cuerpo, en la cabeza ó el rostro, haya quedado enteramente incapacitado para trabajar.

En materia de mutilación de manos, se entiende que debe ser cuando de ese miembro hayan desaparecido siquiera cuatro dedos, y en cuanto al pie, cuando la pérdida consista por lo menos en la mitad de su volumen.

Art. 16. Los militares que se hubieren inutilizado por completo, en función del servicio, pero no en combate ni á manos de enemigos armados del Gobierno, ó que en el mismo servicio hayan contraído alguna enfermedad de las declaradas incurables, tendrán derecho á una recompensa unitaria definitiva, é igual á las dos terceras partes de la suma señalada para los que hayan sido inutilizados absolutamente en acción de guerra.

Art. 17. En los casos de inutilidad, la declaratoria de ella será hecha por una Junta de tres profesores en la ciencia médica, que deberá ser nombrada en la capital de la República por el Comandante general de las tropas; y en los Departamentos ó provincias, por sus respectivos Gobernadores ó Prefectos.

Art. 18. El reconocimiento que la dicha Junta debe practicar para dar su dictamen sobre el estado de salud del individuo inutilizado, lo efectuará bajo juramento, en presencia y en el lugar que designe la autoridad que la nombre, debiendo, para el efecto, sentarse una diligencia en que conste la exposición detallada y demostrativa de los peritos, la

cual irá firmada por ellos, por la autoridad ante quien juran y su respectivo secretario; debiendo también, en todo caso, la autoridad que presida el acto de reconocimiento, hacer á los peritos y al solicitante cuantas preguntas estime convenientes para el esclarecimiento y comprobación de que es en un todo exacto y verdadero el contenido de la exposición en referencia.

Art. 19. La invalidez parcial ó relativa da derecho solamente á una recompensa unitaria definitiva, igual á la mitad de la que se asigna para el caso de invalidez absoluta, contraída en el campo de batalla; entendiéndose por invalidez relativa ó parcial, para los efectos de esta Ley, la que ha sido causada por heridas recibidas en acción de guerra ó en función del servicio, pero no ha dejado en imposibilidad absoluta, sino parcial, al paciente, como antes de ser herido ó baldado lo hacía.

43 y 44.

Art. 20. Cuando el individuo inutilizado lo haya sido por mutilación de miembro, de manera que tal lesión esté á la vista de todos, no habrá necesidad de que se nombren peritos para hacer tal reconocimiento, pues en este caso el Comandante General ó los respectivos Gobernadores, ó Prefectos de Provincia, como yá se ha dicho, lo examinarán por sí, en unión de sus Secretarios y dos testigos abonados, y le expedirán al inválido una certificación jurada de que ha sido reconocido y de que realmente se halla inútil, al tenor de lo que prescribe esta Ley.

Art. 21. Es obligatorio á los individuos de tropa el presentar cuatro piezas entre certificados de Generales ó Jefes, ó declaraciones de testigos presenciales, levantadas con las formalidades legales, ante cualquiera autoridad civil ó militar, á fin de comprobar la identidad de la persona, y el lugar ó combate donde se adquirió la invalidez.

Art. 22. En caso necesario, la constancia del hecho de haberse inutilizado, existente en cualquier documento oficial, será buena prueba, pero siempre deberá ella apoyarse en el dicho de dos testigos presenciales para comprobar la identidad de la persona.

Art. 23. La clase de Oficiales desde Subteniente á Capitán, inclusive, podrán comprobar dicha identidad con sólo tres declaraciones ó dos certificados de Generales ó Jefes á cuyas órdenes hayan servido; y los Generales y Jefes con sólo manifestarlo bajo su palabra de honor.

Art. 24. Para comprobar los Generales, Jefes y Oficiales que la invalidez se adquirió en servicio del Gobierno, deberán presentar también tres certificaciones de Jefes ó declaraciones juradas de testigos presenciales, levantadas con las formalidades legales ante Juez competente, ó ante alguno de los Estados Mayores del Ejército de la Nación.

Art. 25. Cuando la inutilidad provenga de algún daño en función del servicio ó de enfermedades incurables, adquiridas en él, será preciso que la comprobación se haga con el testimonio, en la forma legal, de cinco testigos caracterizados, en que se demuestre que el reclamante, estando en servicio activo en las filas del Ejército de la Nación, se hallaba en el pleno goce de su salud, y que allí, con el motivo que hubiere tenido lugar, fue donde se inutilizó ó enfermó de por vida.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

TÍTULO IV

Acciones distinguidas de valor; premios que por ellas se conceden y modo de comprobarlas.

Art. 26. Las acciones distinguidas de valor ejecutadas por los individuos de la fuerza armada, al tenor de lo que define el artículo 840 del Código Militar de la Nación, dan derecho á recompensa unitaria definitiva en esta forma:

Los hechos enumerados en los ordinales 1.° á 12, inclusive, así como también lo que expresa el artículo 841 del mencionado Código Militar, podrán ser premiados, á juicio del Poder Ejecutivo, y en atención á las distintas circunstancias que pueden ocurrir en los diversos casos, con una suma pagadera en moneda legal, cuyo monto esté comprendido en razón ascendente desde el que representa una anualidad del sueldo del último empleo que tenga el reclamante, hasta el máximum de la recompensa que queda señalada en el artículo 9.° de esta Ley para los individuos que quedan completamente inutilizados.

Art. 27. Siempre que algún militar haya ejecutado dos hechos de los que anteriormente se reputan como acción distinguida de valor, ó que en el caso que prevé el ordinal 11 del citado artículo 840 del Código Militar, la fuerza sublevada conste de cien hombres, por lo menos, ó que en caso de ser menor de este número la sublevación sea en tiempo de guerra, y que con motivo de la parte prevista en el antedicho artículo 841 del mismo Código, dé por consecuencia el hecho ejecutado la conclusión de la guerra, la asignación de la recompensa unitaria se hará precisamente por el máximum de las que en esta Ley se señalan.

Art. 28. Cuando algún militar haya ejecutado las acciones distinguidas de valor que dan derecho al máximum de la recompensa unitaria que anteriormente se señala, y siga después de eso ejecutando hechos de los que como tales acciones se reputan, por cada una vez más que lo haga, será premiado como por un hecho enteramente nuevo y aislado.

Art. 29. Cuando un militar muriere al ejecutar una acción distinguida de valor, se le considerará inmediatamente ascendido al próximo empleo, y entonces la recompensa se señalará por el empleo que acaba de obtener.

Art. 30. Cuando algún individuo no militar ejecutare alguna de las acciones distinguidas de valor que se determinan en el Código Militar, relativa á la sofocación de una revolución ó motín á mano armada ó al sometimiento de una tropa sublevada, tendrá derecho al pago de una recompensa unitaria definitiva, en la misma proporción que correspondería á la graduación del militar que encabezó los sublevados ó rebeldes, ó á otra mayor, si en justicia lo creyere así el Jefe de la Nación, mediante la importancia de los alcances ó resultados funestos á que hubiera podido dar lugar la sublevación si se le hubiera dejado tomar cuerpo.

Art. 31. Para comprobar cualquiera acción distinguida de valor, si es que la ejecución de ella no ha sido yá declarada por la autoridad competente, y por lo tanto no consta en la hoja de servicios del reclamante, éste exhibirá en copia debidamente autorizada, ya sea manuscrita ó impresa por disposición oficial, el parte detallado del combate ó hecho que diera al Gobierno el Jefe de las fuerzas á que el actor pertenecía, ó la primera autoridad política del Departamento ó Territorio en donde se efectuó, si es que el caso fuere sometimiento de tropas sublevadas, y donde conste por lo tanto, que la conducta del solicitante fue distinguida en el lance ó acontecimiento á que se refiere, para cuyo efecto dichas autoridades, ya sea la militar ó la civil, tomarán todas las medidas del caso para cerciorarse de la exactitud de los hechos, en términos de que al expedir tal certificado juramentado, tengan conciencia y persuasión de que lo que allí expresan es cierto y verdadero.

Art. 32. En caso de que por alguna circunstancia involuntaria de parte de los superiores del solicitante, no se haya podido dar parte del combate ó acontecimiento, con todos los detalles que ocurrieron en él, y que en tal virtud no se hace mención allí del hecho que constituye tal acción distinguida, ó que, aun habiéndolo dado, no haya llegado á poder del Gobierno, con motivo de las fluctuaciones de la guerra ú otra causa cualquiera, entonces podrá comprobarse después con una certificación jurada expedida por el General ó Jefe que como tál mandó las fuerzas á cuyas órdenes combatió el solicitante, ó que la dicha autoridad política á cuyo cargo estaba el territorio donde tuvo lugar la sublevación, en la cual exprese con toda claridad y precisión cuál fue el hecho ejecutado, y si en su concepto cree que al tenor de lo prescrito en el Código Militar, merece reputarse como acto que merezca el premio por comportamiento distinguido.

Art. 33. Dicha certificación, en caso de que el hecho se haya ejecutado en acción de guerra, deberá ir apoyada por dos más del mismo estilo, expedida: la una por el Jefe del Estado Mayor inmediato del Cuerpo á que pertenecía el solicitante, y la otra por el primero ó segundo Jefe de dicho Cuerpo. A falta de estos últimos, se puede sustituír cada una de ellas con el dicho de tres testigos idóneos y caracterizados.

Art. 34. Cuando por muerte, ausencia ú otros motivos graves, el General ó Jefe que haya mandado el combate no pueda expedir la certificación de que se habla anteriormente, ella podrá ser expedida por el Jefe de Estado Mayor General ó por quien haya hecho sus veces en la fuerza á que pertenecía el solicitante. En caso de prueba testimonial en este punto, se hará en ella constar que el hecho á que el reclamante se refiere fue de pública notoriedad.

Art. 35. Siempre que el militar que haya ejecutado la acción distinguida de valor sea el Jefe de un Piquete, Compañía, Escuadrón, Batallón, Regimiento, ó un número de Cuerpos que no alcance á una Columna, que haya salido en Comisión ó destacada, y que por lo tanto no tenga ahí en el teatro de los acontecimientos otro inmediato superior á quien estar subordinado, elevará el parte de lo ocurrido, juntamente con la lista, por lo menos, de cinco testigos presenciales, de los más caracterizados, al Jefe de Estado Mayor de la Columna, Brigada ó División á que pertenece, con la fuerza que comandaba para que este funcionario, con los documentos citados, lo ponga en conocimiento del Comandante General de la División respectiva.

Art. 36. Una vez que haya llegado el asunto á conocimiento del Comandante General, mandará levantar escrupulosamente la información del caso para que si es que el hecho reclamado resulta ser cierto y verdadero, lo participe, dando su concepto por el conducto regular al Ministerio de la Guerra, para que por esa vía llegue á conocimiento del Jefe del Gobierno Nacional, quien determinará, en vista de las

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

pruebas presentadas y del concepto de la Comandancia General, si otorga ó nó la concesión que se le pide.

Art. 37. Cuando el militar que ejecutó la acción distinguida de valor sea el Jefe de una Columna, Brigada ó División que se halle con las fuerzas de su mando en operaciones, sin que el Jefe del Ejército haya tenido á la vista las maniobras de aquéllas, y que por no haber podido disponer las operaciones según los casos que sobre el terreno presente el enemigo, los problemas que allí se resolvieron fueron obra del valor, pericia ó inteligencia del Jefe que combatió en sometimiento de los enemigos del Gobierno, entonces el Jefe que reclame la acción distinguida de valor dará el parte del acontecimiento al Jefe de Estado Mayor Superior que tuvieron las fuerzas que combatieron, para que de acuerdo con las prescripciones establecidas en el artículo anterior llegue el hecho á conocimiento del Jefe de la Nación, á fin de que él resuelva lo que creyere de justicia.

Art. 38. Cuando la acción distinguida de valor se haya ejecutado por el General en Jefe del Ejército, dará directamente parte, con la cita del nombre de un número considerable de testigos caracterizados, al Ministerio de Guerra, para que haciendo este alto funcionario investigar los hechos, por los medios que la ley, la razón y la prudencia lo exijan, venga luégo aquélla á noticia del Jefe del Gobierno Ejecutivo, para que él resuelva, como en los demás casos, lo que justamente convenga.

Art. 39. Todo reconocimiento ó declaratoria de acción distinguida de valor implicará para el agraciado, además de la recompensa á que tiene derecho, la concesión de parte del Gobierno de la Nación de una medalla ó escudo de honor, con su correspondiente título, de manera que al llevar dicha medalla ó escudo el favorecido, sobre su uniforme, sirva eso de poderoso estímulo, y puedan sus conciudadanos reconocer en el premiado un militar digno y valeroso que sabe honrar su profesión.

La Corte Suprema ha decidido que corresponde al Gobierno otorgar las recompensas por acción distinguida de valor.

TÍTULO V

Pensiones por antigüedad en el servicio.

Art. 40. Para los casos de señalamiento de pensión á causa del tiempo servido en la carrera de las armas, se hará la concesión de ella en vista de la respectiva hoja de servicios, y solamente en este caso se exigirá, para poder obtener la asignación del sueldo del último empleo que tenga el solicitante, el haber servido en él por lo menos tres años; en los demás casos se otorgará siempre la recompensa, ciñéndose al último empleo en que el reclamante haya servido.

Art. 41. Cuando á algún militar se le hubieren calificado y recompensado sus servicios, conforme á leyes anteriores á las expedidas por el Cuerpo Legislativo de la Nación, desde 1876 en adelante, y en tal virtud se hallare en el goce de pensión, pero que con motivo de servicios prestados á la Causa constitucional con posterioridad á la calificación aludida, hubiere acumulado más tiempo y adquirido en su transcurso nuevas graduaciones en el Ejército, tiene derecho á que se le cambien las letras yá expe-

didas por otras en que se le asigne la nueva pensión á que se le haría acreedor si estuviera vigente la ley conforme á la cual se le hizo la primera calificación; pero debe tenerse en cuenta que esta gracia tan sólo es concedida para los militares que se hallen gozando actualmente con motivo de heridas recibidas en el campo de batalla ó de declaratoria de acciones distinguidas de valor.

Siempre que algún militar solicite cambio de letras y pensión por causas diversas á las que anteriormente expresa este artículo en su parte final, la entidad que deba hacer tal concesión se ceñirá en todo caso á los demás preceptos contenidos en la presente Ley.

El primer inciso de este artículo se refiere únicamente á los militares que estén en el goce de pensión por heridas recibidas en el campo de batalla ó acciones distinguidas de valor. La pensión que se les otorga es con motivo de los nuevos servicios, nó de los yá prestados.

Indudablemente corresponde á la Corte Suprema la estimación de las pruebas y la determinación de la nueva pensión; y al Gobierno, lo conducente al cambio de las letras.

En cuanto al segundo inciso de esta disposición, el único artículo que está relacionado con él es el 60.

Art. 42. El tiempo de campaña de un militar ó el que dure en poder del enemigo como prisionero de guerra, se le computará siempre doble, para los efectos de la pensión á que se crea con derecho.

Art. 43. Los Generales, Jefes y Oficiales que solamente se hayan inutilizado de una manera temporal, en alguna función del servicio, tendrán derecho á una pensión mensual igual á la mitad de su haber, por todo el tiempo que dure tal invalidez.

19.

Art. 44. Para los individuos de tropa que se hallen en el caso del artículo anterior, la asignación de la pensión será de las dos terceras partes del haber que corresponda á su clase, teniendo todos los militares que en este caso se hallaren, el deber de presentarse cada tres meses ante las respectivas autoridades política ó militar, para que sean nuevamente reconocidos, con el objeto de que cese el goce de la pensión un mes después del en que sean declarados curados.

19.

Art. 45. Los militares á que se refieren los dos artículos anteriores y que residan en la capital de la República, se presentarán ante el Comandante General de la guarnición, y los que permanezcan fuera de dicha ciudad, ante el Gobernador del Departamento respectivo, á fin de que uno ú otro, según el caso, nombren dos Profesores en Medicina para que los reconozcan, y bajo juramento declaren en diligencia que se sentará por escrito, ante los funcionarios que los nombran, si continúa ó nó la inutilidad que dio derecho á la pensión.

TÍTULO VI

Comprobantes que se necesitan para entablar los reclamos.

Art. 46. Cuando alguno de los deudos de los militares de la Independencia, ó de los que hayan muerto ó mueran en acción de guerra, ó á causa de heridas recibidas en combate, ó á manos de enemigos armados del Gobierno legítimo de la Nación, ó en el desempeño de alguna comi-

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

sión importante, se crean con derecho á optar la recompensa que para tales deudos se señala en esta Ley, establecerán sus reclamos con los comprobantes siguientes:

Las viudas de los militares de la Independencia presentarán la respectiva partida de matrimonio, expedida por el cura, notario ó funcionario ante quien se hubiere celebrado el acto; la partida de defunción ó cualquiera otra prueba oficial del fallecimiento de su esposo; la hoja de servicios de éste, y si fuere posible el despacho ó nombramiento del último empleo que obtuvo en la milicia el militar por quien reclaman; y una información de testigos juramentados ante Juez competente, con anuencia del respectivo Agente del Ministerio Público, con que se compruebe que siempre vivieron en unión y buena armonía con su finado esposo; que han guardado ellas, antes y después de haber quedado viudas, buena conducta moral y que se hallan en estado de escasez para poder atender á sus necesidades.

Art. 47. Las viudas de los muertos en acción de guerra, ó á causa de heridas recibidas en ella; de los que mueren á manos de enemigos armados del Gobierno, ó en el desempeño de alguna comisión importante, presentarán también la respectiva partida de matrimonio, en los términos prescritos anteriormente; la constancia oficial de la muerte de su esposo, acaecida en tal combate, á causa de heridas recibidas allí, ó en la parte donde ella hubiere tenido lugar, con las circunstancias que hayan mediado; el despacho, hoja de servicios ó cualquiera otro documento fehaciente con que se compruebe el empleo que su finado esposo tenía cuando murió; y la información de testigos de que se habla en el artículo anterior, para comprobar la viudez y buena conducta que han debido observar antes y después de haber quedado viudas y el estado de escasez en que se hallan.

Art. 48. Los hijos, hijas, padres, hermanas célibes ó nietos de los militares de la Independencia, presentarán la respectiva partida de defunción del finado ó cualquiera otro documento con que se compruebe el fallecimiento del deudo á cuyo nombre reclaman; la partida de bautismo del caso para comprobar el entronque que con el finado tenían; la hoja de servicios de él, y el despacho ó nombramiento del último empleo que tuvo antes del fallecimiento, pudiéndose reemplazar esta última prueba con algún otro documento oficial en que haya constancia de que se concedió tal empleo; pero en caso de que esto tampoco se pueda obtener, entonces la asignación de la recompensa se hará por el último empleo que aparezca haber tenido en la hoja de servicios que el solicitante ó los solicitantes presenten. Igualmente se presentará la información de testigos de que hablan los dos artículos anteriores para comprobar la buena conducta observada por los reclamantes, antes y después del fallecimiento de su padre, hijo ó hermano, y la buena inteligencia y armonía que entre el finado y esos deudos existió.

Art. 49. Cuando sean los padres, hijos, hijas ó hermanas célibes los que reclaman tal recompensa por algún deudo muerto, en uno de los casos de que habla el ordinal 2.° del artículo 5.° de esta Ley, entonces los solicitantes presentarán la partida de defunción del finado, de acuerdo con lo preceptuado anteriormente; ó un certificado expedido bajo juramento por la primera autoridad militar del lugar donde aquél recibió la muerte, las heridas ó el motivo que la causó, si es que ella tuvo lugar en combate ó en campaña; y en caso de no haber sido mediante estas circunstancias y de no haber tal autoridad militar en el territorio

donde la muerte se efectuó, la dicha certificación la expedirá la primera autoridad política del lugar donde aquel hecho se verificó, expresando cuál fue la causa que motivó aquel suceso.

Art. 50. La certificación de que trata el artículo anterior, en uno ú otro caso, irá acompañada de una información de tres testigos idóneos rendida bajo juramento ante Juez competente, ó ante alguno de los Estados Mayores del Ejército, en que se compruebe cuál fue el motivo del fallecimiento del militar por el cual se reclama.

Además de esto se hará constar ahí mismo, ó en otra información separada, rendida ante las autoridades predichas, que los solicitantes han observado buena conducta antes y después de la muerte de su padre, hijo ó hermano; la unión y buena armonía guardada por ellos con él, y el estado de pobreza en que los reclamantes se hallan.

Art. 51. Cuando haya necesidad de presentar alguno ó algunos documentos de los que deben tener el carácter de auténticos, y que por no existir en la oficina ó archivos donde reposaban, no se pueden conseguir ni originales ni en copia, previa la comprobación de haber desaparecido de esos lugares, será permitido el uso de la prueba supletoria, de conformidad con los Códigos Civil y Judicial de la Nación.

Art. 52. Cuando el reclamo de pensión unitaria definitiva se deba hacer por huérfanos menores de edad ó por personas que á causa de sus enfermedades hayan sido legalmente declaradas en interdicción judicial, el reclamo será entablado por las madres de los menores, ó por sus respectivos curadores, si es que no las tienen; respecto á las otras personas se hará igualmente por los curadores que se les hayan nombrado.

Art. 53. En todo caso de reclamo de recompensa unitaria, que en virtud de lo que en esta Ley se dispone, lo intente alguna persona que pertenezca á sexo femenino, le será obligatorio el presentar la prueba de no hallarse casada; pero si dicha prueba la hubiere yá levantado, y desde la fecha de su creación en adelante hubiere transcurrido por lo menos un período de seis meses, tal comprobante será robustecido por un certificado expedido por el Cura de la parroquia donde se halla avencindada la solicitante, en que conste que durante ese período ella no ha contraído matrimonio.

TÍTULO VII

Ante quién y cómo se entablan los reclamos.

Art. 54. Corresponde á la Corte Suprema conocer en juicio sumario, de conformidad con las disposiciones de esta Ley, en una sola instancia, de las reclamaciones por recompensas militares. En dichos juicios se tendrá por parte al Procurador General de la Nación. La Corte Suprema podrá en ellos dictar cuantos autos para mejor proveer estime convenientes.

Art. 55. Los individuos que por cualquier título de los que en esta Ley se determinan se crean con derecho á optar una pensión ó recompensa unitaria definitiva, establecerán sus reclamos de la manera que pasa á expresarse:

Aparejado el expediente del caso con todos los documentos ó comprobantes que en los artículos anteriores se ha dispuesto, lo dirigirán con el memorial respectivo á la Corte Suprema para que allí se le dé el curso legal.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

Art. 56. Si hubiere deficiencia de las pruebas, se le indicará al interesado de una manera clara y detallada el defecto que tienen, para que las complemente, no pudiéndole dar curso al asunto mientras aquéllo no se haya practicado.

Art. 57. En ninguna de las oficinas por donde tenga que pasar esta clase de reclamaciones se demorará una de ellas más de diez días, á fin de que pueda seguir su curso legal, sin perjuicio del interesado.

TITULO VIII

Cómo deben pagarse las recompensas y pensiones.

Art. 58. Las recompensas unitarias definitivas que se conceden conforme á esta Ley, y las pensiones que por cualquier motivo se les estuvieren adeudando á los militares de la Independencia, se pagarán siempre en moneda legal.

El signo ortográfico que en el artículo se halla á continuación de la palabra Ley, indica que se habla de *todas* las recompensas unitarias definitivas; y en cuanto á *pensiones*, únicamente de las que se estuvieren adeudando á los militares de la Independencia.

Art. 59. Las sumas que se necesiten para el pago de las recompensas militares que se concedan conforme á esta Ley y las pensiones atrasadas que se adeuden á los militares de la Independencia se declaran inclusas mancomunadamente en las que asignan los Presupuestos nacionales para el sostenimiento del Ejército en actividad, á fin de que su importe sea cubierto en una ó varias partidas, pero con un plazo que no pase de tres meses.

En este artículo no se establece la misma distinción que en el anterior, pues falta *la coma* después de Ley. En consecuencia, aquí no se habla yá de *todas* las recompensas unitarias, sino únicamente de las que se concedan á los militares de la Independencia, y de las pensiones atrasadas que se adeuden á los mismos. Una interpretación diferente, que comprendiera *todas* las recompensas unitarias, sería contraria á los antecedentes que han regido, de dar preferencia en el pago á los militares de la Independencia; y sería igualmente contraria á la razón, pues es claro que si á la partida destinada para el sostenimiento del Ejército en actividad pudiese imputarse el gasto de *todas* las recompensas unitarias que se concedan, aquélla estaría agotada en breve, con perjuicio de la existencia misma del Ejército, y no obstante el derecho de preferencia que la ley asigna á los gastos relativos á éste.

La presente ley entraña el reconocimiento de un crédito implícito, el necesario para atender al pago de las recompensas unitarias que se concedan á militares—ó á sus deudos—que no sean de la Independencia; y de ahí el que en la liquidación del Presupuesto se haya destinado la cantidad de sesenta mil pesos ($ 60.000) para el pago de las recompensas militares que se concedan conforme á esta ley. Si ésta no fuera la inteligencia que el Gobierno ha dado al artículo en que nos ocupamos, no tendría objeto la designación de la mencionada partida, en razón de que todos los gastos que se ocasionaran con motivo de la concesión de recompensas, deberían imputarse á la cantidad destinada para el sostenimiento del Ejército.

Art. 60. Los militares que habiendo estado en el goce de pensión la hubieren capitalizado en el Tesoro público, y que en virtud de haber prestado nuevos servicios en el Ejército se presentaren á solicitar nueva pensión con motivo de tiempo ó antigüedad en el servicio, les será ella concedida si es que prueban lo que solicitan, pero deberá precisamente deducírseles la cuota capitalizada, señalándoles al efecto únicamente el saldo que á favor de ellos resultare, computándoles la totalidad de sus servicios.

Este artículo está relacionado con el 41, que dispone que los militares que por causa de heridas recibidas en el campo de batalla, ó por acciones distinguidas de valor se hallen en el goce de pensión, tienen derecho á un aumento de la misma—en consonancia con la ley conforme á la cual se hizo la primera calificación—si con posterioridad hubieren prestado nuevos servicios y adquirido nuevas graduaciones, debiendo, en consecuencia, expedírseles nuevas letras.

Por el presente artículo no se concede, como por el 41, aumento de pensión, sino una nueva, siempre que concurran dos circunstancias: que la primera se haya capitalizado, y que se hayan prestado nuevos servicios; pero de la nueva pensión debe deducirse precisamente la cuota capitalizada. ¿Cómo se hace esta deducción? El artículo 13, que se refiere á militares de la Independencia, también dispone que de la nueva recompensa se deduzca la cantidad correspondiente á la primera, cosa muy fácil de verificar en ese caso, porque la segunda recompensa es *unitaria definitiva;* no así en el presente, porque la última recompensa tiene el carácter de pensión vitalicia. Dos medios hay de hacer la deducción: por cuotas partes, ó en su totalidad. El primero ofrece dos inconvenientes: la dificultad de fijar la cuota, sin incurrir en arbitrariedad; y es el segundo, que puede suceder que el pensionado muera antes de que se le haya deducido la totalidad de las cuotas que constituyen la cantidad deducible, y por consiguiente, aquél habrá gozado de pensión indebidamente. El segundo medio consiste en que, fijada la pensión á que se tiene derecho, no se éntre, efectivamente, en el goce de ella sino cuando las pensiones yá vencidas formen una cantidad igual á la que debe dedudirse. A virtud de la adopción de este último medio se da estricto cumplimiento á la parte final del artículo, que dice.... "pero deberá *precisamente* deducírseles la cuota capitalizada, señalándoles al efecto *únicamente el saldo* que á favor de ellos resultare, computándoles la totalidad de sus servicios."

Desde luego es claro que á la Corte Suprema sólo le corresponde decretar la deducción, y al Gobierno verificarla.

Véase el segundo inciso del artículo 41.

TITULO IX

Quiénes no tienen derecho á recompensa ni á goce de pensión.

Art. 61. Los militares que merced á leyes anteriores sobre premios y recompensas á los miembros del Ejército hubieren hecho calificar y premiar sus servicios y á causa de ello se hallasen actualmente en el goce de pensión, ó que hubiesen recibido recompensa de alguna clase, al tenor de lo que preceptúa la Ley 153 del año de 1887, no tienen derecho á recibir recompensa unitaria definitiva por los servicios que hasta el presente han prestado, así como tampoco los que hayan capitalizado la pensión que se les había concedido.

Conforme á este artículo, los militares que se hallen en el goce de pensión, ó que la hayan capitalizado, ó que hayan obtenido recompensa conforme á la Ley 153 de 1887, no tienen derecho á *recompensa unitaria definitiva* por los servicios que hubieren prestado posteriormente. Pero ¿tendrán derecho á aumento de pensión los que la tienen; ó á que se les conceda, los que carecen de ella? Los militares que gocen de pensión tienen derecho á que se les aumente si se hallan en el caso del artículo 41. Los que la hayan capitalizado son acreedores á una nueva, en conformidad á lo que dispone el artículo anterior. Finalmente, los que hayan sido recompensados con arreglo á la Ley 153, no tienen derecho á pensión, porque ninguna ley se la concede; pero si fueren militares de la Independencia tendrán derecho á *recompensa unitaria definitiva*, de conformidad con el artículo 13.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

Art. 62. Los hijos, hijas, viudas, padres, hermanos, etc., que se hallen en el goce de pensión proveniente de servicios que los padres, hijos, esposos ó hermanos, etc., hubiesen prestado á la República, no tienen derecho á recompensa unitaria definitiva.

Art. 63. De los militares que por cualquier motivo se hallen gozando de pensión en la actualidad, con excepción de los que prestaron sus servicios en la época de la Independencia, y de los que habiendo fallecido, teniendo sus hojas de servicios, declaratorias de acciones distinguidas de valor sin que ellas se les hubiesen premiado, no tendrán derecho sus deudos á la concesión de recompensa unitaria, sino los de los que mueran en campaña ó en acción de guerra, ó á causa de heridas recibidas defendiendo el Gobierno legítimo y las instituciones nacionales.

Para conocer cuanto es dable el sentido de este artículo, cuya redacción es en extremo imperfecta, juzgamos que deben considerarse colocados dentro de un paréntesis estos conceptos:...." con excepción de los que prestaron sus servicios....." hasta la palabra *premiado*. Mediante este artificio nos inclinamos á creer que puede fijarse el pensamiento del legislador en estos términos:

"Los deudos de los militares que mueran en campaña ó acción de guerra, ó á causa de heridas recibidas defendiendo al Gobierno legítimo y las instituciones nacionales, tienen derecho á recompensa unitaria definitiva, aunque dichos militares gocen de pensión en la actualidad." Esta disposición modifica, pues, en los términos expresados, la regla del artículo 61.

Respecto de la excepción que el presente artículo consagra, haremos notar que en cuanto se refiere á los militares de la Independencia es innecesaria, porque los derechos de éstos se rigen por los artículos 12 y 13, que les son especiales; y en cuanto á los otros militares comprendidos en la excepción, juzgamos que lo que se ha querido decir es esto:

"Los militares que hayan fallecido y en cuyas hojas de servicios se registren declaraciones de acciones distinguidas de valor, tienen derecho, si éstas no se les hubiesen premiado, á que se les otorgue recompensa unitaria definitiva; aunque en la actualidad estuvieren los mismos militares en el goce de pensión." Este es el único caso en que se conceden, respecto de un mismo individuo, las dos recompensas de naturaleza distinta que esta ley establece: la pensión y la recompensa unitaria definitiva.

Art. 64. No tienen derecho á pensión ni recompensa de ninguna clase:

1.° Las viudas que estuvieren separadas á la muerte de sus maridos por justa causa dada por ellas;

2.° Las viudas, hijos, huérfanos, hijas y hermanas que no hayan observado buena conducta; y

3.° Las viudas, padres, hijos, etc., que tengan una renta propia que pase de seiscientos pesos anuales.

Art. 65. Los militares que hallándose en uso de letras de cuartel, retiro ó licencia indefinida estén gozando de una pensión del Tesoro público, debido á los años de servicio que hayan comprobado, no podrán, al ser llamados al servicio activo, percibir á un mismo tiempo el sueldo del empleo que están desempeñando y la cuota de la pensión que se les hubiere asignado, pues en tal caso solamente tendrán derecho á cobrar el sueldo del destino que desempeñan.

En caso de que la pensión que se les hubiere asignado sea igual al sueldo que corresponda al empleo que han sido llamados á desempeñar, entonces recibirán sobre el importe del sueldo aludido, un sobresueldo igual á la cuarta parte de la paga antedicha.

TITULO X

Pérdida del derecho á cobrar pensión ó recompensa del Tesoro público

Art. 66. El derecho á cobrar pensión ó recompensa del Tesoro nacional, se pierde:

1.° Por tomar, desde la sanción de la presente Ley en adelante, participación en alzamiento ó sediciones contra el Gobierno legítimo de la Nación;

2.° Por fomentar enganches ó levas que tengan por objeto turbar el orden público ó invadir el territorio de alguna Nación amiga;

3.° Por contraer las viudas nuevo matrimonio; y

4.° En los demás casos que así lo dispongan las otras leyes nacionales.

Art. 67. Quedan también incluídos en la pérdida del derecho á cobrar pensión, los militares que hallándose en el goce de ella, se ausenten del territorio nacional sin previa licencia del Poder Ejecutivo; y los que una vez que se hallen en uso de letras de cuartel ó licencia indefinida, y sean llamados al servicio, no concurran á dar cumplimiento á lo que se les ordena, sin comprobar que se hallan en completa imposibilidad para ello.

Art. 68. Los militares que hallándose en el goce de pensión tuvieren que ausentarse del territorio de la República, pedirán para ello permiso ó licencia al Poder Ejecutivo, á quienes en el goce de la misma pensión se les podrá conceder hasta por dos años en tiempo de paz, á menos que sea en el caso de que una enfermedad rebelde obligue al solicitante á permanecer por más tiempo fuera de la República, debiendo comprobarse esto según lo disponga el Poder Ejecutivo.

Art. 69. El Poder Ejecutivo, de oficio ó á pedimento del Ministerio público ó de cualquier particular, tiene el deber de declarar, previa comprobación del hecho, la suspensión del pago de la pensión ó recompensa en cualquiera de los casos del artículo 66, dando cuenta á la Corte Suprema para que ella decida definitivamente sobre la caducidad de dicha pensión, previa audiencia del interesado.

Esto se hará sin perjuicio de la jurisdicción de los Tribunales comunes para declarar la caducidad en los casos en que así se establezca por otras leyes.

Art. 70. Cualquiera autoridad ó empleado nacional ó de los Departamentos que tengan noticia del fallecimiento de un pensionado, está en la obligación de participarlo por escrito al Ministerio del Tesoro, con la prueba de la defunción, para que se dé de baja al finado en el depósito respectivo de pensionados.

TITULO XI

Empleados de sanidad, administración, etc.

Art. 71. Los empleados de sanidad, los de administración militar, los Auditores de guerra y Capellanes, tendrán derecho igualmente á la pensión ó recompensa que les corresponda, según los servicios que en su clase hayan prestado, y de acuerdo con las prescripciones de la pre-

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

sente Ley, previa calificación hecha por el Estado Mayor General del Ejército.

El tiempo servido en campaña por estos empleados, se les computará también doble para los efectos de su calificación.

Art. 72. En caso de que los empleados á que se refiere el artículo anterior se presentaren á optar pensión por tiempo ó antigüedad en el servicio, tal pensión se les asignará con relación al sueldo que tenía el último empleo que desempeñaron; pero con una tercera parte menos de la paga que les correspondería si según el artículo 10° de esta Ley, ese tiempo lo hubieren servido como militares en actividad.

TITULO XII

Marina de guerra é individuos no militares.

Art. 73. Son comunes las disposiciones de esta Ley á los miembros de la Marina de guerra, cuando el Gobierno disponga su creación y en consecuencia se organice; así como también para los hijos, hijas, viudas, etc., de los individuos no militares que mueran en combate ó en campaña, defendiendo el Gobierno legítimo y la Constitución nacional.

TITULO XIII

Disposiciones varias.

Art. 74. Los derechos de los militares para obtener recompensa del Tesoro público ó para que se les cubra lo que se les halle adeudando por los servicios que en el Ejército hayan prestado á la Nación, si es que yá la recompensa se les ha señalado, no podrán declararse prescritos sino después de cumplidos los veinte años que en las leyes generales se determinan para la prescripción ordinaria, los cuales se deberán empezar á contar desde el día en que tales servicios fueren ó hayan sido reconocidos ó calificados por la autoridad ó entidad competente, quedando por supuesto interrumpido el tiempo de la prescripción, siempre que en el transcurso de él aparezca que por los interesados se ha solicitado, con los comprobantes del caso, la calificación de los servicios, ó que se hayan reclamado y cobrado los créditos á que con motivo de tal calificación se les haya declarado acreedores.

Art. 75. En caso de que los individuos de tropa tengan que hacer alguna reclamación al Gobierno, á sus superiores ó á las autoridades civiles, la podrán hacer en papel común, quedando por este hecho exentos del empleo de papel sellado.

Art. 76. En ningún caso, y bajo ningún concepto ni por ningún motivo será permitido llamar á un General, Jefe ú Oficiales de la fuerza pública en servicio activo, en un empleo menor del que realmente tengan en el Escalafón del Ejército.

Art. 77. El Poder Ejecutivo dictará las disposiciones del caso, relativas á la formación de hojas de servicios, para los efectos de la presente Ley.

Art. 78. Quedan derogadas todas las disposiciones que tanto el Código Militar de la Nación, como la Ley 153 de 1887, contienen respecto de pensiones y recompensas militares, así como también las que en general sean opuestas á las de la presente Ley: y reformada la Ley 50 de 1886.

Dada en Bogotá, á quince de Noviembre de mil ochocientos noventa.

LEY 89

(25 DE NOVIEMBRE),

por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose á la vida civilizada.

(Se publicó en el *Diario Oficial* de 8 de Diciembre de 1891, número 8,363).

El Congreso de Colombia

DECRETA:

CAPITULO I

Disposiciones generales.

Art. 1.° La legislación general de la República no regirá entre los salvajes que vayan reduciéndose á la vida civilizada por medio de Misiones. En consecuencia, el Gobierno, de acuerdo con la Autoridad eclesiástica, determinará la manera como esas incipientes sociedades deban ser gobernadas.

Art. 2.° Las comunidades de indígenas reducidos yá á la vida civil tampoco se regirán por las leyes generales de la República en asuntos de Resguardos. En tal virtud se gobernarán por las disposiciones consignadas á continuación.

CAPITULO II

Organización de los Cabildos de indígenas.

Art. 3.° En todos los lugares en que se encuentre establecida una parcialidad de indígenas habrá un pequeño Cabildo nombrado por éstos conforme á sus costumbres. El período de duración de dicho Cabildo será de un año, de 1.° de Enero á 31 de Diciembre. Para tomar posesión de sus puestos no necesitan los miembros del Cabildo de otra formalidad que la de ser reconocidos por la parcialidad ante el Cabildo cesante y á presencia del Alcalde del Distrito.

Exceptúanse de esta disposición las parcialidades que estén regidas por un solo Cabildo, las que podrán continuar como se hallen establecidas.

Art. 4.° En todo lo relativo al Gobierno económico de las parcialidades tienen los pequeños Cabildos todas las facultades que les hayan transmitido sus usos y estatutos particulares, con tal que no se opongan á lo que previenen las leyes, ni violen las garantías de que disfrutan los miembros de la parcialidad en su calidad de ciudadanos.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

Art. 5.° Las faltas que cometieren los indígenas contra la moral serán castigadas por el Gobernador del Cabildo respectivo con penas correccionales que no excedan de uno ó dos días de arresto.

Art. 6.° Los Gobernadores de indígenas cumplirán por sí ó por medio de sus Agentes las órdenes legales de las autoridades que tengan por objeto hacer comparecer á los indígenas para algún servicio público ó acto á que estén legalmente obligados.

Art. 7.° Corresponde al Cabildo de cada parcialidad:

1.° Formar y custodiar el censo distribuído por familias, anotando al margen, al fin de cada año, las altas y bajas que haya sufrido;

2.° Hacer protocolizar en la Notaría de la Provincia respectiva, dentro de seis meses, contados desde la fecha de la publicación de esta Ley todos los títulos y documentos pertenecientes á la comunidad que gobiernan y custodiar las copias que les expidan, previo el correspondiente registro;

3.° Formar un cuadro, y custodiarlo religiosamente, de las asignaciones de solares del resguardo que el mismo Cabildo haya hecho ó hiciere entre las familias de la parcialidad;

4.° Distribuír equitativa y prudencialmente, con aprobación del Alcalde del Distrito, para el efecto de elaborar entre los miembros de la comunidad las porciones de resguardos que se mantengan en común, procurando sobre todo que ninguno de los partícipes, casados ó mayores de diez y ocho años, quede excluído del goce de alguna porción del mismo resguardo;

5.° Procurar que cada familia sea respetada en lo posible en la posesión que tenga, sin perjuicio de que se le segregue en beneficio de las demás, cuando sea necesario, la parte excedente que posea;

6.° Arrendar por términos que no excedan de tres años los bosques ó frutos naturales de éstos y los terrenos del resguardo que no estén poseídos por algún indígena; y disponer la inversión que deba darse á á los productos de tales arrendamientos.

Para que los contratos puedan llevarse á efecto se necesita la aprobación de la Corporación Municipal del Distrito, la cual procederá con conocimiento de la necesidad y utilidad del arriendo, y tomando todas las precauciones que crea convenientes; y

7.° Impedir que ningún indígena venda, arriende ó hipoteque porción alguna del resguardo, aunque sea á pretexto de vender las mejoras, que siempre se considerarán accesorias á dichos terrenos.

Art. 8.° De los acuerdos que tengan los Cabildos de indígenas con arreglo al artículo 7.° en negocios que no sean de carácter puramente transitorio, se tomará nota en un libro de registro que llevará el Secretario de la Alcaldía.

Los asientos que en él se hagan serán además firmados por el Alcalde y Personero Fiscal del Distrito; y deberán ser exhibidos á los indígenas que lo soliciten.

Art. 9.° Cuando dos ó más parcialidades tengan derecho á un mismo resguardo, y sus cabildos no puedan avenirse en cuanto al modo de poseerlo, los arreglos en tal caso, á que se refiere el artículo 7.°, serán hechos por el Alcalde del Distrito, de cuyas providencias se podrá reclamar ante el Prefecto de la Provincia respectiva.

Art. 10.° Las controversias de una parcialidad con otra ó de una comunidad con individuos ó asociaciones que no pertenezcan á la clase indígena, serán decididas por la autoridad judicial, haciendo para ello

uso de las acciones ó excepciones detalladas en el Código Judicial de la República.

En los asuntos de que trata este artículo, conocerán en primera instancia únicamente los Jueces de Circuito, sin atender á la cuantía.

Art. 11. Las controversias entre indígenas de una misma comunidad, ó de éstos contra los Cabildos, por razón de uso de los resguardos ó de los límites de las porciones de que gocen, serán resueltas por el Alcalde del Distrito Municipal á que pertenezcan, quien los oirá en juicio de policía en la forma que lo indiquen las disposiciones de la materia; cuyas resoluciones serán apelables ante los Prefectos de las Provincias, y las de éstos ante los Gobernadores de Departamento.

Art. 12. En caso de haber perdido una parcialidad sus títulos por caso fortuito ó por maquinaciones dolosas y especulativas de algunas personas, comprobará su derecho sobre el resguardo por el hecho de la posesión judicial ó no disputada por el término de treinta años, en caso que no se cuente con esa solemnidad, y de acuerdo con lo dispuesto en el Código Civil. Este último requisito de la posesión pacífica se acredita por el testimonio jurado de cinco testigos de notorio abono, examinados con citación del Fiscal del Circuito, los que expresarán lo que les conste ó hayan oído decir á sus predecesores, sobre la posesión y linderos del resguardo.

Art. 13. Contra el derecho de los indígenas que conserven títulos de sus resguardos, y que hayan sido desposeídos de éstos de una manera violenta ó dolosa, no podrán oponerse ni serán admisibles excepciones perentorias de ninguna clase. En tal virtud, los indígenas perjudicados por algunos de los medios aquí dichos podrán demandar la posesión ejecutando las acciones judiciales convenientes.

CAPITULO III

De los Resguardos.

Véanse los artículos 270 y 271 de la Ley 105, y el comentario relativo al primero de los mismos.

Art. 14. Cuando no se pueda averiguar ó descubrir cuáles son los indígenas ó sus descendientes que tienen derecho al Resguardo, el Prefecto de la Provincia respectiva, hechas las indagaciones convenientes, declarará que tales resguardos pertenecen como ejidos á la población que en ellos ó á sus inmediaciones esté situada.

La resolución del Prefecto será sometida á la aprobación del Gobernador del Departamento.

Art. 15 Las Corporaciones Municipales de aquellos Distritos en que haya resguardos de los cuales no se haya segregado la porción correspondiente con arreglo á las leyes, para el área de población, llenarán este deber destinando á tal objeto de diez á setenta hectáreas, según la extensión del resguardo y las necesidades de la población.

Art. 16. Los solares de que pueda disponerse serán adjudicados por la Corporación Municipal al mejor postor, en pública licitación; y los productos de la adjudicación serán destinados al sostenimiento de las escuelas públicas del Distrito.

Art. 17. Los remates de que habla el artículo anterior se harán á

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

condición de edificar en ellos á lo más tarde dentro del término preciso de un año, bien entendido que si eso no sucediere, quedará de hecho insubsistente el remate, y se provocará inmediatamente nueva licitación.

Art. 18. Es admisible únicamente el traspaso de principales acensuados en los solares adjudicados, á fincas rurales situadas dentro del Distrito, del cuádruplo valor libre; y no se admitirá la redención del principal en dinero.

Art. 19. De toda diligencia de adjudicación de solares y traspasos de los principales que los gravan, se tomará nota en el libro de registro de la comunidad, cuya nota será suscrita por los interesados.

Art. 20. Cuando un indígena que no sea hijo de familia, casado ó mayor de diez y ocho años, carezca de la posesión de alguna porción del Resguardo, se le dará una parte de los terrenos reservados para el servicio común de las parcialidades.

Art. 21. Las Corporaciones municipales y los Alcaldes impedirán la destrucción de los bosques que sean necesarios para conservar las fuentes de agua.

Art. 22. Las fuentes saladas, con dos ó más grados de saturación, que se hallen en terrenos de resguardos, las reserva para sí la Nación, y su uso y goce se reglará conforme á las disposiciones del Código Fiscal y sus concordantes.

CAPITULO IV

Protectores de indígenas.

Art. 23. Los Cabildos de indígenas pueden personar por sí ó por apoderado, ante las autoridades, á nombre de sus respectivas comunidades, para promover la nulidad ó rescisión de las ventas que se hayan hecho contra las disposiciones de leyes preexistentes, ó que se hagan en contravención á la presente; para pedir la nulidad de los contratos á virtud de los cuales se hayan hipotecado las tierras del Resguardo; y, en general, de cualesquiera negociaciones en que la comunidad haya sufrido perjuicios de que pueda reclamar legalmente.

Art. 24. No obstante lo dispuesto en el artículo precedente, las comunidades y los particulares, en los asuntos determinados en el artículo 10.°, serán patrocinados igualmente por el Fiscal del Circuito y por los de los Tribunales Superiores en su caso, formando parte en los juicios en que tengan que intervenir.

Art. 25. En las controversias á que se refiere el artículo 11, ninguna de las partes tendrá derecho á ser patrocinada por los protectores de que hablan los artículos anteriores.

Art. 26. Las controversias de los indígenas entre sí, por asuntos del Resguardo, podrán ser sometidas á juicio de árbitros y transadas conforme á las leyes comunes, interviniendo los respectivos protectores. Pero los pleitos entre comunidades de indígenas y otros particulares por razón del Resguardo, no podrán ser sometidos á arbitramentos, ni transados.

Art. 27. Los indígenas, en asuntos de resguardos, que deban promover ante las autoridades, serán reputados como pobres de solemnidad y gestionarán en papel común.

Art. 28. Ningún indígena, de los que viven bajo el mando de los pequeños Cabildos, puede ser obligado á aceptar cargos concejiles.

Art. 29. Es un deber de los Notarios y Secretarios de los Juzgados y de las Corporaciones, lo mismo que de todos los empleados públicos, dar á los Cabildos de indígenas copia certificada de los títulos constitutivos de sus resguardos y de los documentos relacionados con ellos. Estos certificados se extenderán en papel común, y no causarán derechos de ninguna especie.

CAPITULO V

División de terrenos de resguardos.

Véanse los artículos 270 y 271 de la Ley 105, y el comentario relativo al primero de los mismos.

Art. 30. Para efectuar la división de los terrenos de que aquí se trata es necesario:

1.° Que el padrón ó lista á que se refiere el artículo siguiente se halle terminado, y además aprobado definitivamente por el Gobernador del Departamento respectivo; y

2.° Que la partición, que en todo caso se hará judicialmente, se solicite ante el Juez del Circuito por todos los miembros del Cabildo menor de la parcialidad, y tenga el apoyo ó voluntad de la mayoría absoluta de los indígenas cuyos nombres figuren en la lista ó padrón aprobado.

Art. 31. Los hijos de familia serán representados en este juicio por sus padres, y los menores, que no tuvieren padres, por un curador *ad litem*, nombrado según las reglas del derecho común.

El Juez, al efecto, presentada que sea la solicitud, librará comparendo á los indígenas de las tribus de cuya división de terrenos se trata, señalándoles día y hora, llegada la cual, á presencia de su Secretario, leerá á los concurrentes la solicitud, tratando de que el objeto de ésta sea bien comprendido por los interesados, á quienes advertirá que dentro de treinta días deben manifestar verbalmente, ó por escrito, si aceptan ó nó la partición; dejándose constancia de este acto á continuación de la solicitud leída.

Art. 32. Pasados los treinta días, el Juez dictará auto mandando practicar la división, si se hubiere guardado silencio ó no se hubiere presentado oposición, por parte de la mayoría de los comuneros. Caso de hacerse la división, el Juez nombrará un partidor á indicación de una junta compuesta del Prefecto de la Provincia, el Fiscal del Circuito y de un ciudadano designado por el Cabildo. Si hubiere desacuerdo en la indicación para partidor, el Juez nombrará uno que no sea de los indicados.

Art. 33. Luégo que el partidor haya jurado su cargo, de forzosa aceptación, y haya recibido los documentos que deben servir al acto partitivo, procederá á desempeñar su comisión, disponiendo de un año para terminarla: siguiendo en su procedimiento las reglas del Código Civil para las divisiones comunes, y las judiciales de partición de los terrenos de cuasi-contratos de comunidad, en todo lo que sea compatible con el objeto; debiendo el Juez resolver las dudas que sobre procedimiento aplicable se le consultaren por el partidor.

Art. 34. La remuneración que se deba á éste por el desempeño de su trabajo será fijada á juicio de peritos; y el Juez podrá moderarla, á

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

petición del Cabildo ó de la mayoría de los interesados. Para el pago de que aquí se trata, como para los demás gastos de la partición, podrá señalarse un lote de los terrenos del resguardo y venderse en pública subasta.

Art. 35. Los Cabildos de las parcialidades formarán el padrón ó lista de los indígenas de la parcialidad respectiva, distribuyendo por familias. Concluído que sea presentarán dicho padrón al Cabildo del Distrito, para que lo examine y apruebe después de cerciorarse de su exactitud, para cuyo fin dictará las medidas convenientes. Los interesados que hubieren sido excluídos, pueden reclamar ante este último Cabildo, el cual debe resolver en el término de un año; y los perjudicados con tal resolución podrán ocurrir ante el Prefecto de la Provincia, y en tercer recurso ante el Gobernador del Departamento.

Art. 36. Aprobada que sea la lista, dejándose copia autorizada en el archivo del Cabildo del Distrito, se devolverá al de la parcialidad, para su presentación al Prefecto de la Provincia, quien la elevará, con el debido informe, al Gobernador del Departamento para su examen y aprobación definitiva, con las enmiendas precisas y justificables.

Art. 37. Se señala el término de cincuenta años, prorrogables por los Gobernadores de los Departamentos respectivos:

1.° Para formar el padrón de cada comunidad, según los reglamentos que dicten los Gobernadores respectivos de Departamento, á fin de que tales padrones se hagan con claridad, exactitud y justicia;

2.° Para que los Prefectos informen sobre tales padrones al Gobernador del Departamento;

3.° Para que éste examine y apruebe tales padrones;

4.° Para que se dividan ó repartan, por cabezas, entre los indígenas ó comuneros, los terrenos de Resguardos en los términos establecidos por esta Ley; y

5.° Para que dicha división sea definitivamente aprobada por quien corresponde.

Art. 38. Mientras dure la indivisión, los indígenas continuarán como hasta aquí, en calidad de usufructuarios, con sujeción á las prescripciones de la presente Ley.

Art. 39. Hecha la división de los terrenos de Resguardo, cesarán las funciones de los Cabildos de las parcialidades.

CAPITULO VI

Ventas.

Art. 40. Los indígenas asimilados por la presente Ley á la condición de los menores de edad, para el manejo de sus porciones en los resguardos, podrán vender éstas con sujecion á las reglas prescritas por el derecho común para la venta de bienes raíces de los menores de veintiún años; debiendo en consecuencia solicitarse licencia judicial justificándose la necesidad ó utilidad. Obtenido el permiso, la venta se hará en pública subasta conforme á las disposiciones del procedimiento judicial.

Serán nulas y de ningún valor las ventas que se hicieren en contravención á lo dispuesto en este artículo, así como las hipotecas que afecten terrenos de resguardo, aun hecha la partición de éstos.

Art. 41. Los Gobernadores de Departamento quedan encargados de dictar los reglamentos necesarios en desarrollo de esta Ley y llenar los vacíos de la misma sin contravenir sus prescripciones.

Art. 42. Quedan derogadas todas las leyes y disposiciones contrarias á la presente Ley.

Dada en Bogotá, á diez y seis de Noviembre de mil ochocientos noventa.

LEY 95

(2 DE DICIEMBRE),

sobre reformas civiles.

(Se publicó el 9 de Diciembre de 1890, *Diario Oficial* número 8,264).

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Art. 1.° Se llama *fuerza mayor ó caso fortuito*, el imprevisto á que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los autos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.

Este artículo se diferencia del correspondiente del Código Civil (el 64), al cual subroga, en que en el del Código se emplea equivocadamente la conjunción *ó*, en vez de la preposición *á*. El artículo del Código dice: "Se llama *fuerza mayor ó caso fortuito* el imprevisto ó que no es posible resistir...."

Art. 2.° Para el efecto del artículo 17 del convenio con la Santa Sede aprobado por la Ley 35 de 1888, señálase el Notario público, en los lugares en que lo hubiere, y en los demás el Secretario del Consejo Municipal, como el empleado que debe verificar la inscripción del matrimonio en el registro civil de que allí se trata.

El Gobierno acordará con la Autoridad eclesiástica la manera de llevar á efecto esta disposición.

Véanse en la *Codificación Nacional*, Tratado primero, las Resoluciones III á VI.

La Ley 35 de 1888, que se cita, se halla en la misma *Codificación*, Tratado primero, páginas 60 á 64.

Art. 3.° Podrá el Juez dictar, á petición de la mujer, las medidas provisionales que estime convenientes para que el marido, como administrador de los bienes de la mujer, no cause perjuicio á ésta en dichos bienes, ni en lo que le corresponda en los gananciales de la sociedad conyugal.

158 inciso segundo del Código Civil.

Consta tanto en el respectivo Proyecto de Ley—*Anales del Congreso*, número 25—como en el acta de la sesión de la Cámara de Representantes, correspondiente al día 22 de Octubre de 1890—*Diario Oficial* números 8,219 y 8,220—que este artículo estaba precedido de la siguiente indicación:

"*El inciso segundo del artículo* 158 *quedará así:*"....

Es, pues, indudable que el presente artículo subroga al mencionado inciso segundo del artículo 158.

Art. 4.° En las causas de divorcio de matrimonio católico corresponde á los Jueces de Circuito de la residencia de la mujer ó de la vecin-

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

dad del marido, á prevención, adoptar las providencias de que tratan los artículos 157 y 158 del Código Civil.

Para el cumplimiento de lo que aquí se dispone deberá presentarse al Juez un certificado de la respectiva autoridad eclesiástica en que conste que ha sido admitida la demanda de divorcio.

Disponiendo el artículo 157 del Código Civil que "al admitirse la demanda de divorcio, ó antes, si hubiere urgencia," se adopten provisoriamente por el Juez las providencias de que habla el mismo artículo, juzgamos que auuque no se haya presentado el certificado de que habla el inciso segundo del presente, debe el Juez, en caso de urgencia, adoptar dichas providencias; la primera de las cuales es la separación de los cónyuges.

Véase el importante Tratado que se halla al fin de este Suplemento.

Art. 5.° En caso de divorcio declarado por causa de adulterio, el marido podrá en cualquier tiempo reclamar contra la legitimidad del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, siempre que pruebe que durante la época en que pudo tener lugar la concepción, no hacía vida conyugal con su mujer. Este derecho no pnede ejercitarse sino por el marido mismo.

Queda así adicionado el artículo 217 del Código Civil.

La brevedad con que se está verificando la publicación de estas leyes—como que debemos servirnos de los mismos moldes que se emplean en la impresión que dirige el Consejo de Estado—nos obliga á reducir la extensión de nuestros comentarios, por lo cual nos limitamos, respecto de este artículo, á llamar la atención á estas dos cuestiones:

1.ª La reclamación del marido contra la legitimidad del bijo ¿se refiere únicamente á los concebidos en la época en que se presume el adulterio?

2.ª La expresión legal: "...el marido podrá *en cualquier tiempo* reclamar...." ¿permite la aplicación del presente artículo en los casos de divorcio declarado antes de que la disposición empezara á regir, y respecto de hijos yá nacidos; ó únicamente se refiere á los casos por venir, y aun á los en que, yá declarado el divorcio, no había nacido el hijo cuando comenzó á regir la Ley?

Art. 6.° En cualquier tiempo podrá el marido reclamar contra la legitimidad del hijo concebido por su mujer durante el matrimonio, cuando el nacimiento se haya verificado después del décimo mes siguiente al día en que la mujer abandonó definitivamente el hogar conyugal, en tanto que el marido no la haya recibido nuevamente en él. Este derecho no podrá ejercitarse sino por el marido mismo.

La segunda de las dos cuestiones relativas á la disposición anterior, puede ocurrir, con la variante del caso, respecto del presente artículo.

Art. 7.° No obstante lo dispuesto en el inciso 1.° del artículo 56 de la Ley 153 de 1887, se presume el reconocimiento por parte de la madre respecto de los hijos concebidos por ella siendo soltera ó viuda; en consecuencia, tales hijos tendrán el carácter de naturales con relación á su madre, como si hubieran sido reconocidos por instrumento público.

El artículo 56 de la Ley 153, que se cita, figura en la *Codificación Nacional*, Tratado primero, número 86 de orden.

Art. 8.° El adulto que se halle en estado habitual de imbecilidad ó idiotismo, de demencia ó de locura furiosa, será privado de la administración de sus bienes, aunque tenga intervalos lúcidos.

Este artículo subroga al inciso primero del 545 del Código Civil, el cual sólo se refiere al caso de demencia.

Art. 9.° Las servidumbres discontinuas de todas clases y las continuas inaparentes sólo pueden adquirirse por medio de un título; ni aun el goce inmemorial bastará para constituírlas.

Las servidumbres continuas y aparentes pueden constituírse por título ó por prescripción de diez años, contados como para la adquisición del dominio de fundos.

Este artículo subroga al 939 del Código Civil. La principal diferencia consiste en que el artículo del Código fija *ocho* años para la prescripción, y el presente, *diez*.

Art. 10.° En los casos de los artículos 859, 970 y 1995 del Código Civil, se extingue el derecho de retención de la cosa cuando se verifica el pago ó se asegura la deuda á satisfacción del Juez, previo un juicio sumario seguido de conformidad con lo establecido en el Título XII del Libro 2.° del Código Judicial.

Art. 11. El testamento solemne, abierto ó cerrado, en que se omitiere cualquiera de las formalidades á que debe, respectivamente, sujetarse, según los artículos precedentes, no tendrá valor alguno.

Con todo, cuando se omitiere una ó más de las designaciones prescritas en el artículo 1073, en el inciso 4.° del 1080, y en el inciso 2.° del 1081, no será por eso nulo el testamento, siempre que no haya duda acerca de la identidad personal del testador, notario ó testigo.

El presente artículo reemplaza al 1083 del Código Civil.

Este artículo no se diferencia del 1083 del Código, al cual subroga, sino en que en el presente se cita el inciso 4.° del artículo 1080, y en aquél se hace referencia, indebidamente, al inciso 5.° del mismo artículo 1080.

Art. 12. La condición impuesta al heredero ó legatario de no contraer matrimonio se tendrá por no escrita, salvo que se limite á no contraerlo antes de la edad de veintiún años ó menos, ó con determinada persona.

Este artículo subroga al 1132 del Código Civil. La diferencia entre los dos artículos es esta: en el del Código se fija la edad de *veinticinco* años, y no se permite imponer al heredero ó legatario la condición de no contraer matrimonio con determinada persona.

Art. 13. La consignación debe ser precedida de oferta; y para que ésta sea válida, reunirá las circunstancias que requiere el artículo 1658 del Código Civil.

Este artículo subroga al inciso primero del artículo 1658 del Código, que dice:

"La consignación debe ser precedida de oferta, y para que sea válida, reunirá las circunstancias que siguen."

Art. 14. El acreedor es obligado á conceder el *beneficio de competencia*:

1.° A sus descendientes ó ascendientes, no habiendo éstos irrogado al acreedor ofensa alguna de las clasificadas entre las causas de desheredación;

Este ordinal difiere del correspondiente del Código Civil en que aquél sólo dice:

"1.° A sus descendientes ó ascendientes."

Véase en el Código Civil el comentario relativo á este inciso.

2.° A su cónyuge, no estando divorciado por su culpa;

3.° A sus hermanos, con tal que no se hayan hecho culpables para con el acreedor de una ofensa igualmente grave que las indicadas como causa de desheredación respecto de los descendientes ó ascendientes;

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

4.° A sus consocios en el mismo caso; pero sólo en las acciones recíprocas que nazcan del contrato de sociedad;

5.° Al donante; pero sólo en cuanto se trate de hacerle cumplir la donación prometida; y

6.° Al deudor de buena fe, que hizo cesión de sus bienes y es perseguido en los que después ha adquirido para el pago completo de las deudas anteriores á la cesión; pero sólo le deben este beneficio los acreedores á cuyo favor se hizo.

Este artículo subroga al 1685 del Código Civil, cuyos ordinales, menos el 1.°, están conformes con los del presente. Véase aquí dicho ordinal 1.° y su comentario.

Art. 15. La nulidad absoluta puede y debe ser declarada por el Juez, aun sin petición de parte, cuando aparezca de manifiesto en el acto ó contrato; puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto ó celebrado el contrato, sabiendo ó debiendo saber el vicio que lo invalidaba; puede asimismo pedirse su declaración por el Ministerio público en el interés de la moral ó de la ley; y no puede sanearse por la ratificación de las partes, ni por un lapso de tiempo que no pase de treinta años.

Este artículo es el 1742 del Código Civil, que se había reformado por el 90 de la Ley 153 de 1887—*Codificación Nacional*, Tratado primero, número 141 de orden.—Quísose, pues, restablecer la disposición del Código sin reforma alguna.

Art. 16. Si los comuneros no se avinieren en cuanto al uso de las cosas comunes nombrarán un administrador que lo arregle, sin perjuicio del derecho de los comuneros á reclamar ante el Juez contra las resoluciones del Administrador, si no fueren legales.

El presente artículo y los once siguientes—17 á 27—han sido tomados del Código Civil del extinguido Estado de Cundinamarca, y corresponden á estos de dicho Código: 2389 á 2400. Estos doce artículos debieran figurar á continuación del 2333 del Código Civil vigente. También faltan en este Código los artículos que versan sobre Resguardos de indígenas; materia que es objeto de la Ley 89 de 1890.

Art. 17. El Administrador será nombrado por los comuneros en junta general, por mayoría absoluta de votos. Habrá Junta general cuando concurra un número que represente más de la mitad de todos los derechos.

Art. 18. Cuando la Comunidad no haga el nombramiento conforme al artículo anterior, cualquiera de los comuneros podrá ocurrir al Juez para que los convoque á lugar y en día y hora determinados, á fin de que bajo la presencia del mismo Juez hagan el nombramiento, que podrá hacerse en este caso por cualquier número de comuneros que concurra, y en su defecto por el mismo Juez.

Art. 19. Cada comunero tendrá tantos votos cuantas veces se comprenda en la cuota que le corresponda, la cuota del que tenga el menor derecho.

Art. 20. El nombramiento de Administrador subsiste mientras no se haga otro con arreglo á los artículos anteriores; y podrá hacerse cuando después de un año se acuerde por una quinta parte de los votos de los comuneros.

Art. 21. El Administrador de la Comunidad debe tener un padrón exacto de todos los comuneros, con expresión de las cuotas de sus derechos, en el cual irán anotándose sucesivamente todos los cambios que ocurran.

Para formar por primera vez este padrón, si los comuneros no son conocidos de un modo auténtico, el Juez, á solicitud del Administrador, los citará por edictos fijados en lugares públicos de la cabecera del Municipio en que se halle la finca común, para que presenten al Administrador los títulos que comprueben su derecho dentro de un plazo de sesenta días.

Siendo notorio é indudable el derecho de un individuo, deberá incluírsele en el padrón, aun cuando no se haya presentado á solicitarlo.

Los casos dudosos ó litigiosos se decidirán por el Juez.

Art. 22. El Administrador de una Comunidad, nombrado con arreglo á las disposiciones anteriores, tiene la personería de ella.

Esto no impide que cada comunero represente como parte y sea tenido como tál para lo relativo á su derecho; pero si después de representado un comunero, dejare de estar á derecho en el lugar del juicio, éste continuará con las otras partes y surtirá sus efectos como si tal comunero no se hubiere hecho parte.

Art. 23. El Administrador gozará una remuneración del dos al cinco por ciento del producto de las cosas comunes que administre, á juicio de la Junta general de comuneros, ó del Juez en caso de que la Junta no hiciere la asignación; y si las cosas comunes se usaren por los mismos comuneros, el Administrador tendrá derecho al uso de una parte de la cosa, cuyo producto sea equivalente al tanto por ciento que le corresponde.

Art. 24. Cuando el Administrador hubiere de manejar fondos ó rentas de la Comunidad asegurará su manejo hipotecando una ó más fincas cuyo valor libre sea igual ó exceda á la cuota periódica que hayan de producir la finca ó fincas de la Comunidad que maneje.

Así, por ejemplo, si el arrendamiento ó producto hubiere de cobrarse ú obtenerse por semestres, el Administrador asegurará el valor de un semestre; y el de un año si el arrendamiento ó producto hubiere de percibirse por años. Mas, si la percepción de la renta no se hiciere en su totalidad de una manera periódica, sino en diversos términos, entonces el valor libre de la hipoteca deberá ser por lo menos igual á una tercera parte del monto anual de las rentas.

Art. 25. Ningún Administrador podrá entrar en el manejo de las rentas de comuneros sin haberlo previamente asegurado.

Las seguridades serán ofrecidas al Juez del Circuito, quien sustanciará de oficio exigiendo las pruebas que juzgue necesarias para cerciorarse de que tales seguridades son bastantes; y luégo que las declare suficientes bajo su responsabilidad, dispondrá que se otorgue la correspondiente escritura cuya aceptación corresponderá al Síndico del Distrito.

Art. 26. Cuando la cosa común no pueda usarse por todos los comuneros, deberá ponerse en arrendamiento ó hacerse en común su explotación, concurriendo cada uno con el servicio ó cuota que le corresponda para tal explotación.

Art. 27. El arrendamiento ó la explotación de la cosa común se arreglará por los mismos comuneros ó por el Administrador, cuando lo hubiere; pero si alguno de los interesados lo solicitare, se hará el arrendamiento por el Juez, en licitación pública. En este caso, si alguno de los comuneros propusiere tomar la finca en arrendamiento, por un plazo hasta de cinco años, esta condición será base de arrendamiento, y el proponente tendrá derecho de tanto en el remate, siempre que el rematador no sea otro de los comuneros.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

A continuación del artículo que precede figuraban en el Proyecto los siguientes, que aprobó la Cámara y negó el Senado; los cuales reproducimos en atención á su importancia, y para presentar en su reemplazo artículos nuevos, que sometemos respetuosamente á la consideración de las personas estudiosas.

"Art. Cuando los diferentes pisos de una casa pertenezcan á distintos propietarios, si los títulos de propiedad no establecen los términos en que deban contribuír á las obras necesarias y no existe pacto sobre ello, se observarán las reglas siguientes:

"1.ª Las paredes maestras y medianeras, el tejado y las demás cosas de uso común, estarán á cargo de todos los propietarios en proporción al valor de su piso;

"2.ª Cada propietario costeará el suelo de su piso. El pavimento del portal, puerta de entrada, patio común y obras de policía, comunes á todos, se costearán á prorrata por todos los propietarios.

"3.ª La escalera que desde el por tal conduce al piso primero, se costeará á prorrata entre todos, excepto el dueño del piso bajo; la que desde el primero conduce al segundo, se costeará por todos, excepto los dueños de los pisos bajo y primero, y así sucesivamente.

"Art. Cuando se reconstruya una casa cuyos pisos pertenezcan á distintos propietarios, y éstos no se acuerden en la altura y espesor que deba darse á las paredes maestras y medianeras, la primera autoridad política del lugar, asociada á peritos nombrados por cada una de las partes interesadas, determinará dicho espesor y altura, teniendo en cuenta las reglas del arte moderno y la comodidad, seguridad y elegancia del edificio."

Hé aquí los artículos nuevos que presentamos en reemplazo de los dos que preceden:

Art. En el caso en que los diferentes pisos de una casa ó edificio cualquiera pertenezcan á distintos dueños, y sea necesaria una reparación ó reconstrucción, si los interesados no se convienen en las condiciones de la obra, ni en la cuota con que cada uno debe contribuír para ésta, se observarán las reglas siguientes:

1.ª La primera autoridad política del Municipio se asociará con dos peritos nombrados por ella, y oyendo los dictámenes de éstos fijará las condiciones de la obra común, teniendo en cuenta las reglas del arte moderno.

2.ª Se reputará que corresponden á la obra común los cimientos, paredes maestras, pisos ó pavimentos, columnas, enmaderados, tejados, patio, cañerías de desagüe, obras exigidas por la policía y todo aquello que no presta un servicio exclusivo á cada condueño.

Se subentiende que los pavimentos, columnas, patio y cañerías son comunes, por aprovecharse todos de estas cosas; cuando esto no suceda, se costearán por aquellos á quienes correspondan, como debe verificarse respecto de las paredes medianeras.

3.ª La misma autoridad política hará que los mencionados peritos estimen el costo de la obra común de que habla la regla anterior; y también el valor del derecho de cada condueño, considerando yá concluída la obra, es decir, lo que se daría por el derecho de cada uno si hubiera de ofrecerse en venta cuando la obra común esté concluída. Obtenidos estos datos se dividirá la cantidad que representa el costo de la obra común en partes proporcionales al valor del derecho de cada condueño; dichas partes designarán la cuota correspondiente á cada uno respecto del costo.

Ejemplo:

Sean *A*, *B* y *C* los condueños.

Valor del derecho de cada condueño, estimado aproximadamente por peritos, con relación al momento en que la obra *común* esté concluída:

A.....	$ 20,000
B.....	15,000
C.....	5,000
Valor de todos los derechos.....	$ 40,000
Costo de la obra común, estimada por peritos..	$ 18,000

Las cuotas con que cada condueño debe contribuír á la reparación ó reconstrucción las determinan las siguientes proporciones:

A ..... 40,000 : 18,000 :: 20,000 : *x*.
B .... :: 15,000 : *x*.
C .... :: 5,000 : *x*.

4.ª Las escaleras que conduceu á cada piso serán costeadas así: la parte que conduce al primer alto, por iguales partes entre el dueño de éste y los de los pisos superiores; la que conduce al segundo alto, por iguales partes entre el dueño de éste y los de los pisos superiores; y así respecto de las demás.

Art. La autoridad política dictará una resolución en consonancia con el dictamen de los peritos y lo establecido en el artículo anterior, la cual se someterá á la aprobación del inmediato Superior.

Art. Si los condueños no se allanan á la construcción en los términos fijados por la autoridad política; ó no pagan sus cuotas dentro del término que la misma autoridad designe, cualquiera de ellos podrá pedir la venta del suelo—ó de todo el edificio si fuere el caso de reparación únicamente—en pública subasta, para que se distribuya el precio entre todos ellos en proporción del valor del derecho de cada uno.

Art. 28. El ejercicio de la acción hipotecaria no perjudica la acción personal del acreedor para hacerse pagar sobre los bienes del deudor que no le han sido hipotecados, y puede ejercitarlas ambas conjuntamente, aun respecto de los herederos del deudor difunto; pero aquélla no comunica á ésta el derecho de preferencia que corresponde á la primera.

Este artículo subroga al 2449 del Código Civil, y se diferencia de él en que el presente está adicionado así: "y puede ejercitarlas ambas conjuntamente, aun respecto de los herederos del deudor difunto." Estimamos por demás esta adición, en presencia de lo que disponen los artículos 1434 del Código Civil y 1022 del Judicial.

Art. 29. No se podrá alegar interrupción Civil en el caso del artículo 2524 del Código Civil, respecto del demandado que haya obtenido sentencia de absolución.

Este artículo tiene por objeto reparar la omisión de que adolece el 2524 del Código Civil, y que se hace notar en el comentario del mismo artículo.

Art. 30. Las cabeceras de los Circuitos judiciales lo serán también de Circuito de Notaría y de Registro; sin perjuicio de que el número de Circuitos de Notaría y Registro sea mayor que el de los judiciales.

Véanse en la *Codificación Nacional*, Tratado sobre División Territorial, nuestros conceptos relativos al departamento de Boyacá.

Art. 31. Cuando falten el Notario y su suplente, nombrará inmediatamente el Prefecto ó el Alcalde, según el caso, un Notario interino.

Codificación Nacional, Tratado primero, número 258 (bis).

Art. 32. Los Notarios interinos sólo ejercerán las funciones del Notariato por el tiempo que transcurra hasta la posesión de los Notarios principales ó de sus suplentes.

Este artículo es idéntico al 2633 del Código Civil del extinguido Estado de Cundinamarca.

Art. 33. Los Notarios están obligados á prestar su ministerio fuera de la Oficina en cualesquiera días y horas en que fueren llamados por personas que estuvieren en incapacidad física de ir á la Oficina de la Notaría y tratándose de actos urgentes ó cuya demora perjudique á los interesados.

Este artículo subroga al 2560 del Código Civil. La diferencia principal entre estos dos artículos consiste en que en el 2560 se disponía que el Notario estaba obligado á prestar su ministerio fuera de la Oficina, pero *dentro* del *distrito* cabecera del Circuito de Notaría. A virtud de la reforma que el presente ar-

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

tículo entraña, es claro que los Notarios están obligados á prestar su ministerio fuera de la Oficina, en cualesquiera días y horas en que fueren llamados, *dentro* del *Círculo ó Circuito* de Notaría.

Art. 34. El Notario que concurra al otorgamiento de acto ó contrato fuera de su Oficina, cuando, conforme al artículo anterior, estuviere obligado, además de los derechos asignados en el número 1.° del artículo 2624 del Código Civil, podrá cobrar á los interesados un peso por el solo hecho de concurrencia dentro del distrito cabecera del Circuito, y dos pesos más por cada miriámetro, si hubiere de salir de dicho distrito. Este derecho se duplicará si el acto ó contrato se otorga durante la noche.

Este artículo subroga al ordinal 6.° del artículo 2624 del Código Civil. En dicho ordinal 6.° no queda comprendido el inciso que sigue á él.

Art. 35. Si en un Circuito hubiere más de una Notaría, no podrá nombrarse para las Notarías del mismo Circuito á personas que entre sí estén en cualquiera de los grados de la línea recta ascendiente ó descendiente ó que fueren entre sí adoptantes ó adoptivos, hermanos, tíos, sobrinos, suegros, yernos ó cuñados.

Este artículo es idéntico al 2637 del Código Civil del extinguido Estado de Cundinamarca.

Art. 36. Cuando llegue la oportunidad de protocolizar los inventarios ó cuentas de partición en un juicio de sucesión, ó la partición en uno sobre división de bienes comunes, se colocarán en el protocolo, originales y no en copia, los inventarios, ó la cuenta, como también el expediente que se hubiere formado en el juicio respectivo.

Este artículo reforma al 2607 del Código Civil.

Art. 37. Los Notarios y Registradores no cobrarán sino la mitad de los honorarios legales por los actos y contratos cuyo valor no pase de cincuenta pesos.

2624 y 2671 del Código Civil.

Art. 38. Lo dispuesto respecto del Notario en el Título 42 del Código Civil y en las leyes que lo adicionan ó reforman, en cuanto á las cualidades necesarias para obtener el destino, á su nombramiento, remoción y posesión, á los impedimentos y manera de reemplazo, á la duración, á la prohibición de encargarse de la gestión particular ú oficial de negocios ajenos, á las horas de despacho público, á la concesión de renuncias y excusas, se hace extensivo al Registrador de instrumentos públicos.

39.—*Codificación Nacional*, Tratado primero, números 258 á 260 de orden.

Art. 39. Cada Registrador tendrá un suplente que será nombrado de la misma manera que el principal, á quien reemplazará por falta temporal. Si la falta fuere absoluta se encargará del destino hasta que el principal sea reemplazado.

Revalídanse los actos en que han intervenido los Registradores suplentes nombrados con anterioridad á la vigencia de la presente Ley; siempre que dichos actos no hayan dado lugar á pleito que esté pendiente.

38.—2639 del Código Civil.—*Codificación Nacional*, Tratado primero, números 258 á 260 de orden.

Art. 40. El Secretario municipal tendrá un suplente nombrado por el respectivo Concejo; y en caso de impedimento de uno y otro para

intervenir en un asunto especial, el Alcalde nombrará un Secretario municipal *ad hoc*.

Codificación Nacional, Tratado primero, números 267 á 270.

Art. 41. No están sujetos al registro ó inscripción los poderes especiales ó generales para sólo pleitos.

4.° ordinal 4.° de la Ley 39 de 1890, sobre derechos de registro.

Art. 42. La prohibición contenida en el artículo 43 de la Ley 57 de 1887 no se extiende al caso de que la enajenación ó hipotecación de la finca sea hecha por persona distinta de la demandada ó ejecutada; y en consecuencia, no se considerará en litigio la cosa respecto de dicha persona distinta ni de las que contraten con ella.

Dada en Bogotá, á diez y seis de Noviembre de mil ochocientos noventa.

***Codificación Nacional*, Tratado primero, número 279 de orden.**

LEY 96

(7 DE DICIEMBRE),

sobre creación del Monte Pío Militar.

(Se publicó en el *Diario Oficial* de 10 de Diciembre de 1890, número 8,265).

De esta ley reproducimos el artículo 2.°, ordinal 3.°, y el artículo 16, que son las únicas disposiciones que están relacionadas con los Códigos Civil y Judicial.

Art. 2.° Son fondos del Monte Pío Militar:

. . . . . .

. . . . . .

3.° Los bienes de cualquier individuo del Ejército y Marina que falleciere *ab intestato*, sin dejar cónyuge, ascendientes, descendientes ó parientes colaterales hasta el cuarto grado civil de consanguinidad, sin perjuicio de los derechos de los acreedores del difunto.

. . . . . .

Art. 16. Las asignaciones pagaderas por el Monte Pío Militar no son embargables ni enajenables en ningún caso, y la existencia y condiciones de los agraciados se comprobarán en los mismos términos que para otro pensionado cualquiera.

. . . . . .

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

LEY 102

(22 DE DICIEMBRE),

referente á algunas provincias del Departamento del Cauca.

(Se publicó en el *Diario Oficial* de 3 de Enero de 1891, número 8,291).

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Art. 1.° Reconócese la ciudad de Bolívar como la capital de la Provincia de Caldas en el Departamento del Cauca.

Art. 2.° Reconócese la existencia de la Provincia del Caquetá en el Departamento del Cauca, que fue creada por Decreto especial del Presidente del extinguido Estado soberano del Cauca.

Art. 3.° Segréganse de la Provincia de Toro en el Departamento del Cauca los Municipios de Ansermanuevo, Toro y Hato de Lemos, y agréganse á la del Quindío en el mismo Departamento.

Art. 4.° Denomínase Provincia de Marmato, la que hasta ahora se ha llamado de Toro, con la misma capital que hoy tiene.

Dada en Bogotá, á quince de Diciembre de mil ochocientos noventa.

Véase en el tomo principal de la *Codificación Nacional* el cuadro sobre división territorial correspondiente al departamento del Cauca.

El artículo 3.° de la Ley 33 de 1890, relativa á Panamá, dispone la traslación de la capital de la provincia de los Santos á la ciudad de Pesé.

La Ley 6.ª de 1890 introduce modificaciones en la división territorial del departamento de Antioquia.

La Ley 118 de 1890 versa sobre división territorial judicial.

LEY 105

(24 DE DICIEMBRE),

sobre reformas á los procedimientos judiciales.

(Se publicó en el *Diario Oficial* de 7 á 10 de Enero de 1891, números 8,296 á 8,299)

El Congreso de Colombia

DECRETA:

LIBRO SEGUNDO

ENJUICIAMIENTO CIVIL

(El *Libro primero* del Código Judicial se derogó por el artículo 230 del Código de Organización, y se reemplazó con este último Código).

TÍTULO I

JUICIO CIVIL EN GENERAL

CAPÍTULO PRIMERO

Definiciones y disposiciones preliminares.

Art. 1.° Es *traslado* el conocimiento que se da á una de las partes de los escritos, pruebas ó pretensiones de la otra, para que conteste ó proponga lo conveniente acerca de unos y otras.

El traslado se surte notificando á la parte respectiva el auto en que se manda darlo y poniendo á su disposición, por el término que la ley, ó, en su defecto, por el que el Juez designe para contestarlo, el expediente ó la parte de éste sobre que versa el traslado.

Esta circunstancia se expresará claramente en la notificación. El término del traslado no podrá pasar de seis días en ningún caso.

Este artículo subroga al 259 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 338 de esta Ley.

CAPITULO SEGUNDO

Demanda en general.

Art. 2.° En los juicios entre particulares las demandas son de mayor ó de menor cuantía. Las primeras son aquellas cuyo interés es ó pasa de trescientos pesos. Las segundas, aquellas cuyo interés es menor de trescientos pesos.

Esto sin perjuicio de lo que disponen las leyes que se refieren al Código de Organización Judicial.

Véanse en el Código Judicial las citas relativas al artículo 264 y los artícu-

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

los 1012 y 1016, y en este Suplemento la Ley 72 de 1890, artículo 12, ordinales 1.° y 2.°, y artículo 13.

Art. 3.° Se considera como interés el total de la cantidad líquida que se demanda, expresada por un guarismo determinado.

Si con la cantidad líquida se demanda á la vez una que no se haya liquidado, y, si unidas, se conoce claramente que forman un interés que es ó pasa de trescientos pesos, la demanda será de mayor cuantía.

1012 y 1016 del Código Judicial.

Art. 4.° Para determinar la cuantía, en los juicios que no versen sobre cantidad conocida, el demandante la fijará en la demanda; pero el demandado puede, antes de dar contestación alguna, reclamar contra la fijación hecha por aquél, y en ese caso la cuantía se determinará por medio de peritos, que nombrará el Juez.

Art. 5.° Todo Juez que conozca en asuntos civiles, por intereses particulares y en juicio ordinario de mayor cuantía, ejercerá funciones de Juez de paz. Para el ejercicio de ellas, en el mismo auto en que ordene correr traslado de la demanda señalará día para conferencia amigable, día que no será ni anterior al tercero ni posterior al sexto del en que se notifique el auto que confiere el traslado. La conferencia se verificará ante el mismo Juez y un vecino de notoria probidad é influencia.

Tenidos en consideración los datos suministrados por los Juzgados de Circuito de Bogotá y por algunos otros, se estimó en más de doscientos el número de los litigios que se habían transigido desde que comenzó á regir el artículo 15 de la Ley 30 de 1888, que estableció la conferencia amigable. Una institución que tales efectos había producido no podía ser abrogada.

En el auto en que se ordene correr traslado de la demanda debe expresarse que se señala para conferencia amigable el día.... (puede ser el 4.°, el 5.° ó el 6.°) útil siguiente al en que se notifique el auto que confiere el traslado, indicando la hora, de conformidad con el artículo 9.° de esta Ley. Véase el comentario del ordinal 3.° del artículo 12 de esta misma.

Art. 6.° Los Jueces usarán, tanto respecto del demandado como del demandante, los apremios que establece el artículo 334 de esta Ley para que se surta la conferencia amigable, en los casos en que debe tener lugar. Respecto de las personas que por la ley están exentas de apremio, se prescindirá de la conferencia si no concurrieren oportunamente.

Es deber del demandante averiguar la fecha de la notificación del auto que confiere el traslado, á fin de concurrir en oportunidad á la conferencia. En cuanto á las personas que están exentas de apremio, véanse los artículos 295 á 300 del Código Judicial.

Art. 7.° Cuando por cualquier motivo, distinto de la interrupción en el despacho ó de la no concurrencia del demandante, no se verifique la conferencia en el día señalado, el término para contestar la demanda correrá desde el día siguiente útil al en que ha debido verificarse la conferencia, sin perjuicio de que ésta tenga lugar lo más pronto posible y del empleo de los apremios establecidos en el artículo 334, citado.

Es decir, que el término para contestar la demanda no corre cuando la conferencia no se ha verificado por interrupción en el despacho, ó por la no concurrencia del demandante. Véase el artículo 9.° de esta Ley.

Art. 8.° En el acto de la conferencia el Juez y el vecino propondrán á las partes medios de arreglo, siéndole prohibido al primero y potestativo al segundo emitir las propias opiniones que sobre el asunto hayan formado.

Art. 9.° El acto de la conferencia amigable se verificará en dos sesiones, en dos días útiles consecutivos, á la hora y por el tiempo que el Juez determine. Si por urgentes ocupaciones del Juez ó de alguna de las partes, ó del vecino, se interrumpieren las conferencias, el Juez señalará nuevo día, que será uno de los tres siguientes.

Si alguna de las partes no concurriere oportunamente á continuar la conferencia, se prescindirá de ésta, y en este caso, ó cuando no produjere el avenimiento entre las partes, el término para contestar la demanda correrá desde el día siguiente útil, sin necesidad de que el Juez así lo declare.

La fijación de dos sesiones no es caprichosa: tiene por objeto dar tiempo para que se calme la excitación que haya producido el debate en la primera, y para que los interesados reflexionen y consulten.

En el caso del segundo inciso, no tienen aplicación para las partes los apremios que establece el artículo 334 de esta ley, pero sí para el vecino, pues la ley no dispone que se prescinda de la conferencia si el vecino no concurre.

Art. 10.° Si se consigue el avenimiento se extenderá en un libro, que para este exclusivo objeto se llevará en todos los Juzgados, una diligencia en que se mencionarán con claridad y precisión las obligaciones y derechos que del avenimiento resulten, expresando las cantidades líquidas que corresponde pagar á las partes, y la fecha en que deben verificarse los pagos. Cada diligencia debe ir precedida de un número de orden.

11 inciso segundo.

Art. 11. A continuación del escrito de demanda se pondrá una nota en que se exprese si hubo ó nó avenimiento, y caso de haberlo se citará la diligencia por el número de orden que lo corresponde.

La copia de la diligencia de que se habla, autorizada por el Juez y el Secretario, presta mérito ejecutivo y sirve de fundamento á la excepción de cosa juzgada.

Art. 12. Las funciones de Juez de paz no se ejercerán en los casos siguientes:

1.° Cuando por razón de las personas, ó de la naturaleza del asunto de que se trate, y á virtud de lo establecido en el Código Civil, no sea posible la transacción entre las partes;

2469 á 2487 del Código Civil, especialmente estos: 2470 á 2475.

2.° Cuando por dirigirse la demanda contra personas inciertas ó desconocidas se hallaren éstas representadas por el defensor nombrado por el Juez que conoce en el asunto; pero si alguna de dichas personas compareciere oportunamente, con ella se verificará la conferencia amigable, sin perjuicio de seguir el pleito respecto de los no comparecientes; y

27 y 29.

Véanse en el Código Civil los artículos sobre obligaciones solidarias y sobre obligaciones indivisibles: 1568—1591, especialmente estos: 1572, 1573, 1575, 1576, 1580, 1583, 1584, 1585, 1588, 1589 y 1590.

3.° Cuando el demandante ó el demandado no residan en el mismo Distrito municipal que el Juzgado ante quien se ha promovido la demanda, y los respectivos apoderados no tengan facultad para transigir. Si varias personas constituyen la entidad demandante ó la demandada, y alguna estuviere presente en el expresado Distrito, con ella se verifi-

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

cará la conferencia, pero los efectos de ésta en nada perjudicarán á las otras personas.

2471 del Código Civil.

Para el caso de que la demanda verse sobre una obligación solidaria ó una indivisible, habría sido conveniente disponer que la conferencia amigable se verificase con todos los coacreedores y todos los codeudores. Véanse las citas del ordinal que precede, especialmente estas: 1570 segundo inciso, 1571, 1572, 1580, 1583, 1584, 1585, 1589 y 1590.

CAPÍTULO TERCERO

Demandante y demandado en general.

Art. 13. Siempre que un Departamento, ó los Distritos municipales hayan de litigar en juicio, como demandantes ó como demandados, serán representados por el respectivo Agente del Ministerio público, ó por un apoderado especial, constituído al efecto.

314 del Código Judicial.—178, ordinales 2.° y 5.°; 179, ordinales 1.°, 3.° y 4.°; 181, ordinales 1.°, 3.°, 4.° y 5.°; 182, ordinales 1.°, 3.°, 4.° y 5.°; 185 á 187 del Código de Organización.—187 al fin; 252, 253, 258, ordinal 6.°; 265, ordinal 1.°; 266, ordinal 1.° y 271, ordinal 1.° del Código Político y Municipal.

Art. 14. El requisito de la intervención de los herederos presentes ó del curador de la herencia yacente, que en ciertos casos exige el artículo 1352 del Código Civil, se entenderá llenado con el hecho de que á solicitud del albacea, ó de cualquiera otro de los interesados, se notifique á los herederos la gestión ó demanda que promueva el albacea, ó á que deba contestar, según el caso. Dicha notificación se mandará hacer por el Juez que haya de conocer del negocio en primera instancia.

315 del Código Judicial.

CAPÍTULO CUARTO

Apoderados.

Art. 15. Los apoderados y los sustitutos pueden revocar las sustituciones que hagan y las que emanen de ellas, y volver á ejercer el poder ó sustituírlo, aunque no se hayan reservado expresamente estas facultades.

341 del Código Judicial.

Art. 16. La revocación de un poder general surte sus efectos, respecto de tercera persona, siempre que se compruebe que tuvo conocimiento oportuno de aquélla.

Si en el periódico oficial de un Departamento se avisa al público la revocación de un poder general, los efectos de ésta se surten, respecto de los vecinos del mismo Departamento, después de treinta días de hecha la publicación. Si ésta se hiciere en el periódico oficial de la Nación, los efectos de la revocación se surten en toda ella tres meses después de verificada la publicación.

350 y 351 del Código Judicial.

Art. 17. Los empleados del orden judicial y los del Ministerio público, aun cuando estén en uso de licencia, no podrán ejercer poderes en asuntos judiciales, ó administrativos, ni abogar en negocios judiciales. Esta prohibición se extiende á los menores de catorce años, pues los mayores de esta edad pueden, con licencia de su curador, intervenir en sus propios negocios. También comprende esta prohibición á los que se hallen en interdicción judicial y á los ministros de los cultos.

Los funcionarios del orden judicial no pueden ser mandatarios en negocios de ninguna especie, ni albaceas ó ejecutores testamentarios.

298, 326 y 327 del Código Judicial.

Véanse las concordancias de los artículos 298 y 326, en la nueva edición del Código Judicial.

Art. 18. Las partes ó sus apoderados pueden constituír, de palabra ó por escrito, defensores ó patronos para los actos que deben surtirse verbalmente. Si por escrito los constituyen, lo harán por medio de un memorial dirigido al Magistrado ó Juez que conoce de la causa, y que pueden presentar los mismos defensores ó patronos.

329 del Código Judicial.

CAPÍTULO QUINTO

ACCIONES ACCESORIAS DEL DEMANDANTE

Depósito ó secuestro.

Art. 19. Para evitar que el juicio sea ilusorio en sus efectos cuando las cosas muebles demandadas ó que se intenta perseguir judicialmente pueden ser sustraídas, transportadas, ocultadas, empeoradas ó disipadas, el individuo que se crea con derecho á perseguirlas puede pedir, ante el Juez del lugar donde se encuentran las cosas, y previo juramento de no proceder de malicia, el secuestro ó depósito de ellas en mano segura; depósito que se llevará á efecto siempre que quien lo haya pedido presente un fiador solidario, á satisfacción del Juez, que responda de los perjuicios que se causen por el depósito ó secuestro.

Este artículo subroga al 372 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 338 de la Ley 57 de 1887.

Art. 20. En los casos del artículo anterior y del 374 del Código Judicial, puede pedirse al Juez competente para conocer en el juicio el depósito ó secuestro de los bienes muebles del demandado, aun antes de intentarse la demanda; y llevado á efecto, se levantará si el que lo pidió no presenta á dicho Juez la correspondiente demanda dentro de los tres días siguientes al en que el depósito se verificó. Si la demanda no se presentare en el término fijado, el que obtuvo el depósito está obligado á indemnizar los perjuicios que el respectivo interesado pruebe habérsele causado.

Art. 21. El depósito judicial consiste en la entrega real que el Juez hace al depositario de la cosa que se ha ordenado depositar. No se estimará, pues, verificado el depósito por la manifestación que haga el depositario de dar por recibida la cosa.

Si los bienes que deben depositarse fueren raíces, la entrega de ellos al depositario se efectuará con citación de los colindantes que se

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

hallaren en sus respectivos predios en el acto en que se verifique el depósito.

23, 24, 189, 192, 193 y 214.—Código Civil, artículos 2274, 2239 y 2237.

Art. 22. Verificado un depósito judicial, se extenderá siempre diligencia del acto, en la cual conste la entrega real de la cosa al depositario. De esta diligencia se darán las copias que se soliciten por el mismo depositario ó por las partes, copias que autorizarán el Juez y el Secretario.

El Juez ó Magistrado que autorice un depósito, y su respectivo Secretario, serán responsables por el delito de falsedad si en la diligencia de depósito consta la entrega real de la cosa sin que dicha entrega se haya verificado.

23, 24, 189, 192, 193 y 214.

Art. 23. El depósito judicial termina á virtud de la entrega real de la cosa depositada á la persona á quien la misma corresponda; entrega que verificará el Juez de la causa aunque la cosa se halle en poder de otro depositario nombrado en juicio distinto, á menos que este depositario presente copia de la diligencia del depósito que se hizo en él, que sea de fecha anterior al que verificó el Juez que hace la entrega. Si el depositario que se opone á ésta presentare dicha copia, de fecha anterior, se suspenderá la entrega; pero el Juez dictará las providencias que estime necesarias para cerciorarse de que tal copia es auténtica y el depósito de que ella trata subsiste aún. Si alguna de estas dos circunstancias faltare, el Juez consumará la entrega decretada, é impondrá al depositario que á ella se opuso una multa de cien pesos·

No pocas veces ha sucedido que individuos cuyas propiedades se hallan embargadas y depositadas en juicio, se finjan deudores de tercera persona, de quien se hacen ejecutar, para que en momento oportuno se embarguen y depositen en el nuevo juicio las mismas cosas que lo están en aquél; esto con el fin de impedir que se entreguen á quien las haya rematado en el primer juicio, ó á cualquiera otra persona á quien se reconozca derecho á ellas. Para prevenir este fraude se dispone, en el presente artículo, que se verifique la entrega de la cosa aunque se halle en poder de otro depositario, á menos que éste acredite, por medio de la respectiva copia, que el depósito hecho en él es de fecha *anterior* al que verificó el Juez que pretende hacer la entrega de la cosa; pero aun no es bastante la presentación de dicha copia, pues deben llenarse las dos circunstancias que este mismo artículo establece.

Art. 24. Se rescindirá inmediatamente, sin audiencia de persona alguna, la entrega de una cosa que se hallaba depositada, si al Juez que la hizo se le presenta copia auténtica de la diligencia de un depósito de fecha anterior al establecido por el mismo Juez en el juicio en que se ha verificado la entrega; pero al pie de la mencionada copia auténtica debe aparecer, aunque el papel no sea competente, una certificación autorizada por el respectivo Juez y su Secretario, con expresión de la fecha, en que conste que el depósito á que la diligencia se refiere subsiste aún. Sin este requisito no producirá efecto la expresada copia.

Tienen derecho á solicitar la rescisión de que se ha hablado, el actor en el juicio, el rematador, la persona á quien por sentencia se haya declarado que tiene derecho á la cosa, y subsidiariamente el depositario primitivo. En la certificación de que trata el inciso anterior constará el carácter de estas personas.

El objeto de este artículo es que no subsista la entrega que se haya hecho de una cosa que no ha debido entregarse por estar embargada y depositada con

anterioridad al depósito que se efectuó en el juicio en que se ha verificado la entrega; pues suele suceder que en un juicio, muchas veces clandestino, seguido con gran celeridad por la colusión de las personas que en él intervienen, alguien adquiere derecho á la misma cosa yá depositada en otro, ó se le reconoce tenerlo, y, en consecuencia, se le hace entrega de ella, con perjuicio de los derechos de quienes *primeramente* habían obtenido el embargo y depósito de la dicha cosa.

CAPÍTULO SEXTO

Notificaciones y citaciones.

Art. 25. Cuando se dirija una acción cualquiera contra los bienes ó la persona de alguno ó algunos que no hayan sido hallados, ó que fueren inciertos, después de cerciorarse el Juez de su competencia para conocer en el negocio, emplazará á los demandados por medio de un edicto que permanecerá fijado en un lugar público del Juzgado ó Tribunal por el término de treinta días.

Este artículo y los dos siguientes—26 y 27—subrogan al 428 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 338 de la presente ley.

Art. 26. Si el demandado ó demandados no fueren vecinos del lugar donde se entabla la acción y su domicilio fuere conocido, se mandará fijar allí otro edicto por el mismo término, y transcurrido éste, devolverá el Juez comisionado el edicto con la nota de fijación y desfijación.

Véase la observación relativa al artículo que precede.

Art. 27. Desde que se fije el primer edicto de que trata el artículo 25, se publicará copia de él en el periódico oficial del Departamento, por tres veces cuando menos; y si á pesar de este llamamiento no comparecieren los demandados, transcurridos treinta días, se les nombrará por el Juez un defensor con quien se seguirá el juicio.

Véase la observación relativa al artículo 25.

Art. 28. En los términos del artículo que precede, y de los artículos 25 y 26 de esta Ley, se procederá siempre que, sin haber juicio aún, deba hacerse una notificación personal para efectos legales. La notificación se hará al defensor que se nombre.

230 del Código Judicial.

Art. 29. Cuando haya muchos interesados en un negocio y sean notificados personalmente, ó emplazados por edictos de conformidad con lo dispuesto en los precedentes artículos, si no comparecen todos se seguirá el juicio con los que comparezcan, y si ninguno compareciere, se nombrará un defensor para todos.

En los casos expresados en este artículo, la sentencia que se pronuncie comprenderá y consiguientemente perjudicará á todos los que hubieren sido notificados ó emplazados, como si hubieren estado presentes.

Este artículo subroga al 429 del Código Judicial, el cual se derogó por el 338 de la presente ley.

Art. 30. Si la persona á quien debe notificarse un auto se manifestare sabedora de él ante el Juez de la causa y por escrito, dicha manifestación surtirá desde entonces, para la persona que la hace, los efectos de una notificación legal.

438 del Código Judicial.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

Art. 31. Cuando las partes no concurran á la Secretaría respectiva á recibir las notificaciones, pasado un día después de autorizado por el Tribunal ó Juez y Secretario el auto que haya de notificarse, se notificará éste por medio de un edicto que durará fijado en el local del despacho y en paraje público por las horas útiles de un día natural; edicto en que se insertarán la fecha y la parte resolutiva del auto ó sentencia, de manera que todo su contenido quede visible. Este edicto se agregará al expediente, con nota del día y hora de su fijación y desfijación, y en el mismo expediente se pondrá certificación de la fijación con expresión del día y hora en que se hizo. Desde la fecha y hora de la desfijación se tendrá por hecha la notificación.

36, 38 y 39.

Este artículo subroga al 416 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 338 de la presente ley. Véanse los artículos 402 á 405 del Código citado.

Art. 32. Se exceptúan de la disposición del artículo anterior las notificaciones que en seguida se expresan, las cuales se harán personalmente:

1.ª La del auto en que se confiere traslado de una demanda;

2.ª La del auto en que se manda citar á una parte para absolver posiciones;

3.ª Las de los autos ó sentencias que por disposición especial sea necesario notificar personalmente; y

4.ª Las de los autos ó sentencias que deban notificarse á los Agentes del Ministerio Público.

Este artículo subroga al 417 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 338 de la presente ley. Véanse los artículos 418 y 437 del mismo Código.

Art. 33. Los Secretarios de los Juzgados y los de los Tribunales Superiores podrán hacer, por medio de un dependiente del Juzgado ó Tribunal, respectivamente, y bajo la responsabilidad de dichos Secretarios, las notificaciones personales que la ley ordene, y que ellos no puedan practicar por sí mismos.

419 y 435 del Código Judicial.

Art. 34. Las formalidades de que trata el artículo 427 del Código Judicial para la notificación de la demanda, y las que deban observarse conforme al mismo Código para la práctica de cualquiera otra diligencia que deba surtirse en país extranjero, no serán indispensables respecto de las naciones con quienes se haya acordado un procedimiento distinto por tratados especiales.

Art. 35. La notificación de las sentencias en toda clase de juicios, siempre que fueren definitivas, ya sean dos ó más las partes, se hará por un edicto fijado en el local del Juzgado ó Tribunal, cuando hayan pasado treinta días de dictadas, sin que hayan concurrido las partes ó alguna de ellas para hacerles la notificación en persona.

El edicto contendrá el nombre del Juzgado ó Tribunal, la fecha y la parte resolutiva de la sentencia; será firmado por el Juez ó por los Magistrados que la hubieren dictado, y permanecerá fijado por cinco días.

Cuando la sentencia fuere de segunda instancia, el edicto se fijará después de pasados cinco días de la publicación de la misma sentencia.

Este artículo subroga al 424 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 338 de la presente ley.

Art. 36. En los pleitos en que haya más de tres litigantes, todas las notificaciones, con excepción de la del traslado de la demanda, se harán por edicto, y no habrá necesidad de que transcurra el día de que habla el artículo 31 de esta Ley, para hacerlas en la forma que se indica. Para cada notificación, el edicto permanecerá fijado las horas útiles de un día natural; pero si la notificación fuere de sentencia definitiva, el término del edicto será de cinco días, debiendo firmarse, respectivamente, por los Magistrados ó por el Juez que la hubieren dictado, de acuerdo con lo que dispone el artículo anterior.

Si por el auto que se debe notificar se ordenare la citación de una de las partes para absolver posiciones, y ésta no figurare por sí misma en el pleito, sino por medio de apoderado, dicha notificación también debe hacerse personalmente.

31, 38 y 39.

Este artículo subroga al 433 del Código Judicial, el cual se derogó por el 338 de la presente ley.

Art. 37. Por regla general, ninguna resolución produce efectos antes de haberse notificado legalmente á las partes.

65.—421, 507, 509 y 515 del Código Judicial.

Art. 38. La notificación personal debe verificarse, en todo caso, de preferencia á la notificación por edicto. En consecuencia, si los respectivos interesados ó alguno de ellos ocurrieren al despacho del Juzgado ó Tribunal antes de que se efectúe por edicto la notificación de un auto ó sentencia, el Secretario debe hacerles personalmente la notificación.

Si el edicto estuviere yá fijado, también se hará personalmente la notificación del auto ó sentencia al interesado que se presente á recibirla. Lo dispuesto en este artículo no es motivo para demorar la notificación por edicto á los no comparecientes.

31, 36 y 39.

Art. 39. Cuando un juicio hubiere estado paralizado ó en suspenso por más de seis meses, la primera resolución que se dicte en él se notificará personalmente á todos los litigantes, sea cual fuere el número de éstos.

31 y 36.

Art. 40. En el caso del artículo 425 del Código Judicial, á la requisitoria ó despacho de emplazamiento se adjuntarán, en copia, la demanda, los documentos que con ella se hubieren presentado y el auto en que se confiere el traslado, si así lo solicitare el demandante.

CAPÍTULO SÉPTIMO

Posiciones.

Art. 41. Antes de establecerse la demanda puede el presunto demandante interrogar en posiciones, y por una sola vez, á la persona á

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

quien va á demandar, sobre cualesquiera puntos conexionados con el asunto que ha de ser materia de la demanda. Después de establecida ésta, puede pedirse por cualquiera de las partes que se absuelvan posiciones, una vez en el incidente de excepciones dilatorias, y otra en cada una de las instancias del juicio.

73.

Este artículo subroga á los 440 y 441 del Código Judicial, los cuales se derogaron expresamente por el 338 de esta Ley. Véanse los artículos 439 y 561 de dicho Código.

Art. 42. En un interrogatorio no se pueden formular más de veinte posiciones.

Art. 43. Cuando las posiciones se presentaren cerradas y hayan de recibirse fuera del lugar del juicio, lo que se verificará siempre que el absolvente no se encuentre en él, el Juez de la causa abrirá el pliego para el único efecto de calificarlas, y luégo lo remitirá cerrado al Juez comisionado. Esto no obsta al derecho que tiene el que pide las posiciones para reclamar contra la resolución del Juez en que rechace alguna ó algunas de ellas, reclamación que puede hacer después de que sean absueltas y se le pasen en traslado.

444 del Código Judicial.

Art. 44. No obstante lo dispuesto en el ordinal 2.° del artículo 32 de esta Ley, si para la notificación personal del auto de que allí se habla no se encontrare á la persona á quien se piden posiciones, se procederá de la manera siguiente:

1.° El Secretario hará constar qué diligencias ha practicado para verificar la notificación personal, y por qué no ha tenido lugar ésta;

2.° Se fijarán en la casa de habitación de dicha persona, si aquélla fuere conocida; en la que se ha señalado para las notificaciones, si tal señalamiento se hizo, y en las de dos ó más de sus parientes, amigos ó relacionados, boletas en las cuales se haga saber que se le ha mandado citar para absolver posiciones en determinado juicio;

3.° Se publicará en el periódico oficial del Departamento un edicto en que se emplace á dicha persona para que comparezca al despacho á practicar la diligencia dentro de treinta días contados desde la fecha de la publicación del edicto; y

4.° Verificado todo lo expuesto, sobre lo cual el Secretario extenderá una diligencia en el proceso, y transcurridos los treinta días de que habla el ordinal anterior, se tendrá por hecha la notificación del auto, y así lo declarará el Juez por medio de una resolución, á fin de evitar dudas y dificultades.

459 del Código Judicial.

Art. 45. En los casos en que la declaratoria de confeso se funde en una simple presunción de citación y notificación, establecida por la ley, y no en una notificación ó citación personal, la parte respectiva puede comparecer á absolver las posiciones dentro de los veinte días siguientes al de la declaratoria de confeso. En este caso se practicará la diligencia, y la declaratoria de confeso no producirá efecto alguno.

El pliego de posiciones se conservará cerrado y el Juez se abstendrá de pronunciar sentencia mientras no transcurran los veinte días de que habla el inciso anterior.

459 del Código Judicial.

Art. 46. Si leído un artículo ó posición al absolvente, éste manifestare que no entiende la pregunta, el Juez le hará las explicaciones debidas. Si la posición comprende dos ó más hechos que pueden separarse para los efectos del artículo 442 del Código Judicial, el Juez, de oficio ó á solicitud del deponente, hará la separación, y cada respuesta parcial se extenderá en seguida de la parte respectiva de la posición.

445 del Código Judicial.

Art. 47. Cuando el absolvente expresare que ignora ó no recuerda el hecho sobre que se le pregunta, y atendida su edad, el estado de salud en que se halla, su sexo y condición, el temor y grado de inteligencia que revele, la época en que se haya verificado el hecho, y la intervención que en él haya tenido, fuere presumible, en concepto del Juez, la sinceridad de la respuesta, le hará con circunspección las indicaciones que estime convenientes para que el absolvente recuerde los hechos; y aun le preguntará, atendida la importancia del hecho de que se trate, si consultando algunos apuntes ó documentos puede recordar los hechos, y si en esto conviniere el absolvente, el Juez procederá como dispone el artículo 446 del Código Judicial.

447, 449 y 459 del Código Judicial.

Art. 48. En el caso del artículo anterior, se dejará constancia de las razones que el absolvente dé para no contestar categóricamente la pregunta, y si fueren suficientes, atendidas las circunstancias de que se ha hablado, el Juez no dictará la declaratoria de confeso de que trata el artículo 449 del Código Judicial; pero si se advierte el ánimo de eludir la respuesta, se dará estricto cumplimiento á lo que el mismo artículo dispone.

447 y 459 del Código Judicial.

Art. 49. La confesión ficta ó presunta que proviene de haber manifestado el absolvente que ignora ó no recuerda el hecho que se le ha preguntado, no es plena prueba sino un indicio más ó menos fuerte, según la relación que tenga con las pruebas que presente la parte favorecida; así también puede ser infirmada dicha confesión por las pruebas de la parte perjudicada, y por las explicaciones que dé acerca de la manera como los hechos se han verificado, en caso que tales explicaciones sean razonables y se funden en hechos comprobados.

449, 453 y 459 del Código Judicial.

La parte *perjudicada*, de que se habla, es aquella á quien afecta desfavorablemente la confesión ficta ó presunta de que se trata; así como la parte favorecida es aquella á quien aprovecha la misma confesión.

CAPÍTULO OCTAVO

Excepciones.

Art. 50. Del derecho de proponer excepciones dilatorias sólo puede usarse por una vez en el juicio.

461, 475, 484 y 1491, ordinal 3.° del Código Judicial.

Art. 51. Cuando el Juez halle justificados los hechos que constituyen una excepción perentoria, aunque ésta no se haya propuesto ni

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

alegado, debe reconocerla en la sentencia y fallar el pleito en consonancia con la excepción reconocida; sin embargo, respecto de la excepción de prescripción, es preciso que se alegue, cosa que puede hacerse en cualquier estado de la causa.

484, 950 y 1491, ordinal 3.° del Código Judicial.

Este artículo es el 138 de la Ley 57 de 1887—*Codificación Nacional*, Tratado quinto, número 54 de orden—el cual se modifica sustancialmente por este, en cuanto á la excepción de prescripción, pues en aquél se disponía únicamente que dicha excepción debía *proponerse* y alegarse en todo caso, y como no se fijaba tiempo para proponerla, era de juzgarse que ello debía verificarse en oportunidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 950 del Código.

Juzgamos inaceptables ambos artículos—aunque el presente fue acogido por nosotros en el proyecto de esta ley—pues no es razonable estimar probados los hechos en que se funda una excepción que no se ha propuesto ni alegado: pueden existir fuertes presunciones en su favor, pero no debe considerarse *completa* la prueba si ha faltado el debate entre las partes. Así, respecto de la excepción de prescripción, por ejemplo, puede acreditarse, en un caso dado, que han existido los requisitos necesarios para prescribir, y sin embargo suceder que la prescripción no se haya verificado, por haber habido interrupción en la posesión.

Hay un medio de prevenir, aunque imperfectamente, los inconvenientes de la falta del debate entre las partes, y es que no se reconozca ninguna excepción perentoria que no ha sido oportunamente propuesta, sin haber ordenado la aclaración de los puntos dudosos por medio de un auto para mejor proveer, de conformidad con el artículo 162 de esta Ley. Desgraciadamente este recurso no existe respecto de los negocios de menor cuantía, pues solamente la Corte Suprema y los Tribunales pueden dictar tales autos.

Art. 52. Constituye excepción perentoria todo hecho en virtud del cual las leyes desconocen la existencia de la obligación, ó la declaran extinguida si alguna vez existió.

462, 950, 1053 y 1491 ordinal 3.° del Código Judicial.

Art. 53. Puede oponerse la excepción de ilegitimidad de la personería cuando el demandante no ha presentado la prueba que acredite la adquisición de las cosas ó derechos que reclama, en el caso de que, en concepto del demandado, pertenezcan á persona determinada, distinta del demandante, tales cosas ó derechos.

El presente artículo ha subrogado al ordinal 3.° del artículo 465 del Código Judicial, el cual se derogó por el 338 de esta Ley.

— —

CAPÍTULO NOVENO

Actuaciones.

Art. 54. Cuando el actor abandonare en la primera instancia y durante un año el juicio que ha promovido, se estimará que ha caducado la instancia, se archivará el expediente por orden del Juez ó Tribunal que conoce en el negocio; orden que se dictará de oficio, previo informe del Secretario, y que se extenderá en papel común, á falta de sellado. Se entiende que ha habido abandono cuando la parte actora no ha hecho gestión alguna por escrito, propia para la continuación del juicio durante un año.

Ejecutoriado el auto que contiene la orden de que se habla, el cual se notificará por edicto, se hará cesar el embargo que hubiere, y se cancelarán por mandato del Juez las inscripciones que por razón del juicio ó del embargo existieren en las Oficinas de Registro.

La caducidad de la instancia no entraña la de la acción que aún exista; pero no podrá promoverse nuevamente la misma acción durante dos años, á partir de la fecha del auto en que se ha declarado la caducidad. El término de la prescripción de la acción no se estimará interrumpido por la demanda que ha ocasionado la instancia que ha caducado.

Si por segunda vez, entre las mismas partes, y por la misma acción, ocurrieren las circunstancias mencionadas en el inciso primero de este artículo, se declarará extinguida la acción, procediendo para ello como se dispone en los incisos que preceden.

Lo dispuesto en este artículo no tendrá aplicación en los juicios en que el demandante sea la Nación, un Departamento, un Municipio ó un Establecimiento público de educación ó beneficencia.

106 y 122.—495 y 821 del Código Judicial.

Art. 55. Cuando se requiere el consentimiento de una persona para cualquier efecto judicial, debe manifestarse por escrito, y éste presentarse personalmente al Secretario del Juez que conoce en el asunto, de lo cual se extenderá una diligencia.

En este caso, y en todos en los que por disposición de la ley deba hacerse presentación personal de un escrito, si la persona que ha de hacerla estuviere ausente del lugar donde debe verificarse, dirigirá el escrito al Juez que conoce del juicio, haciéndolo autenticar por el Juez de su residencia, como se dispone para los poderes por memorial en el artículo 329, caso 3.°, del Código Judicial. De la misma manera se procederá para la presentación de cualquier escrito ó memorial cuando la parte interesada se hallare ausente del lugar en donde se sigue el juicio.

61.—181, 204, 306, 307 y 1810 del Código Civil. -513 y 813 del Código Judicial.

Art. 56. En los juicios se hará uso del papel que determine la ley orgánica del impuesto de papel sellado, salvo lo que se disponga en casos especiales.

Véase la observación del artículo 60.

Art. 57. El papel necesario para resolver las peticiones de las partes y para los edictos, despachos, diligencias etc., consiguientes, lo suministrará la que haga las peticiones; pero el papel para la continuación del juicio mismo y para la sentencia lo suministrará el actor en la instancia.

Art. 58. Cada parte mantendrá siempre, en poder del respectivo Secretario, por lo menos un pliego de papel sellado para la actuación en cada juicio. La parte que no cumpliere con este deber será requerida por el Secretario para que lo suministre, á virtud de previa solicitud verbal de la contraparte.

Del requerimiento de que se habla extenderá el Secretario, en papel común, á falta de sellado, una diligencia con expresión de la fecha.

122.

Art. 59. Si la parte requerida no suministrare, dentro de los tres días siguientes al del requerimiento, el papel de que habla el artículo anterior, ó el que se le hubiere pedido para la actuación ó para la sentencia definitiva, incurrirá en una multa de cinco pesos. En caso de reincidencia la multa será igual á la última impuesta, con un recargo, cada vez, de cinco pesos.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

Es obligación del Juez ó Magistrado dictar de oficio todas las resoluciones necesarias para que se cumpla lo dispuesto en el artículo 218 del Código de Organización Judicial; pero no se llevará á efecto el arresto de que habla dicho artículo si al tiempo de efectuarlo se paga la multa.

122.

Art. 60. La contraparte de aquella que no suministra el papel oportunamente, puede suministrarlo con derecho á que en la tasación de costas se le abone ó deduzca —según que tuviere derecho á ellas ó se le condenare á pagarlas—además del valor del papel suministrado, un cincuenta por ciento de recargo.

Los cinco artículos que preceden—56 á 60—han subrogado á los 485 á 491 del Código Judicial. Estos se derogaron por el 338 de esta ley.

Uno de los requisitos necesarios para que la administración de justicia llene sus elevados fines, es que haya celeridad en los procedimientos. Ahora bien: notorio es que siempre ha sido causa de demoras la abstención de las partes en suministrar el papel sellado para la actuación y la sentencia, y que el apremio de multas es ineficaz. Esta fue la razón por que se dispuso en la Ley 57 de 1887 que se supliera con papel común el sellado que las partes no suministraran oportunamente, y que no se oyera á la parte omisa mientras no comprobase haber pagado el doble valor de tantos sellos de papel cuantas hojas de papel común se hubiesen empleado—*Codificación Nacional*, Tratado quinto, números 58 á 61 de orden.

La experiencia acreditó la utilidad de la disposición de la Ley 57 de que habíamos, cuyos buenos efectos serán tanto más estimados cuanto mayores sean las dificultades que ocurrirán con motivo de la adopción de los cinco artículos que preceden.

No puede alegarse en favor de dichos artículos la conveniencia, que en algún caso haya para las partes, de que se suspenda el curso del juicio durante cierto tiempo, pues el artículo 61 de esta Ley dispone lo conveniente sobre el particular. Si para una sola de las partes es favorable en algún caso la suspensión del juicio, no deben subordinarse al interés de ésta los derechos de las otras, pues todo pleito es un mal, y la ley debe estatuír lo conveniente para que éste cese en breve.

Tales son y han sido nuestras opiniones, y aunque las manifestamos á la respetable comisión del Senado que presentó el proyecto, ésta tuvo á bien acordar los cinco artículos á que este comentario se refiere.

Art. 61. Las partes pueden solicitar, de común acuerdo y todas las veces que tengan á bien, la suspensión del juicio por determinado número de días. El escrito que contenga tal solicitud debe presentarse personalmente al Juez ó Magistrado por ante el Secretario, de lo cual se extenderá una diligencia que firmarán el Juez ó Magistrado, por ante el Secretario y las partes.

495, 513 y 514 del Código Judicial.

Art. 62. Lo dispuesto en el precedente artículo es sin perjuicio de los derechos de aquellas personas que conforme á las leyes tienen ó pueden tener interés en el pleito, ó á quienes pueda perjudicar la suspensión de él, la cual no tendrá lugar sino con el consentimiento de tales personas.

495 del Código Judicial.

CAPÍTULO DÉCIMO

Términos.

Art. 63. Se concede á todos los Jueces y Magistrados de los Tribunales de Distrito y de la Corte Suprema, para pronunciar los autos y las sentencias, un término doble del que para cada caso les está señalado en el Código Judicial.

Se exceptúa la sentencia de graduación en los juicios de concurso de acreedores, que se pronunciará dentro de treinta días.

512, 1187 y 1196 del Código Judicial.

Art. 64. Los términos legales corren por ministerio de la ley, sin necesidad de que la providencia exprese su duración; y se suspenden ó no corren: 1.° en los días feriados ó de vacantes; 2.° durante alguna incidencia legal cuando así lo ha prescrito la ley; 3.° por cualquier accidente que cause la suspensión del despacho público; 4.° por impedimento legítimo del Juez; y 5.° por impedimento legítimo que haya sobrevenido á alguna de las partes militantes en el juicio.

Estos impedimentos son: 1.° la enfermedad calificada de grave; 2.° la muerte de alguna de las personas de la familia á que pertenezca la parte ó el Juez, y con la cual viva; y 3.° la fuerza ó violencia.

El Juez hará cesar la suspensión acaecida por impedimento de una de las partes, conciliando la prudencia con los intereses de la otra parte.

En el caso de suspensión por impedimento del Juez, ella no debe prolongarse más allá del tiempo necesario para que se encargue el respectivo suplente.

Este artículo subroga al 508 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 338 de esta Ley. Fíjese la atención en el ordinal 3.° del inciso primero de este artículo, que no existía en el 508, que se derogó.

Art. 65. Siempre que por resolución judicial haya de suspenderse un término cualquiera, la suspensión se verificará desde la hora en que se dicte dicha resolución.

37.—507, 510 y 515 del Código Judicial.

Este artículo prefiere sobre el 37 de la presente ley, por ser especial.

Art. 66. Se entiende por hora el transcurso de sesenta minutos. Siempre que se señale hora para la práctica de un acto ó diligencia, se expresará en el auto respectivo el momento preciso en que la hora comienza.

507 y 515 del Código Judicial.

Repárese que las horas se designan indicando el momento en que terminan. Así, cuando se dice que son las *doce* del día, se indica el momento mismo en que esta hora ha terminado, es decir, que han transcurrido las doce horas que constituyen la mañana; y cuando el reloj señala la una de la tarde, se indica que ha transcurrido yá la primera hora de la misma. Esto es lo exacto, lo razonable. En consecuencia, si citada una persona para la práctica de una diligencia que debe verificarse en determinada hora, por ejemplo á las tres de la tarde, concurre al momento en que el reloj señala esta hora, no se presenta en el momento debido, sino al fin de él, pues la hora de las *tres* principia desde que el reloj señala las *dos*.

No habiendo exactitud en la manera como generalmente se cuentan ó estiman las horas, se ha creído conveniente, para prevenir las dificultades que

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

pudieran ocurrir, disponer, como se dispone en el presente artículo, que en los autos se exprese el momento preciso en que la hora comienza.

CAPÍTULO ONCE

Remisión de autos.

Art. 67. Cuando el superior para ante quien se interpone un recurso no resida en el mismo lugar que el Juez de la causa, la parte que lo interpone deberá pagar el porte correspondiente al envío y devolución del expediente por el correo, y cincuenta centavos más. Dicho pago deberá verificarse dentro de los ocho días siguientes á aquél en que haya sido recibido el expediente en la respectiva Administración de Correos.

535 del Código Judicial.

Art. 68. Si pasare el término de los ocho días y no se hubiere pagado el porte, el Juez, á solicitud de parte, requerirá para que lo verifique á la que ha interpuesto el recurso. Si pasados tres días después del requerimiento no se hubiere hecho aún el pago, el mismo Juez declarará ejecutoriado el auto á que el recurso se refiere, previa la sustanciación de una articulación cuyo término probatorio no excederá de cuarenta y ocho horas, siéndole permitido al Juez dictar autos para mejor proveer.

El Juez, en el mismo auto en que requiere á la parte para que haga el pago, dispondrá que se oficie al Administrador de Correos para que no dé curso al expediente si dicho pago se verificare después del vencimiento de los tres días.

78, 162 á 164, en cuanto tratan de autos para mejor proveer.—535 del Código Judicial.

Art. 69. Cuando haya de remitirse á otro lugar algún pliego que sólo interese á la parte que haya solicitado su remisión, puede el Juez entregárselo para que lo dirija á su destino, aunque no sea por el correo

532 y 533 del Código Judicial.

Art. 70. En todo caso pueden remitirse los autos, á pedimento de parte, por medio de expresos ó correos extraordinarios costeados por ella, siempre que éstos sean á satisfacción del Juez remitente y se despachen por conducto de la Administración respectiva conforme á las leyes y reglamentos de correos.

532 y 533 del Código Judicial.

Art. 71. Los Administradores de Correos y los Jefes de las oficinas postales deben enviar á la Secretaría de la Corte Suprema, de los Tribunales Superiores y Juzgados, á más tardar dentro de tercero día, los expedientes que reciban rotulados á éstos, exigiendo del respectivo Secretario el recibo correspondiente, que se extenderá en un libro destinado al efecto, en el cual se anotarán el día, mes y año de la entrega, el contenido del pliego y la fecha de la devolución cuando ésta tenga lugar.

Este artículo subroga al 534 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 338 de esta misma ley.

TÍTULO II

PRUEBAS EN MATERIA CIVIL

CAPITULO PRIMERO

Confesión de parte.

Art. 72. La confesión hecha en juicio probará en toda circunstancia contra el que la hizo, aunque sea en otro juicio diverso.

Este artículo subroga al 560 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 338 de esta misma ley.

Art. 73. Ningún individuo será obligado á declarar fuera de juicio sobre hechos personales ó de los cuales pueda resultarle algún perjuicio, sino en los casos y con las formalidades prescritos en el Capítulo VII del Título I, Libro 2.° del Código Judicial, y esto por una sola vez, á menos que el que pide una nueva declaración asegure, bajo juramento, que se le ha perdido la primera sin su culpa.

334.—561 y 627 del Código Judicial.

CAPITULO SEGUNDO

Testigos.

Art. 74. Para que las declaraciones de los testigos puedan estimarse como prueba en los juicios en que hubiere término probatorio, es necesario que se reciban por el Juez de la causa ó por el comisionado, durante el curso del juicio, con tal que no se haya citado para sentencia, y que se haya pedido la recepción de las declaraciones durante el expresado término de prueba.

Si las declaraciones se han recibido fuera de juicio, los testigos deben ratificarse durante el curso de él, ante el Juez de la causa ó el comisionado, debiendo concurrir, además, las circunstancias de que habla el inciso anterior.

615 á 617 del Código Judicial.

Art. 75. Cuando las declaraciones de los testigos presentados por una misma parte ó por ambas estén contradictorias unas con otras, de manera que respecto de cada parte haya número plural de testigos hábiles, debe el Juez atenerse á los dichos de aquéllos que según las reglas de la crítica legal entendiere dicen la verdad ó se acercan más á ella, y que sean de mejor fama, aunque haya mayor número por la otra parte. Si fueren iguales en razón de las circunstancias de sus dichos y personas, debe juzgar por las que fueren más en número; y si también en el número hubiere igualdad, deberá prescindir de unos y otros testigos y fallar la causa por lo que resulte de las otras pruebas.

Este artículo subroga al 611 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 338 de la misma ley.

Art. 76. Exceptúanse de lo dispuesto en el primer inciso del artículo 627 del Código Judicial, á más de las personas de que habla el in-

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

ciso segundo de dicho artículo, las siguientes: el Vicepresidente de la República, los Ministros del Despacho, los Magistrados de los Tribunales Superiores y Fiscales de los mismos Tribunales, y los miembros del Consejo de Estado.

Exceptúanse igualmente los Arzobispos, Obispos, Provisores y Vicarios Capitulares.

Todos los exceptuados declararán como se dispone en el inciso segundo del artículo citado.

CAPITULO TERCERO

Peritos.

Art. 77. En caso de oscuridad ó insuficiencia en el dictamen de los peritos, puede pedirse la explicación necesaria, ó la ampliación debida, por alguna de las partes ó por el Juez, de oficio. Y si fuere desacertado, por haber procedido los peritos por error esencial, dolo ó ignorancia, probándose sumariamente uno de estos defectos, debe practicarse nueva diligencia, á petición de cualquiera de las partes, y con intervención de otros peritos.

Igualmente puede ordenarse de oficio, ó á solicitud de parte, que los peritos funden su dictamen.

Este artículo subroga al 660 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 338 de la misma ley. Véase el artículo 5.° de la Ley 119 de 1890, sobre expropiaciones.

Art. 78. La Corte Suprema y los Tribunales Superiores, por auto para mejor proveer, acordado por los Magistrados cuando el negocio haya pasado á su estudio para sentencia, pueden disponer, si lo estiman conveniente, que se practique un nuevo avalúo, por peritos que la misma Corte ó Tribunal, en su caso, nombrarán.

68, 162 á 164, en cuanto tratan de autos para mejor proveer.

Art. 79. La exposición de los peritos no es de por sí plena prueba; ella debe ser apreciada por el Juez ó los Magistrados al fallar en definitiva, teniendo en consideración las razones en que fundan su dictamen los peritos, y las demás pruebas que figuren en el expediente. En consecuencia, corresponde á los Magistrados y Jueces fijar el precio ó la estimación de las cosas que deben ser apreciadas ó estimadas para decidir la controversia, pero expresarán las razones de su determinación.

651 y 656 del Código Judicial, y artículo 9.° de la Ley 119 de 1890, sobre expropiaciones.

Art. 80. Las declaraciones de los facultativos sobre los hechos que estén sujetos á los sentidos y sobre lo que, según su profesión, expongan con seguridad, como consecuencia de aquellos hechos y de los principios inconcusos de la ciencia, forman plena prueba; pero lo que digan según lo que presuman, no formará sino una prueba de indicios, más ó menos fuerte, según fuere mayor ó menor la pericia de los que declaren y el grado de certidumbre con que depongan.

Este artículo subroga al 662 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 338 de esta misma ley.

CAPITULO CUARTO

Inspección ocular.

Art. 81 La inspección ocular se debe hacer á solicitud de parte, ó de oficio por el Juez ó Tribunal que conozca del asunto. Si la inspección se solicitare por la parte dentro del término probatorio, se practicará por el sustanciador, á menos que al solicitarse la prueba se manifieste expresamente que la inspección se verifique por todos los Magistrados que compongan la Sala y hayan de fallar la controversia.

Si la inspección ocular se decretare de oficio por el Juez ó Tribunal del conocimiento, siempre que la crea necesaria para el mayor esclarecimiento de la verdad, concurrirán los Magistrados que hayan de dictar la sentencia.

728 y 729 del Código Judicial.

TÍTULO III

INCIDENCIAS EN LOS JUICIOS CIVILES

CAPÍTULO PRIMERO

Articulaciones.

Art. 82. La sentencia que decida una articulación es apelable únicamente en el efecto devolutivo, y si por dicha sentencia se invalidare lo actuado ó una parte de ello, se hará mención, en el cuaderno del juicio principal, de la sentencia en que tal cosa se resuelva.

Este artículo subroga al 744 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 338 de esta misma ley.

CAPÍTULO SEGUNDO

Impedimentos y recusaciones.

Art. 83. El Magistrado ó Juez recusado en un incidente del juicio queda impedido para conocer hasta el fenecimiento del mismo juicio sin necesidad de nueva recusación, mientras subsista el impedimento.

748, 749.

Art. 84. No es causal de impedimento la amistad íntima entre el Juez y alguna de las partes, ni la enemistad entre el Juez y los defensores ó apoderados de las partes.

749 y 750 del Código Judicial.

Art. 85. Los Magistrados y Jueces no pondrán en conocimiento de las partes los impedimentos de que se va á hablar y que el Código Judicial establece:

1.° El de que trata el número 12, con relación á los padres, mujer ó hijos del Juez, si el hecho que sirve de fundamento al impedimento ha ocurrido después de la iniciación del pleito y sin intervención de la per-

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

sona del Juez, y siempre que éste ejerciere yá las funciones de la judicatura cuando el hecho se verificó;

2.° El impedimento número 13, en la parte relativa á la institución de heredero ó legatario de alguna de las personas designadas en el mismo número, cuando tal institución conste en testamento de persona que no ha fallecido aún, ó cuando, aunque hubiere fallecido, ha sido repudiada ó se repudia la herencia ó legado; y

3.° El impedimento número 16, cuando el pleito de que en él se habla se ha promovido después de estar iniciado el juicio á que dice relación el impedimento; pero es preciso, además, que el Juez á quien el impedimento se refiere esté yá conociendo de este mismo juicio cuando dicho pleito posterior se promueve. Sin embargo, si el Juez demandado ha convenido en los hechos en que se funda la demanda, ó si, siendo ésta ejecutiva, se halla ejecutoriado el auto de ejecución, el Juez debe manifestar el impedimento.

749 y 752 del Código Judicial.

Art. 86. Las partes no pueden recusar á los Magistrados ó Jueces por los impedimentos á que se refiere el artículo anterior, cuando ocurran las circunstancias que el mismo artículo establece.

751 y 754 del Código Judicial.

Art. 87. Los Jueces y Magistrados á quienes corresponda conocer del incidente de que hablan los artículos 758 y 760 del Código Judicial, antes de declarar separado al Magistrado ó Juez impedido, resolverán sobre la legalidad del impedimento mismo, y tendrán en consideración si conforme á la ley ha debido manifestarse el impedimento por el Juez, ó alegarse por las partes.

758 y comentario, 759 y 760 del Código Judicial.

Véanse los artículos 2.°, 4.° y 5.° de la Ley 72 de 1890.

CAPÍTULO TERCERO

Acumulación de autos.

Art. 88. Además de las causas de acumulación de autos mencionadas en el artículo 786 del Código, lo son también las siguientes:

1.ª Cuando se sigan dos ó más ejecuciones en que se persigan unos mismos bienes, á menos que por la desistencia de uno ó más de los ejecutantes del derecho de ser cubiertos con el valor de tales bienes, no fuere necesaria la acumulación; y

2.ª Cuando á un tiempo se agitan un juicio ejecutivo y una tercería en otra ejecución, ó bien dos ó más tercerías en distintos juicios, para hacer efectivo un mismo derecho.

786 y 789 del Código Judicial.

Se ha estimado implícitamente derogado el ordinal 1.° del presente artículo por el 201 de esta misma ley, en razón de que éste prohibe que se embargue una finca que yá lo está en otro juicio, y en previsión de que el nuevo embargo se verifique, lo declara nulo *ipso jure*. En nuestro concepto subsiste en su fuerza y vigor el indicado ordinal 1.°, porque para que pueda considerarse que se persiguen unos mismos bienes en dos ó más ejecuciones, *no es necesario* que se hallen embargados, basta que se hayan denunciado y decretado el embargo, y claro es que no pudiendo verificarse éste á virtud de la prohibición que consagra el artículo 201, es el caso de que se acumulen los juicios en que tales bienes se persiguen. Esto se presenta con más claridad aún, cuando á virtud del ejercicio de una acción hipotecaria se *persiguen* los mismos bienes embargados yá en otro juicio.

Art. 89. Cuando se dirijan dos ó más ejecuciones contra unos mismos bienes, la acumulación se decretará de oficio ó á solicitud de parte; para ello bastará que haya constancia fehaciente del hecho.

788 del Código Judicial.

Art. 90. El decreto de acumulación se notificará á todos los que sean partes en los juicios de cuya acumulación se trate, y se librarán en caso necesario los exhortos y despachos á que haya lugar.

795 del Código Judicial.

Art. 91. Todo ejecutante puede oponerse á que se lleve á efecto la acumulación de la ejecución intentada por él, renunciando al efecto el derecho de ser cubierto con el valor de los bienes que se persiguen á un mismo tiempo en otra ú otras ejecuciones.

Art. 92. El Juzgado competente para decretar la acumulación en los dos mencionados casos es aquel en que primero se haya verificado el embargo de los bienes.

791, 792, 795, 796 del Código Judicial.—165 del Código de Organización.

Art. 93. Verificada la acumulación, sigue su curso legal el juicio ejecutivo al cual, según el artículo anterior, se han acumulado los demás, todos los cuales tendrán el carácter de juicios de tercería en el ejecutivo de que se habla.

800 y 801 del Código Judicial.

Una vez que los juicios ejecutivos acumulados tienen el carácter de juicios de tercería, juzgamos que les son aplicables los artículos 223 á 226 de esta ley.

Art. 94. Lo anteriormente dispuesto no impide que el Juez que conoce de todos los juicios acumulados adelante cada ejecución por separado respecto de los bienes que persiga exclusivamente el respectivo acreedor, para lo cual se sacará, á solicitud de parte, copia de lo conducente, y se formará cuaderno separado.

800 y 801 del Código Judicial.

CAPITULO CUARTO

Desistimiento.

Art. 95. Toda persona que haya promovido un recurso, ó propuesto un pleito, puede desistir de él expresa ó tácitamente. El desistimiento del recurso se hará ante el mismo Juez que lo haya concedido, si el expediente no hubiere sido remitido al superior, ó ante éste si yá lo hubiere recibido. El desistimiento del pleito se hará ante el Juez ó Tribunal que esté conociendo de lo principal del asunto.

Este artículo subroga al 812 del Código Judicial, el cual se deroga expresamente por el 338 de esta ley.

Art. 96. Cuando en el curso del juicio se desista de la demanda principal, la de reconvención que se hubiere propuesto seguirá su curso ante el Juez que estuviere conociendo, sea cual fuere la cuantía.

817 y 949 del Código Judicial.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

Art. 97. El desistimiento de un recurso produce el efecto de dejar ejecutoriado el auto ó la resolución de que se interpuso, cuando la contraparte no hubiere apelado del mismo auto ó resolución.

Este artículo subroga al 819 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 338 de esta ley.

TITULO IV

CAPITULO ÚNICO

Autos y sentencias.

Art. 98. En el último de los casos del artículo 827 del Código Judicial la sentencia se ejecutoría por sólo el transcurso del tiempo; pero es preciso que la parte interesada pida que se declare la ejecutoria al Juez ó Tribunal Superior respectivo, quien la decretará con citación de la parte contraria, pudiendo ésta excepcionar que el tiempo no se ha vencido, ó que ha estado en suspenso por causa legal.

Este artículo subroga al 828 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 338 de esta ley.
Véase en la nueva edición del Código Judicial—año de 1891—el comentario del artículo 827.

Art. 99. La sentencia definitiva no puede revocarse ni reformarse por el mismo Juez ó Tribunal Superior que la pronuncie; pero si en ella se hubiere guardado silencio sobre frutos, réditos ó intereses, perjuicios y costas procesales, ó se hubiere condenado en más ó menos de lo que se debía, sobre estos puntos podrá el Juez ó Tribunal Superior decidir posteriormente, siempre que la declaratoria se le pida por parte legítima en el mismo día en que se notifique la sentencia, ó dentro de tres días de pronunciada, si ésta no debiere notificarse inmediatamente.

Este artículo subroga al 859 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 338 de esta ley.

Art. 100. También podrá el Juez ó Tribunal Superior, á petición de parte legítima, aclarar las frases oscuras ó de doble sentido que haya en la sentencia definitiva y que ofrezcan un verdadero motivo de duda.

Este artículo subroga al 860 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 338 de esta ley.

Art. 101. Las sentencias que dicte la Corte Suprema de Justicia, relativas á las Ordenanzas de los Departamentos, deben tener su ejecución desde que sean conocidas oficialmente por las autoridades á quienes corresponde su cumplimiento. Presúmese el conocimiento oficial por el hecho de recibirse en la capital del respectivo Departamento el periódico destinado á publicar dichas sentencias.

TITULO V

CAPITULO ÚNICO

Costas.

Art. 102. En las sentencias interlocutorias la estimación ó regulación de las costas se hará en la misma sentencia, por el Juez ó Magistrado que la pronuncie, quien puede comisionar al Secretario para que haga dicha estimación dentro del término que le designe. La estimación de costas, verificada por el Secretario, requiere la aprobación del Juez ó Magistrado que la ordenó.

866 del Código Judicial.—6.° de la Ley 72 de 1890 y citas de este artículo.

Art. 103. El demandado, en todo juicio ordinario y en los que se conviertan en ordinarios, tiene derecho á pedir que el demandante presente un fiador que responda por el valor de las costas en que sea condenado el mismo demandante. El fiador debe ser persona capaz de obligarse como tál; que tenga bienes más que suficientes para hacer efectiva la fianza, y que esté domiciliado en el mismo Distrito judicial. Para calificar la suficiencia de los bienes del fiador se tendrá en cuenta lo que dispone el artículo 2376 del Código Civil.

Art. 104. En el mismo auto en que el Juez ordene la prestación de la fianza, fijará, según su prudente arbitrio, la cantidad hasta la cual es responsable el fiador, teniendo en consideración lo siguiente: si la cuantía del negocio fuere de ciento á quinientos pesos, la de la fianza será de veinticinco á cien pesos; si la cuantía del juicio fuere de quinientos pesos ó más, la de la fianza será de ciento á quinientos pesos.

En los negocios cuya cuantía es menor de cien pesos, y en los en que por su propia naturaleza no pueda fijarse cuantía, como los relativos á divorcio ó nulidad de un matrimonio, al estado civil de las personas, etc., no hay obligación de prestar fianza de costas.

Art. 105. El demandante puede, en vez de constituír fiador, consignar la cantidad que el Juez haya fijado en conformidad á lo establecido en el artículo que precede. Dicha cantidad se depositará, á elección del Juez, ó en un establecimiento de crédito, si lo hubiere en la cabecera del Circuito, ó en persona que resida en el mismo lugar en que se sigue el juicio, bajo la responsabilidad del Juez, en caso de que dichos establecimiento ó persona no fueren de notorio abono. La persona designada por el Juez está obligada á aceptar el depósito, á menos que exista, ó luégo ocurra, inconveniente grave que el Juez halle justificado y suficiente.

Art. 106. Si dentro del término que el Juez fijare, que no podrá pasar de treinta ni ser menor de diez días, el demandante no constituyere la fianza de costas ó no consignare la cantidad que el Juez haya señalado, se estimará que ha desistido temporalmente de la demanda, no pudiendo, en consecuencia, promover una nueva por la misma acción durante dos años, á partir de la fecha del auto en que se ha declarado la desistencia.

El Juez expresará, en el auto en que ordene la prestación de la fianza, que si ésta no se constituye en el término que fije, se presumirá de derecho la desistencia.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

Si en la oportunidad debida se iniciare un nuevo juicio entre las mismas partes y por la misma acción, y por el mismo motivo de que habla este artículo hubiere de decretarse la desistencia, ésta no se estimará temporal sino absoluta, quedando por ello extinguida la acción.

El decreto de desistencia temporal produce el efecto de que no se considere interrumpida la prescripción de la acción por la demanda.

Mientras se constituye la fianza de costas se suspenderá el curso del juicio.

54 y 122.—821 del Código Judicial.

Art. 107. Cuando la prestación de la fianza no se hubiere exigido en la primera instancia, no se podrá exigir en la segunda si únicamente el demandado hubiere apelado de la sentencia.

Art. 108. El individuo que se haga parte en un juicio, ya como coadyuvante del demandante, ya como tercerista, también debe dar fianza de costas si lo exigiere alguno de los que son partes en el juicio. Si la fianza no se constituyere dentro del término que el Juez fije, según el artículo 106, se prescindirá en absoluto de la intervención de dicho coadyuvante ó tercerista; pero puede constituírse la fianza posteriormente, y cuando esto sucediere, se considerarán como introducidas en el mismo día en que se constituya la fianza las solicitudes primitivamente hechas por el coadyuvante ó tercerista.

190, segundo inciso.

Art. 109. Si el demandado á quien se promueve demanda civil sobre la propiedad de un inmueble acreditare que lo posee á virtud de título registrado, y el Juez estimare que éste es suficiente, no ordenará la inscripción que previene el artículo 42 de la Ley 57 de 1887 mientras el demandante no constituya la fianza de costas, si el demandado la exigiere antes de contestar la demanda; si yá se hubiere ordenado la inscripción, el Juez dispondrá que no se extienda, ó que se cancele si se hubiere extendido; pero se dictará nueva orden tan luego como se hubiere constituído la fianza.

110 y 111.—*Codificación Nacional*, Tratado primero, número 278 de orden.

Se ha observado que hay litigantes temerarios que promueven juicio sobre la propiedad de un bien raíz con el objeto de sustraerlo del comercio, pues á virtud de la demanda que intentan y del registro de ella se considera en litigio el inmueble, y en consecuencia hay objeto ilícito en su enajenación; lo cual hacen con la mira de perjudicar al demandado, ó de asegurar los efectos de otro pleito. Si el propietario á quien se demanda por el inmueble acreditare poseerlo á virtud de título registrado, es claro que tiene á su favor la presunción de ser legítimo dueño, y justo es ampararlo disponiendo, como se dispone en este artículo, que no se registre la demanda mientras no se constituya la fianza de costas.

Art. 110. El demandante puede, en el mismo escrito de demanda, anticiparse á ofrecer la fianza de costas ó á pedir que el Juez fije la cantidad equivalente. Prestada la fianza ó hecha la consignación se dará traslado de la demanda al demandado, y no tendrá aplicación lo establecido en el artículo anterior.

Si el demandante se hallare amparado por pobre no dará fianza de costas, pero si el demandado poseyere la cosa sobre que versa la demanda á virtud de título registrado, el Juez no ordenará la inscripción de que trata el mencionado artículo 42 de la Ley 57 de 1887 si en su concepto fuere suficiente dicho título; si yá la hubiere ordenado dispondrá que no se extienda, ó que se cancele si se hubiere extendido. En

consecuencia, en el presente caso y para los efectos del artículo 1521 del Código Civil, no se considerará en litigio el inmueble reclamado; pero si se dictare sentencia de primera instancia en favor del demandante, en la misma sentencia se ordenará la inscripción prescrita en el mencionado artículo 42, orden que se comunicará al Registrador en el mismo día en que se publique la sentencia. A partir de la fecha de la inscripción se entenderá que está en litigio el inmueble demandado.

103 á 105, 111 y 112.—934 del Código Judicial.—*Codificación Nacional*, Tratado primero, número 278 de orden.

No pudiendo condenarse al demandante que se halle amparado por pobre á pagar costas, es claro que no podía imponérsele la obligación de dar fianza respecto de ellas; pero siendo necesario amparar á los propietarios que posean á virtud de título registrado el inmueble por que se les demanda, se halló justo estatuír lo que en la parte final de este artículo se dispone.

Art. 111. Para acreditar la suficiencia de un título registrado, en todos los casos que en esta Ley se hable de títulos de esta naturaleza, se exhibirá el título mismo, que será aquél que la ley requiere según el caso, y que deberá llevar la correspondiente nota de registro. Se presentará, además, un certificado del respectivo Registrador de instrumentos públicos en que conste: 1.° que el registro del título—título y registro que se designarán por su número y fecha—no se ha cancelado por ninguno de los tres medios que menciona el artículo 789 del Código Civil; y 2.° que los registros anteriores al actual, relativos á un período de diez años, se han cancelado conforme al mismo artículo, hasta llegar al registro actual. Si en dicho período no hubiere habido inscripción alguna, debe acreditarse que el registro que ha sido cancelado por el actual es anterior á éste en diez años, por lo menos; si esto no se acreditare, por no haber registro cancelado en un período de veinte años, basta que la fecha de la escritura que se ha presentado sea de veinte años, con relación al momento en que se exhibe.

Dice este artículo que debe exhibirse el título que la ley requiere, según el caso; y dicho título puede ser una escritura pública, ó una hijuela, ó una diligencia de remate, etc.

Conforme á este mismo artículo debe acreditarse que el registro del título no se ha cancelado por ninguno de los medios que menciona el artículo 789 del Código Civil; lo cual es muy razonable, pues el mismo artículo 789 establece que la posesión inscrita *cesa* cuando se cancela la inscripción, y es claro que si la posesión inscrita ha cesado, el demandado no puede alegar con razón que *posee* el inmueble á virtud de título registrado. No bastaría probar, sin embargo, que no se había cancelado la inscripción á que se refiere la nota del título presentado, tanto porque no es difícil obtener clandestinamente un título registrado, cuanto porque la misma facilidad de obtenerlo ha sido razón demás para que la ley disponga que no produce efecto un registro mientras subsista otro anterior, y que una nueva inscripción no cancela la existente sino cuando la última se ha extendido por haber transferido el poseedor inscrito su derecho á la persona á quien la nueva inscripción se refiere. Ahora bien, la comprobación de estar cancelados los registros anteriores ¿debe referirse á un período de tiempo, ó á cierto número de inscripciones? Si se exigiese esto último se dejaría abierto el camino del fraude, porque es claro que en un corto período podría verificarse debidamente la cancelación de las inscripciones necesarias, hasta llegar á una inscripción obtenida indebidamente. Por esto se ha estimado preferible exigir, como se exige, la prueba de estar cancelados los registros ó inscripciones con relación á un período de tiempo—diez años—más bien que requerir la cancelación de cierto número de registros.

Finalmente, llamamos la atención del lector á la circunstancia de que no se exige á la persona que debe dar la prueba de la posesión inscrita, que acredite haber poseído el inmueble *durante* diez años; sino que compruebe que los

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

registros anteriores al actual, *relativos á un período de diez años*, están debidamente cancelados: interpretación que la parte final de este mismo artículo confirma.

Art. 112. La fianza de costas se constituye por diligencia que se extiende en el mismo expediente, en la cual se expresará la cantidad fijada por el Juez para la responsabilidad del fiador, diligencia que firmarán el Juez, el fiador y el Secretario. Con copia de la diligencia de fianza, de la tasación de costas y del auto aprobatorio de éstas, la cual suscribirán los mismos funcionarios, puede procederse ejecutivamente contra el fiador hasta por la cantidad por la cual se constituyó responsable, si la tasación de costas ascendiere á ella.

104.

TITULO VI

CAPITULO UNICO

Ejecución de las sentencias.

Art. 113. Las sentencias definitivas en juicio civil, que estén ejecutoriadas, deben ejecutarse aun cuando contra ellas se entable ó pueda entablarse acción de nulidad.

868 del Código Judicial.

Art. 114. Cuando de dichas sentencias resulte la obligación de entregar una finca raíz, y no se efectuare la entrega dentro de tres días de notificada la sentencia, el Juez procederá á la entrega de la cosa, haciendo uso de la fuerza, si fuere necesario.

En el caso de este artículo no se admitirá oposición alguna á las personas á quienes perjudica la sentencia conforme al artículo 846 y siguientes del Título IV, Libro 2.° del Código Judicial, ni á las que se encuentren en el caso final del artículo 871 del mismo Código.

870 del Código Judicial.

TÍTULO VII

CAPÍTULO ÚNICO

Apelaciones.

Art. 115. En caso de concederse una apelación en el efecto devolutivo se remitirá al superior, original, la parte conducente del proceso, dejando á cargo del apelante copia de lo que fuere puramente necesario para que el juicio continúe ante el inferior. Esta copia deberá compulsarse dentro del término que el Juez designe, quien podrá prorrogarlo por justa causa alegada antes del vencimiento del término. Si la copia no se compulsare por culpa del apelante, el Juez, á petición de la contraparte ó por informe del Secretario, quien está en el deber de darlo de oficio, declarará desierto el recurso.

Si el superior, para decidir, estima necesaria alguna otra parte de los autos, podrá pedirla; y el Juez la remitirá, compulsando previamente copia de lo que sea necesario para la continuación del juicio.

116 y comentario.—El presente artículo subroga al inciso primero del artículo 892 del Código Judicial. Véase el artículo 745 de este Código.

Art. 116. Concedida una apelación en el efecto suspensivo no se sacará copia de lo conducente para que se realicen las concedidas á cualquiera de las partes en el efecto devolutivo; lo cual es sin perjuicio de que se lleven á cabo las apelaciones para las cuales se hubiere yá sacado y remitido la correspondiente copia al superior.

El Magistrado á quien corresponda conocer del auto de que se ha otorgado apelación en el efecto suspensivo, conocerá también de los otros autos cuya apelación se concedió en el devolutivo, si figuran en el mismo expediente y no se hallan en el caso previsto en la parte final del anterior inciso. El Magistrado fallará sobre los expresados autos dentro de un término común.

63.—892 del Código Judicial.

El presente artículo no se halla en consonancia con el que precede, en cuanto se admite que deben remitirse al superior las correspondientes copias para decidir sobre las apelaciones interpuestas, no obstante haberse establecido yá en el 115 que debe enviarse el expediente *original*, y nó copias. Aunque este artículo es posterior, repárese que no es imperativo en la parte que ocasiona la contrariedad entre las dos disposiciones, pues se limita á reconocer simplemente el hecho de que se haya sacado y remitido *la correspondiente copia al superior*. No creemos que esta desarmonía sea motivo para que no se cumpla lo que dispone el artículo 115, porque el fiel cumplimiento de éste en nada desvirtúa la parte preceptiva del artículo 116. La oposición que se advierte entre los dos artículos proviene de que el 115, que fue tomado de la Ley 57 de 1887, figuraba en el Proyecto del Consejo de Estado; y el 116 correspondía á uno distinto, y ambos se refundieron en un solo proyecto de ley por haberlo estimado conveniente la comisión del Senado; no habiendo habido la calma ni el tiempo necesarios para reflexionar sobre la naturaleza y recíprocas relaciones de las diferentes disposiciones de dichos proyectos.

Art. 117. El auto en que se niega la revocatoria de otro contra el cual no se interpuso en tiempo apelación es inapelable, á menos que en el segundo auto se resuelva, además, sobre un punto no decidido en el primero. En este caso la apelación se surtirá respecto de dicho nuevo punto únicamente.

885, 886 y 889 del Código Judicial.

La razón de este artículo es obvia, pues no habiéndose interpuesto en tiempo apelación respecto del primer auto, éste no puede ser modificado ni revocado por el superior; mas como se halla íntimamente relacionado con el último, es claro que si el segundo fuera apelable, la resolución del superior podría entrañar la reforma ó la revocación de aquél.

Art. 118. En asuntos de jurisdicción voluntaria las apelaciones se concederán en el efecto que designe el apelante.

Art. 119. Cuando por auto ejecutoriado se halle una parte condenada á pagar costas y dicha parte interpusiere recurso de apelación ó de hecho, contra una nueva resolución del Juez, sin haber pagado las costas, éste dispondrá que se la requiera al pago de ellas. Si pasaren cinco días después de la notificación del auto en que se ordena el requerimiento, y la parte no verificare el pago de las costas, el Juez negará el recurso interpuesto. Contra este último auto no hay otro remedio que el de queja.

891 del Código Judicial.

Art. 120. Si el Juez concediere uno de los recursos de que trata el artículo anterior sin que el recurrente haya pagado las costas, el superior se abstendrá de conocer, á petición de la parte contraria, y ordenará que se devuelva la actuación al Juzgado de su procedencia, sin per-

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

juicio de disponer lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad en que hubiere incurrido el Juez.

891 del Código Judicial.

Art. 121. Para que tengan aplicación los dos artículos anteriores, es preciso que las costas se hayan tasado, que se haya dictado auto aprobatorio de la tasación, y notificado éste á las partes.

102.—866 del Código Judicial.

Art. 122. Recibido por un Tribunal de Distrito judicial, ó Juez de Circuito, un expediente que se le dirija en apelación de sentencia definitiva ó de algún auto, si pasaren treinta días después de la fecha del recibo del proceso y las partes no consignaren el papel necesario para darle curso al negocio, ó no hicieren las gestiones necesarias para la continuación del juicio, se declarará ejecutoriada la sentencia ó el auto apelado por los Magistrados ó el Magistrado sustanciador, ó por el Juez de Circuito que hubieren de fallar definitivamente sobre el recurso interpuesto, sin necesidad de petición de parte. Esta ejecutoria no perjudicará á las partes que hubieren cumplido sus deberes.

Lo dispuesto en el inciso que precede se hace extensivo á la Corte Suprema respecto de los recursos de apelación y casación, menos en cuanto al término que en él se fija, pues éste será de sesenta días, á partir de la fecha del recibo del proceso en la Corte.

54 y 106.—827 y comentario, y 828 del Código Judicial.

TÍTULO VIII

CAPITULO UNICO

Nulidades.

Véase la ADVERTENCIA IMPORTANTE que en la nueva edición del Código Judicial—año de 1891—se halla á la cabeza del Título que trata de esta misma materia; y téngase presente que se halla vigente el artículo 928 del Código citado.

Art. 123. Las únicas causas de nulidad en *todos los juicios*, son:

1.ª Incompetencia de jurisdicción; y

2.ª Ilegitimidad en la personería de alguna de las partes.

Art. 124. La incompetencia de jurisdicción no produce nulidad en los casos siguientes:

1.° Si la jurisdicción es prorrogable y las partes han intervenido en el juicio sin hacer reclamación oportuna;

2.° Si habiendo hecho reclamación sobre este punto, se ha declarado sin lugar, y se ha ejecutoriado ó confirmado tal declaratoria;

3.° Si la jurisdicción es improrrogable y se ratifica lo actuado:

132, 133 y 136, ordinal 1.°

4.° Si la falta de jurisdicción proviene sólo de la falta en el repartimiento por haberse hecho ó dejado de hacer indebidamente, bien sea en los Tribunales ó en los Juzgados;

5.° Cuando tenga por única causa el haberse declarado indebidamente legal ó ilegal algún impedimento ó causa de recusación; siempre que se haya ejecutoriado esa declaratoria, ó la providencia en que se aprehende el conocimiento del juicio;

6.° Cuando provenga de haber conocido en otro tiempo algún Magistrado ó Juez impedido, siempre que ese funcionario se haya separado yá del conocimiento del negocio y las partes hayan continuado usando de sus derechos ante otro que tenga jurisdicción; y

7.° Cuando tenga por fundamento haberse nombrado para el empleo á un individuo que no podía ser elegido.

Art. 125. La ilegitimidad en la personería de alguna de las partes no es causa de nulidad en los casos siguientes:

1.° Cuando se haya declarado, en un auto ejecutoriado, que es legítima la personería de la parte, de su apoderado ó representante;

2.° Cuando se encuentre en los autos un poder en legal forma, conferido á la persona de que se trata, aunque ésta no lo haya admitido expresamente;

3.° Cuando, aunque el poder no sea bastante, la parte interesada, ó algún apoderado ó representante legal suyo ratifica lo actuado; y

4.° Cuando resulta claramente de los autos que el interesado ha consentido en que la persona que figura en el juicio como su apoderado, represente sus derechos, aunque carezca de poder, ó éste no se halle arreglado á la ley.

130, 135 y 136, ordinal 2.°

Art. 126. En los *juicios ordinarios* es causa de nulidad no haberse notificado la demanda al demandado. Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo los casos siguientes:

1.° Si el demandado ha representado por sí ó por apoderado en el juicio, haciendo siquiera una solicitud sin reclamar la declaratoria de nulidad; y

2.° Si ha reclamado esa declaratoria y se ha desechado su pretensión, y confirmado ó ejecutoriado la providencia en que esto se verifique.

137.

Art. 127. En los *juicios ejecutivos* son causas de nulidad:

1.ª No notificar legalmente al deudor el auto ejecutivo; y

2.ª No fijar los avisos, cuando el deudor no los ha renunciado, para el remate de los bienes que deban ser rematados, y no verificar el remate conforme lo disponen los artículos 1060 á 1066 del Código.

214.

Art. 128. La falta de citación para sentencia de pregón y remate no induce nulidad; pero en cualquier estado que se presente el ejecutado puede proponer excepciones, y en este caso se suspende el pregón y remate de los bienes.

Si el remate se hubiere verificado, se colocará el dinero á interés en la persona designada en el artículo 245, exigiéndose del acreedor, si yá se le hubiere entregado.

Art. 129. En el *juicio de concurso de acreedores*, es motivo de nulidad no haberse notificado, á lo menos por un edicto fijado en el lugar del juicio y por el término de treinta días, el auto en que se declare formado el concurso, menos en los casos siguientes:

136, ordinal 4.°

1.° Si todos los acreedores y el deudor hubieren sido citados personalmente; y

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

2.° Cuando los acreedores ó el deudor no citados han representado en el juicio sin haber alegado esta nulidad después de su primera solicitud.

38.

Art. 130. La ilegitimidad de la personería del que representa á un acreedor en un concurso, no induce nulidad en el juicio principal; sólo podrá anularse la parte respectiva de lo actuado, si expresamente lo pide el interesado.

125.

Art. 131. El no dictarse una sentencia en la forma prevenida en el Código, tampoco induce nulidad que pueda declararse en el juicio. Pero si la sentencia no expresa claramente los derechos y deberes que de ella deben resultar á las partes, puede excepcionarse de nulidad al tratar de ejecutarse, ó pedir su anulación en juicio ordinario, lo cual no obsta para que se pueda aclarar la sentencia oscura conforme al artículo 860 del Código.

Art. 132. En el caso del ordinal 3.° del artículo 124 de esta Ley, la ratificación de lo actuado no da jurisdicción al Magistrado ó Juez para seguir conociendo del asunto, y deben pasar los autos al Juez ó Magistrado competente, para que continúe conociendo del negocio en el estado en que se encuentre. En los demás casos sigue conociendo hasta la terminación del juicio.

Art. 133. Los Agentes del Ministerio público, los representantes de las Corporaciones, Congresos ó Comunidades, y los guardadores, no pueden ratificar lo actuado ante el Juez ó Magistrado incompetente, en el caso de que la jurisdicción sea improrrogable, sino por causa de utilidad evidente, judicialmente declarada.

Art. 134. El Magistrado ó Juez que conoce de un juicio, y que antes de decidir sobre lo principal de él observare que existe alguna causa de nulidad, mandará ponerla en conocimiento de las partes. Si la en que tiene derecho de pedir la reposición de lo actuado no la pidiere dentro de tercero día, ó se ratificare expresamente la actuación, se dará por allanada la nulidad, y el juicio seguirá su curso; pero si dicha parte pidiere expresamente la anulación, se anulará el juicio desde el estado que tenía cuando ocurrió el motivo de nulidad, quedando válida la actuación que se había practicado antes. El silencio se tendrá como allanamiento.

Cuando en la Corte Suprema y Tribunales Superiores de Distrito el expediente hubiere pasado á la Sala plural para su decisión definitiva, corresponde á ella mandar poner en conocimiento de las partes las causales de nulidad que observare en la actuación, y resolver sobre ellas.

Art. 135. En los casos de ilegitimidad de la personería, y en consonancia con el artículo anterior, se notificará personalmente el auto respectivo al interesado, ó á quien lo represente legalmente, para que pueda hacer uso de sus derechos; y si no se anulare el proceso, por el mismo hecho se legitima la personería del que indebidamente figuraba en el juicio. Para esta notificación puede procederse de conformidad con el artículo 25 de esta Ley.

125.

Art. 136. Tienen derecho de pedir la reposición de lo actuado:

1.° En la nulidad por incompetencia de jurisdicción que no haya

podido prorrogarse, ó no se haya prorrogado conforme á la ley, cualquiera de las partes;

124, ordinales 1.° y 3.°

2.° En la nulidad por ilegitimidad en la personería de alguna de las partes, el interesado cuyos derechos se han representado indebidamente ó su representante legal;

125.

3.° En la nulidad por falta de notificación de la demanda ó mandamiento de pago, el demandado ó ejecutado; y

126 y 127, ordinal 1.°

4.° En la nulidad por falta de emplazamiento y citación en los concursos de acreedores, el acreedor ó acreedores, ó el deudor que no hayan sido citados; pero si el deudor es quien ha solicitado la formación del concurso, éste no se anula por la falta de citación al concursado.

38 y 129.

Art. 137. La causa de nulidad consistente en no haberse notificado la demanda al demandado, salvo las excepciones establecidas en el artículo 126 de esta Ley, puede alegarse en el mismo juicio, ó como acción en uno distinto, ó como excepción cuando se trate de ejecutar la sentencia.

Las causas de nulidad establecidas en el artículo 127 de esta misma Ley pueden alegarse: la primera en el juicio mismo, ó en uno distinto; y la segunda, de esta última manera únicamente.

Las excepciones establecidas en el artículo 126 son aplicables al juicio ejecutivo.

La causa de nulidad consistente en no haberse notificado el auto sobre formación del concurso, salvo las excepciones establecidas en el artículo 129 de esta Ley, puede alegarse en el juicio mismo, ó como acción en uno distinto.

Art. 138. Las acciones ó excepciones de nulidad de sentencias definitivas de última instancia, yá dictadas, que los respectivos interesados tengan derecho de proponer conforme á la legislación vigente de los extinguidos Estados, podrán proponerse en los términos que esa legislación establece.

Art. 139. Siempre que se anule un proceso se condenará en las costas de la parte anulada al funcionario que resulte culpable de la nulidad.

141.

Art. 140. Cuando la culpa no sea enteramente del Juez, como en el caso de ilegitimidad de la personería de la parte á quien el Juez ha admitido como tál, sin deber admitirla, ó en cualquier otro caso en que el Juez haya debido advertir la irregularidad en que se incurría, el pago de las costas corresponderá por mitad al Juez y á la parte culpable.

Art. 141. Después de anular un proceso ó parte de él pueden los interesados revalidar lo anulado, y por este hecho no surtirá efecto alguno la condenación en costas de que trata el artículo 139. Si yá se hubieren satisfecho, se podrán reclamar como pago indebido.

Art. 142. Cuando lo que se anule sea parte de un proceso, de suerte que el juicio haya de seguirse á continuación del mismo proceso, el

Universidad del Rosario · Archivo Histórico

funcionario que dio lugar á la nulidad no será obligado á pagar las escrituras y demás documentos que con sólo reproducirlos en el término probatorio surten sus efectos.

TITULO IX

JUICIO ORDINARIO POR DEMANDAS DE MAYOR CUANTÍA

CAPITULO PRIMERO

Primera instancia.

Art. 143. El Juez examinará cuidadosamente el escrito de contestación de la demanda, y si el demandado no hubiere contestado de la manera prescrita en el artículo 938 del Código Judicial, le indicará por medio de un auto los defectos de que adolece dicha contestación, haciendo mención de ellos en párrafos separados y con toda la claridad posible. En el mismo auto se expresará que el demandado debe verificar dentro de tres días las correcciones que se le ordene hacer.

Véase la observación del artículo 146.

Art. 144. El Juez, tanto en el auto en que disponga correr traslado de la demanda como en el que ordene la corrección de los defectos de que adolece la respectiva contestación, hará presente al demandado que si no contesta la demanda oportunamente, ó si no hace las correcciones que se le indican, ya por abstenerse en absoluto de hacerlas, ya porque las haga después de los tres días, ya porque las correcciones sean incompletas ó ambiguas, ó no estén en consonancia con los puntos de la demanda, será condenado en la sentencia definitiva, además de las costas á que haya lugar, á pagar una multa de cincuenta á trescientos pesos á favor del demandante, si la sentencia definitiva fuere favorable á éste. Dicha multa la impondrá el Juez según su prudente arbitrio.

Véase el artículo 146 y la observación.

Art. 145. Contestada la demanda y hechas las correcciones que se haya ordenado hacer, si las partes están conformes en los hechos, pero nó en el derecho, el Juez ordenará que se entregue el expediente á cada una de ellas para alegar; si también estuvieren conformes en cuanto al derecho, se les citará para sentencia. En el caso de que hubiere desacuerdo en los hechos, el Juez abrirá la causa á prueba para que las partes presenten las que estimen convenientes.

Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de lo establecido en los artículos 577 y 944 del Código Judicial, y de cualquiera otra disposición especial.

El presente artículo subroga al 956 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 338 de esta ley.—Véase la observación del artículo 146.

Art. 146. Si el demandado no contesta la demanda ó no hace las correcciones que se le ha prevenido hacer, el Juez se limitará á abrir la causa á prueba para que las partes presenten las que juzguen necesarias, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 542 á 544 del Código Judicial, debiendo el Juez en la sentencia definitiva cumplir lo prevenido en el artículo 144.

Los cuatro artículos que preceden subrogan á los 939 á 943 del Código Judicial, los cuales se derogaron expresamente por el 338 de esta ley.

El artículo 941, inciso segundo, del Código Judicial—artículo derogado por el 338 de esta ley, como acabamos de indicarlo—decía:

"Cuando no se conteste la demanda, se darán por probados todos los hechos expresados en ella; pero durante el término de prueba el demandado puede probar contra esos hechos."

Permitirle al demandado probar contra los hechos de la demanda, que se estimaban probados, era otorgarle un derecho ilusorio, porque, consistiendo la prueba en acreditar que no eran ciertos tales hechos, es claro que se le colocaba en la obligación de probar hechos *negativos*, lo cual equivalía á condenarlo desde luego á perder el pleito. Esta sanción, demasiado severa aun para los litigantes temerarios—á quienes nunca se aplicaba, porque conociendo ellos su rigor no excusaban la contestación—producía todos sus efectos respecto de las personas ignorantes, pusilánimes ó indefensas: necesario era, pues, derogar la disposición que la establecía. Pero siendo notoria la conveniencia de que se conteste la demanda, por cuanto á virtud de la contestación se fijan con bastante exactitud las cuestiones de hecho y de derecho, y se las simplifica notablemente, era indudable que debía establecerse alguna sanción que estimulara al demandado á dar contestación á la demanda; por eso se dispone en el artículo 144 que se condene al demandado que no contesta la demanda á pagar una multa á favor del demandante si la sentencia definitiva fuere favorable á éste; multa que en parte indemniza al demandante por los mayores costos que habrá de hacer con motivo de tener que presentar la prueba de todos los hechos de la demanda.

Art. 147. El comprador que haya de ser amparado conforme al Código Civil en el dominio y posesión pacífica de la cosa vendida tiene derecho á denunciar todo pleito que deba iniciar, ó que se le promueva, cuando sea por causa anterior á la venta. Si el juicio fuere ordinario, el derecho de denunciar el pleito dura hasta el día en que se conteste la demanda; si fuere especial, la denuncia debe hacerse dentro de los seis días siguientes al en que se notifique á las partes el auto que da principio al juicio en el cual haya de dictarse sentencia que pueda afectar los derechos del comprador.

1894, 1895, 1899, 1900 y 1901 del Código Civil, y 1034 del Judicial, artículo que se derogó por el 338 de la presente ley.

Este artículo subroga al 951 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 338 de esta ley.

En cuanto al derecho que se reconoce al comprador de denunciar *todo* pleito que deba iniciar, téngase en consideración lo que estatuye el artículo 1900 del Código Civil.

Dice el artículo que el derecho de denunciar el pleito dura hasta el día en que se conteste la demanda, es decir, hasta el día en que debe contestarse la demanda. Fúndase esta opinión nuéstra en que el legislador párte necesariamente de la base de que el demandado cumple estrictamente el deber que la ley le impone de contestar oportunamente la demanda, y que no contestada, el Juez procede á abrir la causa á prueba: de otro modo, sería potestativo del demandado ampliar el término para la denuncia del pleito.

Art. 148. La denuncia se hará por escrito, ante el Juez de la causa, debiendo acompañar el denunciante la prueba plena de que se halla en el caso de denunciar el pleito conforme á la ley.

1894, 1895, 1899 y 1900 del Código Civil.

Este artículo subroga al 952 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 338 de esta ley.

Art. 149. Hallando el Juez fundada la denuncia la mandará notificar al denunciado, señalándole el término de cinco días, si residiere en el mismo lugar, para que se presente á seguir el juicio, suspendiendo entre tanto el curso de éste. Si el denunciado no residiere en el mismo lugar, el Juez, atendida la distancia á que se encuentre, le seña-

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

lará un término para que se presente con el objeto indicado, suspendiéndose también el curso del juicio durante el expresado término.

Lo dispuesto en el inciso anterior es sin perjuicio de lo que previene el artículo 955 del Código Judicial.

Este artículo subroga al 953 del Código Judicial, el cual se derogó por el 338 de esta ley.

Los términos que por el presente artículo se conceden al denunciado tienen por único objeto *que se presente* para seguir con él el juicio; lo cual no quiere decir que presentado se dé curso al juicio á partir del estado que tuviere cuando aquél se presenta: si de esta manera se entendiera la ley, se privaría al denunciado del derecho de contestar la demanda y de oponer las excepciones que crea le favorecen. Cuando el juicio se sigue con el denunciado debe comenzarse, pues, por darle traslado de la demanda.

Art. 150. Cuando se presenten denuncias sucesivas, hágase ó no parte en el pleito los denunciados, tendrán éstos derecho para denunciarlo á quien crean que debe salir á la defensa de la cosa demandada, dentro de los cinco días siguientes á la notificación del auto que admite la anterior denuncia.

954 y 955 del Código Judicial.

CAPITULO SEGUNDO

Segunda instancia.

ADVERTENCIA.—Los artículos 151 á 166, que constituyen el presente capítulo, subrogan á los 969 á 980 del Código Judicial, que se derogaron por el 338 de esta ley.

Art. 151. Recibido en la Corte Suprema ó en los Tribunales Superiores de Distrito un expediente por recurso de apelación ó por consulta de la sentencia definitiva de primera instancia, y hecho el repartimiento, el Magistrado substanciador mandará dar vista al respectivo Agente del Ministerio público por cinco días, en los casos en que la Nación ú otra entidad política estuvieren interesadas, para que dentro de ese término manifieste si tiene ó nó pruebas que producir en la segunda instancia.

Art. 152. Por el término de cinco días, de que se habla en el artículo anterior, se anunciará por un edicto á las otras partes el recibo del expediente en la Corte Suprema ó Tribunal Superior de Distrito respectivo para el mismo efecto que, con relación al Ministerio público, se expresa al fin del artículo precedente, y esto lo dispondrá también el substanciador en su primer auto.

Durante el término del edicto se franqueará el expediente en la Oficina del respectivo Agente del Ministerio público, pero sin sacarlo de ella, á cualquiera de las otras partes que lo solicite.

Art. 153. Si en el juicio sólo hubiere particulares interesados se dispondrá por el Magistrado substanciador que se fije edicto por cinco días, avisando á las partes el recibo del expediente, para que manifiesten si tienen pruebas que producir dentro de dicho término; y en este caso las partes se impondrán del expediente en la Secretaría respectiva.

Art. 154. Transcurridos los cinco días, si el expediente ha sido devuelto por el Ministerio público, el Secretario lo pondrá al despacho del substanciador con los pedimentos que, tanto el Ministerio público como las demás partes, hayan presentado en dicho término.

Art. 155. Si ninguna de las partes hubiere pedido que la causa se abra á prueba, se mandará entregar el expediente á las partes, por seis días á cada una, para que aleguen por escrito.

Si el número de las partes pasare de tres, el expediente se mantendrá en la Secretaría por el término de diez y ocho días, á disposición de los interesados, de manera que todos puedan enterarse de él.

Art. 156. Vencidos los términos para los alegatos por escrito se citará para sentencia, y en el mismo auto se señalará día para la audiencia pública, en la cual se pueden presentar también alegatos por escrito. Este señalamiento no podrá hacerse ni para antes de cuatro días ni para después de ocho, á contar desde la fecha de la citación para sentencia.

Art. 157. Dentro de los treinta días siguientes al último de los alegatos en estrados se pronunciará sentencia confirmando, revocando ó reformando la de primera intancia, según que estuviere ó nó arreglada á las leyes y al mérito de los autos.

Art. 158. El día señalado para la audiencia se abrirá ésta haciéndose leer por el Secretario la sentencia apelada ó consultada. En seguida el Magistrado que presida concederá el uso de la palabra á la parte apelante y luégo á la contraparte, hasta por dos veces á cada una. Si ambas partes hubieren apelado de la sentencia de primera instancia hará uso de la palabra la parte actora en el pleito, y después la demandada.

Art. 159. Si en el término de cinco días de que se habla en el artículo 153 las partes ó alguna de ellas pidiere que el juicio se abra á prueba, así se decretará por un término hasta de veinte días.

Art. 160. Son comunes á este Capítulo las disposiciones de los artículos 958, 959 y 960 del Código Judicial, en cuanto se trate de pruebas que hayan de practicarse en país extranjero ó dentro de la República, á una distancia mayor de cincuenta miriámetros de la residencia de la Corte ó del Tribunal; pero la petición de término en esos casos debe hacerse durante la primera mitad del término probatorio en segunda instancia.

Art. 161. Transcurrido el término de prueba el Secretario lo informará al substanciador, poniendo á su disposición los autos.

Art. 162. Después de concluído el término probatorio tienen facultad la Corte Suprema y los Tribunales Superiores para dictar auto *para mejor proveer*, con el objeto de aclarar los puntos que juzguen dudosos, y de hacer complementar las pruebas para que el derecho no sea sacrificado por las fórmulas. Una vez cumplido en todas sus partes el auto para mejor proveer dictado en un juicio, no se podrá dictar otro en el mismo juicio, á menos que aparezcan nuevos hechos que necesiten comprobarse y que hayan sido sugeridos por el cumplimiento del primer auto dictado.

Art. 163. Las diligencias que se decreten en un auto *para mejor proveer* se practicarán con citación de las partes, para que dentro del término de veinticuatro horas puedan aducir contrapruebas. Dichas contrapruebas y las diligencias que se decreten se practicarán dentro de diez días, más el término doble de la distancia, cuando deban practicarse fuera del lugar del juicio.

Art. 164. Si no se dictare auto *para mejor proveer*, ó en el caso en que habiéndose dictado se hubieren practicado las pruebas ordenadas por la Corte ó por los Tribunales Superiores, se procederá como se ha dispuesto en los artículos 155 á 158 de esta Ley.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

Art. 165. Si se han alegado nulidades, ó resultaren del proceso, la Corte ó los Tribunales Superiores resolverán previamente sobre ellas en cualquier estado de la causa, y de conformidad con las disposiciones del Título VIII de esta Ley.

Art. 166. Si contra la sentencia definitiva de segunda instancia pronunciada por un Tribunal Superior de Distrito se interpusiere oportunamente el recurso de casación, se admitirá, sustanciará y decidirá conforme á lo establecido en los artículos 366 á 387 de esta Ley.

TITULO X

JUICIO ORDINARIO POR DEMANDAS DE MENOR CUANTÍA

CAPITULO PRIMERO

Primera instancia.

Art. 167. Si el demandado en juicio ordinario por demanda de menor cuantía no compareciere el día y á la hora designados para contestar la demanda, ó si compareciendo se negare á contestarla, el Juez hará uso de los apremios establecidos en el artículo 334 de esta Ley. Si después de que éstos se hayan cumplido aún no se contestare la demanda, el Juez abrirá á prueba el juicio para que las partes presenten las pruebas que estimen convenientes; y oportunamente dictará sentencia en virtud de lo alegado y probado, condenando al demandado, por no haber contestado la demanda, á pagar una multa de diez á cien pesos si la sentencia fuere favorable al demandante.

146 y comentario.

Este artículo subroga al 990 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 338 de esta ley.

CAPITULO SEGUNDO

Segunda instancia.

Art. 168. Recibido el proceso en el Juzgado del Circuito se dictará, dentro de veinticuatro horas, auto mandando poner en conocimiento de las partes el recibo de los autos, lo cual se hará saber por edicto que durará fijado por las horas útiles de un día natural.

Este artículo y los 171, 172, 173, 174 y 175 subrogan al 1000 y al 1003 del Código Judicial, no derogados expresamente.

Art. 169. En caso de haberse ocurrido de hecho, admitido que sea el recurso, el Juez de Circuito oficiará al de Distrito para que le remita el expediente, previa citación de las partes, con el objeto de que estén á derecho en el Juzgado de Circuito.

Este artículo y el 170 subrogan al 1001 del Código Judicial, no derogado expresamente.

Art. 170. Recibido el expediente en el Juzgado de Circuito se dará aviso de ello á las partes, en los términos prescritos en el artículo 168.

Art. 171. Si dentro de los tres días contados desde la notificación

no pidiere alguna de las partes que la causa se abra á prueba, el Juez citará para sentencia, que pronunciará dentro de los diez días siguientes, confirmando, reformando ó revocando la de primera instancia, y resolviendo también sobre costas.

Este artículo y el 175 subrogan al 1002 y el 1003 del Código Judicial, no derogados expresamente.

En el comienzo de este artículo hay un error caligráfico, pues ha debido escribirse así:

"Si dentro de tres días contados...."

Art. 172. Si dentro de los tres días de puesto en conocimiento de las partes el recibo de los autos ocurriere alguno pidiendo que la causa se abra á prueba, el Juez concederá el término común de ocho días y el de la distancia, si se hubieren de practicar fuera del lugar del juicio.

Véase la observación del artículo 168.

Art. 173. Dentro del término probatorio cada parte puede presentar ó pedir las pruebas que le convengan, y el Juez las mandará evacuar con citación contraria.

Véase la observación del artículo 168.

Art. 174. Vencido el término probatorio, el Juez mandará dar traslado á las partes, por cuatro días á cada una, para que aleguen de conclusión.

Este artículo, el 168 y el 171 subrogan al 1000 y al 1003 del Código Judicial, no derogados expresamente.

Art. 175. Concluído el término de los traslados se citará para sentencia, y dentro de los diez días siguientes se dictará el fallo, confirmando, reformando ó revocando el de primera, y resolviendo sobre costas.

Véase la observación del artículo 171.

Art. 176. Cuando se alegue de nulidad en estos juicios, en segunda instancia, se resolverá previamente sobre ella. De otra manera sólo serán anulables por ilegitimidad de personería y por falta de jurisdicción.

1007 del Código Judicial.

Art. 177. Una vez resuelta la apelación por el Juez de Circuito, ó anulado el proceso y publicada la resolución, se remitirá todo lo actuado al Juez de la primera instancia, dejando copia de la sentencia en un libro que al efecto llevará el Secretario del Juzgado de Circuito.

Este artículo subroga al 1005 del Código Judicial, no derogado expresamente.

Art. 178. En la oficina del Juez que pronunció la sentencia de primera instancia se notificará la de segunda, y allí se archivará el expediente original, del cual, previa orden del Juez, se darán las copias que soliciten las partes.

Este artículo subroga al 1006 del Código Judicial.

Los artículos 986, á 989, 991 á 999, 1004 y 1007 del Código Judicial no han sido derogados ni subrogados.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

TITULO XI

Juicio Ejecutivo.

Art. 179. Traen aparejada ejecución los actos judiciales y los documentos siguientes:

1.° La sentencia ejecutoriada, con los requisitos que determine el artículo 828 del Código Judicial;

2.° La sentencia que, aunque por su naturaleza no cause ejecutoria, deba ejecutarse sin embargo de apelación, por haberse concedido ésta en el efecto devolntivo solamente;

3.° Los despachos librados en la forma legal por la Corte Suprema, Tribunales Superiores y por los Juzgados de primera instancia, para la ejecución de un acto judicial;

4.° Las escrituras públicas;

5.° Las letras de cambio contra los aceptantes, contra los endosantes ó contra los libradores en sus respectivos casos, según el Código de Comercio;

6.° Los pagarés ó vales simples, y en general los documentos privados reconocidos por el deudor en la forma legal, ó registrados en la Oficina pública de registro, por el mismo deudor; y

7.° La confesión judicial hecha ante Juez competente.

Este artículo subroga al 1010 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 338 de esta ley. La diferencia entre este artículo y el 1010 se refiere únicamente á los ordinales 1.° y 3.°

Art. 180. Para que los expresados actos y documentos presten mérito ejecutivo deben estar otorgados y escritos con las formalidades legales, y registrados, además, los que deban serlo conforme á las leyes.

Este artículo subroga al 1011 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 338 de esta ley.

Art. 181. El decreto ó auto de ejecución deben contener:

1.° La orden de pago por la vía ejecutiva, con expresión de la cantidad líquida de la deuda; y

2.° La intimación al deudor de nombrar oportunamente depositario y un avaluador de los bienes que haya lugar á embargarle, con advertencia de que si no los nombra en el acto de la notificación, ó nombra á individuos ausentes, ó que no quieran ó no puedan aceptar, los nombrará el Juez de la causa, ó el comisionado en su caso.

Este artículo subroga al 1015 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 338 de esta ley. La diferencia entre este artículo y el 1015 consiste en que en el ordinal 2.° del presente se dice: " .... y un avaluador de los bienes;".... y en el del Código: " ....y avaluadores de los bienes.... "

Art. 182. Cuando la obligación que se ha de ejecutar sea de entregar una cosa determinada, el acreedor, al pedir la ejecución, debe estimar con juramento los perjuicios que se le causen en el caso de no entrega de la cosa; y el Juez dispondrá:

1.° Que el ejecutado entregue en el acto la cosa que se le demanda;

2.° Que si no la entrega, estando en su poder, se embargue y deposite la misma cosa, y además, bienes suficientes para cubrir las costas; y

3.° Que si la cosa no está en poder del ejecutado, se embarguen

bienes bastantes para cubrir el valor de los perjuicios que se causen por la no entrega de aquélla.

Si la cosa está en poder de un tercero se puede proceder al embargo de ella si el ejecutante da fianza para responder de los perjuicios que se le sigan al verdadero dueño de la cosa, si llega á declararse que pertenece á dicho tercero.

188 y comentario, 189 á 198.
Este artículo subroga al 1017 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 338 de esta ley. La diferencia entre los dos artículos se refiere al ordinal 3.°

Art. 183. La fianza de saneamiento se constituirá en el mismo expediente del juicio ejecutivo, por medio de una diligencia ó acta en la cual se expresará todo lo que sea del caso, firmada por el Juez, el fiador y el Secretario del Juzgado.

187.—1027, ordinal 4.° del Código Judicial.

Art. 184. El fiador de saneamiento de que habla el ordinal 4.° del artículo 1027 del Código Judicial, se prestará á satisfacción del Juez que conoce del juicio, quien exigirá las comprobaciones necesarias que acrediten que en el fiador concurren los requisitos que prescribe el Código Civil.

2376 del Código Civil.

Art. 185. La fianza de saneamiento tiene por objeto que se estimen suficientes los bienes presentados ó denunciados, y que, en consecuencia, no se embarguen más bienes del deudor, á menos que el acreedor presente una prueba que justifique la insuficiencia de aquellos bienes. En este caso se procederá á embargar inmediatamente los nuevos bienes que en cualquier tiempo se denuncien, y embargados, se decidirá, previa una articulación, sobre la suficiencia de los bienes primeramente presentados ó denunciados.

186, 187, 220 y 244.—1079 y 1080 del Código Judicial.
Este artículo subroga al 1028 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 338 de esta ley.

Art. 186. El fiador de saneamiento responderá de que los bienes presentados ó denunciados son propios del deudor, y de que, con su producto, deducidos los gravámenes que tenga, se pagan la deuda y las costas.

185 y 187.—1079 y 1080 del Código Judicial.
Este artículo subroga al 1041 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 338 de esta ley.

Art. 187. Cuando se haya prestado fianza de saneamiento y resulte que los bienes á que ella se refiere no son propios del deudor, ó que con su producto no se cubren la deuda y las costas, con copia de la diligencia ó acta de la fianza y de todo lo que fuere conducente del juicio ejecutivo, á instancia del acreedor, podrá procederse ejecutivamente contra el fiador por el descubierto que quedare, cesando el procedimiento contra el principal deudor, salvos, empero, los derechos del fiador para cobrar del ejecutado lo que por él pagare.

183, 185 y 186.—1079 y 1080 del Código Judicial.
Este artículo subroga al 1080 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 338 de esta ley.

Art. 188. Si el ejecutado no paga ni presenta bienes suficientes

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

para cubrir la deuda y las costas, prestando la correspondiente fianza, el Juez procederá á embargar, depositar y hacer avaluar los bienes que el acreedor, jurando no proceder de malicia, denuncie como de propiedad del deudor, en caso que los bienes se hallen en poder de éste.

182 al fin.—Véase el artículo 1034 del Código Judicial y la observación.

Este artículo subroga al ordinal 6.° del artículo 1027 del Código Judicial, ordinal que se derogó expresamente por el 338 de esta ley.

Por este artículo no se prohibe, en absoluto, el embargo, depósito y avalúo de los bienes que se hallen en poder de tercera persona; lo que sin duda se ha querido es que no se proceda según la regla general consignada en el ordinal 5.° del artículo 1027 del Código Judicial, sino conforme á los artículos 189, 191, 192 y 193 de esta ley.

Art. 189. Si al tiempo de verificarse el depósito de los bienes denunciados por el ejecutante ó manifestados por el ejecutado se hallaren en poder de otro que los reclama como suyos—reclamación que puede ser verbal—se dejarán en su poder embargados y en calidad de depósito. Cuando esto suceda, si el ejecutante insiste en seguir la ejecución sobre dichos bienes, lo manifestará dentro de seis días, y al mismo tiempo presentará un fiador solidario, que reúna las condiciones de que habla el artículo 103 de esta Ley, para que responda de los perjuicios que haya de sufrir el tercer poseedor de los bienes á virtud del embargo y de las gestiones consiguientes, en el caso de que se declare que tales bienes pertenecen á dicho poseedor. Si dentro de los mencionados seis días el ejecutante no hiciere la manifestación de insistencia, ó no constituyere la fianza en el término de otros seis días, se desembargarán los bienes y terminará el depósito.

21, 190 á 198, 204, 217 y 218.

Este artículo y los nueve siguientes: 190 á 198, subrogan á los 1031, 1032 y 1034 del Código Judicial. Estos se derogaron expresamente por el 338 de esta ley.

La presente disposición es favorable á los intereses del ejecutante, pues permite que se embarguen y depositen los bienes que se hallen en poder de tercero; y al mismo tiempo favorece los derechos de éste, mediante la prestación de la fianza. El artículo 1034 del Código Judicial, que se ha derogado como hemos dicho, decía:

"Cuando se denuncien bienes que no se hallaren en poder del ejecutado, deberá *comprobarse* sumariamente la propiedad que en ellos tenga éste para que se decrete el embargo."

El tenedor de los bienes, en cuyo poder se dejan embargados y depositados, debe entregarlos, si fuere vencido, con todas sus accesiones y frutos: Código Civil, artículos 2253, segundo inciso, 2274 y 2264.

Art. 190. El tercer poseedor de que se habla hará valer sus derechos, con arreglo á las leyes, dentro de los treinta días siguientes al en que el ejecutante haya constituído la fianza; y en el caso que tenga que promover juicio de tercería, á virtud de lo dispuesto en el artículo 204, lo promoverá dentro de los seis días siguientes á la ejecutoria del auto que decide la articulación.

Dicho tercer poseedor no está obligado á dar fianza de costas en el juicio de tercería que promueva.

189, 196, 204, 217, 218, 103 y 191.

Art. 191. Si el ejecutante insistiere en la ejecución, á solicitud de éste ó del ejecutado, se dispondrá que el tercer poseedor dé un fiador de las condiciones yá dichas, dentro de seis días, que responda de que el poseedor entregará los bienes como se hallaban cuando se procedió al embargo, si se declara que no le pertenecen.

Si los bienes fueren fungibles, la fianza será de devolver otros tantos bienes de la misma calidad y en la misma cantidad que los embargados.

Si el poseedor no diere el fiador, se entregarán los bienes á un depositario que nombrará el Juez.

189.

Este artículo subroga al 1032 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 338 de esta ley.

Tanto el ejecutante como el tercer poseedor deben, pues, dar fianza: aquél para responder de los perjuicios que haya de sufrir el tercer poseedor, en conformidad con lo que dispone el artículo 189: y éste para asegurar la conservación de los bienes que se dejan en su poder embargados y depositados. Por olvido se omitió extender la responsabilidad del fiador á los frutos de los bienes.

Art. 192. Si al tiempo de verificarse el depósito de los bienes se hallaren en poder de otro que diga tenerlos como dependiente, mayordomo ó administrador de una persona distinta del ejecutado, ó á nombre de esta misma persona distinta, como arrendatario, usufructuario, comodatario, etc., se mantendrá el embargo decretado, la cosa se depositará provisionalmente en la persona en cuyo poder se halla, y se ordenará la citación del poseedor de ella para que se presente á hacer valer sus derechos.

El mismo procedimiento se observará cuando los bienes denunciados fueren raíces y se hallaren en poder del deudor mismo, si éste presenta prueba sumaria y suficiente de que es mero tenedor de dichos bienes.

21, 189 y 193.

Los frecuentes despojos que se han verificado á virtud de juicios ejecutivos seguidos entre personas de mala fe, que obraban de acuerdo, determinaron al legislador á adoptar este artículo.

Art. 193. La citación de que habla el artículo precedente se verificará por boletas de citación, escritas en papel común, autorizadas por el Juez y el Secretario. Una boleta se entregará á la persona en cuyo poder se halle la cosa; otra se enviará por un Agente de Policía, ó por el correo, al individuo que se haya designado por dicha persona como poseedor de la cosa, y otra boleta se dirigirá á cualquier miembro de la familia del mismo poseedor, de que se tenga noticia. Vencidos seis días después de la expedición de las boletas, hecho de que dejará constancia el Secretario en el expediente, se verificará el depósito de los bienes en la persona del depositario nombrado por el ejecutado, si dicho tercer poseedor no se hubiere presentado á hacer valer sus derechos.

Art. 194. Si el mencionado poseedor se presentare en cualquier tiempo, antes del remate, y reclamare como suyos los bienes embargados, se procederá como se dispone en los artículos 189 á 191.

192, 196, 204.

Art. 195. El verdadero poseedor de los bienes embargados y depositados, á quien no se hubiere citado por ignorarse su existencia, también puede presentarse en cualquier estado del juicio ejecutivo, antes del remate, á fin de hacer efectivos los derechos de que hablan los artículos anteriores; pero debe presentar, para ser oído, una prueba sumaria y suficiente que acredite que era poseedor regular de tales bienes el día que se decretó el embargo de ellos.

189 á 191, 196 y 204.

La presente disposición se refiere á un caso distinto del de que tratan los artículos 189, 192 y 194, y tiene por objeto prescribir que el reclamante exhiba

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

una prueba sumaria que acredite que es poseedor de los bienes, una vez que, no habiéndose hallado en su poder al tiempo del depósito, no puede considerársele tál por faltar la presunción que se funda en la circunstancia de la tenencia.

Art. 196. A solicitud del poseedor regular de un inmueble embargado en una ejecución, el Juez decretará el desembargo, la cancelación de la respectiva diligencia y la entrega del inmueble al reclamante—si aún no se hubiere rematado—si el poseedor presenta el título registrado y el certificado mencionados en el artículo 111.

En este caso debe constar, además, que la fecha del registro actual es anterior á la del denuncio del inmueble por el ejecutante, ó á la de la manifestación del mismo por el ejecutado, sin lo cual el Juez no decretará el desembargo.

188 y comentario, 189, 190, 194, 195, 197, 198 y 204.—764 del Código Civil.

El poseedor de los bienes embargados que presenta "el título registrado," es decir, el *correspondiente* título registrado; que prueba, además, que está en vigor el registro á que se refiere el título, y que las inscripciones anteriores, relativas á un período de diez años, se han cancelado debidamente; ó que la última inscripción cancelada es anterior á la actual en diez años; ó que la fecha del título que exhibe es de veinte años, sin que haya habido cancelación alguna durante este tiempo, es un poseedor en quien concurren las más fuertes presunciones de que es legítimo; no hay razón, pues, para que á virtud de denuncia del ejecutante, ó de manifestación hecha por el ejecutado, se mantengan embargados los bienes de quien con fundamento es estimado poseedor legítimo.

Exígese también que la fecha de la última inscripción sea anterior á la de la denuncia del ejecutante, ó manifestación del ejecutado, porque de no serlo se presume que el contrato que ha dado ocasión á la nueva inscripción es simulado, y dirigido á hacer ilusorios los derechos del ejecutante.

Art. 197. En el caso del artículo anterior pueden, tanto el ejecutante como el ejecutado, promover demanda contra el tercer poseedor, en el mismo juicio ejecutivo, á fin de que por sentencia se declare que dicho poseedor no es dueño del inmueble que ha reclamado. La expresada demanda se sustanciará por los trámites de la vía ordinaria, y si se dictare sentencia de primera instancia en contra del poseedor, se procederá al embargo del inmueble; pero se dejará depositado en poder del mismo poseedor si así lo pidiere éste, previa la fianza de que habla el artículo 191.

Si el poseedor no hiciere después de seis días de notificada la sentencia la reclamación indicada, ó no diere la fianza dentro del término que el Juez fije, se depositará el inmuble en un depositario nombrado por el Juez.

Ejecutoriada la sentencia de última instancia, si fuere contraria al poseedor se procederá al remate del inmueble, si fuere el caso, previo el embargo y depósito del mismo, si por haber sido favorable al poseedor la sentencia de primera instancia no se hallare embargado y depositado aquél.

Este artículo tiene por objeto amparar los legítimos intereses del ejecutado y ejecutante en el caso de que las presunciones favorables al tercer poseedor, que son el fundamento de la disposición que precede, se hallen infirmadas por una prueba plena; y ampararlos sin perjuicio del derecho que tiene el tercer poseedor á que se le reconozca el carácter de *demandado*, que es el que debe tener, pues ha habido injusticia y error en obligarlo, como se le ha obligado, á defender sus derechos como *demandante*, en juicio de tercería, á virtud del embargo de sus bienes decretado en un juicio ejecutivo simulado.

Art. 198. Si la sentencia de primera instancia fuere contraria al poseedor y favorable á otra persona distinta del ejecutado, que se haya

hecho parte en el juicio, no se verificarán el embargo y depósito mencionados, ni se rematará la finca, si en la sentencia de última instancia se reconociere á dicha persona ó á otra, que no sea el ejecutado, derecho á la misma cosa.

Art. 199. La reclamación de que trata el artículo 1019 del Código Judicial puede hacerse desde que se notifique al deudor el auto de ejecución. Si se hiciere, se formará cuaderno separado y no se suspenderá el curso del juicio en lo principal.

Art. 200. Cuando en un juicio ejecutivo se haya embargado una finca raíz, se dará al público conocimiento del embargo por medio de un edicto que se fijará en la Secretaría del Juzgado, en el mismo paraje destinado para la fijación de los edictos de que habla el artículo 223 de esta Ley. En dicho edicto se expresará lo siguiente: el juicio ejecutivo en que se ha decretado el embargo, los nombres de las partes, la situación del inmueble embargado, sus linderos y su nombre, si fuere conocido. En el mismo edicto se citará á los que se crean con derecho al inmueble para que se presenten á hacerlo valer en juicio de tercería. El edicto permanecerá fijado durante treinta días, y copia de él se publicará por tres veces en el periódico oficial del respectivo Departamento, á partir de la fijación del edicto.

Durante los treinta días de que habla el inciso anterior, no se suspenderá el curso del juicio ejecutivo, pero no se verificará el remate antes del vencimiento de dicho término.

1042, ordinal 3.°, del Código Judicial.

Véase en la *Codificación Nacional*, Tratado quinto, el comentario del artículo 187 de orden.

Art. 201. Embargada una finca en un juicio es prohibido embargarla en uno distinto mientras subsista el embargo primitivo, y si se embargare, es nulo *ipso jure* el último embargo.

88 y comentario, 223.—1027 ordinal 5.°, 1048 á 1051 del Código Judicial.

Art. 202. Cuando una ejecución se libre en virtud de cualquiera de los documentos expresados en los tres primeros números del artículo 179 de esta Ley, no serán admisibles otras excepciones que la de nulidad y las que provengan de hechos que hayan sobrevenido después del pronunciamiento de la sentencia ó del auto de cuya ejecución se trate. En los demás casos el ejecutado puede oponer, además de las excepciones de que trata el artículo 1053 del Código Judicial, como excepción perentoria, todo hecho en virtud del cual las leyes desconocen la existencia de la obligación ó la declaran extinguida si alguna vez existió.

52.

Este artículo subroga al 1054 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 338 de esta ley.

Art. 203. En cualquier estado del juicio se puede articular sobre el pago, ó el cumplimiento de la obligación, exhibiéndose el documento en que conste el hecho. Si se declara no probado el pago, ó el cumplimiento de la obligación, se condenará en costas al ejecutado, quien no podrá proponer sobre ello nueva articulación.

1053 ordinal 7.° del Código Judicial.

Art. 204. Toda persona distinta de la ejecutada puede reclamar como suyos, sumariamente, los bienes de su pertenencia que hayan

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

sido embargados en una ejecución. Tal solicitud se sustanciará como articulación, dando traslado tanto al ejecutante como al ejecutado. Si el articulante probare plenamente su derecho se desembargarán los bienes; si no lo probare, continuarán embargados, pero podrá reclamarlos en juicio de tercería. Los bienes de que se habla pueden ser nuevamente denunciados en la misma ejecución, si con posterioridad á la decisión del artículo hubieren sido adquiridos por el ejecutado, y serán embargados siempre que el denunciante presente la prueba que la ley requiere para acreditar la adquisición del dominio de la cosa de que se trate. Lo anteriormente dispuesto es sin perjuicio de lo que establece el artículo 196 de esta Ley.

217 á 219.

El artículo 196 es especial: se refiere al caso de que lo embargado sea un inmueble poseído por tercera persona, y que respecto de la posesión concurran los requisitos que menciona el artículo 111.

Art. 205. La simple sentencia de pregón y remate en juicio ejecutivo, y la en que se declaren probadas ó nó las excepciones propuestas en el mismo juicio, no fundan la excepción de cosa juzgada en vía ordinaria.

1055, 1056, 827, 831 y 1087 del Código Judicial.

Art. 206. Cuando el ejecutante ó alguno de los opositores hagan postura en el remate de alguna cosa por cuenta de su crédito, lo cual sólo puede hacer hasta la concurrencia de éste, deberá otorgar, á satisfacción del Juez, *la fianza de acreedor de mejor derecho*. Esto tiene lugar, respecto del ejecutante, cuando hay otro ú otros opositores á quienes pueda perjudicar el pago. Dicha fianza consiste en obligarse el fiador, de mancomún con el principal, á pagar al acreedor de mejor derecho, según lo que resulte de la sentencia. En el caso de este artículo, el acreedor que haya verificado el remate abonará al deudor, desde el día que reciba la cosa rematada, el mismo interés que éste debe pagarle.

Lo dispuesto en este artículo es aplicable al juicio de concurso de acreedores.

207.—1069, 1070 y 1073 del Código Judicial.

Art. 207. En todo remate celebrado en juicio el postor deberá, para que su postura sea admisible, consignar el cinco por ciento del avalúo dado á la finca.

El rematador que no cumpliere con las obligaciones que le imponen las leyes, perderá el cinco por ciento consignado. La mitad de este cinco por ciento pertenecerá al ejecutante, á quien se entregará inmediatamente. La otra mitad acrecerá á los bienes del ejecutado destinados para el pago, y también se entregará al ejecutante, con imputación á los intereses devengados y previa la respectiva liquidación que hará el Juez de la causa. Si no hubiere intereses, ó si sobrare algo de esta mitad después de cubiertos los intereses vencidos, se imputará dicha mitad ó la parte sobrante, al principal de la obligación por que se ha ejecutado, y si aún sobrare algo, se entregará al ejecutado.

206.—1069, 1070, 1073 y 1075 del Código Judicial.

El presente artículo no es incompatible con lo estatuído en los artículos 1075 á 1077 del Código Judicial.

Art. 208. Si el postor no verificare el remate quedará libre de las

obligaciones que contrajo para poder hacer postura, y por lo mismo se devolverá el cinco por ciento que tenía consignado.

Art. 209. Si el postor verificare el remate y llenare sus condiciones en la forma legal, se imputará en parte del pago el cinco por ciento consignado.

Art. 210. Todo remate se verificará dentro de la hora que, conforme á lo establecido en el artículo 1066 del Código Judicial, se haya fijado, como la última para admitir posturas; no debiendo esperarse á que llegue el instante final de ella. En dicha hora se admitirán pujas y repujas, y el Juez adjudicará el remate en el momento que á bien tenga, *dentro* de la hora, anunciando previamente que va á adjudicarlo.

66 y comentario.

Esta disposición tiene por objeto impedir que los postores difieran su postura definitiva para el momento preciso en que termina la hora designada para admitirlas, como se ha practicado, pues ello producía el inconveniente de que si distintos postores hacían en dicho momento, y simultáneamente, postura por una misma cantidad, fuera imposible la adjudicación del remate.

Art. 211. En el mismo día en que deba verificarse un remate se anunciará éste por medio de dos pregones preparatorios, que se darán dos horas antes de aquélla en que debe celebrarse, y con intervalo de una hora entre cada pregón. Llegada la hora de la celebración se anunciará ésta, la postura que se haga y cada una de las pujas sucesivas por medio de pregones, como también la adjudicación del remate.

1061 del Código Judicial.

Art. 212. En los juicios ejecutivos los Jueces deberán ordenar, en el mismo auto en que se apruebe el remate, que se cancele el registro del embargo de la finca que se hubiere rematado; y comunicarán la orden de cancelación al respectivo Registrador en los propios términos que para el registro del embargo, con la sola variación que exige la naturaleza de la diligencia.

1071 del Código Judicial.

Art. 213. Se reconoce derecho á promover juicio de reivindicación al dueño de los bienes que han sido rematados en una ejecución, siempre que quien se presente como reivindicador no sea la persona contra la cual se haya seguido el juicio ejecutivo ó que derive sus derechos de ésta, conforme al artículo 846 del Código Judicial; ni la que haya sostenido en la misma ejecución juicio de tercería excluyente, si ha sido vencida en él, salvo que el título que alegue sea diferente del debatido en el juicio de tercería, conforme al artículo 271 del Código.

Si en la sentencia que se pronuncie en el juicio de reivindicación se reconoce al demandante derecho á tales bienes, le serán entregados, háyase devuelto ó nó el precio del remate.

114, segundo inciso, 217, segundo inciso, 231.—871, 1081 y 1082 del Código Judicial.

Preciso es reflexionar sobre la doctrina de este artículo para hallarlo justo y razonable, pues su primera lectura sugiere naturalmente estas preguntas: ¿Cómo es posible que seguido un juicio ejecutivo por todos sus trámites, verificado válidamente el remate de los bienes embargados en el mismo juicio, y pagado su precio, pueda el rematador ser condenado á entregarlos al reivindicador? sobre todo ¿por qué obligar al rematador á que entregue los bienes sin que se le devuelva previamente el dinero que dio por ellos?

Estos conceptos son sin duda la expresión de un sentimiento de justicia, pero carecen de fundamento sólido. Un remate no es otra cosa que una venta

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

decretada y autorizada por el Juez, y así como en las transacciones particulares los compradores deben cerciorarse de que adquieren del verdadero dueño aquello que compran, lo mismo deben hacer cuando pretenden rematar alguna cosa, pues la ley dice—Código Civil, artículo 741—que en las ventas forzadas que se hacen por decreto judicial, el Juez no es sino el *representante* legal del tradente, es decir, de la persona cuyo dominio se transfiere, por lo cual la intervención de la autoridad y la aprobación que la misma imparte al remate son circunstancias que no ofrecen seguridad de que los bienes que se rematan no pertenecen á persona distinta del deudor; y, sin embargo, esas circunstancias infunden siempre una ilimitada y general confianza. Repárese, no obstante, que en las ventas por remate, además de los medios que está en la mano del rematador emplear para su seguridad, se presume que los bienes que se rematan son del deudor, pues el haberlos embargado y depositado—lo cual, hoy más que nunca, es un hecho de completa notoriedad: véanse los artículos 21, 192, 200 y 223 de esta ley;—los anuncios del remate, por la imprenta y por pregones, y el haberse decidido desfavorablemente las tercerías excluyentes que se hayan introducido, son hechos que constituyen una fuerte presunción favorable para el rematador, en el sentido de que no habrá quien se presente á reivindicar los bienes rematados. ¿Quién, si lo hay, aguardará á que los bienes se rematen para reivindicarlos mediante un juicio ordinario? Sin embargo, hay casos, á la verdad raros, en que se rematan bienes que son de la pertenencia de persona distinta del deudor, y si tal persona se presenta á reivindicarlos y prueba que le pertenecen ¿por qué no dictar sentencia á su favor? En las transacciones que celebran los particulares rige el principio de que la venta de cosa ajena vale, *sin perjuicio* de los derechos del dueño de la cosa vendida, mientras no se extingan por el transcurso del tiempo (artículo 1871 del Código Civil). ¿Por qué el verdadero dueño de una cosa que se remata en un juicio en que no es parte, no ha de ser amparado por esta disposición civil?

Se dirá: está bien que se reconozcan los derechos del reivindicador, pero el rematador no debe ser privado de la posesión de los bienes sin que preceda la devolución del precio del remate. ¿Por qué? Que debe devolverse al rematador el precio del remate, es no sólo incontrovertible, sino de estricta justicia; pero que se difiera la entrega de los bienes al reivindicador mientras no se verifique la devolución del precio, es cosa de todo punto inaceptable, porque el reivindicador no ha recibido dicho precio, ni puede ser responsable de él.

Se dirá aún: ¿por qué el perjudicado ha de ser el rematador más bien que el reivindicador? La respuesta es obvia, y está indicada yá, porque aquél ha pedido y debido, antes de rematar los bienes, cerciorarse de que pertenecían al deudor ejecutado ó concursado, como lo habría hecho ó debido hacer si fuera de juicio hubiera pretendido comprarlos á quien se los ofrecía con el carácter de legítimo dueño; mientras que al reivindicador no le es dable tomar providencias preventivas respecto de un juicio clandestino que se dirija á arrebatarle lo suyo, y además, porque al reivindicador lo ampara el citado artículo 1871 del Código Civil.

Admítase por un momento que no existiera este artículo, ni tampoco el que es objeto del presente comentario; y antes bien, que la ley dispusiera que el rematador conservara los bienes embargados mientras el reivindicador no le pagara su precio, ¿no sería esto condenar al reivindicador á comprar sus propios bienes, cuando él no es culpable de que se hayan sacado á remate? ¿no se haría ilusoria la sentencia dictada á su favor en el juicio de reivindicación? Por otra parte, si para recuperar nuestros bienes hubiéramos de comprarlos, considérese cuán grande no sería el alarma en que todos viviríamos, con el temor de vernos desposeídos de lo nuestro en la hora menos pensada, mediante un juicio seguido clandestinamente; cuánto no se multiplicarían las ejecuciones simuladas, y á cuántos artificios y procedimientos ilícitos no se ocurriría para adquirir judicialmente los bienes ajenos.

Perfectamente razonable y justa es, pues, la disposición á que se refiere este comentario.

Art. 214. Es nulo el remate de bienes no depositados en la forma legal; pero se presume, para los efectos de este artículo, que el depósito se verificó debidamente, si en la respectiva diligencia se expresa que se hizo entrega real de los bienes al depositario.

TERCERÍAS EN LOS JUICIOS EJECUTIVOS

ADVERTENCIA.—Los artículos 1116 á 1124 del Código Judicial, que versan sobre *Tercería en los juicios ejecutivos*, se derogaron por el 338 de esta ley, y se subrogaron por estos: 196, 204, 215 á 246 de la presente.

Art. 215. Es tercería coadyuvante la petición que hace un tercero para que con el producto de los bienes embargados en una ejecución se le cubra un crédito que da acción personal sobre el ejecutado, ó real sobre dichos bienes.

222, 233, 234 y 236.

Art. 216. Después de admitida una tercería coadyuvante puede el ejecutante introducir las que estime convenientes para obtener el pago de aquello que el ejecutado le deba, y lo cual no esté comprendido en la ejecución.

225.

Art. 217. Es tercería excluyente la petición que hace un tercero para que se declare que tiene mejor derecho que el ejecutado, el ejecutante y demás opositores, al dominio de alguno ó algunos de los bienes embargados. También pueden reclamarse, en esta forma, los derechos que limitan el dominio de una finca que se ha embargado como libre de ese gravamen.

Asimismo puede reclamarse por medio de una tercería excluyente el valor de los bienes que hayan sido rematados, probándose derecho á dichos bienes. Si lo que se reclamare fuere un derecho diferente del dominio, justificada debidamente la acción, se mandará pagar, con el producto de los bienes, lo que por peritos se asigne como valor de tal derecho; todo sin perjuicio de la reivindicación.

228, 231, 213, 222, 233, 234 y 236.

Art. 218. Las tercerías pueden intentarse inmediatamente después de verificado el embargo de bienes; y cesa el derecho de intentar las coadyuvantes cuando se ha hecho el pago al acreedor con el producto de los bienes rematados.

221.

Art. 219. Para que sea admitida una tercería coadyuvante ó excluyente, es preciso que se haga por escrito, en el papel correspondiente y en la forma que la ley prescribe para toda demanda en juicio ordinario, debiendo el opositor acompañar á su demanda de tercería el documento ó la prueba en que funda su oposición.

227.—265, 932 del Código Judicial.

Art. 220. Cuando en un juicio de ejecución se admitan tercerías excluyentes ó coadyuvantes, el ejecutante recobra el derecho que al practicarse las diligencias ejecutivas tiene según el artículo 1027 del Código Judicial y los anteriores al presente, para denunciar más bienes de la pertenencia del ejecutado, á menos que se constituya nueva fianza de saneamiento.

185, 244.

Art. 221. El derecho de intentar tercería excluyente cesa respecto

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

de los bienes yá rematados, sin perjuicio del derecho que consagra el artículo 213 de esta misma Ley.

217, segundo inciso, 218.

Art. 222. Admitida la demanda de tercería se dará traslado de ella al ejecutado, al ejecutante y á los terceristas que hubiere, cuando las oposiciones de éstos se refieran á unos mismos bienes.

El término del traslado es de tres días, tanto para el ejecutado como para el ejecutante; pero si yá hubiere uno ó más terceristas, el término del traslado será uno común de seis días.

233, 234 y 236.

Art. 223. Admitida la primera tercería coadyuvante se dará al público conocimiento de su admisión por medio de un edicto, que se fijará en la Secretaría del Juzgado, en un lugar destinado especialmente para la fijación de los edictos de esta clase. En dicho edicto se hará mención del juicio ejecutivo en que la tercería se ha introducido, con expresión de los nombres de las partes. El edicto permanecerá fijado durante noventa días, y copia de él se publicará por seis veces en el periódico oficial del Departamento, dentro de los mismos noventa días.

Es entendido que conforme á este artículo es uno solo el edicto que debe fijarse y publicarse, admitida que sea la primera tercería coadyuvante, y no tantos edictos cuantas tercerías se vayan introduciendo.

200.

Véanse en la Codificación Nacional, Tratado quinto, los comentarios relativos á los artículos 187 y 221 de orden.

Art. 224. Durante la fijación y publicación del edicto de que trata el artículo anterior no se suspenderá el curso del juicio ejecutivo; pero se diferirá el pago á los acreedores con el producto de los bienes rematados mientras no se haya vencido dicho término, verificado la publicación del edicto y dictado sentencia de prelación que se halle ejecutoriada.

A las tercerías que se introduzcan se les dará el curso legal aunque se esté dentro del término de la fijación del edicto, sin perjuicio de lo que dispone el artículo 800 del Código Judicial.

236 y citas.

Art. 225. Transcurridos los noventa días de que habla el artículo 223, no se admitirá tercería coadyuvante alguna que se funde en documento ó prueba de fecha posterior al auto de ejecución.

216.

Art. 226. Para los efectos del artículo que precede se dará cumplimiento á lo que dispone el artículo 1762 del Código Civil, respecto de la manera de estimar la fecha de los instrumentos privados con relación á terceros.

Art. 227. Cuando la tercería fuere excluyente, la prueba en que aquélla se funde debe ser el título ó documento que, conforme á la ley civil vigente cuando se adquirió el dominio de la cosa que se reclama, ó el derecho en ella, era necesario para adquirir el dominio de la cosa, ó el derecho cuyo reconocimiento se pide.

219.

Art. 228. Cuando el decreto de ejecución se dirija contra una finca hipotecada, no se admitirá tercería excluyente que se apoye en documento de fecha posterior á la de la escritura que sirvió de base al auto ejecutivo.

229 y 230.

Art. 229. El que se crea con derecho de dominio á una finca hipotecada que se persigue como tál, y fundare su derecho en una escritura de fecha posterior á la en que se constituyó la hipoteca, podrá presentarse en el juicio, mientras no se haya verificado el pago al acreedor, y proponer la excepción de nulidad de la escritura de hipoteca, ó del registro, ó de la anotación, ó del contrato que aquélla reza. Esta excepción se substanciará como toda articulación.

Art. 230. La excepción de nulidad de que habla el artículo anterior no se admitirá si yá hubiere sido opuesta por el ejecutado, y fallada por sentencia ejecutoriada; pero el que se crea con derecho de dominio puede hacerse parte en el incidente á que haya dado lugar la excepción de nulidad opuesta por el ejecutado, sea cual fuere el estado de dicho incidente, y sin retrotraer los términos. Sin embargo, si la excepción de nulidad opuesta por el ejecutado se hubiere resuelto negativamente, por falta de prueba, dicha tercera persona tiene derecho á proponer la misma excepción.

Art. 231. Además de las personas mencionadas en el artículo 871 del Código Judicial, quienes no pueden hacer tercería cuando se trate del cumplimiento de una sentencia, tampoco podrán hacerla las personas á quienes se refieren los artículos 846 y siguientes del título IV, Libro II de dicho Código.

114, segundo inciso, y 213.

Art. 232. El auto en que se admita una tercería es apelable en el efecto devolutivo, y en el que se niegue, lo es en ambos efectos.

Las apelaciones de que habla el inciso que precede en nada afectan la continuación del juicio ejecutivo.

234.

Art. 233. Son partes en una tercería, el opositor que hace las veces de demandante, y el ejecutante y el ejecutado, que hacen las veces de demandados, quienes pueden estar representados por los apoderados constituídos para el juicio ejecutivo.

108 y 190, segundo inciso, 222, 234 y 236.

De manera que no se necesita poder expreso para que tales apoderados representen á sus respectivos poderdantes en juicio de tercería.

Art. 234. El auto en que se haya admitido una tercería se notificará personalmente al ejecutante, al ejecutado, al que hizo la oposición y á los demás opositores admitidos, que tengan interés en unos mismos bienes, procediéndose, según el caso, conforme á los artículos 222 y 223 de esta Ley. El auto en que se niegue una tercería se notificará, como en los casos comunes, considerándose ésta como un incidente del juicio ejecutivo.

232 y 236.

Art. 235. Admitida una tercería, si las demás partes manifiestan dentro de cuarenta y ocho horas después de la notificación su conformidad con la pretensión del opositor, se procederá á dictar sentencia, previa citación, si fuere única la tercería; pero si yá hubiere otra ú otras, la nuevamente introducida se acumulará á ellas y seguirá el curso de éstas.

237.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

Art. 236. Toda tercería se substanciará por los trámites del respectivo juicio ordinario, y este mismo procedimiento se seguirá aunque haya dos ó más tercerías.

222, 232 á 235.

Art. 237. Todas las tercerías que se introduzcan, coadyuvantes ó excluyentes, se acumularán aun cuando alguna ó algunas estuvieren definitivamente resueltas al tiempo en que se introducen nuevas; acumulación que se ordena con el fin de que en la sentencia de prelación ó en la de exclusión, se determinen los derechos de todos y cada uno de los terceristas.

235.

Art. 238. Si en una ejecución de mayor cuantía se hicieren una ó más tercerías de menor cuantía; ó si en una ejecución de menor cuantía se hicieren una ó más tercerías de mayor cuantía, conocerá de las tercerías el respectivo Juez de Circuito.

Art. 239. Cuando en el juicio ejecutivo se embargue una finca raíz, está obligado el ejecutante á presentar, dentro del término que el Juez de la causa le señale, un certificado del Registrador de Instrumentos públicos que acredite la libertad de la finca, ó los gravámenes que tenga.

240 á 243.

Art. 240. Si del certificado resultare que la finca está gravada, el Juez ordenará de oficio que se cite personalmente á los acreedores que tengan constituída hipoteca en dicha finca, emplazándolos para que dentro de un término que prudencialmente fije, comparezcan á hacer uso de su derecho en juicio de tercería.

Art. 241. Sin que conste haberse hecho estas citaciones no se procederá al remate de la finca.

Art. 242. Si no pudieren ser habidos los acreedores para citarlos personalmente, por no saberse su nombre ó por ignorarse su paradero, el Juez dispondrá que se les cite y nombre defensor conforme á las disposiciones generales; verificado lo cual, si no comparecieren oportunamente, se adelantará y concluirá la ejecución con audiencia del defensor.

La cantidad que correspondiere á los acreedores de que se habla se depositará en persona de honradez notoria y con las debidas seguridades, ó en un abonado establecimiento de crédito.

245.

Art. 243. Si citados los acreedores hipotecarios de que se habla no comparecieren ni dentro del término que el Juez les haya señalado, ni antes de hacer el pago al ejecutante, ello no impedirá que en la oportunidad debida se pague á éste y á los demás acreedores lo que se les adeude por principal, intereses y costas. Si alguna cantidad sobrare se tomará la correspondiente á los mencionados acreedores hipotecarios y se depositará de conformidad con lo dispuesto en el último inciso del artículo que precede. De la constitución de este depósito se dará cuenta á los interesados por medio de un aviso que se publicará tres veces en el periódico oficial del respectivo Departamento, y vencidos seis meses, si no se hubiere hecho reclamación alguna por parte de tales acreedores, se entregará el dinero al ejecutado.

Art. 244. El que haga tercería coadyuvante con documento que

preste mérito ejecutivo, tiene derecho para mejorar la ejecución denunciando más bienes del deudor.

185 y 220.

Art. 245. Cuando haya fondos en numerario pertenecientes á una ejecución, y que por consecuencia de una tercería ó de otra causa no pueda pagarse inmediatamente al ejecutante, se depositarán en la persona que ofrezca mayor interés y mayores seguridades. El Juez calificará la caución y si el aseguro no consiste en hipoteca, se puede hacer por una diligencia que se extenderá en los autos y se firmará por el Juez, el Secretario y los que se obliguen. Esta diligencia tendrá fuerza de escritura pública.

En igualdad de seguridades se preferirá la persona que ofrezca mayor interés; y en igualdad de interés preferirán las mayores seguridades. En igualdad de circunstancias serán preferidos los acreedores. Para hacer estas imposiciones el Juez mandará fijar carteles, con tres días por lo menos de anticipación, en la puerta del Juzgado y en otros parajes de los más públicos, en que se indique el día y la hora en que deba hacerse el depósito.

Art. 246. Si el ejecutante desiste del juicio, no terminan las tercerías coadyuvantes intentadas si se fundan en un documento que preste mérito ejecutivo. En este caso, si es una sola la tercería, se considerará al tercerista como ejecutante, y se citará al ejecutado para sentencia de pregón y remate. Si hubiere dos ó más tercerías, éstas continuarán su curso legal, y dictada sentencia de prelación se procederá al cumplimiento de ella. Aunque no preste mérito ejecutivo el título en que los terceristas funden su oposición, las tercerías continuarán su curso legal si se hubiere dictado sentencia de prelación y en ella hubieren sido reconocidos los derechos de los terceristas. En todos los casos en que las tercerías no terminan á virtud de la desistencia del juicio, pueden los terceristas pedir el remate de los bienes embargados.

820 del Código Judicial.

TÍTULO XII

JUICIO DE SUCESIÓN POR CAUSA DE MUERTE

CAPÍTULO PRIMERO

Diligencias judiciales para evitar el extravío ó la pérdida de los bienes hereditarios.

Art. 247. Los Jueces de Circuito y de Distrito municipal darán cumplimiento á lo que dispone el artículo 1237 del Código Judicial cuando de cualquier modo lleguen á su noticia los hechos de que trata el mismo artículo, sin que sea necesario que preceda denuncio del Agente del Ministerio público.

1.° á 5.° de la Ley 124 de 1[illegible], sobre sucesión abintestato de extranjeros.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

CAPÍTULO SEGUNDO

Petición de herencia.

Art. 248. Todo el que se crea con derecho á los bienes de una herencia, haya sido ó nó declarada yacente, puede hacerlo valer sumariamente ante el respectivo Juez de Circuito. El solicitante deberá presentar la prueba que acredite la defunción de la persona á quien pretende heredar, y las pruebas en que funde su pedimento. El Juez, oído el concepto del Ministerio público, hará la declaratoria de heredero, sin perjuicio de tercero, si de los documentos presentados aparece comprobado que lo es.

En las sucesiones *ab intestato*, deferidas bajo el imperio de la anterior legislación, en ningún caso se reconocerá como herederos á individuos distintos de aquellos á quienes se hubiere deferido la herencia conforme á la misma legislación; lo cual no es contrario á la acción de reforma en las sucesiones testamentarias.

253, segundo inciso.—1246 á 1258 del Código Judicial.
Respecto del segundo inciso de este artículo, véase al fin del Suplemento la parte segunda del Tratado sobre MATRIMONIO.

CAPÍTULO TERCERO

Inventarios y avalúos.

Art. 249. Todo el que tenga acción para pedir la formación de inventarios y quiera ejercitarla se presentará al Juez de Circuito, ó de Distrito competente para conocer del juicio de sucesión, y solicitará que dicho Juez la practique si ha de ser judicial, ó que conceda al solicitante, en caso contrario, la correspondiente licencia para practicarla extrajudicialmente. A dicha solicitud acompañará la prueba de quiénes son los herederos ó sus representantes, y la de la defunción de las personas de cuya sucesión se trate. Estas pruebas pueden consistir en una información sumaria de testigos hábiles.

El presente artículo y el que sigue subrogan al 1260 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 338 de esta ley.

Art. 250. En los juicios de sucesión se practicará inventario judicial cuando entre los herederos hubiere alguno ó algunos que estén ausentes y carezcan de representante; cuando sean menores de veintiún años; ó cuando se hallen en interdicción judicial.

1261 del Código Judicial.
Véase la observación del artículo que precede.

Art. 251. Cuando haya menores sin representante legal en el juicio de sucesión por causa de muerte, bastará que se les nombre, ó que ellos nombren, según el caso, un curador *ad litem*, que intervenga á nombre de los menores en todas las diligencias que se practiquen en dicho juicio.

1261 del Código Judicial.
Véanse en la nueva edición de este Código—año de 1891—las citas relativas al mencionado artículo 1261.

Art. 252. El inventario extrajudicial se practicará ante dos testi-

gos actuarios, nombrados por los herederos presentes ó sus representantes, y por el Juez de la causa en caso de desacuerdo.

Véanse las citas relativas al artículo que precede.

Art. 253. En los inventarios de bienes de persona muerta, se expresarán por separado los que se hallen en manos de tercer poseedor, y el Juez no los mandará entregar á los herederos ó legatarios, mientras no se compruebe sumariamente que pertenecen á la herencia, y oído el tenedor de ellos. Si éste se denegare á entregarlos alegando razón legal suficiente, no se renovará la orden de entrega mientras no se decida el punto judicialmente.

No se incluirán en los inventarios ni estarán sujetos á partición los bienes propios del cónyuge sobreviviente, adquiridos por él durante el matrimonio, si conforme á las leyes vigentes al tiempo de la adquisición vinieron á ser de su propiedad exclusiva.

248, segundo inciso.
Este artículo subroga al 1268 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 338 de esta ley. Véase el artículo 1263 del Código Judicial.

Art. 254. Los acreedores en un juicio de sucesión tienen derecho de concurrir á la formación de los inventarios y avalúos de los bienes de la sucesión cuando presenten título de su crédito, ó cuando los herederos tengan noticia de éste y no lo objetaren.

A efecto de que el partidor cumpla lo que previene el artículo 1393 del Código Civil, se mencionarán en los inventarios los créditos á cargo de la mortuoria, pero únicamente aquellos respecto de los cuales concurra alguna de las circunstancias siguientes:

1.ª Que todos los coasignatarios reconozcan la legitimidad del crédito; ó

2.ª Que el título que presente cada acreedor sea uno de los que la ley requiere para dictar mandamiento de ejecución.

179 y 180.—1261 del Código Judicial.

Art. 255. Los acreedores podrán ejercer sumariamente la acción sobre beneficio de separación de bienes si el título de su crédito prestare mérito ejecutivo. Solicitada la separación se sustanciará una articulación, que se resolverá en vista de lo alegado y probado.

En los demás casos queda expedita á los acreedores la vía ordinaria para obtener el indicado beneficio.

179, 180 y 254.

"... Si el título de su crédito prestare mérito ejecutivo," dice esta disposición; pero no es necesario, conforme al artículo 1436 del Código Civil, "que lo que se deba sea inmediatamente exigible; basta que se deba á día cierto ó bajo condición."

Siendo tan graves para los herederos los efectos del *beneficio de separación*—artículos 1435, 1441 y 1442 del Código Civil—no era razonable decretarlo, como se decretaba, en favor de quien se decía acreedor de la respectiva sucesión, sin presentar título suficiente, ó sin que le reconocieran carácter de tál los herederos; quienes se veían, no pocas veces, ó en la necesidad de promover juicio ordinario contra un supuesto acreedor, á fin de anular los efectos del *beneficio de separación*, ó en la de entrar en arreglos con el fingido acreedor para que se suspendieran los perjuicios de que eran víctimas, y evitarse las molestias de un juicio, en el cual tenían que asumir el carácter de *demandantes*. La presente disposición corta estas dificultades.

Art. 256. Cuando no haya albacea que hubiere aceptado su encargo y que tenga la tenencia de los bienes, y los herederos no estuvieren

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

acordes en cuanto á la administración de ellos, el Juez debe disponer, previa una articulación, que los coasignatarios nombren dentro de tercero día depositario de los bienes de la sucesión. Si no nombraren, ó no estuvieren de acuerdo, lo nombrará el Juez, le dará posesión y le entregará los bienes al hacerse el inventario, ó conforme á él si yá estuviere practicado.

En el caso de este artículo, el Juez entregará los bienes á los herederos cuando todos estuvieren de acuerdo; de nó, los mantendrá en depósito hasta que practicada la partición dicte el auto aprobatorio de que trata el artículo 1291 del Código Judicial.

Art. 257. Cuando por olvido, imposibilidad ó ignorancia de la existencia de bienes en una mortuoria, se promueva por algún interesado ó heredero la formación de un inventario adicional, antes ó después de hecha la partición de los bienes primeramente inventariados, el segundo inventario y avalúo de bienes se verificará por el mismo Juez de la causa, con observancia de las disposiciones que rigen en cuanto á inventarios, sean éstos judiciales ó extrajudiciales.

1271 del Código Judicial.

Art. 258. En los Departamentos donde las mortuorias estén gravadas con impuestos á favor de los mismos ó de una entidad cualquiera, se entiende que la contribución tiene por causa el hecho de la transmisión de los bienes del difunto á los asignatarios, y por consiguiente que el impuesto corresponde, en cada caso, al Departamento en donde se abre la sucesión, sea cual fuere el lugar en donde se hallaren los bienes.

En los juicios de sucesión será parte el empleado encargado de la recaudación del impuesto hasta que éste se haga efectivo.

Véase la Ley 113 de 1890, por la cual se establece una contribución nacional para el sostenimiento de Lazaretos.

El artículo 5.° de la mencionada Ley 113 dice así:

"En todo juicio de sucesión en que deba cobrarse el impuesto de que trata esta ley—la 113,—tendrá aplicación lo dispuesto en los artículos 21 á 29 de la Ley 30 de 1888 (25 de Febrero); pero de la liquidación que se haga *no se dará traslado al Agente del Ministerio Público.*"

Los artículos de la Ley 30, que se citan, están derogados por el segundo inciso del artículo 338 de esta ley. Véase en la Codificación Nacional, Tratado primero, el número 20 de orden.

Téngase presente lo que dispone el artículo 7.° de la Ley 113, citada.

Art. 259. Luégo que estén concluídos los inventarios y avalúos se pasará el expediente al Recaudador, con término de tres días, para que proceda á hacer la liquidación correspondiente. Practicada que ésta sea, se correrá traslado de ella á los interesados, y al respectivo Agente del Ministerio público, por veinticuatro horas á cada uno, para que puedan objetarla en cuanto les parezca ilegal ó inexacta. Si los interesados y el Agente del Ministerio público aceptaren la expresada liquidación el Juez procederá á aprobarla; pero si la objetaren, sustanciará y decidirá el punto por los trámites establecidos para las articulaciones en juicio ordinario, aprobando aquélla ó mandando se rehaga si hubiere motivo legal para ordenarlo. En este caso, ejecutoriada su determinación, volverá el expediente al Recaudador para que dé cumplimiento á lo resuelto; y esto mismo se practicará cuando así lo disponga el fallo que se dicte en última instancia.

Véanse el comentario del artículo que precede, y los artículos 1269 y 1270 del Código Judicial.

Art. 260. Los inventarios y avalúos de los bienes de una sucesión no podrán ser aprobados sin que conste el pago del impuesto en la forma legal. Si se aprobaren sin esta formalidad, el Juez será responsable de la contribución.

262

Véanse la Ley 113 de 1890, por la cual se establece una contribución nacional para el sostenimiento de Lazaretos, y el comentario del artículo 258 de esta ley.

Art. 261. En las mortuorias en que no se practiquen inventarios dentro de un año de muerta la persona que haya dejado bienes en el Departamento, procederá el Juez de Circuito respectivo, con la intervención de los interesados, ya sea por denuncio dado ó por conocimiento propio, á formar de oficio, en papel común, inventarios judiciales, para sólo el efecto de recaudar lo que se deba á las rentas de Beneficencia ó á otras.

Esta disposición es aplicable á las mortuorias en que no se hayan formado inventarios en la oportunidad debida.

Ley 113 de 1890, artículo 3.°

El segundo inciso del presente artículo se refiere á las mortuorias anteriores á esta ley.

Art. 262. El Juez que conozca de un juicio de sucesión librará orden de pago por la vía ejecutiva contra los deudores al ramo del Lazareto ó de la entidad correspondiente—aunque por la cuantía de los derechos causados no sea competente conforme á las reglas generales—cuando tales deudores no verifiquen el pago dentro de los quince días siguientes á la aprobación de la respectiva liquidación. La ejecución se despachará en papel común y de oficio, ó á petición de cualquier empleado. Si el pago del impuesto se hiciere efectivo, el Juez remitirá inmediatamente al Síndico del establecimiento expresado, ó á quien represente los derechos que corresponden á cualquiera otra entidad, la cantidad que hubiere cobrado.

260.

Este artículo no es incompatible con el 3.° de la Ley 113 de 1890; lejos de serlo, si no obstante lo dispuesto en el presente, el pago del impuesto se demorare el año de que habla el mismo artículo 3.°, debe cobrarse el veinticinco por ciento adicional.

Art. 263. Es deber de todos los Jueces ante quienes se proponga un juicio de sucesión citar al Recaudador del impuesto, á fin de que este empleado ó su representante pueda tomar conocimiento de la calidad de los asignatarios, hacer nombramiento de avaluadores, pedir que se inventarien y avalúen los bienes de la sucesión, y reclamar contra las decisiones que perjudiquen á la renta.

Véase el comentario del artículo 258 de esta ley.

Art. 264. En las herencias yacentes se entenderá el procedimiento que detalla el artículo 259 de esta Ley con el curador nombrado y el Agente del Ministerio público.

Art. 265. La liquidación sólo puede objetarse en los casos siguientes:

1.° Por error en las operaciones numéricas ó en la deducción del impuesto;

2.° Cuando no se haya excluído el valor de las deudas hereditarias legalmente comprobadas, y lo que corresponda al cónyuge superviviente por razón de bienes propios y gananciales, con arreglo al Código Civil y á lo dispuesto en esta Ley; y

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

3.° Si apareciendo confundido el patrimonio del difunto con bienes ó derechos activos pertenecientes á sucesiones anteriores, indivisas, ó en las cuales tengan participación otras personas por contrato de compañía ú otra causa semejante, el Recaudador no se limitare á liquidar el impuesto únicamente sobre el caudal de la mortuoria, siempre que los autos le suministren los datos y pruebas suficientes para precisar la cantidad del acervo hereditario.

CAPÍTULO CUARTO

Partición de los bienes de la sucesión.

Art. 266. Cuando se solicite por uno ó más coasignatarios, que representen más de la mitad de la masa partible, la suspensión de la partición de bienes mientras se decide cualquiera acción yá intentada, cuya decisión pueda afectar más de la mitad de dicha masa, el Juez resolverá la solicitud de conformidad.

1277 del Código Judicial.—1388 del Código Civil.

Art. 267. De la demanda de partición se dará traslado á los partícipes ó herederos, por seis días á cada uno, dentro de cuyo término debe presentar el que se oponga á la petición las pruebas que tenga para ello.

Transcurrido el término del traslado, si no se hubiere contestado, ó nadie se hubiere opuesto, ó no hubiere presentado las pruebas de su oposición el que la promovió, el Juez decretará la partición solicitada; mas si hubiere oposición fundada en una prueba, aunque sea sumaria, el Juez no la decretará.

También se decretará por el Juez la partición de los bienes, sin conferir traslado de la solicitud, en el caso en que solicitada por todos los herederos ó partícipes, no haya, por tanto, á quien conferirlo.

Este artículo subroga al 1275 del Código Judicial, el cual se derogó por el 338 de esta ley.

Art. 268. Los recursos que se concedan de los autos que se dicten en conformidad con lo dispuesto en los artículos 1284, 1285 y 1286 del Código Judicial, se substanciarán y decidirán por el superior como de autos interlocutorios.

TÍTULO XIII

DIVISIÓN DE BIENES COMUNES

Art. 269. Si las personas entre quienes haya de hacerse la división, ó algunas de ellas, fueren desconocidas por el demandante, ó si siéndole conocidas se ignorare su residencia ó domicilio, se les citará y nombrará defensor conforme á las reglas generales.

25 á 29.—Código de Organización, artículos 113, ordinal 15; 122, ordinal 2.°, y 162, ordinal 5.°

Art. 270. Los artículos 37 á 90 de la Ley 30 de 1888 se aplicarán cuando se trate de la división de predios pertenecientes á comunidades

de indígenas, y á las en que concurran estas circunstancias: que el número de comuneros sea incierto ó pase de cincuenta, que la existencia de las mismas sea de tiempo inmemorial ó de más de treinta años, y que la cosa común valga más de diez mil pesos. En los demás casos regirán las disposiciones del Código Judicial y de las leyes adicionales que versen sobre esta materia.

***Codificación Nacional*, Tratado primero, números 189 á 242 de orden, que corresponden á los 37 á 90 que se citan.**

Aunque esta ley es posterior á la 89 de 1890, prefieren respecto de este artículo los correspondientes de dicha Ley 89—30 á 39—*en cuanto se trate de salvajes que vayan reduciéndose á la vida civilizada*, pues es claro que tales artículos son *especiales*, por serlo la ley misma. En consecuencia, los expresados artículos 30 á 39 no comprenden á los indígenas yá civilizados.

Art. 271. Si los árbitros de que habla el artículo 44 de la mencionada Ley 30 de 1888 no cumplieren dentro de noventa días con el deber que les impone el artículo 59 de la misma Ley, además de ser responsables por los perjuicios que causaren á los interesados, serán apremiados por el Juez de Circuito que haya intervenido, con multas sucesivas hasta de cien pesos, previo informe del Secretario de la Junta de árbitros, quien puede ser apremiado de la misma manera, si demorare el informe pedido.

***Codificación Nacional*, Tratado primero, números 196 y 211 de orden.**

TÍTULO XIV

DESLINDE Y AMOJONAMIENTO DE PROPIEDADES

Art. 272. Si hubiere contradicción por parte de alguno de los interesados, ya respecto del deslinde practicado, ó ya respecto de la demanda misma de deslinde, el punto se ventilará en juicio ordinario, en el que el contradictor se considerará como demandante, sin perjuicio de que el deslinde practicado se apruebe y lleve á efecto en los términos del artículo 1312 del Código Judicial, en la parte que de él no haya sido contradicha ú objetada.

Este artículo subroga al 1313 del Código Judicial, el cual se derogó por el 338 de esta ley.

TÍTULO XV

JUICIOS POSESORIOS

ADVERTENCIA IMPORTANTE.—El artículo 338 de esta ley derogó expresamente estos del Capítulo VI del Código Judicial, que versa sobre *juicios posesorios:* 1315 á 1321, 1326 á 1329, 1331, 1332, 1335 y 1336. Han quedado vigentes los artículos 1322 á 1325, 1330, 1333 y 1334 del mismo Capítulo, los cuales reproducimos en este Título, en el lugar que en nuestro concepto les corresponde.

Art. 273. Los juicios posesorios tienen por objeto el ejercicio de las acciones posesorias de que tratan los artículos 972 á 985 del Código Civil; y también el de la acción relativa á la adquisición de la tenen-

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

cia de un inmueble por parte del poseedor regular, en el caso y con las condiciones aquí establecidas.

De la demanda en que se establezcan estas acciones no se dará traslado al demandado mientras no estuvieren suficientemente comprobados los hechos que la ley requiere para ejercerlas.

764 del Código Civil.

Art. 274. El poseedor que demande la tenencia de un inmueble debe presentar un justo título debidamente registrado, suficiente para conferirle el dominio, y además el certificado del Registrador de Instrumentos públicos de que habla el artículo 111.

Se entiende que se ha efectuado la tradición que exige el inciso cuarto del artículo 764 del Código Civil, por el hecho de haberse verificado debidamente la inscripción del título en la respectiva Oficina de Registro, y canceládose la inscripción anterior conforme al artículo 789 del Código citado.

Importa ver el comentario del artículo 111.

Art. 275. De la demanda que presente el poseedor regular y de las pruebas que acompañe se dará traslado al tenedor del inmueble por seis días para que conteste y presente las pruebas que justifiquen la retención. Esta se justifica probando el tenedor una de dos cosas:

1.ª Que tiene la finca como propietario fiduciario, ó usufructuario, ó depositario, ó con cualquier otro carácter legal; ó á virtud de arrendamiento ó de otro contrato no traslaticio de dominio, celebrado entre el tenedor ó la persona á quien éste represente legítimamente, y el poseedor ó el individuo de quien el poseedor hubo la cosa, y del cual contrato, ó hecho jurídico, resulte que hay derecho para retenerla conforme á la ley civil. Cuando ocurra alguna de las circunstancias que extinguen el derecho del tenedor, tal circunstancia debe alegarla el demandante, correspondiendo la prueba á la parte cuya afirmación consiste en un hecho positivo; ó

En cuanto al derecho para retener la cosa, véanse, entre otros, estos artículos del Código Civil: 970, 859, 1995, 2000, inciso 2.°, 2188, 2258. Respecto de las circunstancias que extinguen el derecho del tenedor, véanse, entre otros, estos: 794, 800, 829, inciso 3.°, 1539, 2008, ordinales 2.° y 3.°, 2016, 2020, ordinal 2.°

2.ª Que el título presentado no es suficiente para conferir el dominio; ó que el registro del título está cancelado, ó no se ha extendido ante el Registrador competente; ó que subsiste alguna inscripción anterior, con motivo de no haberse cancelado ésta por alguno de los medios que establece el artículo 789 del Código Civil.

En el caso de que se presenten pruebas contrarias ú ocurra justo motivo de duda, el Juez verificará una inspección ocular en los libros de registro.

Véase el comentario del artículo 111.

Art. 276. Durante el término del traslado de la demanda sobre adquisición de la tenencia, el Juez se cerciorará de que el individuo contra quien se ha dirigido ésta es realmente quien tiene el inmueble que se reclama, pudiendo disponer, entre otras medidas, que el Secretario del Juzgado, ó el comisionado en su caso, se trasladen al lugar en donde está situado el inmueble, y den conocimiento de la demanda á la persona que en él hallaren. Si dicha persona fuere un dependiente

ó un mayordomo, dicho conocimiento se dará al individuo á quien éstos designen como poseedor ó tenedor, si estuviere en el lugar del juicio. El conocimiento de que se habla se verificará entregando á la persona una boleta en que se expresen los nombres del demandante y demandado, y la demanda que se ha promovido.

193.

Art. 277. Si el demandado no justifica la tenencia del inmueble, el Juez, dentro de tres días, ordenará que se entregue al demandante, haciendo uso de la fuerza si fuere necesario. De esta resolución se concederá en el efecto suspensivo la apelación que se interponga; pero de los autos que se dicten para cumplir la decisión del superior no se concederá al demandado recurso alguno, no quedando otro remedio que el de queja, y sin perjuicio de que el tenedor del inmueble haga valer sus derechos en juicio ordinario.

Art. 278. Si al tiempo de verificarse la entrega del inmueble se hallare en poder de otra persona, distinta de aquella á quien se designó como tenedora del mismo, y se opusiere á la entrega, se dejará en su poder; pero el Juez le prevendrá á dicha persona que justifique dentro de seis días la retención de la cosa, justificación que se hará en conformidad con lo dispuesto en el artículo 275. Concluídos los seis días se procederá como se dispone en el artículo que precede, sin admitir ninguna otra oposición.

El Juez, atendiendo á la condición del individuo en cuyo poder se halle la cosa, á su sexo y estado de ignorancia, le hará las explicaciones necesarias sobre las pruebas que debe presentar, y le dirá que si no las presenta dentro de los seis días, con indicación de aquel en que concluyen éstos, le entregará la finca al demandante.

Art. 279. Si dentro de los quince días siguientes á la entrega del inmueble se presentare una persona que no estuvo presente en el acto de verificarla, y probare plenamente que se hallaba en la tenencia de la cosa cuando la diligencia tuvo lugar, y además justificare, de la manera establecida, la retención del inmueble, se revocará, sin audiencia, la entrega decretada. De esta resolución se concederá apelación en el efecto devolutivo.

275.

Art. 280. Si la oposición se refiriere únicamente á una parte de la finca, se hará entrega de la no disputada.

Art. 281. Tratándose de la entrega de un predio rústico serán citados personalmente, para el acto de ella, los poseedores de los colindantes.

Juzgamos que deben colocarse aquí los siguientes artículos del Código Judicial, no derogados:

Art. 1322. Si estando alguno en posesión de una cosa fuere perturbado en ella, podrá presentarse al Juez competente en demanda formal contra el perturbador, para que haga cesar la perturbación y se dé seguridad de no reincidir en ella.

A esta demanda debe acompañar el demandante las siguientes pruebas: 1.ª la de que hace por lo menos un año que está en quieta y pacífica posesión de la cosa, por sí mismo ó por medio de otro; y 2.ª la de que el demandado lo perturba ó inquieta en esa posesión, debiendo determinarse en este caso los hechos en que consiste la perturbación.

Art. 1323. Presentada así la demanda, el Juez dará traslado por cuarenta y ocho horas al demandado para que presente las pruebas que desvanezcan los cargos que se le hacen, y si no las presentare ó si de ellas no resultaren desvanecidos los cargos, proveerá auto mandando cesar los actos de pertur-

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

bación, y previniendo al perturbador se abstenga de reincidir en ellos, so pena de pagar una multa de cincuenta á doscientos pesos á favor del demandante, y los daños y perjuicios que á éste se le siguieren. Esta obligación será asegurada con una fianza á satisfacción del Juez.

Art. 1324. Si el perturbador pretendiere tener mejor derecho que el demandante sobre la cosa en cuestión, podrá hacerlo valer en juicio ordinario, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 1325. En los casos de perturbación, el mero tenedor de la cosa está obligado á dar el aviso correspondiente, desde que aquélla empiece á tener lugar, al verdadero dueño ó poseedor, para que éste pueda intentar la acción de perturbación.

Cualquiera omisión á este respecto del mero tenedor, lo constituye responsable para con aquél á cuyo nombre tiene la cosa.

Art. 282. Hay despojo: 1.° Cuando uno priva á otro de la posesión de una cosa, ó de la tenencia de la misma, valiéndose de la fuerza; 2.° Cuando en ausencia del poseedor, ó del tenedor, otro se apodera de la cosa, y volviendo dichos poseedor ó tenedor son repelidos con la fuerza; y 3.° Cuando la autoridad pública, fuera de los casos determinados por la ley, priva á cualquiera de la posesión ó de la tenencia de la cosa, sin previo juicio.

Véase la ADVERTENCIA IMPORTANTE que se halla al frente de este título.

Art. 283. El que demande la restitución de la cosa de que fue despojado deberá presentar la prueba que acredite la posesión en que estaba, ó la tenencia, según el caso, y también la prueba del despojo. De la demanda se dará traslado al demandado, que será la persona en cuyo poder está la cosa, por el término de seis días, para que conteste y presente las pruebas que lo favorezcan. Si á virtud de lo alegado y probado resultare que ha habido despojo, el Juez, dentro de veinticuatro horas, mandará restituír en la posesión ó la tenencia de la cosa, respectivamente, al individuo que ha sido privado de ella, haciendo uso de la fuerza si necesario fuere. De esta resolución se concederá en el efecto suspensivo la apelación que se interponga; pero de los autos que se dicten en cumplimiento de la decisión del superior no se concederá recurso alguno, quedando á salvo el derecho de queja, y el ejercicio de la acción ordinaria para la efectividad de los derechos que el despojante crea tener.

Art. 284. En caso de perturbación de posesión, el auto que se dicte para hacerla cesar y para que el perturbador se abstenga de reincidir en los actos de perturbación, es apelable en el efecto devolutivo; y en consecuencia la resolución del Juez será inmediatamente cumplida, sin perjuicio de lo que el superior resolviere á virtud de la apelación.

Juzgamos que debe colocarse aquí el siguiente artículo del Código Judicial, no derogado:

Art. 1330. Para acreditar la perturbación y el despojo se puede emplear cualquiera de los medios probatorios establecidos en este Código. Si se hace uso de la prueba testimonial, ésta ha de consistir en dos declaraciones recibidas aun sin citación de la otra parte, pero sí en la forma ordinaria.

Cuando el despojo se atribuya á una autoridad ó funcionario público, se comprobará con el informe de dicha autoridad ó funcionario, acompañado de una copia fiel de la actuación ó diligencias á que se contrae la querella, expedida á costa del querellante.

Este informe lo pedirá el Juez ante quien se demande la restitución, señalando el término dentro del cual debe evacuarse

Art. 285. El Juez competente para conocer de la demanda por despojo y de la adquisición de tenencia es el de Circuito en donde se halle situado el inmueble.

Juzgamos que deben colocarse aquí los siguientes artículos del Código Judicial, no derogados:

Art. 1333. La demanda para la indemnización del daño causado por la perturbación ó despojo de la posesión, se intentará y seguirá ante el Juez que sea competente según las reglas generales, y por los trámites ordinarios.

Art. 1334. Tratándose de posesión, las pruebas relativas á ella versarán sobre hechos de los cuales pueda el Juez deducir el derecho á ella, conforme á las leyes sustantivas.

TÍTULO XVI

DENUNCIO DE OBRA NUEVA

Art. 286. Si de las pruebas presentadas y de la exposición de los peritos, que deberá escribirse inmediatamente, no resultare el perjuicio alegado por el denunciante, el Juez declarará inadmisible la demanda; pero si resultare dicho perjuicio prevendrá en el mismo acto al denunciado ó al que haga sus veces en el lugar de la obra, ó á los que la construyan, que dicha obra debe suspenderse, y demolerse á costa del denunciado lo que se hubiere construído, si esto no pudiere conservarse sin perjuicio del denunciante.

La primera resolución, de carácter interlocutorio, es apelable en ambos efectos por el denunciante; y la segunda, del mismo carácter, sólo es apelable por el denunciado en el efecto devolutivo.

Este artículo subroga al 1340 del Código Judicial, el cual se derogó por el 338 de esta ley.

TÍTULO XVII

NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN DE GUARDADORES

Art. 287. Cuando alguno de los que, conforme á las leyes sustantivas, puede provocar la remoción de un tutor ó curador pretenda hacerlo, deberá presentar su demanda ante el Juez respectivo del territorio en que se halle establecido el domicilio del guardador, y en este juicio, según la cuantía de la tutela ó curatela, se observarán los trámites del ordinario de mayor cuantía ó de menor cuantía.

Este artículo subroga al 1442 del Código Judicial, el cual *no* se derogó expresamente por el 338 de esta ley: por inadvertencia, sin duda, no figura entre los artículos derogados.

TÍTULO XVIII

AMPARO DE POBREZA

ADVERTENCIA IMPORTANTE. Todos los artículos de este Título se tomaron textualmente del Proyecto de ley sobre reformas judiciales que preparó el Consejo de Estado; y no se revisaron cuidadosamente por la respectiva Comisión del Senado por haber carecido absolutamente del tiempo necesario para ello.

Estos artículos han subrogado al 1497 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 338 de esta ley.

Art. 288. Es pobre para el efecto de obtener el amparo de tál, el que no goza de una renta anual que por lo menos alcance á ciento

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

ochenta pesos, ya sea porque los bienes que tenga no puedan producir dicha renta, ó ya porque su industria, profesión ó trabajo personal no le produzcan la misma renta.

Art. 289. La persona que pretenda ser amparada por pobre, deberá presentar por escrito su demanda ante el Juez de Circuito á que pertenezca el lugar de su domicilio; y en ella deberá ofrecer la prueba de su pobreza, expresando el lugar donde se ha de evacuar.

Art. 290. El Juez, con citación del respectivo Agente del Ministerio público y de la persona ó personas con quienes haya de litigar, que se tendrán como partes en este juicio, lo recibirá á prueba, por un término que no exceda de ocho días, más el de la distancia de ida y vuelta al lugar adonde se hayan de evacuar las pruebas. Este término es común é improrrogable.

Art. 291. Las pruebas versarán precisamente sobre hechos positivos de los que se pueda deducir por el Juez que el demandante se halla en el caso de obtener el amparo de pobreza, debiendo los testigos dar claramente razón de su dicho.

Art. 292. Vencido el término probatorio, sin necesidad de petición, lo informará el Secretario, y el Juez mandará que los autos se entreguen por su orden á las partes para alegar; á cada una de ellas se les entregarán por veinticuatro horas.

Art. 293. Luégo que las partes hayan presentado sus alegatos, ó que se hayan acusado las correspondientes rebeldías, previa citación, el Juez resolverá dentro de tres días decretando ó negando el amparo de pobreza solicitado.

Art. 294. Si se concediere el amparo, la sentencia no será apelable sino en el efecto devolutivo; pero si se negare, lo será en ambos efectos. En uno y otro caso se sustanciará la apelación ante el superior como la de un acto interlocutorio.

Art. 295. El Tribunal Superior revocará el amparo en el caso de que observe que los testigos no han dado razón del modo como les constan los hechos.

Este artículo no está en consonancia con el 12, ordinal 4.° de la Ley 72 de 1890, sobre Organización Judicial. De conformidad con lo estatuído en el último inciso del ordinal 4.°, citado, debe ser la Corte Suprema quien ejerce la atribución que el presente artículo confiere á los Tribunales Superiores.

Art. 296. De la sentencia en que se concede el amparo se darán al interesado las copias que solicite, bien sea que se haya dictado en primera ó segunda instancia; pero si se dieren de la pronunciada en primera instancia, y de esta sentencia se hubiere interpuesto apelación, se expresará precisamente en las copias esta circunstancia.

Art. 297. El amparado por pobre no está obligado á hacer gasto alguno judicial de los expresados en el Libro I del Código Judicial, ni á pagar costas de ninguna clase, ni porte de correo, ni á hacer uso de papel sellado.

El Libro 1.° del Código Judicial, que se cita en este artículo, se derogó expresamente por el 230 del Código de Organización.

El artículo 18 de la Ley 72 de 1890, sobre organización judicial, restableció el Capítulo del Código Judicial, que versa sobre gastos judiciales. Dicho Capítulo está reproducido en este Suplemento, á continuación de la mencionada Ley 72.

Véase el artículo 8.° de la Ley 110 de 1888.

Art. 298. El amparado por pobre gozará de estas exenciones en todos los pleitos propios en que figure como demandante ó como demandado, y que se sigan al tiempo en que se conceda el amparo, ó que se inicien dentro del año siguiente á la fecha de la sentencia en que se ha concedido el mismo amparo.

Art. 299. La actuación en los juicios de amparo de pobreza se hará en papel común y sin cobrarse derechos de ninguna clase, á menos que se niegue el amparo, en cuyo caso será condenado el demandante en costas y á pagar una multa igual al valor del papel sellado que se debiera haber invertido en la actuación, si en este papel se hubiera escrito por las partes.

Art. 300. La persona que pretenda litigar como pobre, bien como demandante, bien como demandada, deberá presentar ante el Tribunal ó Juez que conozca del juicio, la copia certificada de la sentencia en que se decretó el amparo de pobreza, de la que se dará traslado á la contraparte por cuarenta y ocho horas, á fin de que pueda usar en cualquier estado del juicio y toda vez que lo crea necesario, del derecho que se le concede en el artículo siguiente.

Véase el Comentario del artículo 295 de esta ley.

Art. 301. La contraparte de un amparado por pobre tiene derecho para pedir la reconsideración de la declaratoria de pobreza ante el Juez que conozca ó haya conocido en la primera instancia del juicio en que litiga como pobre el amparado, siempre que ofrezca probar que dicho amparado por pobre goza de una renta de ciento ochenta pesos por lo menos al año.

Art. 302. Solicitada la reconsideración, el Juez recibirá á prueba el artículo con citación del amparado por pobre, por un término igual al expresado en el artículo 290.

Art. 303. Vencido el término probatorio, se procederá como está expresado en los artículos 292 y 293 de esta Ley, debiendo resolver el Juez si confirma ó revoca el decreto de amparo de pobreza, en vista de las pruebas presentadas por la contraparte del amparado.

Art. 304. En esta actuación el amparado por pobre usará también de papel común y no pagará derechos de ninguna clase, á menos que se revoque el amparo de pobreza concedido; en cuyo caso será condenado en costas y á pagar una multa igual al valor del papel sellado que se debiera haber invertido, si se hubiera escrito en este papel.

Art. 305. Desde el momento en que ante el Tribunal ó el Juez que conozca del juicio en que el amparado litiga como pobre, se presente copia de la resolución revocatoria del amparo de pobreza, cesará el amparado de litigar con las excepciones de tál.

Art. 306. La resolución del Juez revocando ó confirmando un amparo de pobreza concedido, es apelable en ambos efectos; y la apelación se sustanciará como la de un auto interlocutorio.

TITULO XIX

JUICIO POR ARBITRAMENTO

Art. 307. Pueden someterse á la decisión de arbitradores las controversias que ocurran entre personas capaces de transigir, en los casos en que la ley permite la transacción.

El arbitramento puede adoptarse antes ó después de que los inte-

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

resados inicien pleito sobre la controversia, y adoptado, se procederá como se expresa en este Título.

Art. 308. Los interesados otorgarán una escritura pública, ó un documento privado firmado por dos testigos y extendido en papel sellado de tercera clase, en que conste: 1.° el pleito, asunto ó diferencia qne someten á la decisión de los arbitradores; 2.° las personas que nombren con este objeto, que deben ser tres; 3.° la clase de sentencia que deben dictar los arbitradores, es decir, se expresará si la decisión debe ser condenando ó absolviendo á una de las partes, ó si pueden transigir las pretensiones opuestas.

Si faltare alguna de estas tres circunstancias serán nulos el documento ó la escritura.

Art. 309. El compromiso de que se habla cesa en sus efectos por la voluntad unánime de los que lo contrajeron, y también en cualquiera de los tres casos siguientes:

1.° Por la no aceptación de uno de los arbitradores;

2.° Por la muerte de uno de los mismos; y

3.° Por transcurrir el término que tienen los arbitradores para dictar la decisión, sin perjuicio de lo dispuesto en al artículo 321.

Cuando ocurra alguno de los dos primeros casos de este artículo, si los interesados establecieren acuerdo en la elección de otro arbitrador, no es preciso que otorguen nuevo documento ó escritura, sino que á continuación de aquél ó de ésta, aunque el papel no sea yá competente, hagan constar por diligencia el nombre de la persona á quien designan, diligencia que firmarán los mismos interesados y dos testigos, con expresión de la fecha.

Art. 310. Si los arbitradores aceptaren el cargo, se reunirán lo más pronto posible y designarán por la suerte á uno de los mismos para que presida la Comisón de arbitramento. El Presidente designado retendrá en su poder el documento de compromiso y lo que se actúe, y será al mismo tiempo tercero en discordia.

De la aceptación del cargo de arbitradores y de la designaciou de Presidente se extenderá, á continuación de la escritura ó documento de las partes, una diligencia en que consten tales hechos.

En manos del Presidente consignarán los interesados la cantidad de dinero qne se estime prudencial para los gastos de la actuación.

Art. 311. Si sobre el asunto que es objeto del arbitramento hubiere yá pleito, el Presidente de la mencionada Comisión ocurrirá al Juzgado ó Tribunal en donde curse el juicio para que se le entregue el expediente. Esta solicitud debe firmarse por dicho Presidente y por los interesados, y presentarse personalmente por los mismos al Juez ó Magistrado respectivo, de lo cual se extenderá diligencia. Verificado esto, el Juez ordenará que se entregue el expediente al indicado Presidente, bajo recibo, en que se exprese el número de cuadernos y de fojas.

Terminadas las funciones de la Comisión, el Presidente, y en su defecto ó por omisión del mismo los otros dos arbitradores, devolverán el expediente al Tribunal ó Juzgado de donde lo tomaron, con copia de la sentencia que hubieren pronunciado, autorizada por los arbitradores y dos testigos; sentencia que producirá efectos en dicho pleito, mientras no se declare la nulidad de la misma.

Art. 312. En la misma fecha de la aceptación del cargo, y en el caso del artículo anterior, al día siguiente al del recibo del proceso, señalarán los arbitradores el día en que las partes deben comparecer

ante ellos para ser oídas. Este señalamiento se hará para uno de los seis días siguientes.

Art. 313. Las partes pueden comparecer el día designado por medio de apoderado constituído ante los mismos arbitradores, entregando la parte misma el poder á uno de éstos. Pueden también las partes llevar al acto sus defensores.

Art. 314. Verificada la comparecencia de las partes, personalmente ó por apoderados, los arbitradores las oirán á ambas y á sus defensores, examinarán los testigos que presenten, se enterarán de los documentos que exhiban y de las razones que aleguen, y dictarán en el mismo día en que termina la audiencia, ó á más tardar dentro de los doce siguientes, la decisión que estimen justa según su conciencia.

En el caso de que los arbitradores hubieren de consultar el expediente á que se refiere el artículo 311, y dicho expediente constare de más de doscientas fojas, tendrán para sentenciar un día más del término designado, por cada cincuenta fojas sobre las doscientas; pero el término nunca pasará de veinte días.

Art. 315. Si los arbitradores juzgaren que para fallar necesitan ver algunas pruebas que no estén presentes, si el auto de la audiencia se prolongare por más de tres horas, ó si hubiere necesidad de suspenderlo por alguna otra causa, señalarán otro ú otros dias más, sin que puedan transcurrir por esto más de dóce días. En todo caso se dejará constancia del día en que tenga lugar la última audiencia, para el efecto de fijar con exactitud el término dentro del cual deben los arbitradores dictar la sentencia.

Art. 316. Los arbitradores escribirán la sentencia en seguida de la diligencia de aceptación; la continuarán en papel sellado y la firmarán con dos testigos vecinos del lugar y de buen crédito. Esta sentencia tiene el mismo carácter y produce los mismos efectos que si hubiera sido dictada por un Juez de derecho en juicio ordinario; pudiendo, en consecuencia, alegarse la nulidad de la misma en el caso y en los términos del artículo 131 de esta Ley, y también cuando la sentencia no se hubiere dictado en consonancia con lo establecido en la escritura ó documento de compromiso; lo cual no obsta para que se pueda aclarar la sentencia oscura, conforme al artículo 860 del Código Judicial.

Art. 317. El Presidente de la Comisión notificará personalmente la sentencia á los interesados. Si éstos no se presentaren á recibir la notificación dentro de los seis días siguientes al pronunciamiento de la sentencia, la notificación se surtirá por un aviso que se publicará en el periódico oficial del Departamento, con la firma del indicado Presidente.

Art. 318. Los arbitradores protocolizarán la sentencia, previa notificación y registro de la misma, el documento ó escritura de compromiso y la actuación correspondiente en una de las Notarías del Circuito judicial respectivo, si cualquiera de los interesados lo solicitare dentro de tres días de pronunciado el fallo, y suministrare lo necesario para los gastos que hubieren de causarse. La diligencia de protocolización será firmada por el Presidente de la Comisión de arbitramento, y en su defecto por los otros dos arbitradores; también la firmarán los mismos testigos que firmaron la sentencia, si se les hallare, y el interesado que haya pedido la protocolización.

Si no se pidiere la protocolización de que se habla, se archivarán tales documentos en uno de los Juzgados de lo civil del respectivo

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

Circuito judicial, procediendo de una manera análoga á lo establecido para el caso de protocolización.

Art. 319. Si hubiere discordia en la decisión de los arbitradores principales, la decisión del tercero no recaerá sino sobre los puntos en que no se hayan convenido los principales, y su opinión deberá ser ó igual á una de las dos opuestas en su caso, ó un término medio entre ambas; pero en ningún punto podrá exceder de la que más conceda, ó rebajar de la que conceda menos.

Art. 320. Pueden ser nombrados arbitradores todos los que puedan comparecer en juicio por sí mismos.

Art. 321. Aceptado por todos los arbitradores el cargo de tales, están obligados á llenar las funciones que se les dan por esta Ley, y de lo contrario, son responsables á las partes de los daños y perjuicios que se les causen por falta de cumplimiento de esas funciones, á menos que una enfermedad ú otra causa grave sea lo que les impida el cumplirlas, caso en el cual, que calificarán los mismos arbitradores, se prorroga por seis días el término para fallar.

Art. 322. Los arbitradores no son recusables, pero si en su fallo hubiere habido cohecho, se deja á la parte perjudicada el derecho de promover y seguir la acción criminal correspondiente.

Derógase el artículo 215 del Código de Organización Judicial.

TITULO XX

INTERDICCIÓN JUDICIAL

Art. 323. Lo dispuesto en los artículos 1452 á 1455 del Código Judicial no excluye la práctica y estimación de las demás pruebas que conduzcan á acreditar el estado de demencia de la persona de cuya interdicción se trate.

Las sentencias que en estos juicios se dicten se consultarán con el Tribunal Superior respectivo, si no hay apelación. El Tribunal puede, de oficio, ordenar las comprobaciones que estime necesarias.

TITULO XXI

JUICIOS DE CAPELLANÍAS

ADVERTENCIA IMPORTANTE.—Los artículos de este Título subrogan á los correspondientes del Capítulo del Código Judicial que versa sobre esta misma materia, á saber: 1472 á 1483.

Art. 324. Para los efectos civiles, llámanse en general CAPELLANÍAS las fundaciones que se hacen con el objeto de que se digan misas ó se ejerzan ciertas obras piadosas relacionadas con el culto.

Cuando los bienes ó rentas afectos á la fundación no se ceden á una corporación ó congregación religiosa, sino á particulares con sólo la carga de mandar decir las misas ó hacer las obras piadosas designadas en la fundación, las capellanías se llaman *laicas*, y también *mercenarias*, *profanas*, *patronatos de legos*, *legados píos* y *memorias de misas*.

Si la fundación tiene por objeto establecer para uno ó más individuos que sigan la carrera eclesiástica una renta por razón de su oficio con ciertas condiciones estatuídas por el fundador y con la aceptación ó aprobación del respectivo prelado eclesiástico, la capellanía se denomina *colativa*.

Art. 325. La provisión de capellanías laicas corresponde á la jurisdicción civil. La de capellanías colativas y demás beneficios eclesiásticos ó religiosos, es de exclusiva competencia de la autoridad eclesiástica.

Art. 326. El individuo que pretenda ser declarado patrono ó capellán de un patronato de legos ó capellanía laica, deberá entablar su demanda ante el Juez de Circuito en que estén todos ó la mayor parte de los bienes afectos á la fundación, y en caso de que este hecho se ignore ó sea dudoso, ante el Juez de Circuito en que se hizo la fundación.

113 ordinal 8.° del Código de Organización.

Art. 327. El demandante deberá acompañar á su demanda el documento que contenga la fundación de la capellanía ó el patronato, y la prueba de que por muerte del último poseedor ó por otra causa se halla vacante.

Art. 328. Propuesta la demanda en los términos referidos, y cerciorado de su competencia el Juez, dispondrá el emplazamiento de los interesados del modo prevenido en el Código Judicial, sobre notificaciones y citaciones.

Art. 329. Los edictos deberán, además, fijarse en el Distrito en que existan los bienes afectos á la capellanía.

Art. 330. Con las personas que comparezcan ó con el defensor en su caso, se seguirá un juicio ordinario por los trámites establecidos por el Código Judicial sobre juicios ordinarios de mayor cuantía.

Art. 331. El interesado que no hubiere concurrido en el término del emplazamiento será admitido al juicio en el estado que éste tenga cuando él se presente.

Art. 332. El mismo procedimiento que para la provisión de capellanías laicas se ha de seguir, se observará cuando se demande la declaratoria de que á uno le corresponde el derecho de disfrutar de ciertos bienes ó derechos en virtud de la cláusula de testamento ó de contrato que llama á personas indeterminadas; salvo siempre las capellanías colativas y beneficios eclesiásticos, que corresponden á la jurisdicción eclesiástica con arreglo á lo establecido anteriormente.

TITULO XXII

CAPITULO UNICO

Disposiciones varias.

Art. 333. Una acción se ejerce en primera instancia desde que se inicia demanda ó se declara con lugar á formación de causa, según que el negocio es civil ó criminal, hasta que se ejecutoría la sentencia definitiva que pronuncie el Juez ó Magistrado ante quien se inició la demanda, ó el juicio criminal, ó hasta que principie el ejercicio de la segunda instancia, cuando ésta se ejerza. La misma acción se ejerce en segunda instancia, desde que se ejecutoría el auto en que se concede un recurso respecto de dicha sentencia definitiva, ó se ordena la consulta

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

para ante el superior respectivo, hasta que pronunciada por éste sentencia definitiva, termina toda jurisdicción en el superior.

258 del Código Judicial.

Art. 334. Los Magistrados de la Corte Suprema, los de los Tribunales de Distrito y los Jueces, pueden usar del apremio de arresto hasta por seis días, y del de multas sucesivas, desde cinco hasta cincuenta pesos, para obligar á las partes, á los peritos y testigos, á los empleados que les estén subordinados, ó cualesquiera otras personas que deban intervenir en la secuela de los juicios, ó cuyo servicio ó cooperación se necesite en ellos, al cumplimiento de las órdenes ó providencias que dicten dichas autoridades en el ejercicio de sus funciones. Todo individuo vecino del lugar donde resida cualquiera de los expresados funcionarios, y á quien se requiera legalmente, deberá prestar el auxilio que se le exija para la pronta administración de justicia, para impedir la perpetración de un delito, ó para aprehender á los delincuentes ó individuos que deben ser detenidos á virtud de orden judicial.

627 del Código Judicial.—47, ordinal 7.°; 75, ordinal 7.°; 100, ordinal 5.°; 115, ordinal 6.°; 122, ordinal 5.°, y 217 del Código de Organización.—8.° de la Ley 72 de 1890.

Art. 335. Los Magistrados y los Jueces podrán decretar con las debidas precauciones, para impedir los abusos, el desglose y entrega de documentos originales, cuando los pidan las partes que los hayan presentado. El pedimento de devolución se sustanciará como un artículo, si el pleito no estuviere terminado. Si estuviere fenecido, se oirá previamente á las otras partes antes de resolver la solicitud. Harán que los Secretarios dejen copia de ellos, á costa del solicitante, en el respectivo lugar del expediente, y el recibo necesario que se extenderá á continuación de la copia del documento. En el documento cuyo desglose se decrete, se copiará la resolución que se dicte, para lo cual se utilizará la parte blanca que en el documento hubiere, aunque el papel no sea competente. Si se apelare del auto, se copiará la sentencia del superior.

725 y 726 del Código Judicial.

Art. 336. Los documentos que acrediten obligaciones personales que se hayan cumplido en su totalidad por razón del juicio, se desglosarán cuando el que los presentó esté obligado á devolverlos, ó se entregarán á los deudores, si éstos lo solicitaren.

Si no se ha cubierto todo el valor del documento que se ordena devolver, el Juez, en el auto en que se decrete el desglose, hará mención de la cantidad que se haya satisfecho.

725 y 726 del Código Judicial.

Art. 337. Los endosos ó traspasos de un documento se extenderán á continuación del mismo, si fuere posible, para lo cual se utilizará la parte blanca que en él haya, aunque el papel no sea competente.

12 de la Ley 110 de 1888.

Art. 338. Deróganse estos artículos del Libro II del Código Judicial: 259, 416, 417, 424, 428, 429, 433, 440, 441, 465 ordinal 3°, 485 á 491, 508, 534, 560, 611, 660, 662, 667, 744, 812, 819, 828, 859, 860, 914 á 927, 939 á 943, 951 á 953, 956, 969 á 980, 990, 1010, 1011, 1015, 1017, 1027 ordinal 6.°, 1028, 1031, 1032, 1034, 1041, 1054, 1060, 1116 á 1124, 1260, 1268, 1275, 1313, 1315 á 1321, 1326 á 1329, 1331, 1332, 1335, 1336, 1340, 1472 á 1483 y 1497.

Deróganse igualmente todas las disposiciones relativas á enjuiciamiento civil contenidas en las Leyes 61 de 1886, 57 y 153 de 1887, 30 y 135 de 1888, y las disposiciones contenidas en las mismas leyes sobre recursos de casación y revisión en lo civil y lo criminal; no quedando comprendidos en esta derogación los artículos 37 á 90 de la mencionada Ley 30 de 1888.

LIBRO TERCERO

ENJUICIAMIENTO EN NEGOCIOS CRIMINALES

TITULO I

DISPOSICIONES PRELIMINARES

Art 339. El procedimiento en los negocios criminales puede ser de oficio, ó por acusación legalmente intentada.

Es de oficio cuando los Jueces tienen el deber de proceder contra los delincuentes, y los funcionarios de instrucción el de iniciar los sumarios, aunque no lo solicite un acusador particular.

Por regla general todo delito da lugar á procedimiento de oficio. Se exceptúan los delitos de adulterio, injuria, calumnia, amenazas, heridas y maltratamiento de obra que no causen incapacidad por más de dos días, á menos que la ofensa sea causada á un empleado público de cualquiera clase, en ejercicio de sus funciones, ó por razón de ellas. En tal caso el procedimiento de oficio se extiende á hacer efectiva la responsabilidad del delincuente por el delito contra la persona particular del empleado.

Este artículo subroga al 1499 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 365 de esta ley.

TITULO II

ARRESTO Ó DETENCIÓN PROVISIONAL DEL SINDICADO

Art. 340. Cuando se proceda por delito ó culpa que tenga señalada pena de muerte, presidio ó reclusión, el sindicado será arrestado ó detenido, si resultare contra él, por lo menos, una declaración de testigo hábil, aunque no se haya todavía escrito, ó un indicio grave de que es autor, cómplice, auxiliador ó encubridor del hecho criminoso que se averigua, ó que el funcionario que decrete el arresto ó la detención le haya visto cometer el hecho, ó que sea hallado *infraganti delito*.

Este artículo subroga al 1552 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 365 de esta ley.

Art. 341. No podrán ser excarcelados, ni con la fianza de que habla el artículo 1560 del Código Judicial, los sindicados como reos de los siguientes delitos: hurto de dos ó más cabezas de ganado mayor, ó de cosa que valga más de cincuenta pesos, robo, falsedad y falsificación, asesinato, homicidio voluntario, rebelión, sedición, homicidio premeditado, incendio, fuerza y violencia, estupro, alzamiento con caudales pú-

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

blicos, castración, piratería y heridas ó maltratamiento á empleados ó funcionarios públicos en ejercicio de sus funciones ó por razón de ellas, á menos que alguno de los delitos expresados merezca pena distinta de las expresadas en el artículo 340 de esta Ley.

Lo dispuesto en el inciso que precede es aplicable en el caso de tentatativa de los delitos de robo, asesinato, homicidio premeditado, homicidio voluntario, incendio, fuerza y violencia, estupro, castración, piratería, y heridas ó maltratatamiento á empleados ó funcionarios públicos.

Este artículo subroga al 1561 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 365 de esta ley.

Art. 342. Si el delito por que se estuviere procediendo no tuviere señalada ninguna de las penas expresadas en el mencionado artículo 340, el funcionario de instrucción librará orden de comparendo al indiciado ó reo presunto, siempre que sea necesario que se presente para practicar alguna diligencia relativa al sumario, debiéndolo hacer conducir preso, si no se presentare en el día, hora y lugar que se le hubiere prefijado. La orden de comparendo se notificará de la manera prevenida en el artículo 1539 del Código, ó por medio de otra autoridad, según que el reo estuviere presente ó ausente.

Este artículo subroga al 1565 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 365 de esta ley.

TITULO III

DEFENSORES

Art. 343. Todo procesado que no quiera ó no pueda defenderse por sí, tiene derecho de nombrar un defensor al tiempo de hacérsele la notificación del auto de proceder.

Este artículo subroga al 1621 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 365 de esta ley.

Art. 344. Tanto el defensor nombrado por el procesado como el que nombre el Juez estarán obligados á aceptar y desempeñar el encargo, sin que puedan excusarse sino por enfermedad grave ó habitual, por grave perjuicio de sus intereses, ó por ser empleados públicos ó mayores de sesenta años, ó menores de veintiuno, no habilitados de edad, ó por tener á su cargo cuatro ó más defensas de oficio.

A los defensores que no comprueben suficientemente alguna de las causas expresadas, los compelerá el Juez con multas hasta de cuarenta pesos.

Este artículo subroga al 1623 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 365 de esta ley.

TITULO IV

AUTO EN QUE SE DECLARA Ó NÓ CON LUGAR AL SEGUIMIENTO DE CAUSA

Art. 345. En la parte resolutiva del auto de enjuiciamiento se mulará el cargo mencionando el delito con la de nominación que le

da el Código Penal en el respectivo Capítulo, ó en el correspondiente Título cuando éste no se divide en capítulos, como homicidio, heridas, robo, hurto, estafa, delitos y culpas contra los funcionarios y empleados públicos, etc., sin calificar desde luego si el homicidio fue premeditado, involuntario ó de otra especie, ni señalar algún artículo especial en el capítulo ó sección correspondiente de la ley penal que trate del delito materia del proceso.

Este artículo subroga al inciso último del artículo 1627 del Código Judicial: este inciso se derogó expresamente por el artículo 365 de esta ley.

Art. 346. El auto de sobreseimiento se consultará, si no fuere apelado, en los negocios en que pueda y deba procederse de oficio, siempre que el delito investigado sea de los que merecen las penas corporales de muerte, presidio ó reclusión. En todo caso dicho auto es apelable por el respectivo Agente del Ministerio público y por el acusador particular, si lo hubiere, y la apelación se concederá en efecto suspensivo.

Este artículo subroga al 1630 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 365 de esta ley.

Art. 347. El auto de enjuiciamiento es apelable en efecto suspensivo.

Este artículo subroga al 1631 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 365 de esta ley.

Art. 348. Cuando en los negocios en que haya lugar á seguimiento de causa se declare no haberlo respecto de alguno ó algunos de los sindicados, se les mandará poner en libertad si estuvieren privados de ella; y si el sobreseimiento fuere consultable, la consulta se surtirá inmediatamente, quedando en suspenso el juicio mientras el superior resuelve la consulta.

Este artículo subroga al 1632 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 365 de esta ley.

TITULO V

PRISIÓN DEL PROCESADO

Art. 349. En el auto en que por delito que merezca pena de muerte, presidio ó reclusión se declare haber lugar á seguimiento de causa contra alguno ó algunos, se mandará que éstos sean reducidos á prisión.

Este artículo subroga al 1635 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 365 de esta ley.

Art. 350. Cuando el delito por que se proceda no tuviere señalada ninguna de las penas de que trata el artículo que precede, en el auto en que se declara con lugar á seguimiento de causa no se mandará reducir á prisión al sindicado; pero sí se dispondrá la expedición de la correspondiente orden de comparendo.

Este artículo subroga al 1643 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 365 de esta ley.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

TITULO VI

INDICIOS

Art. 351. También se presume legalmente que es autor del robo ó hurto de una cosa el individuo de mala conducta anterior debidamente comprobada. en cuyo poder se encuentre la cosa hurtada ó robada, siempre que no explique satisfactoriamente el medio de adquisición de la misma cosa.

Este artículo no subroga á ninguno del Código Judicial. y se le colocaría bien á continuación del 1706 del mismo Código.

TITULO VII

CELEBRACIÓN DEL JUICIO

Art. 352. La concurrencia del Agente del Ministerio público al acto de la celebración del juicio es obligatoria; y en caso de falta no excusable por motivo grave á juicio del Juez de la causa, éste le impondrá una multa de diez á cincuenta pesos.

Este artículo no subroga á ninguno del Código Judicial, y se le colocaría bien á continuación del 1710 del mismo Código.

Art. 353. Es deber estricto del Agente del Ministerio público presentar en el acto de la celebración del juicio, ó al contestar el traslado del proceso, un escrito razonado, con exposición de los hechos y de la doctrina legal aplicable, en el cual exprese de un modo claro la manera como á su juicio debe dictarse la sentencia definitiva. En ningún caso le es permitido reproducir piezas anteriores, pues debe hacer un estudio crítico de las pruebas del plenario, para determinar si con ellas se han corroborado ó desvirtuado las del sumario.

Este artículo tampoco subroga á ninguno del Código Judicial, y se le colocaría bien á continuación del 1711 del mencionado Código.

TITULO VIII

APELACIONES Y CONSULTAS

Art. 354. Si pasare el tiempo señalado en el artículo 1723 del Código Judicial sin que se apele de la sentencia definitiva, el Juez mandará que se consulte con el superior respectivo si el delito por que se procede tuviere señalada pena de muerte, de presidio ó reclusión. Si el delito por que se procede tuviere señalada otra pena, el Juez en el caso expresado de no apelación contra la sentencia definitiva la declarará ejecutoriada y la mandará ejecutar.

Este artículo subroga al 1724 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 365 de esta ley.

TITULO IX

REFORMA Y REVOCACIÓN DE AUTOS

Art. 355. Los Magistrados y los Jueces pueden reformar y revocar de oficio, antes de ser notificados á cualquiera de las partes, los autos interlocutorios y de sustanciación que dicten en las causas criminales.

También pueden reformar y revocar los mismos autos á petición de parte legítima, hecha dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes á la de la notificación del auto reclamado.

Este artículo subroga al 1734 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 365 de esta ley.

TITULO X

IMPEDIMENTOS Y RECUSACIONES

Art. 356. Es aplicable á los Magistrados y Jueces que conocen en asuntos criminales todo lo que sobre impedimentos y recusaciones se dispone en el Capítulo II Título 3.° Libro 2.° del Código Judicial; pero cuando las causales de impedimento de un Magistrado ó Juez fueren el parentesco de consanguinidad ó de afinidad de los mismos con la persona que desempeña el cargo de Agente del Ministerio público, no están en el deber de poner dicho impedimento en conocimiento de las partes.

Este artículo no subroga á ninguno del Código Judicial, y se le colocaría bien á continuación del 1740 del mencionado Código.

TITULO XI

EXCEPCIONES

Art. 357. El procesado puede proponer las excepciones dilatorias de incompetencia de jurisdicción y de ilegitimidad de la personería del acusador, sea oficial ó particular. También puede proponer las excepciones de pleito pendiente, cosa juzgada, prescripción, indulto y amnistía.

Este artículo subroga al 1743 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 365 de esta ley.

TITULO XII

PROCEDIMIENTO DE LA CORTE SUPREMA Ó DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES EN SEGUNDA INSTANCIA

Art. 358. Devueltos los autos, ó cuando no se ha pedido que la causa se abra á prueba, el Magistrado sustanciador mandará citar á las partes para sentencia, señalándose uno de los cinco días siguientes para que los Magistrados que componen la Sala de decisión oigan en estrados á las partes.

Este artículo subroga al 1813 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 365 de este Código.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

TITULO XIII

JUICIOS DE RESPONSABILIDAD

Art. 359. El que establece alguna queja ó dé algún denuncio de la clase á que se refiere la Sección única del Título x, Libro 3.° del Código, deberá acompañar la prueba siquiera sumaria de su relato. En caso contrario, ó si tal prueba no constare por otro medio cualquiera, la investigación quedará en suspenso.

Este artículo subroga al 1824 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 365 de esta ley.

El artículo subrogado decía: "El que *entable* alguna queja...." Por inadvertencia del amanuense se puso: *establece.*

Art. 360. Se seguirán los juicios de responsabilidad por los trámites ordinarios cuando el hecho que es materia del juicio tenga señalada por la ley pena corporal ó de privación ó de suspensión de los derechos políticos ó civiles, ó de inhabilitación para ejercer empleo; y se seguirán por los trámites extraordinarios cuando el hecho constituya responsable al empleado solamente al resarcimiento de daños y perjuicios, ó merecedor de pena de arresto ó de otra diferente de las mencionadas en la primera parte de este artículo.

Este artículo subroga al 1875 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 365 de esta ley.

Art. 361. Surtida la tramitación de que habla el artículo 1903 del Código Judicial y citadas las partes para sentencia de segunda instancia, se remitirán los autos al superior y éste dará vista por tres días al Agente del Ministerio público; dispondrá que se fije el negocio en lista por cuatro días, luégo que se devuelva el expediente, y dictará sentencia dentro de los veinte días siguientes al de la desfijación del edicto.

Igual procedimiento se observará por el superior respectivo en los juicios que se siguen cuando el Juez de la causa no residiere en el mismo lugar que el encausado.

Este artículo subroga tanto al 1904 como al 1921 del Código Judicial: de éstos, el primero se derogó expresamente por el 365 de esta ley. Por inadvertencia no figura el 1921 entre los artículos que deroga el 365.

TITULO XIV

VISITAS DE CÁRCELES

Art. 362. Las visitas de cárceles ordenadas por el artículo 2003 de nn Código Judicial se verificarán alternativamente, en el departamento de hombres y en el de mujeres, los sábados de cada semana.

Este artículo subroga el 2008 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 365 de esta ley.

TITULO XV

DISPOSICIONES VARIAS

Art. 363. En toda sentencia definitiva en negocios criminales se computará, como parte de la pena corporal que se aplique, el tiempo que el reo haya estado ó esté preso, detenido ó arrestado, desde que se inició el procedimiento hasta que empiece á sufrir la pena corporal á que ha sido condenado, si la pena que se imponga en la sentencia fuere una de las mencionadas; pero si la pena que se impone fuere de presidio ó reclusión, cada dos días de prisón, detención ó arresto se computarán por uno de presidio ó reclusión.

Este artículo subroga al 2024 del Código Judicial, el cual se derogó expresamente por el 365 de esta ley.

Art. 364. Lo dispuesto en el artículo 277 de la Ley 57 de 1887 se hace extensivo á los individuos que se hallen en el caso del artículo 246 de la misma Ley.

Los artículos 277 y 246, que se citan, se hallan en la *Codificación Nacional*, Tratado quinto, bajo los números 324 y 284 de orden, respectivamente.

Art. 365. Deróganse los artículos 1644 á 1654 y 1794 del Código Judicial, y las demás disposiciones del mismo Código en la parte que se refiere á la confesión del procesado de que hablan los mencionados artículos 1644 á 1654. Deróganse igualmente los artículos 1499, 1552, 1561, 1565, 1621, 1623, inciso 3.° del 1627, 1630, 1631, 1632, 1635, 1643, 1724, 1734, 1743, 1813, 1824, 1875, 1904, 2008 y 2024 del citado Código Judicial, los artículos 31 y 32 de la Ley 30 de 1888 y la Ley 132 del mismo año.

Los artículos 31 y 32 de la Ley 30 de 1888, y el artículo único de la Ley 132 del mismo año, se hallan en la *Codificación Nacional*, Tratado quinto, números 251, 252 y 254 de orden.

RECURSOS DE CASACIÓN Y REVISIÓN

CAPITULO PRIMERO

Recurso de casación.

I

Objetos de este recurso y casos en que él puede interponerse.

Art. 366. Con el fin principal de uniformar la Jurisprudencia, y también con el de que se enmienden los agravios inferidos, se concede recurso de casación para ante la Corte Suprema contra las sentencias definitivas de segunda instancia dictadas por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, en asuntos civiles y en juicio ordinario, ó que tenga carácter de tál, cuando ocurra alguna de las causales que se establecen en este Capítulo para el efecto de poder interponer el recurso. Es además indispensable que coexistan las circunstancias siguientes: 1.ª Que la sentencia se funde ó deba fundarse en leyes que rijan ó hayan regido en toda la República, á partir de la vigencia de la Ley 57 de 1887; ó

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

que se funde ó deba fundarse en leyes de los extinguidos Estados, que sean idénticas en esencia á las nacionales que estén en vigor; 2.ª Que la sentencia verse sobre hechos relativos al estado civil de las personas, ó sobre intereses particulares en que la cuantía del juicio sea ó exceda de tres mil pesos; y 3.ª Que haya contrariedad en las sentencias de primera y segunda instancia en cuanto á la inteligencia, ó indebida aplicación de las leyes en que se apoyan, ó en cuanto á lo principal del pleito.

Muy grandes son los bienes que resultan de la uniformidad en la legislación civil, comercial y penal de cada país. Recuérdese el sin número de dificultades frecuentes y cada día mayores que ocurrieron durante el régimen federal, con motivo de la semi-soberanía de los Estados y de la variedad de su legislación en los indicados ramos. Salta á la vista, sin necesidad de descender á pormenores, que tienen que ser grandes los inconvenientes y ningunos los beneficios de que pueblos que ocupan un territorio común, que son gobernados por una misma autoridad suprema y por instituciones que les dan ante el mundo el carácter de Nación soberana; que se hallan, además, ligados por los vínculos de raza, de religión y de idioma, estén sometidos á legislaciones diferentes en cuanto á sus relaciones civiles, es decir, que la constitución de la familia en todos sus variados aspectos: matrimonio, relaciones conyugales, patria potestad, legitimidad de los hijos, etc. etc.; que la transmisión de los bienes por herencia, y los contratos civiles y comerciales, no se hallen reglados por una sola y misma legislación. No basta, sin embargo, para conseguir el fin deseado, el establecimiento de una legislación única, pues si las leyes no se interpretan generalmente de una misma manera, la uniformidad es aparente y no real, y grandes pueden ser los males que ello ocasione, porque, fijada que haya sido por un Tribunal la inteligencia de una ley, es indudable que á la sombra de ésta, así interpretada, nacen y se desarrollan muchos intereses y esperanzas, que serán contrariados ó desconocidos si distinto Tribunal da á la misma ley una interpretación diversa.

Desde luego es claro que la uniformidad de hecho que se desea, se obtendría sometiendo á la revisión de un Tribunal Supremo y único las decisiones de los Tribunales y Juzgados, en lo cual consiste el recurso de casación en su más amplia significación; pero siendo, como es, imposible que un solo Tribunal pueda revisar todas las resoluciones de los Tribunales y Juzgados, por ser grande su número, ha sido preciso determinar las que deben ser examinadas, y dividir en salas el personal de las Cortes de casación. En los países en donde se halla establecido el recurso de que hablamos, generalmente se concede respecto de todas las sentencias definitivas dictadas por los Tribunales Superiores; pero entre nosotros no ha podido disponerse esto mismo, porque la Corte Suprema, que es, conforme á la Constitución, nuestro Tribunal de casación, tiene escaso personal, por una parte, y por otra, son muchos y variados los asuntos cuyo conocimiento se le ha atribuído. Ha sido, pues, absolutamente indispensable—ya que no puede prescindirse de establecer el indicado recurso—limitarlo mucho, mientras se introducen las reformas convenientes y se créa un Tribunal que tenga únicamente el carácter de Corte de casación, ó se dispone por una ley que la Corte Suprema deje de conocer en varios asuntos que son de su competencia en la actualidad. Tal es la razón de las restricciones que consagra el presente artículo.

Respecto de la limitación de que trata el ordinal 3.°, juzgamos conveniente indicar, además, el motivo especial que se tuvo en cuenta para establecerla, á saber, que no siendo el objeto del recurso de casación reparar el agravio inferido por una sentencia á una de las partes, sino establecer la *uniformidad* de la inteligencia de las leyes, era de presumirse, cuando son conformes las sentencias de ambas instancias, que la ley aplicada se había interpretado rectamente; si en dos decisiones distintas existía conformidad en la inteligencia de una misma ley, no había necesidad manifiesta de que decidiera el Tribunal de casación. Esto se pensó; sin embargo, con motivo de dicha limitación se nos han hecho conocer varias sentencias en que, no obstante existir la conformidad requerida, es no sólo inexacta sino hasta absurda la interpretación que se ha dado á las leyes que les sirven de fundamento, por lo cual hoy nos inclinamos á creer que habría sido mejor conservar la disposición de la Ley 61 de 1886 —artículo 44—que prevenía la consignación de una cantidad, como depósito, en el caso de conformidad de las dos sentencias.

Art. 367. Puede también interponerse recurso de casación contra las sentencias definitivas de segunda instancia dictadas por los Tribunales Superiores en los juicios de concurso de acreedores, cuando exista la primera de las causales del artículo 369 de esta Ley, y ocurran, además, las tres circunstancias mencionadas en el artículo anterior.

Art. 368. En asuntos criminales se concede recurso de casación, con los mismos fines mencionados en el artículo 366, contra las sentencias definitivas que pronuncien dichos Tribunales Superiores por la comisión de alguno de los delitos designados en el artículo 29 de la Constitución, si en la sentencia se impone pena de muerte.

Cuando en el caso de este artículo no se interponga recurso de casación, el tribunal remitirá la sentencia, con todo lo actuado, en consulta á la Corte Suprema.

338.

II

Causales que dan derecho á interponer el recurso de casación.

Art. 369. Dan derecho á interponer recurso de casación, en materia civil, los hechos siguientes:

1.° Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva ó de doctrina legal: ya sea directa la violación; ya sea ésta efecto de una interpretación errónea de la ley ó de la doctrina legal; ya de aplicación indebida de leyes ó de doctrinas legales.

Es entendido que al ocuparse la Corte en el examen de la sentencia con motivo de esta causal, es sobre la base de que son verdaderos los hechos en que se apoya la sentencia; á menos que se alegue por el recurrente contra la apreciación de determinada prueba, y del expediente mismo resulte que, en efecto, se incurrió en error de derecho ó en error de hecho, siempre que este último se acredite de un modo evidente, con documentos ó autos auténticos que obren en el proceso;

371, 383 y 392.

Creemos que debe leerse: "..... con documentos ó *actos* auténticos que obren en el proceso." Así dice el ordinal 8.° del artículo 38 de la Ley 61 de 1886; y en iguales términos se halla concebido el artículo 1692 de la Ley de España, sobre enjuiciamiento civil, de la cual se tomó la indicada expresión.

El segundo inciso tiene por objeto que la Corte no se ocupe en el examen de los puntos de hecho de la sentencia, sino en el caso de que se alegue contra la apreciación de determinada prueba.

Se incurre en error de derecho en la apreciación de una prueba cuando se le reconoce fuerza probatoria en grado superior ó inferior al que la ley le asigna, ó cuando se estima como prueba un hecho que no tiene carácter de tál, conforme á la ley. Así, por ejemplo, se le reconocería fuerza probatoria en grado mayor del que la ley fija, al instrumento de que habla el artículo 1761 del Código Civil, si se estimara suficiente para comprobar el dominio de un inmueble. Con declaraciones de testigos no puede acreditarse contrato alguno que contenga la entrega ó promesa de una cosa que valga más de quinientos pesos; y se incurriría en error de derecho si en este caso se le asignara fuerza probatoria al testimonio.

2.° No estar la sentencia en consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas por los litigantes: ya porque se resuelva sobre puntos que no han sido objeto de la controversia; ó se deje de resolver sobre alguno de los que lo han sido; ó se condene á más de lo pedido;

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

ó no se falle sobre alguna de las excepciones perentorias que se han alegado;

384.

3.° Contener la sentencia en su parte resolutiva disposiciones contradictorias, que no se concilian á pesar de haberse aclarado la sentencia á virtud de lo establecido en el artículo 860 del Código;

385.

Para que pueda alegarse esta causal es preciso que previamente se haya solicitado la debida aclaración de la sentencia.

4.° Haber habido incompetencia de jurisdicción improrrogable en el Tribunal sentenciador, salvo el caso de ratificación, cuando ésta sea permitida;

124, ordinal 3.°, y citas, 386.

5.° Haberse abstenido el Tribunal de conocer en asunto de su competencia, y declarádolo así en la sentencia; y

386 y 392.

6.° Haberse incurrido, en conformidad á lo establecido en los artículos 123 y 126 de esta Ley, y con las limitaciones fijadas en los mismos y en el 125, en alguna de estas causas de nulidad: ilegitimidad en la personería de alguna de las partes, y no haberse notificado la demanda al demandado.

386.

Art. 370. En materia criminal las causales que dan derecho á interponer el recurso de casación son estas:

1.ª Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva ó de doctrina legal; ya sea directa la violación; ya sea ésta efecto de una interpretación errónea de la ley ó de la doctrina legal; ya de la aplicación indebida de leyes ó de doctrinas legales, como en el caso, entre otros, de que se aplique la ley vigente al tiempo de la comisión del delito y no una posterior que impone menor pena.

Es entendido que al ocuparse la Corte en la apreciación de la sentencia por esta causal, debe tener en consideración el veredicto del Jurado, pues en consonancia con éste debe hallarse la parte resolutiva de aquélla;

391, inciso segundo, y fin del último.

Hay también aplicación indebida de ley cuando no se tienen en cuenta los motivos legales y comprobados que hacen excusable al reo.

El segundo inciso indica claramente no sólo que el veredicto del Jurado debe ser el fundamento de la sentencia, sino que para estimar la legalidad de ésta es preciso que la Corte parta del principio de que la decisión del Juez debe hallarse en consonancia con el veredicto.

2.ª Ser en concepto de la Corte notoriamente injusto el veredicto del Jurado; y

391, inciso tercero.—Codificación Nacional, Tratado quinto, número 362 de orden.

¿En qué consiste ó debe consistir la injusticia notoria de un veredicto conforme al ordinal 2.° del artículo que precede?

La presente ley nada establece en el particular; pero el artículo 28 del Código Civil dice "que las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras".... Ahora bien: *notoriedad* significa: ".... Conocimiento *claro* que todos tienen de las cosas"; y quien dice *evidencia* dice: "Certeza *clara*, manifiesta y tan perceptible de una cosa, que nadie puede racionalmente dudar de ella." "Una cosa es *evidente* cuando no sólo es cierta sino *clara*."

Además, el artículo 313 de la Ley 57 de 1887—Codificación Nacional, Tratado quinto, número 362 de orden—dice:

"El veredicto del Jurado no está sujeto, por regla general, á ningún recurso.

"Sin embargo si alguna ó algunas de las resoluciones dictadas le parecieren al Juez notoriamente injustas, esto es, *contrarias á la evidencia*, dicho funcionario.... declarará injustas la resolución ó resoluciones que en su concepto lo fueren...."

La injusticia notoria de un veredicto consiste, pues, en que éste sea *contrario á la evidencia*. Así pues, en el caso de ser condenatorio el veredicto es notoriamente injusto, es decir, evidentemente injusto, cuando es que el encausado no ha cometido el delito que se le imputa

Pero ¿dónde se halla, dónde debe buscarse esa verdad evidente? Sin duda alguna debe buscarse en el proceso mismo; deben estudiarse atenta y cuidadosamente las pruebas que debieron servir al Jurado para dictar el veredicto, en razón de que la evidencia nace necesariamente de dichas pruebas, pues no es dable tener en consideración hechos probatorios que no figuran en el expediente, porque si esto fuera permitido, es claro que el campo de la arbitrariedad no tendría límites.

Preséntase ahora una objeción grave: si es potestativo de la Corte apreciar legalmente el valor de las pruebas que el Jurado estimó y calificó en conciencia, como debe, se hace nugatoria la intervención de éste en las causas en que la Corte debe conocer por recurso de casación, pues no habría objeto en reunir un Jurado que aprecie con el criterio de su propia conciencia las pruebas que obran en un proceso, ni objeto en disponer que el Juez dicte sentencia sobre la base de un veredicto que es resultado de la manera como el Jurado estima las pruebas, si la Corte tiene la atribución de estimar esas pruebas con un criterio diferente, y anular ó nó la sentencia del Juez. Esta interpretación de la ley es inaceptable, se dirá, porque, lejos de establecer la debida correspondencia y armonía de las disposiciones legales, produce el efecto contrario, pues á virtud de la extensión que se da á la atribución de la Corte, en cuanto á la manera de apreciar las pruebas, se hacen inútiles las leyes que rigen la institución del Jurado.

La fuerza de esta objeción es más aparente que real: ya porque las leyes posteriores pueden modificar y aun derogar las anteriores, implícitamente; ya porque el examen que la Corte debe hacer de las pruebas se dirige *únicamente* á averiguar si existe ó nó la *evidencia* de que se ha hablado.

Para abundar en claridad consideremos ahora los varios casos que pueden ocurrir cuando el Jurado dicta veredicto condenatorio:

1.° Supóngase que en el proceso se hallan la prueba del cuerpo del delito, é indicios, débiles ó vehementes contra el encausado. Supóngase igualmente que en el mismo proceso se halla la prueba plena, debidamente establecida, que acredita la imposibilidad física de dicho encausado para cometer el delito, verbigracia, el hallarse á tiempo de su ejecución en un lugar distante de aquel en que se cometió—en lo cual consiste la prueba de coartada,—ó estar aprisionado, ó en completa inmovilidad por causa de enfermedad; pues bien, es indudable que esta contraprueba no sólo infirma completamente los indicios que determinaron al Jurado á pronunciar veredicto condenatorio, sino que produce la *evidencia* de que el encausado *no ha cometido* el delito que se le imputa. En consecuencia, el veredicto adolece de injusticia notoria, es decir, es evidentemente injusto.

Repárese que en el presente caso la Corte no apreciaría con criterio diferente del empleado por el Jurado las otras pruebas que éste estimó, sino que se limitaría á dar preferencia á una contraprueba de valor jurídico incontestable.

2.° Supóngase que el proceso no contiene prueba alguna, directa ó indirecta, respecto del cuerpo del delito, ó de la culpabilidad del procesado. ¿El veredicto será contrario á la evidencia, en cualquiera de las dos indicadas suposiciones? Creemos que sí lo es; pero juzgamos indispensable, para justificar nuestra afirmación, profundizar un poco el asunto.

En el caso precedente, la evidencia tiene por fundamento un hecho *positivo:* la imposibilidad física en que se hallaba el encausado para cometer el delito. En el caso actual la evidencia tiene por base un hecho *negativo*, cual es la carencia de prueba, y sobre semejante base es imposible, se nos dirá, que el espíritu adquiera la evidencia. De un hecho positivo puede deducirse, inferirse

Archivo Histórico Rosario

alguna cosa; de uno negativo, nó, porque de la nada, nada se deduce. En otros términos: á virtud de la falta de prueba es innegable que no puede afirmarse la existencia del delito, ni la culpabilidad del supuesto reo; pero tampoco puede asegurarse que no ha habido delito, ó que el encausado no lo ha cometido; menos puede afirmarse que es evidente lo uno ó lo otro, es decir, que es *evidente* que no hay delito, ó que el procesado no lo ha cometido, pues de la falta de prueba de un hecho no se deduce lógicamente su inexistencia. Esto es cierto, especulativamente hablando, porque en el campo filosófico la investigación es ilimitada para el hombre; pero en asuntos jurídicos no es exacto, porque es notorio que en la indagación judicial se llega á un estado del cual no se puede pasar, es decir, hay un momento en que termina la averiguación de los hechos, la creación de las pruebas, lo cual es perfectamente razonable, y la acción del Juez que falla no se ejerce sino en un campo circunscrito: aquel cuyos límites fija el respectivo proceso, pues, como yá dijimos, á ningún Tribunal le es potestativo decidir en consideración á hechos probatorios que no figuran en el expediente—la existencia de un hecho, no comprobada en el proceso, es absolutamente estéril—ni prescindir de los que figuran en él. En consecuencia, la falta de prueba respecto de un hecho, en un proceso que no adolece de nulidad, es motivo para que pueda afirmarse no sólo la inexistencia del hecho, sino que es *evidente* que él no existe; evidencia que es una inferencia que se funda en un hecho *positivo*, á saber: el proceso mismo, que se estima exacto y completo. Luego el veredicto condenatorio que se dicta habiendo falta absoluta de prueba, ya respecto del cuerpo del delito, ya de la culpabilidad del encausado, es un veredicto evidentemente injusto, porque es evidentemente cierto, ó que no ha habido delito, ó que el procesado no es la persona culpable.

En este caso, lo mismo que en el anterior, la Corte no entra á estimar las pruebas que yá el Jurado apreció en conciencia: la decisión de injusticia notoria se fundaría en la falta absoluta de prueba, pues tál es la suposición que constituye el caso en cuyo examen nos ocupamos.

3.° Si el proceso sólo ofrece indicios no necesarios, en cuanto al cuerpo del delito y en cuanto á la culpabilidad del encausado, y no obstante esta imperfección en la prueba, el Jurado dicta veredicto condenatorio, ¿será evidentemente injusto este veredicto? No vacilamos en calificarlo de injusto, pero nó de *evidentemente* injusto, porque los indicios que existen se oponen á la evidencia. "Una cosa es evidente, dice el diccionario, cuando no sólo es cierta sino *clara*." Obsérvese la marcha que sigue el espíritu en cuanto á la credibilidad de un hecho. Si los indicios no son necesarios, pero sí de alguna gravedad, uno se inclina á creer que el hecho existe, y más y más se inclina á ello, á medida que aumenta la vehemencia de los indicios. Recíprocamente, si va disminuyendo la fuerza de los indicios, disminuye también el grado de credibilidad respecto del mismo hecho; cuando los indicios son yá muy débiles, apenas hay una sombra de credibilidad, una duda, tan insignificante como se quiera, pero que hace *imposible la evidencia*. Así pues, en el caso en que nos ocupamos no es notoriamente injusto el veredicto condenatorio, porque no es *evidentemente* cierto que no hay delito, ó que no es culpable el procesado; y en consecuencia, la Corte no puede, no debe casar la sentencia por causa de injusticia notoria.

En este tercer caso no tienen, pues, restricción alguna las disposiciones legales que asignan al Jurado la facultad de estimar en conciencia las pruebas.

En resumen. La Corte debe anular una sentencia condenatoria, por ser notoriamente injusto el veredicto en que se apoya, en dos casos:

1.° Cuando existe en el proceso una contraprueba plena y debidamente establecida que infirma en absoluto los indicios que obran en el mismo proceso.

2.° Cuando hay carencia absoluta de prueba respecto del cuerpo del delito, ó de la culpabilidad del procesado.

En ambos casos hay injusticia notoria porque hay evidencia contraria á la existencia del delito, ó á la culpabilidad de determinada persona.

Lo expuesto, con relación al veredicto condenatorio, es perfectamente aplicable al caso de injusticia notoria de que hablan los artículos 313 y 316 de la Ley 57 de 1886—Codificación Nacional, Tratado quinto, números 362 y 365 de orden.—Cuando el veredicto fuere absolutorio, deben declarar el Juez ó el respectivo Tribunal que hay injusticia notoria, si es *evidentemente cierto* que ha habido delito y que el encausado es la persona responsable.

Juzgamos oportuno terminar este comentario ocupándonos en considerar brevemente el salvamento de voto que por separado extendieron dos respetables Magistrados de la Corte Suprema, respecto de la sentencia que figura en los números 265 y 266 de la *Gaceta Judicial*, de fecha 30 de Marzo de 1891, y que acordó la mayoría de la Corte en la causa contra Nicomedes Urueña por el delito de homicidio, con circunstancias de asesinato, cometido en la persona de Purificación Serrano.

Fúndase el salvamento de voto de dichos señores Magistrados, en lo relativo á la injusticia notoria del veredicto, en que no está probado el cuerpo del delito por que se condenó á Urueña, pues "el delito que del proceso resulta haberse cometido, es el de *desaparecimiento*, puesto que Urueña sacó á Purificación Serrano, de Melgar, valiéndose de un artificio, y la condujo al sitio de *El Brasil*, de donde ella no regresó, sin haber parecido al tiempo de terminarse el juicio, ni dar el robador razón del paradero de la desaparecida; delito castigado con la pena de doce años de presidio."

Uno de los señores Magistrados de quienes hablamos, dice:

"De estos diferentes indicios se pueden estimar como de gravedad los siguientes: haber Urueña anunciado su propósito de dar muerte á la Serrano; haber ésta desaparecido sin poderse descubrir su paradero, y haber notado un testigo que en el vestido de Urueña había una mancha de sangre, cuando efectuó solo su regreso á Melgar. Mas de estos antecedentes apenas puede deducirse lógicamente que es probable que ella haya perecido á manos de Urueña; pero nó que el homicidio se consumó. Para asegurarlo así, habría sido necesario, yá que el cadáver no fue hallado, que los rastros de ese atentado hubieran sido descubiertos de algún modo. Sin esto, la declaratoria del Jurado de haberse perpetrado el delito, es efecto de un cálculo de probabilidad y nada más. Tampoco está fuera de lo posible, aun concretados todos los indicios enumerados, que Purificación Serrano haya sido abandonada en algún punto de las riberas del Magdalena, ó que, una vez embarcada en el puerto de Fusagasugá, hubiera perecido por naufragio. Suponiendo que el sindicado es el verdadero autor del delito de homicidio, todavía habría sido necesario el conocimiento de las circunstancias que hubieran acompañado á su perpetración, para ser calificado legalmente como un asesinato, y condenar á su autor á la pena capital."

Estos conceptos del señor Magistrado son de una exactitud rigurosa, y convencen de que el Jurado que conoció en la causa no debió dictar veredicto condenatorio, sino contestar negativamente la pregunta 1.ª que se le hizo, y determinar luégo el delito que en su opinión se hubiera cometido, de conformidad con lo estatuído en el artículo 312 de la Ley 57 de 1887—Codificación Nacional, Tratado quinto, número 361 de orden;—pero tales conceptos, aunque incontestables, no son, á nuestro juicio, sólido y jurídico fundamento de ninguno de los dos salvamentos. En efecto, ¿podrá decirse que hay injusticia notoria en el veredicto, es decir, que es *evidentemente* injusto? Nó. Es indudable que es injusto, pero no hay *evidencia* de que lo es, porque para esto sería necesario que fuera *evidente* que no se había cometido el delito; pero los indicios que existen hacen imposible la evidencia.

Hé aquí la relación que de los indicios que obran en el proceso hace uno de los señores Magistrados que salvaron su voto:

"Recapitulados los indicios que suministra el proceso, se reducen á los siguientes: que Urueña y la Serrano, quienes mantenían relaciones ilícitas hacía como catorce años, habían entrado en desavenencia por la pasión de los celos; que esto indujo al primero á proponer á esa mujer que fueran á la posesión de *El Brasil* para entregarle unas cabezas de ganado que á ésta pertenecían; que en efecto salieron de Melgar como á las nueve de la mañana del veinticinco de Enero de mil ochocientos ochenta y ocho; que en el mismo día regresó sólo Urueña, trayendo la caballería que había servido á su compañera, y también una pieza de la ropa interior con que ella había partido de su domicilio; que regresó sólo de la quebrada de *Apicalá* en el día citado, como á las doce, y tomó en la casa de Domingo Barreto una barra y un cuchillo, volviendo luégo á emprender su marcha para el lugar del destino; que, según el testimonio de José Herrera, en la ropa de Urueña se notaba una mancha de sangre; que ante varios testigos había expuesto Urueña que había dejado á la Serrano ya en un punto, ya en otro; que ante el funcionario de instrucción había asegurado que el veinticinco por la noche la había conducido al puerto de Fusagasugá, en donde fue embarcada por Agustín Avila, con quien había contratado antes para que la transportara en una balsa al caserío de Nare; que en sus diferentes declaraciones, Urueña había sostenido que la residencia de la Serrano era ya en

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

un punto, ya en otro; que había sacado á presencia de varias personas algunos muebles de los que ella tenía en Melgar; que él había protestado quitar la vida á su compañera si llegaba á persuadirse de que le era desleal; que, según lo expuesto por el mismo Urueña, ella le había confesado en el sitio de *El Charcón* que le era infiel, por cuyo motivo resolvió conducirla á las bocas de Fusagasugá, en donde le esperaba Agustín Avila para embarcarla, como había convenido con éste; y por último, que la voz pública acusaba á Urueña como autor de la muerte de aquella mujer."

En presencia de estos indicios, no infirmados por contraprueba alguna, ¿podrá decirse que es *evidente* que Urueña no cometió el delito de homicidio? Nó, en manera alguna. Luego no es evidentemente injusto el veredicto del Jurado; luego el indicado salvamento de voto carece del apoyo debido.

En cuanto á la sentencia que acordó la mayoría de la Corte, aceptamos la *parte resolutiva* de ella, considerada desde el punto de vista exclusivamente jurídico, y en relación con el ordinal 2.° del presente artículo.

3.ª Haberse incurrido en las causas de nulidad designadas con los ordinales 1.°, 3.°, 4.°, 5.°, 6.° y 7.° del artículo 264 de la Ley 57 de 1887.

391, inciso final.

Art. 371. Es doctrina legal la interpretación que la Corte Suprema dé á unas mismas leyes en dos decisiones uniformes. También constituyen doctrina legal las declaraciones que la misma Corte haga en dos decisiones uniformes para llenar los vacíos que ocurran, es decir, en fuerza de la necesidad de que una cuestión dada no quede sin resolver por no existir leyes apropiadas al caso.

Este artículo no exige, como se ve, para que exista doctrina legal respecto de un punto ó materia, que las dos decisiones hayan sido proferidas á virtud de recurso de casación: basta que sean uniformes; que las haya dictado la Corte Suprema, á partir de la época en que este artículo—ó su análogo: Codificación Nacional, Tratado quinto, número 108 de orden—se puso en vigor, y que ambas se refieran á la interpretación de unas mismas leyes. Correspondiendo á la Corte Suprema conocer en varios asuntos, ya privativamente, ya como Tribunal de apelación, no es raro que ocurra el caso de dos sentencias uniformes. Téngase en cuenta que el objeto principal del recurso de casación es, precisamente, *uniformar* la Jurisprudencia.

La segunda parte de este artículo confirma la interpretación dada á la primera, pues á la Corte Suprema no se ocurre, por recurso de casación, para que llene *vacíos* en asuntos de procedimiento. Tál es el espíritu de esta disposición, de lo cual tenemos personal conocimiento.

III

Preparación y admisión del recurso de casación en asuntos civiles.

Art. 372. Cuando un Tribunal de Distrito Judicial haya pronunciado una sentencia de las mencionadas en los artículos 366 y 367, dispondrá que tanto la sentencia como el proceso se mantengan en el Despacho de la Secretaría del mismo Tribunal, á disposición de las partes y durante treinta días contados desde la notificación de la sentencia.

Si en concepto del Tribunal hubiere duda acerca de la cuantía del negocio, el Magistrado que haya sido sustanciador nombrará peritos que la fijen; y si éstos la apreciaren en cantidad menor de tres mil pesos, se remitirán inmediatamente el proceso y la sentencia al Juzgado de primera instancia. Sin embargo, cuando los peritos fijen la cuantía del negocio en cantidad menor de tres mil pesos y su dictamen no fuere fundado para el Tribunal, los Magistrados que constituyen la respectiva Sala nombrarán nuevos peritos, cuyo dictamen prevalecerá.

Art. 373. Durante los treinta días de que se ha hablado, la parte que quiera interponer recurso de casación contra la sentencia lo interpondrá en un escrito dirigido al Tribunal por dicha parte, ó por apoderado especial, ó por el último apoderado que haya intervenido en la segunda instancia del juicio, si en el poder se le confiere esta facultad por la parte misma, ó por el sustituyente si la tuviere. En tal escrito se dirá simplemente que se interpone el recurso, pero bien puede el recurrente designar en el mismo escrito las causales en que funda el recurso, designación que producirá los debidos efectos si se verifica en los términos prescritos en el artículo 377.

Art. 374. Interpuesto en tiempo oportuno y por persona hábil el recurso de casación contra una sentencia de las mencionadas en los artículos 366 y 367 de esta Ley, el Tribunal lo concederá si concurre además la circunstancia segunda de las expresadas en el artículo 366. No es potestativo del Tribunal ocuparse en apreciar las otras dos circunstancias consignadas en el mismo artículo 366, ni declarar cosa alguna respecto de las causales que dan derecho á interponer el recurso.

381.

Art. 375. En el auto sobre concesión del recurso el Tribunal ordenará que se remitan el proceso y la sentencia á la Corte Suprema, previa citación de las partes.

Es aplicable en este caso lo que disponen los artículos 67 y 68 de esta Ley respecto de los Jueces.

IV

Sustanciación y determinación del recurso por la Corte en asuntos civiles.

Art. 376. Recibido el expediente en la Corte y repartido, el Magistrado á quien corresponda sustanciar el recurso mandará fijar el negocio en lista por seis días para que las partes tengan conocimiento de la llegada del expediente á la Corte y puedan constituír apoderados.

Art. 377. Concluído el término de que habla el artículo anterior, el Magistrado ordenará que se entregue el proceso por seis días á la parte recurrente para que designe por escrito la causal ó causales en que funda la interposición del recurso, ó haga las ampliaciones que estime convenientes si yá se hubiere designado alguna causal, debiendo expresarse con claridad y precisión las razones por que se estima haberse incurrido en la causal ó causales designadas.

Así, por ejemplo, si la causal que motiva el recurso fuere la primera, deberá decirse cuál es la ley ó doctrina legal que se cree infringida, y el concepto en que lo haya sido; ó cuál ó cuáles las leyes aplicables al caso del pleito.

Si la parte no hubiere designado antes, ó no designare en dicho escrito, con la precisión aquí establecida, la causal ó causales en que funda el recurso, la Corte procederá inmediatamente á declararlo desierto. Esta no hará declaración de oficio sino únicamente cuando advierta que ha habido incompetencia de jurisdicción con arreglo á las causales 4.ª y 5.ª del artículo 369.

373, al fin.

El escrito de que habla este artículo, tiene, sin duda, el carácter de *alegato* respecto de la parte recurrente: por ello se dispone en el artículo que sigue que

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

se entregue luégo el proceso á las otras partes para que presenten sus alegatos. Véase el artículo 379.

Nosotros creímos, y creemos aún, que la declaración de oficio de que se habla en la parte final de este artículo, debía extenderse al caso 1.° de cada uno de los artículos 369 y 370, es decir, cuando hay violación de ley ó de doctrina legal, en razón de que el grande y fundamental objeto del recurso de casación no es enmendar agravios en asuntos particulares, sino uniformar la Jurisprudencia. Véase el comentario del artículo 366.

Dicha segunda parte del último inciso no está en consonancia con los artículos 392 á 395.

Art. 378. Fundada que sea la interposición del recurso, el Magistrado dispondrá que se entregue el proceso por seis días á cada una de las otras partes para que presenten sus alegatos. Cuando por el número de partes hubiere de pasar de diez y ocho días el término para alegar por escrito, no se sacará el proceso de la Secretaría, en donde se pondrá á disposición de las partes por el término común de diez y ocho días. Todas las partes tienen derecho de examinar el expediente; el Magistrado sustanciador allanará toda dificultad que ocurra.

Art. 379. Concluído el término de los diez y ocho días se dará traslado por tres días á cada una de las partes del alegato de las otras, y transcurridos éstos, se señalará día y hora para audiencia pública, en la cual cada parte puede hablar durante dos horas.

Véase el primer inciso del comentario del artículo 377.

Teniendo cada parte derecho de hablar durante dos horas, puede, al hablar la vez primera, reservar tiempo para la réplica.

Art. 380. Terminada la audiencia, el Secretario pondrá el expediente á disposición del Magistrado sustanciador para que éste prepare dentro de diez días el proyecto de sentencia. Concluído este término, la Corte pronunciará sentencia dentro de los treinta días siguientes.

Art. 381. La Corte, antes de pronunciar sentencia, examinará si el recurso se ha interpuesto oportunamente y por persona hábil; y si la sentencia es de aquellas contra las cuales pueda interponerse recurso de casación conforme á lo yá establecido, porque si alguno de estos requisitos faltare, debe limitarse simplemente á negar la admisión del recurso.

372 á 374.

Art. 382. La Corte, en la decisión que pronuncie, examinará con la debida separación cada una de las causales en que se funda el recurso, y en la parte resolutiva hará, también separadamente, las declaraciones á que haya lugar, conforme á lo que se dispone en los artículos siguientes

Art. 383. Respecto de la primera causal de las mencionadas en el artículo 369, la Corte fijará siempre en dicha parte resolutiva, en términos claros, precisos y generales, que constituyan regla de derecho, la genuina inteligencia de las leyes aplicadas, en el caso de que se haya alegado violación directa ó error en la interpretación de tales leyes. Si se ha alegado indebida aplicación de leyes á los puntos debatidos en el pleito, la Corte determinará las que son aplicables, sean ó nó las mismas que el Tribunal haya aplicado.

Si á virtud de estas expresas declaraciones fuere ilegal la sentencia del Tribunal Superior, la Corte la anulará. En consecuencia, y á continuación de esta decisión, resolverá lo que corresponda al caso del pleito.

Si la sentencia del Tribunal fuere legal, se aprobará.

En este artículo se dispone que en la parte resolutiva se fije siempre, en

términos claros, precisos y generales, que constituyan *regla de derecho*, la genuina inteligencia de las leyes aplicadas, lo cual se prescribe con dos objetos: que sin dificultad se sepa cuándo existen yá dos decisiones uniformes respecto de unas mismas leyes; y que para todo el mundo sea fácil conocer las resoluciones de la Corte, como que tales decisiones tienen carácter de ley.

Art. 384. Respecto de la segunda causal del mismo artículo 369, la Corte examinará y resolverá si la sentencia del Tribunal está ó nó en consonancia con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes. Si lo estuviere, la aprobará; si no lo estuviere, determinará el efecto de que adolezca la sentencia, y la anulará, si fuere necesario, ó la modificará simplemente, haciendo las ampliaciones ó restricciones convenientes.

Hay incorrección en este artículo, en la parte que dice: "..... determinará el *efecto* de que adolezca la sentencia...."; debe leerse: .... determinará el *defecto* de que adolezca....

Art. 385. En cuanto á la tercera causal, se procederá de una manera análoga á lo establecido con relación á la segunda en el artículo anterior.

369.

Art. 386. Cuando las causales alegadas fueren la 4.ª, la 5.ª ó la 6.ª, la Corte resolverá sobre ellas, así:

Respecto de la 4.ª y la 6.ª, y en el caso de que haya habido incompetencia en el Tribunal sentenciador; ó que se haya incurrido en alguno de los motivos de nulidad de que trata la causal 6.ª, la Corte anulará la decisión del Tribunal, se abstendrá de resolver en el fondo, y dispondrá que se devuelva el proceso al Tribunal de su origen para que ante él promuevan las partes lo que estimen legal.

Respecto de la causal 5.ª, si el Tribunal no ha debido abstenerse de conocer en el asunto, se dispondrá la devolución del proceso para que aquél dicte la sentencia debida.

Si no hubiere habido incompetencia de jurisdicción en el Tribunal; ó si éste hubiere procedido legalmente al abstenerse de conocer; ó si no se hubiere incurrido en ninguno de los mencionados motivos de nulidad, la Corte se limitará á hacer las declaraciones correspondientes, y á ordenar la devolución del expediente.

369.

V

Recurso de casación que interpone el Ministerio Público.

Art. 387. El Ministerio Público podrá interponer el recurso de casación en los juicios en que sea parte, ajustándose á las reglas establecidas en la presente Ley.

VI

Admisión, substanciación y determinación del recurso en asuntos criminales.

Art. 388. Si el reo en el acto de notificarle una sentencia de las de que trata el artículo 368 no interpusiere recurso de casación, el Tribunal, en conformidad á lo dispuesto en el mismo artículo, la remitirá en consulta á la Corte.

368, segundo inciso, 370.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

Art. 389. Previo repartimiento del expediente en la Corte, el Magistrado á quien corresponda nombrará defensor del reo, si no lo tuviere. Si posteriormente el reo nombrare defensor, con éste y no con aquél se entenderá el recurso.

Art. 390. Constituído yá el defensor se dará el expediente en traslado por seis días al Procurador General para que presente alegato escrito. Devuelto el expediente se pondrá con el alegato presentado á disposición del reo por seis días, en el despacho de la misma Secretaría, para que forme su alegato. Si éste se presentare se dará en traslado al Procurador por cuarenta y ocho horas, vencidas las cuales, háyase ó nó devuelto el alegato, se señalará día y hora para audiencia pública, que no será para después de seis días de aquél en que se hayan cumplido las cuarenta y ocho horas.

En la audiencia se dará primero la palabra al Procurador, y luégo al reo ó reos, por dos horas á cada uno, con derecho el Procurador á replicar.

Art. 391. La Corte pronunciará sentencia dentro de diez días, ajustándose á lo que se dispone en este artículo.

Cuando ocurra la primera de las causales mencionadas en el artículo 370, la Corte hará las declaraciones á que haya lugar y dictará la sentencia correspondiente, procediendo de una manera análoga á lo establecido en el artículo 383 para los asuntos civiles.

Cuando ocurra la causal segunda de las mencionadas en el mismo artículo 370, la Corte anulará la sentencia y ordenará la formación de nuevo Jurado. Sin embargo, si la sentencia se funda en el veredicto pronunciado por un segundo Jurado, con motivo de haber declarado el respectivo Tribunal notoriamente injusto el primer veredicto, la Corte respetará el último y no anulará la sentencia por esta causal.

Finalmente, cuando ocurra uno de los motivos de nulidad mencionados en la causal tercera, la Corte casará la sentencia é invalidará lo actuado desde el acto que dio lugar á la nulidad. Si el motivo de nulidad fuere el primero, se declarará nula toda la actuación.

INTERVENCIÓN DE LA CORTE EN EL CASO DE SENTENCIAS CONTRARIAS

Art. 392. Cuando un Tribunal Superior de Distrito Judicial dicte sentencia definitiva de segunda instancia en asunto civil y en juicio ordinario, ó que tenga carácter de tál, ó en juicio de concurso de acreedores, y dicha sentencia sea contraria á otra del mismo Tribunal ó de uno distinto, refiriéndose la contrariedad á las causales 1.ª ó 5.ª de las mencionadas en el artículo 369 de esta Ley, la Corte resolverá sobre la contrariedad: ya fijando la genuina inteligencia de las leyes aplicadas; ya determinando las que han debido aplicarse; ya haciendo ver que los hechos en que las sentencias se fundan no son idénticos; ó ya resolviendo sobre la competencia del Tribunal para conocer en el asunto á que dichas sentencias se refieren; pero no resolverá sobre el caso del pleito, sino en tanto que se haya interpuesto oportunamente recurso de casación, conforme á lo yá establecido y á las causales fijadas.

Art. 393. Para que la Corte pueda ejercer la atribución que por el artículo precedente se le confiere, es indispensable que concurran, en cada una de las sentencias contrarias, las dos primeras circunstancias de las tres mencionadas en el artículo 366 de esta Ley.

Art. 394. Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, el Procurador General de la Nación y los Fiscales de los Tribunales son quienes pueden ocurrir á la Corte para los efectos del artículo 392, elevando al efecto un memorial en que pongan de manifiesto la contrariedad de las sentencias, las cuales deben acompañarse en copia auténtica.

Los Tribunales, á solicitud de otro Tribunal ó de cualquiera de los funcionarios expresados, deben expedir dichas copias en papel común y sin demora alguna, ó autenticar el ejemplar del periódico oficial en que se hallan publicadas.

Art. 395. Presentados el memorial y las sentencias de que acaba de hablarse, la Corte, previo repartimiento del expediente, pronunciará dentro de treinta días la decisión que corresponda.

CAPÍTULO SEGUNDO

Recurso de revisión.

I

Casos y tiempo en que puede interponerse este recurso.

Art. 396. Hay lugar á la revisión de una sentencia ejecutoriada, dictada en asunto civil por un Tribunal Superior, en cualquiera de los casos siguientes:

1.° Si después de pronunciada se recobraren documentos decisivos, detenidos por fuerza mayor ó por obra de la parte en cuyo favor se hubiere dictado;

2.° Si hubiere recaído en virtud de documentos que al tiempo de dictarse ignoraba una de las partes haber sido reconocidos y declarados falsos, ó cuya falsedad se reconociere ó declarare después;

3.° Si habiéndose dictado en virtud de prueba testimonial, los testigos hubieren sido condenados por falso testimonio dado en las declaraciones que sirvieron de fundamento á la sentencia; y

4.° Si la sentencia se hubiere obtenido injustamente, en virtud de cohecho, violencia ú otra maquinación fraudulenta.

398 á 400, 402 á 406.

Art. 397. En asuntos criminales habrá lugar al recurso de revisión contra toda sentencia ejecutoriada, en los casos siguientes:

1.° Cuando estén sufriendo condena dos ó más personas en virtud de sentencias contradictorias, por causa de un mismo delito, que no haya podido ser cometido sino por una sola;

2.° Cuando esté sufriendo condena alguno como autor, cómplice, auxiliador ó encubridor del homicidio de una persona cuya existencia se acredite después de la condena; y

3.° Cuando esté sufriendo condena alguno en virtud de sentencia cuyo fundamento haya sido un testimonio declarado después falso, y penado por sentencia ejecutoriada.

401, 407 y 408.

Art. 398. Para interponer el recurso de revisión se concede el término de tres meses, los cuales se contarán desde el día en que se recobren los documentos, ó se descubra el fraude, ó se tenga conocimiento de la declaración de la falsedad.

399 y 401.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

Art. 399. En ningún caso podrá interponerse el recurso de revisión en asuntos civiles después de transcurridos dos años desde la fecha de la publicación de la sentencia.

398, 401.

Art. 400. Para que pueda tenerse por interpuesto el recurso de revisión en los asuntos civiles, es indispensable que al escrito en que se interpone acompañe el recurrente un documento justificativo de haber depositado en la Secretaría de la Corte Suprema la cantidad de doscientos pesos.

El Secretario de la Corte Suprema colocará la suma depositada en el establecimiento de crédito que la misma Corte designe en su oportunidad.

Esta cantidad será devuelta si el recurso se declara fundado. En caso contrario, se tomará de ella lo necesario para atender al pago de las costas, y lo que sobrare se aplicará á la Beneficencia pública del respectivo Departamento.

405.

Art. 401. En los asuntos criminales y en los casos mencionados en el artículo 397 de esta Ley, el recurso de revisión puede interponerse en cualquier tiempo.

399.

II

Substanciación y determinación del recurso de revisión.

Art. 402. Interpuesto el recurso, la Corte pedirá á quienes corresponda todos los antecedentes del pleito civil cuya sentencia se impugne, y mandará emplazar á cuantos en él hubieren litigado para que dentro del término de cuarenta días comparezcan á sostener lo que convenga á su derecho.

La citación se hará personalmente respecto de todas las personas que fueren conocidas y cuya residencia se conozca; y por edictos publicados en el periódico de la Corte se citará á las demás personas.

Los cuarenta días de que se ha hablado comenzarán á correr desde la fecha de la citación, ya se haya verificado personalmente ó por edictos.

396, 403, 408.

Art. 403. Citadas las partes, se seguirá el recurso con las que comparezcan. Se abrirá luégo á prueba hasta por quince días, concluídos los cuales se concederá á las partes el término común de seis días para alegar, y vencido éste, se pronunciará la sentencia dentro de los ocho días siguientes.

Art. 404. Si la Corte Suprema estimare fundado el recurso, así lo declarará y rescindirá total ó parcialmente la sentencia impugnada, según que los fundamentos del recurso se refieran á todos ó á alguno de los capítulos de la misma sentencia.

Art. 405. Cuando el recurso de revisión se declare infundado se condenará al recurrente en todas las costas que se hubieren causado.

400.

Art. 406. Rescindida total ó parcialmente una sentencia á virtud del recurso de revisión, las declaraciones que hubiere hecho la Corte servirán de base á cualquier juicio que con relación al mismo asunto se promueva. Dichas declaraciones no serán discutidas en el nuevo juicio.

Art. 407. En los negocios criminales se promoverá el juicio á que hubiere lugar.

Art. 408. En asuntos criminales se procederá así: á la solicitud sobre revisión de la sentencia se acompañarán las pruebas de los hechos en que aquélla se funda, y la Corte, previo repartimiento del negocio, concederá un término probatorio de quince días. Vencidos éstos se pondrá el expediente en la Secretaría de la Corte por seis días comunes para que las partes aleguen. Concluído este término se pronunciará sentencia dentro de los ocho días siguientes. La Corte puede dictar en cualquier tiempo autos para mejor proveer, no excediendo de dos el número de estos autos.

397.

Art. 409. En todo caso, decidido el recurso, se devolverán los autos al Tribunal ó Juzgado de que procedan.

III

Quiénes pueden interponer el recurso de revisión en asuntos criminales.

Art. 410. Los Fiscales de los Tribunales Superiores podrán interponer el recurso de revisión cuando en su concepto ocurra alguno de los casos mencionados en el artículo 397 de esta Ley, previo el dictamen afirmativo que en Sala de Acuerdo dará el respectivo Tribunal Superior.

Art. 411. Los que estén sufriendo la condena, en cualquiera de los casos previstos en el artículo 397 de esta Ley, y sus parientes en cualquier grado de consanguinidad ó de afinidad, pueden interponer el mismo recurso de revisión.

ASUNTOS MILITARES

Art. 412. La Corte Suprema cuando conozca por recurso de apelación ó nulidad, ó por consulta de las sentencias pronunciadas por los Consejos de Guerra, observará este procedimiento: después de posesionado el defensor del reo se dará traslado del proceso por cinco días al Procurador de la Nación, y por otros cinco á cada una de las partes. Vencido el término de los traslados, se citará á las partes para sentencia, la cual se pronunciará dentro de los veinte días siguientes.

Derógase el artículo 282 de la Ley 153 de 1887 y el 1540 del Código Militar.

Art. 413. En los asuntos de que trata el artículo anterior la Corte resolverá como Tribunal de derecho en cuanto á la aplicación de la pena; siéndole prohibido variar la calificación hecha por el Consejo de Guerra respecto de la culpabilidad ó inocencia del acusado.

Aclárase así el artículo 1539 del Código Militar.

Art. 414. Siempre que en algún sumario aparezca sindicado de delito común un individuo de tropa del Ejército, el funcionario de instrucción, en vez de reducirlo á prisión en calidad de detenido, dará aviso al Jefe Superior más cercano de la fuerza á que pertenezca el sindicado, para que lo ponga preso militarmente en el respectivo cuartel.

Art. 415. El Jefe ordenará la prisión luégo que reciba el aviso, y á su turno lo dará al Gobierno, para que si éste lo cree conveniente provea á la mayor seguridad del sindicado.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

Art. 416. El funcionario de instrucción requerirá al Jefe militar para que ponga á su disposición al sindicado, cuando fuere necesario recibirle declaración indagatoria, hacérsela ampliar, someterlo á careo ó practicar otra diligencia de investigación que necesite su presencia; pero terminado el acto, el sindicado será devuelto á la prisión militar.

Art. 417. Esta continuará durante el plenario y hasta que el juicio termine por sentencia de última instancia, conservando el Juez ó Tribunal de la causa el derecho de reclamar al sindicado en los casos y con la condición del artículo anterior, y quedando el Jefe en la obligación de presentarlo.

1585 del Código Judicial.

Art. 418. Se exceptúa de las reglas anteriores el caso de que el delito de que se trata merezca pena capital, porque entonces el sindicado quedará desde el principio en poder de la autoridad civil. Cuando el individuo de tropa fuere aprehendido *infraganti delito*, y éste no merezca pena capital, el funcionario de instrucción lo pondrá bajo la dependencia del Jefe Militar para los efectos de los artículos anteriores.

El caso exceptuado por este artículo es aquel en que el delito de que se trate sea de la clase de aquellos que conforme á la ley pueden ser castigados con pena de muerte.

Art. 419. Si el Gobierno lo tiene á bien, puede entregar el sindicado al Juez ordinario en cualquier estado del juicio, en vez de mantenerlo en prisión militar.

Art. 420. Cuando el delito por que se proceda admita excarcelación con fianza, y el sindicado la diere ante el funcionario de instrucción ó Juez de la causa, no habrá detención ni prisión Militar, y continuará prestando su servicio en la fuerza.

341.

Art. 421. Terminada la causa, el Juez dará aviso al Jefe Militar para que si la sentencia es absolutoria haga cesar la prisión, y si condenatoria, le entregue el reo.

Art. 422. Si la pena no excediere de seis meses de prisión, el Juez dispondrá que una vez cumplida vuelva el reo al Ejército.

Art. 423. La presente Ley regirá en toda la República desde el día primero de Marzo de mil ochocientos noventa y uno.

Dada en Bogotá, á diez y seis de Noviembre de mil ochocientos noventa.

——

LEY 111

(28 DE DICIEMBRE),

por la cual se autoriza al Gobierno para crear Cámaras de Comercio.

(Se publicó en el *Diario Oficial* de 10 de Enero de 1891, número 8,299).

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Art. 1.° Autorízase al Gobierno para crear Cámaras de Comercio en la capital de la República y en los otros centros comerciales que juzgue convenientes.

Art. 2.° Las Cámaras que cree el Gobierno, conforme á esta Ley, tendrán el carácter de órganos oficiales del comercio cerca del mismo Gobierno, y de cuerpos consultores en todos los asuntos relacionados con el comercio y la industria.

Art. 3.° Como órganos oficiales del comercio, las Cámaras tendrán el derecho de presentar al Gobierno por vía de iniciativa, sus opiniones sobre los medios de aumentar la prosperidad de la industria y del comercio; sobre las mejoras que deban introducirse en todos los ramos de la legislación comercial, comprendiendo en ésta las leyes sobre impuestos y tarifas de Aduanas, sobre la ejecución de obras de interés público y sobre la organización de los servicios que puedan interesar al comercio y á la industria, como son los relativos á puertos, canales, ferrocarriles, vías públicas, navegación de ríos, correos, telégrafos, bolsas, bancos, seguros, impuestos, serenos.

Art. 4.° Las Cámaras de Comercio serán auxiliares del Ministerio de Fomento en todos aquellos asuntos en que éste estime conveniente solicitar su dictamen y concurso.

Art. 5.° Las Cámaras tendrán facultad de acordar las medidas que crean convenientes en servicio de la industria y el comercio, como entidades autónomas é independientes, siempre que dichas medidas no sean contrarias á las leyes ó decretos gubernativos.

Art. 6.° Las Cámaras de Comercio serán formadas por elección de los comerciantes notables de cada localidad, conforme á los trámites que determine el Poder Ejecutivo.

Art. 7.° Conforme al artículo 163 de la Constitución, las Cámaras de Comercio tendrán el carácter de Tribunales de Comercio, como árbitros y amigables componedores, para resolver todas las diferencias que puedan ocurrir entre comerciantes, siempre que las partes quieran someterse á su decisión y prescindir de los Juzgados y Tribunales ordinarios. Las decisiones de las Cámaras de Comercio tendrán fuerza obligatoria para las partes que se hubieren sometido á su fallo.

Art 8.° El Poder Ejecutivo expedirá el decreto respectivo, de acuerdo con los preceptos generales de esta Ley, para el establecimiento de Cámaras de Comercio en los centros comerciales que estime conveniente establecerlas. En dicho decreto se determinarán el número de individuos del gremio comercial que deben componer la Cámara, los

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

trámites para la elección, las facultades y deberes de esta Asamblea y todos los medios conducentes á su completa organización.

Art. 9.° Las Cámaras de Comercio establecidas con anterioridad á esta Ley, quedarán comprendidas en ella, si dentro de sesenta días después de su promulgación, las Juntas directivas de dichas Cámaras manifestaren al Gobierno que aceptan y acatan sus disposiciones.

Art. 10.° En el Presupuesto de Gastos de cada año se considerará incluída la partida necesaria para material de las Cámaras de Comercio; pero dicha partida no excederá en cada Presupuesto de la suma de cinco mil pesos ($ 5,000).

Dada en Bogotá, á veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos noventa.

DECRETO NUMERO 62 DE 1891

(11 DE FEBRERO),

por el cual se créa una Cámara de Comercio en la ciudad de Bogotá (1).

El Ministro de Fomento, debidamente facultado al efecto por el Excelentísimo Señor Presidente de la República y haciendo uso de la autorización que le da la Ley 111 de 1890,

DECRETA:

Art. 1.° Créase en la ciudad de Bogotá una Cámara de Comercio compuesta de doce miembros.

Art. 2.° El Ministro de Fomento convocará por lo menos cuarenta comerciantes notables para que reunidos en Junta elijan los doce miembros de que ha de componerse la Cámara.

Art. 3.° No pueden ser elegidos miembros de la Cámara de Comercio sino los colombianos que sean comerciantes conforme al Código de Comercio y que hayan ejercido el comercio con buen crédito durante tres años por lo menos.

También pueden ser elegidos los colombianos que por el mismo tiempo hayan desempeñado satisfactoriamente algún puesto en la Dirección ó Gerencia de Establecimientos de crédito.

La elección de miembros será sometida á la aprobación del Ministro de Fomento.

Art. 4.° Los elegidos no podrán excusarse de servir su encargo sino por las causales que eximen de los empleos onerosos, conforme á la Ley 149 de 1888 (Código Político y Municipal).

Art. 5.° El personal de la Cámara se renovará por terceras partes el 1.° de Enero de cada año. El orden de la renovación será el inverso del que resulte del número de votos que obtengan en la Junta de que habla el artículo 2.° Con tal objeto la elección se declarará por orden numérico decidiendo por suerte los empates.

Art. 6.° Para toda elección de miembros que haya de hacerse después de constituída la Cámara, se procederá así: la Cámara formará cada año una lista por lo menos de treinta comerciantes notables y de ellos sorteará doce que se agreguen á ella para verificar la elección por mayoría absoluta.

Art. 7.° La Cámara tendrá un Presidente y dos Vicepresidentes de su propio seno y un Secretario de dentro ó de fuera de ella. El Secretario que no sea miembro de la Cámara tiene voz en ella pero nó voto.

Art. 8.° Habrá nueva elección ordinaria de empleados cada vez que se renueve la tercera parte de la Cámara conforme al artículo 5.° y extraordinaria cada vez que falte absolutamente alguno de dichos empleados.

Art. 9.° El Ministro de Fomento tiene derecho á asistir á todas las reuniones de la Cámara y á tomar parte en las deliberaciones. Cuando asista tiene derecho á presidir la sesión, pero puede renunciarlo.

---

(1) Publicado en el *Diario Oficial* número 8,334, del sábado 14 de Febrero de 1891.

Art. 10. Son funciones de la Cámara de Comercio:

1.ª Dictar el reglamento para sus trabajos interiores, el cual será sometido á la aprobación del Ministerio de Fomento.

2.ª Servir de órgano oficial del comercio con el Gobierno y como tál podrá presentar á éste, por vía de iniciativa, sus opiniones sobre los medios de aumentar la prosperidad de la industria y del comercio; sobre las mejoras que deban introducirse en todos los ramos de la Legislación comercial; sobre las modificaciones que convenga hacer á las leyes sobre impuestos y tarifas de Aduanas; sobre la ejecución de obras de interés público y sobre la organización de los servicios que puedan interesar al comercio y á la industria, como son los relativos á puertos, canales, ferrocarriles, ríos navegables, correos, telégrafos, Bolsas, Bancos, seguros, etc.

3.ª Servir de Cuerpo consultivo del Gobierno y en consecuencia estudiar los asuntos que éste someta á su consideración, exponer su dictamen sobre ellos y rendir los informes que se le pidan sobre negocios relacionados con el comercio y la industria.

4.ª Dirigir y reglamentar la construcción, mejora y conservación de las obras públicas que el Gobierno ponga bajo su cuidado haciendo los gastos que esto requiera, de las sumas que el mismo Gobierno ponga á su disposición.

5.ª Dirigir y reglamentar los servicios públicos que el Gobierno le encomiende.

6.ª Formar el Presupuesto de Gastos de material de la misma Cámara y someterlo á la aprobación del Gobierno.

7.ª Formar igualmente el Presupuesto de Gastos de las obras públicas que en su concepto deban acometerse; para que el Gobierno, si lo estima conveniente, ordene el gasto cuando esté previsto por la ley, ó pida su apropiación en el Presupuesto general.

8.ª Remitir al Gobierno para su publicación todos los documentos que juzgue de importancia para el comercio y la industria.

9.ª Acordar las medidas que crea convenientes en servicio de la industria y del comercio, siempre que dichas medidas no sean contrarias á las leyes ó á los decretos gubernativos.

10. Servir de Tribunal de Comercio para resolver como árbitro y amigable componedor todas las diferencias que ocurran entre comerciantes, siempre que las partes quieran someterse á su decisión con prescindencia de los Juzgados y Tribunales ordinarios.

Las decisiones de la Cámara de Comercio tendrán fuerza obligatoria para las partes que se hubieren sometido á su fallo.

11. Oír las peticiones que haga el comercio de otras ciudades para el establecimiento de Cámaras de Comercio, ó informar sobre ellas al Gobierno para que éste las resuelva.

12. Servir de centro á las Cámaras que se funden fuera de Bogotá, para que todas concurran armónicamente al desarrollo del comercio y de la industria en todo el país.

13. Prestar su concurso á las autoridades y corporaciones oficiales en los asuntos relacionados con el comercio.

14. Las demás que le atribuya el Gobierno.

Art. 10. Para el desempeño de los asuntos que el Gobierno encomiende á la Cámara de Comercio, ésta puede requerir la cooperación de los Gobernadores, Prefectos, Alcaldes y demás empleados del orden político y administrativo; y para hacerse obedecer, se le concede la facultad de imponer multas hasta de veinte pesos ($ 20) á los empleados que no extiendan su jurisdicción á todo un departamento.

Los empleados multados pueden apelar al Ministerio de Fomento.

Art. 11. La Cámara de Bogotá, como Cámara central, extiende sus funciones á toda la República; también las extiende á toda ella en los asuntos de importancia general, que le encomiende el Gobierno. En los demás su jurisdicción se extiende sólo al Departamento de Cundinamarca.

Art. 12. Las otras Cámaras que se establezcan se organizarán en cuanto sea compatible conforme á las reglas generales de este decreto y extenderán sus funciones al territorio que se les designe en el acto de su creación.

Art. 13. Las Cámaras de Comercio tendrán personería jurídica desde su instalación y serán representadas por sus respectivos Presidentes ó apoderados debidamente constituídos.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

Art. 14. El Gobierno se reserva la facultad de reformar ó revocar las resoluciones de la Cámara que por este decreto se créa en los asuntos que el mismo Gobierno le haya encomendado, como también la de disolver dicha Cámara ó cualquiera otra que se establezca, cuando lo juzgue necesario y mientras no hayan sido creadas expresamente por la ley.

Art. 15. Las Cámaras de Comercio se entenderán con el Excelentísimo Señor Presidente de la República y con los Ministros del Despacho por conducto del de Fomento á cuyo cargo queda todo lo relacionado con ellas.

Publíquese.

Dado en Bogotá, á 11 de Febrero de 1891.

Por el señor Presidente de la República, el Ministro de Fomento,

MARCELINO ARANGO.

LEY 113

(29 DE DICIEMBRE),

por la cual se establece una contribución nacional para el sostenimiento de Lazaretos.

(Se publicó en el *Diario Oficial* de 10 de Enero de 1891, número 8,299).

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Art. 1.° En los Departamentos en donde se hallen establecidos, ó sea necesario establecer Lazaretos, se cobrará un impuesto sobre las mortuorias y las donaciones intervivos, en la forma siguiente:

1.° Cuando hay descendientes legítimos, el medio por ciento;

2.° Cuando hay ascendientes legítimos, el uno por ciento;

3.° Cuando los asignatarios son parientes colaterales, el cuatro por ciento;

4.° Cuando los asignatarios son extraños, el ocho por ciento;

5.° Cuando hay descendientes naturales, el uno por ciento;

6.° Cuando haya ascendientes naturales, el dos por ciento;

7.° El medio por ciento de los bienes que correspondan al cónyuge sobreviviente en calidad de heredero;

8.° El uno por ciento de las donaciones intervivos que se hagan á favor de descendientes legítimos ó naturales; y el tres por ciento de las que se hagan á favor de ascendientes legítimos ó naturales;

9.° El cinco por ciento cuando se otorguen donaciones intervivos á favor de parientes colaterales; y

10.° El ocho por ciento cuando las donaciones se hagan á favor de extraños.

Este impuesto no gravará los bienes del cónyuge sobreviviente, y solamente se liquidará y cobrará del acervo líquido de que dispone el testador ó la ley conforme al artículo 1016 del Código Civil.

Art. 2.° En los Departamentos en que no haya ó no se establezcan Lazaretos, las Asambleas establecerán la contribución sobre las mortuorias y las donaciones intervivos en la misma proporción que señala el artículo anterior, con destino especial para enviar y sostener en el Lazareto más próximo á los enfermos del respectivo Departamento, y lo que sobre ingresará á las rentas del mismo Lazareto.

En el Departamento de Panamá también se cobrará este impuesto, y su producto se aplicará al sostenimiento del "Asilo Bolívar," mientras se establece un Lazareto.

Art. 3.° Cuando por culpa de los herederos ó albaceas no se satisfagan los derechos de que trata esta Ley dentro de un año de muerta la persona de cuya sucesión proceda, se cobrará un veinticinco por ciento (25°/₀) adicional.

El Juez, oyendo á los interesados, estimará la culpa de la demora del pago de dichos derechos.

Ley 105, artículos 261 y 262, y comentario de este último.

Art. 4.° En los Departamentos en donde estuviere establecido el impuesto sobre las mortuorias, deberá tener la aplicación de que trata esta Ley sin exceder los límites aquí establecidos.

Art. 5.° En todo juicio de sucesión en que deba cobrarse el impuesto de que trata esta Ley, tendrá aplicación lo dispuesto en los artículos 21 á 29 de la Ley 30 de 1888 (25 de Febrero); pero de la liquidación que se haga no se dará traslado al Agente del Ministerio público.

Ley 105, artículos 258 y comentario, y artículos 259, 260 y 263 de la misma.—Código Judicial, artículos 1261 y 1269.

Art. 6.° Los Notarios no autorizarán escritura alguna de donación, mientras no se compruebe el pago del respectivo derecho de Lazareto, y en las copias que expidan insertarán la boleta que compruebe el pago.

Art. 7.° No quedan sujetos al pago del impuesto que se establece por la presente Ley los juicios de sucesión de que conocen los Jueces municipales.

Art. 8.° El Gobierno queda autorizado para destinar alguna de las islas de propiedad de la Nación á la fundación de un gran Lazareto en donde puedan recogerse todos los leprosos de la República y disponer lo necesario para llevar á cabo esta obra.

Las partidas que necesite para estos gastos deben considerarse incluídas en los respectivos Presupuestos.

Dada en Bogotá, á veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos noventa.

LEY 114

(29 DE DICIEMBRE),

por la cual se adiciona y reforma la 110 de 1888, orgánica del impuesto de papel sellado y timbre nacional.

(Se publicó en el *Diario Oficial* de 10 de Enero de 1891, número 8,299).

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Art. 1.° Llevarán estampilla de 3.ª clase los títulos profesionales que expidan los establecimientos de educación públicos ó privados, y los despachos y letras militares.

Quedan comprendidos dichos despachos y letras en la excepción pe que trata el inciso 2.° del artículo 30 de la Ley 110 de 1888.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

Por la presente se reforma el inciso 6.° del artículo 22 de la citada Ley y se deroga el inciso 15 del artículo 5.° de la misma.

La Ley 110 de 1888 se halla en la *Codificación Nacional*, Tratado quinto, páginas 296 á 307.

Art. 2.° Podrán extenderse en papel común las reclamaciones que se hagan y recursos que se interpongan acerca de impuestos directos é indirectos.

Dada en Bogotá, á veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos noventa.

LEY 118

(24 DE DICIEMBRE),

sobre División Territorial Judicial.

(Se publicó en el *Diario Oficial* de 5 de Enero de 1891, número 8.294).

OBSERVACIÓN IMPORTANTE. **Al fin del tomo principal de la *Codificación Nacional* se hallan Cuadros auténticos sobre la división territorial de los Departamentos. La presente ley altera, en lo judicial, la indicada división. Las Leyes 6.ª y 102 de 1890, y el artículo 3.° de la Ley 33, todas de 1890, que figuran en este suplemento, modifican parcialmente la división política.**

El Congreso de Colombia

DECRETA :

Art. 1.° Para la administración de justicia divídese el territorio de la República en los siguientes Distritos Judiciales :

El de Antioquia, compuesto de todas las Provincias que forman el Departamento del mismo nombre, y tendrá por capital á Medellín ;

El de Bolívar, compuesto de todas las Provincias que forman el Departamento del mismo nombre, y tendrá por capital á Cartagena ;

El de Tunja, en el Departamento de Boyacá, compuesto de las Provincias del Centro, Occidente, Oriente y Ricaurte, y tendrá por capital á Tunja ;

El de Tundama, en el mismo Departamento, compuesto de las Provincias de Tundama, Sugamuxi, Norte, Gutiérrez y Casanare, y tendrá por capital á Santa Rosa de Viterbo ;

El del Cauca, en el Departamento del mismo nombre, compuesto de las Provincias de Atrato, San Juan, Toro, Quindío, Tuluá, Buga y Palmira, y tendrá por capital á Buga ;

El de Popayán, en el mismo Departamento, compuesto de las Provincias de Cali, Buenaventura, Santander, Popayán y Caldas, y tendrá por capital á Popayán ;

El de Pasto, en el mismo Departamento del Cauca, compuesto de las Provincias de Pasto, Barbacoas, Túquerres, Obando y Caquetá ;

El de Cundinamarca, compuesto de todas las Provincias que forman el Departamento de este nombre, y tendrá por capital á Bogotá ;

El del Magdalena, compuesto de todas las Provincias que forman el Departamento del mismo nombre, y tendrá por capital á Santa Marta ;

El de Panamá, compuesto de las Provincias que forman el Departamento de este nombre, y tendrá por capital á Panamá ;

El del Norte, en el Departamento de Santander, compuesto de las Provincias de Soto, García Rovira, Pamplona, Cúcuta y Ocaña, y tendrá por capital á Bucaramanga :

El del Sur, en el mismo Departamento de Santander, compuesto de las Provincias del Socorro, Vélez, Guanentá y Charalá, y tendrá por capital la ciudad del Socorro ;

El del Norte, en el Departamento del Tolima, compuesto de las Provincias del Norte y Centro, y tendrá por capital á Ibagué ;

El del Sur, en el mismo Departamento, compuesto de las Provincias de Neiva y Sur, y tendrá por capital á Neiva.

Art. 2.° El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Antioquia tendrá ocho Magistrados distribuídos de á cuatro en cada una de las dos Salas de lo Civil y de lo Criminal en que está dividido.

Art. 3.° El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca tendrá ocho Magistrados, distribuídos así: cinco para la Sala de lo Civil y tres para la de lo Criminal.

Art. 4.° El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bolívar constará de cuatro Magistrados.

Art. 5.° Cada uno de los demás Tribunales expresados en el artículo 1.°, tendrá tres Magistrados.

Art. 6.° El personal subalterno de los Tribunales Superiores del Distrito Judicial será el que establece el artículo 2.° de la Ley 4.ª de 1890.

Art. 7.° Cada Tribunal tendrá como colaborador un Fiscal.

Art. 8.° Los Fiscales de los Tribunales de Antioquia y Cundinamarca tendrán un Jefe de Sección y un Oficial Escribiente. Los Fiscales de los demás Tribunales sólo tendrán un Oficial.

Art. 9.° En cada cabecera de Distrito Judicial habrá un Juez Superior que extenderá su jurisdicción á todo el Distrito Judicial. En los Distritos Judiciales de Antioquia y Cundinamarca habrá dos Juzgados Superiores.

Art. 10.° Cada Juzgado Superior tendrá un Fiscal.

Art. 11. El personal subalterno de los Juzgados Superiores será el que determine el Código de Organización Judicial. En cada uno de los Juzgados Superiores de Bogotá habrá dos Oficiales Escribientes.

(ANTIOQUIA)

Art. 12. El Distrito Judicial de Antioquia se divide en los siguientes Circuitos Judiciales :

El de Manizales, compuesto de los Municipios de Manizales, que será su cabecera, Neira y Filadelfia ;

El de Salamina, compuesto de los Municipios de Salamina, que será su cabecera, Aranzazu y Pácora ;

El de Sonsón, compuesto de los Municipios de Sonsón, que será su cabecera, Aguadas y Pensilvania ;

El de Abejorral, compuesto de los Municipios de Abejorral, que será su cabecera, Retiro y La Ceja ;

El de Rionegro, compuesto de los Municipios de Rionegro, que será su cabecera, Guarne y San Vicente ;

El de Marinilla, compuesto de los Municipios de Marinilla, que

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

será su cabecera, Peñol, Santuario, Vahos, Cocorná, San Carlos, Carmen, Guatapé, San Rafael y San Luis;

El de Medellín, compuesto de los Municipios de Medellín, que será su cabecera, Copacabana, Girardota, San Pedro, Envigado, Itagüí, Estrella y Caldas;

El de Santo Domingo, compuesto de los Municipios de Santo Domingo, que será su cabecera, Barbosa, Concepción, Yolombó, Pavas, Puerto Berrío y San Roque;

El de Santa Rosa, compuesto de los Municipios de Santa Rosa, que será su cabecera, Angostura, Anorí, Carolina, Don Matías, Entrerríos, San Andrés y Zea;

El de Yarumal, compuesto de los Municipios de Yarumal, que será su cabecera, Ituango, Cáceres y Campamento;

El de Amalfi, compuesto de los Municipios de Amalfi, que será su cabecera, Remedios, Zaragoza y Segovia;

El de Sopetrán, compuesto de los Municipios de Sopetrán, que será su cabecera, San Jerónimo, Ebéjico Suere, Liborina, Sabanalarga y Belmira;

El de Antioquia, compuesto de los Municipios de Antioquia, que será su cabecera, Anzá, Betulia, Buriticá, Giraldo y Urrao;

El de Frontino, compuesto de los Municipios de Frontino, que será su cabecera, Cañasgordas, Dabeiba y Pavarandocito;

El de Jericó, compuesto de los Municipios de Jericó, que será su cabecera, Támesis, Valparaíso, Nueva Caramanta, Bolívar, Andes y Jardín;

El de Titiribí, compuesto de los Municipios de Titiribí, que será su cabecera, Concordia y Heliconia; y

El de Fredonia, compuesto de los Municipios de Fredonia, que será su cabecera, Santa Bárbara y Amagá.

Art. 13. En la cabecera del Circuito de Medellín habrá cinco Jueces; en las de los Circuitos de Marinilla, Santo Domingo, Santa Rosa, Yarumal, Amalfi, Sopetrán, Antioquia y Jericó, habrá dos; y en las de los demás Circuitos que quedan enumerados en el artículo anterior, sólo habrá uno.

(BOLIVAR)

Art. 14. El Distrito Judicial de Bolívar se divide en los siguientes Circuitos Judiciales:

El de Barranquilla, compuesto de los Municipios de Barranquilla, que será su cabecera, Galapa, Palmar de Varela, Sabanagrande, Santo Tomás, Tubará, Soledad, Sabanalarga, Baranoa, Campo de la Cruz, Manatí y Usiacurí;

El del Carmen, compuesto de los Municipios del Carmen, que será su cabecera, Guamo, Zambrano, San Jacinto, San Juan Nepomuceno y Tetón;

El de Cartagena, compuesto de los Municipios de Cartagena, que será su cabecera, Arjona, Calamar, Mahates, San Estanislao, Santa Rosa, Turbaco y Villanueva;

El de Corozal, compuesto de los Municipios de Corozal, que será su cabecera, Morroa, Ovejas, Sincé y Coloso;

El de Lorica, compuesto de los Municipios de Lorica, que será su cabecera, Cereté, Ciénaga de Oro, Chimá, Montería, Purísima y San Pelayo;

El de Magangué, compuesto de los Municipios de Magangué, que será su cabecera, Majagual y Sucre;

El de Mompox, compuesto de los Municipios de Mompox, que será su cabecera, Barranca de Loba, Morales, Pinillos, San Fernando de Occidente, San Martín de Loba, Simití y Margarita;

El de Providencia, compuesto de los Distritos de Providencia y San Andrés de Providencia, que será su cabecera; y

El de Sincelejo, compuesto de los Municipios de Sincelejo, que será su cabecera, Ayapel, Caimito, Chinú, Palmito, Sahagún, Sampués, San Andrés de Sotavento, San Benito Abad, San Onofre, Tolú y Tolú viejo.

Art. 15. En las cabeceras de los Circuitos de Barranquilla, Cartagena y Mompox, habrá dos Jueces. En las cabeceras de los demás Circuitos mencionados en el artículo anterior sólo habrá un Juez.

(BOYACÁ)

(TUNJA)

Art. 16. Divídese el Distrito Judicial de Tunja en los siguientes Circuitos:

El del Centro, compuesto de los Municipios de Tunja, que será su cabecera, Boyacá, Ciénega, Cómbita, Cucaita, Chiviví, Chivatá, Jenesano, Motavita, Oicatá, Ramiriquí, Samacá, Siachoque, Sora, Soracá, Sotaquirá, Tibaná, Toca, Turmequé, Tuta, Umbita, Ventaquemada, Viracachá y Zetaquira.

El de Ricaurte, compuesto de los Municipios de Moniquirá, que será su cabecera, Chitaraque, Guateque, Pare, Santa Ana y Togüí;

El de Occidente, compuesto de los Municipios de Chiquinquirá, que será su cabecera, Briceño, Buenavista, Caldas, Coper, Maripí, Muzo, Pauna y Saboyá;

El de Oriente, compuesto de los Municipios de Guateque, que será su cabecera, Tenza, Guayatá, Somondoco, Sutatenza y Capilla de Tenza;

El de Neira, compuesto de los Municipios de Garagoa, que será su cabecera, Campohermoso, Chinavita, Macanal, Miraflores y Pachavita: y

El de Leiva, compuesto de los Municipios de Leiva, que será su cabecera, Arcabuco, Chíquisa, Gachantivá, Ráquira, Sáchica, Sutamarchán y Tinjacá.

Art. 17. En la cabecera del Circuito del Centro habrá cuatro Jueces; en las de los Circuitos de Ricaurte, Occidente y Oriente, habrá dos; y uno en las de los Circuitos de Neira y Leiva.

(TUNDAMA)

Art. 18. El Distrito Judicial de Tundama se divide en los siguientes Circuitos:

El de Tundama, compuesto de los Municipios de Santa Rosa, que será su cabecera, Belén, Betéitiva, Busbanzá, Cerinza, Corrales, Duitama, Floresta, Nobsa, Paipa, Socha y Tasco;

El de Sugamuxi, compuesto de los Municipios de Sogamoso, que será su cabecera, Cuítiva, Chámeza, Firavitoba, Gámeza, Iza, Labranzagrande, Marroquín, Mongua, Monguí, Morcote, Pajarito, Paya, Pesca, Pisva, Pueblo viejo, Recetor, Tópaga, Tota, Zapatosa y Tibasosa;

El del Norte, compuesto de los Municipios de Soatá, que será su cabecera, Boavita, Covarachía, Jericó, La Paz, Sátivanorte, Sátivasur, Socotá, Susacón, Tutasá y Uvita;

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

El de Gutiérrez, compuesto de los Municipios de Cocuy, que será su cabecera, Capilla del Cocuy, Chiscas, Chita, Espino, Guacamayas, Güicán, Panqueva y Salina de Chita; y

El de Casanare, compuesto de los Municipios de Tame, que será su cabecera, Arauca, Arauquita, Barroblanco, Cravo, Chire, El Viento, La Trinidad, Moreno, Nunchía, Orocué, Pore, Támara, Ten, Todos los Santos, San Lope y Santa Elena.

Art. 19. En la cabecera del Circuito de Sugamuxi habrá cuatro Jueces; en las de los Circuitos de Tundama y Gutiérrez, habrá tres; dos en la del Norte; y uno en cada una de las de los Juzgados de Norte y Sur de Casanare.

(CAUCA)

Art. 20. El Distrito Judicial del Cauca se divide en los siguientes Circuitos:

El de Atrato, compuesto de los Distritos de Quibdó, que será su cabecera, Carmen, Lloró, Murindó, Turbo, Bagadó, Riosucio y Bebará;

El de San Juan, compuesto de los Distritos de Nóvita, que será su cabecera, Baudó, Cuéllar, San Pablo, Sipí, Tadó y Condoto;

El de Toro, compuesto de los Municipios de Riosucio, que será su cabecera, Ansermaviejo, Quinchía, Marmato y Supía;

El de Roldanillo, compuesto de los Municipios de Roldanillo, que será su cabecera, Ansermanuevo, Toro, Hato de Lemos, Bolívar, Huasanó, Higuerón, Riofrío y Yegüerizo;

El del Quindío, compuesto de los Municipios de Cartago, que será su cabecera, Salento, Obando y La Victoria;

El de Pereira, compuesto de los Municipios de Pereira, que será su cabecera, Santa Rosa de Cabal, San Francisco y María;

El de Tuluá, compuesto de los Municipios de Tuluá, que será su cabecera, San Vicente, Buga la Grande y Zarzal;

El de Buga, compuesto de los Municipios de Buga, que será su cabecera, San Pedro, Guacarí y Cerrito; y

El de Palmira, compuesto de los Municipios de Palmira, que será su cabecera, Pradera, Candelaria y Florida.

Art. 21. En las cabeceras de los Circuitos Judiciales de Toro y Palmira habrá dos Jueces, y en las de los demás Circuitos enumerados en el artículo anterior sólo habrá uno.

(POPAYÁN)

Art. 22. El Distrito Judicial de Popayán se divide en los siguientes Distritos Judiciales:

El de Cali, compuesto de los Municipios de Cali, que será su cabecera, Jamundí, Pavas, Yumbo, Papagayeros, Vijes y Yotoco;

El de Buenaventura, compuesto de los Municipios de Buenaventura, que será su cabecera, Anchicayá, Córdoba, Guapi, Micay, San Francisco de Naya y Timbiquí;

El de Santander, compuesto de los Municipios de Santander, que será su cabecera, Buenosaires, Caldono, Caloto, Celandia, Corinto, Yambaló y Toribío;

El de Popayán, compuesto de los Municipios de Popayán, que será su cabecera, Calibío, Cajibío, Dolores, Patía, Puracé, Quilcacé, Rioblanco,

Tambo, Timbío, La Sierra, Rosario, Silvia, Tunía, Pescador, Morales, Páez, Coconuco, Totoró y Paniquitá; y

El de Caldas, compuesto de los Municipios de Bolívar, que será su cabecera, La Cruz, San Pablo, Mercaderes, Almaguer, San Sebastián y La Vega.

Art. 23. En las cabeceras de los Circuitos Judiciales de Cali y Popayán habrá dos Jueces y uno en las de los demás Circuitos que quedan mencionados en el artículo anterior.

(PASTO)

Art. 24. El Distrito Judicial de Pasto se divide en los siguientes Circuitos:

El de Pasto, compuesto de los Municipios de Pasto, que será su cabecera, Berruecos, Buesaco, Consacá, Florida, Túnez, San Lorenzo, Santander, Tambo, Taminango, Tangua, Unión, Sandoná, Tablón, Yacuanquer y los Distritos de la Provincia del Caquetá;

El de Túquerres, compuesto de los Municipios de Túquerres, que será su cabecera, Ancuya, Guachavés, Guaitarilla, Imecés, Linares, Mallama, Ospina, Samaniego, Sapuyes y Yascual;

El de Barbacoas, compuesto de los Municipios de Barbacoas, que será su cabecera, Magüí, Mosquera, San José y San Pablo;

El de Tumaco, compuesto de los Municipios de Tumaco, que será su cabecera, Salahonda, Bocagrande é Iscuandé; y

El de Obando, compuesto de los Municipios de Ipiales, que será su cabecera, Carlosama, Cumbal, Guachucal, Pupiales, Contadero, Iles, Puerres, Potosí, Gualmatán y Pastás.

Art. 25. En la cabecera del Circuito Judicial de Pasto habrá tres Jueces: dos en la cabecera del Circuito de Obando, y uno en las de los demás Circuitos mencionados en el artículo anterior.

(CUNDINAMARCA)

Art. 26. Divídese el Distrito Judicial de Cundinamarca en los siguientes Circuitos:

El de Bogotá, compuesto de los Municipios de Bogotá, que será su cabecera, Arbeláez, Bosa, Calera, Cota, Chía, Engativá, Fontibón, Funza, Fusagasugá, Mosquera, Pandi, Pasca, Soacha, Suba, Tibacuy, Usaquén y Usme;

El de Chocontá, compuesto de los Municipios de Chocontá, que será su cabecera, Hatoviejo, Machetá, Manta, Suesca y Tibirita;

El de Facatativá, compuesto de los Municipios de Facatativá, que será su cabecera, Bojacá, Guayabal, La Vega, Madrid, San Francisco, Subachoque, Supatá y Zipacón;

El de Guaduas, compuesto de los Municipios de Guaduas, que será su cabecera, Beltrán, Bituima, Caparrapí, Chaguaní, La Palma, La Paz, La Peña, Puerto de Bogotá, San Juan y Viani;

El de Guatavita, compuesto de los Municipios de Guatavita, que será su cabecera, Cabuyaro, Gachalá, Gachetá, Guasca, Junín, Medina, Ubalá y Sesquilé;

El de Oriente, compuesto de los Municipios de Cáqueza, que será su cabecera, Fómeque, Chipaque, Choachí, Fosca, Gutiérrez, Quetame, San Martín, Ubaque, Une, Uribe y Villavicencio;

El de Tequendama, compuesto de los Municipios de La Mesa, que

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

será su cabecera, Anapoima, Anolaima, Colegio, Girardot, Guataquí, Jerusalén, Nariño, Nilo, Pulí, Quipile, Ricaurte, San Antonio, Tena, Tocaima y Viotá;

El de Ubaté, compuesto de los Municipios de Ubaté, que será su cabecera, Carmen, Cucunubá, Fúquene, Guachetá, Lenguazaque, Simijaca, Susa, Sutatausa y Tausa;

El de Villeta, compuesto de los Municipios de Villeta, que será su cabecera, Nimaima, Nocaima, Quebradanegra, Sasaima, Útica y Vergara; y

El de Zipaquirá, compuesto de los Municipios de Zipaquirá, que será su cabecera, Cajicá, Cogua, Gachancipá, Nemocón, Pacho, Paime, Peñón, San Cayetano, Sopó, Tabio, Tenjo y Tocancipá.

Art. 27. En la cabecera del Circuito de Bogotá habrá siete Jueces; en la de los Circuitos de Facatativá, Guadnas, Tequendama, Zipaquirá, Ubaté, Guatavita y Oriente, habrá dos; y en las de los demás Circuitos expresados en el artículo anterior habrá sólo un Juez.

En el Circuito Judicial de Bogotá continuarán funcionando los dos Juzgados Ejecutores que fueron creados por la Ley 143 de 1887 (5 de Agosto), con el personal y atribuciones que dicha Ley les señaló.

(MAGDALENA)

Art. 28. Divídese el Distrito Judicial del Magdalena en los siguientes Circuitos:

El de Riohacha, compuesto de los Municipios de Riohacha, que será su cabecera, Barrancas, Fonseca, San Juan de Cesar y Villanueva;

El de Santa Marta, compuesto de los Municipios de Santa Marta, que será su cabecera, Cerro de San Antonio, Piñón, Plato, Remolino, Salamina, San Juan de Córdoba, Santa Ana, Sitionuevo y Tenerife;

El del Sur, compuesto de los Municipios de Río de Oro, que será su cabecera, Aguachica, Banco, González, Guamal, La Gloria y Tamalameque; y

El de Valle de Upar, compuesto de los Municipios de Valle de Upar, que será su cabecera, Chiriguaná y Espíritu Santo.

Art. 29. En la cabecera del Circuito Judicial de Santa Marta, habrá dos Jueces; y uno en cada una de las cabeceras de los demás Circuitos mencionados en el artículo anterior.

(PANAMA)

Art. 30. Divídese el Distrito Judicial de Panamá en los siguientes Circuitos:

El de Chiriquí, compuesto de los Municipios de David, que será su cabecera, Alange, Bugaba, Boquerón, Dolega, Gualaca, Los Remedios, San Félix, San Lorenzo, San Pablo y Tolé;

El de Coclé, compuesto de los Municipios de Penonomé, que será su cabecera, Antón, Aguadulce, La Pintada, Natá y Ola;

El de Colón, compuesto de los Municipios de Colón, que será su cabecera, Chagres, Donoso, Portobelo y Santa Isabel;

El de Los Santos, compuesto de los Municipios de Pesé, que será su cabecera, Chitré, Guararé, Las Tablas, Las Minas, Los Santos, Macaracas, Ocú, Pocrí, Pedasí, Parita, Santa María, y Tonosí;

El de Panamá, compuesto de los Municipios de Panamá, que será

su cabecera, Arrayán, Chame, Capira, Chepo, La Chorrera, Pácora, San Carlos y Taboga; y

El de Veraguas, compuesto de los Municipios de Santiago, que será su cabecera, Atalaya, Calobre, Cañazas, La Mesa, Las Palmas, Montijo, Lona, San Francisco y Río de Jesús.

Art. 31. En la cabecera del Circuito de Panamá habrá cuatro Jueces; en la del Circuito de Colón habrá dos; y uno en cada una de los demás Circuitos mencionados en el artículo anterior.

Este artículo se halla en consonancia con lo establecido en los artículos 4.°, ordinal 3.°, y 13 de la Ley 83 de 1888, relativa á Panamá; ley que se halla en el tomo principal de la *Codificación Nacional*, despnés del Tratado quinto, páginas 338 á 343.

(SANTANDER)

(DISTRITO JUDICIAL DEL NORTE)

Art. 32. Divídese el Distrito Judicial del Norte, en el Departamento de Santander, en los siguientes Circuitos:

El de Cúcuta, compuesto de los Municipios de San José de Cúcuta, que será su cabecera, Rosario, San Cayetano y Aldea de Cúcuta;

El de Chinácota, compuesto de los Municipios de Chinácota, que será su cabecera, Bochalema y Planadas:

El de Salazar, compuesto de los Municipios de Salazar, que será su cabecera, Gramalote, Arboledas y Santiago;

El de Pamplona, compuesto de los Municipios de Pamplona, que será su cabecera, Cácota, Cucutilla, Chitagá, Labateca, Mutiscua, Silos y Toledo;

El de Málaga, compuesto de los Municipios de Málaga, que será su cabecera, Enciso, Capitanejo, Tequia, San Andrés, Molagavita, Guaca y Cepitá;

El de La Concepción, compuesto de los Municipios de La Concepción, que será su cabecera, Cerrito, Cervitá, Carcasí, San Mignel y Macaravita;

El de Ocaña, compuesto de los Municipios de Ocaña, que será su cabecera, Aspacica, Carmen, Convención, La Cruz, San Pedro y Teorama;

El de Bucaramanga, compuesto de los Municipios de Bucaramanga, que será su cabecera, Botijas, California, Florida, Girón, Lebrija, Matanza, Rionegro, Suratá, Tona y Wilches; y

El de Piedecuesta, compuesto de los Municipios de Piedecuesta, que será su cabecera, Los Santos y Umpalá.

Art. 33. En la cabecera del Circuito Judicial de Bucaramanga habrá tres Jueces; en la de los Circuitos de Pamplona, Ocaña, Málaga y Chinácota, habrá dos, y uno en la cabecera de cada uno de los demás Distritos expresados en el artículo anterior.

(DISTRITO JUDICIAL DEL SUR)

Art. 34. El Distrito Judicial del Sur, en el Departamento de Santander, se divide en los siguientes Circuitos:

El de Charalá, compuesto de los Municipios de Charalá, que será su cabecera, Sincelada, Confines, Encino y Ocamonte;

El de Barichara, compuesto de los Municipios de Barichara, que será su cabecera, Betulia, Cabrera, Galán, San Vicente, Zapatoca y Guane;

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

El de Guanentá, compuesto de los Municipios de San Gil, que será su cabecera, Aratoca, Curití, Jordán, Mogotes, Onzaga, San Joaquín y Valle;

El del Socorro, compuesto de los Municipios del Socorro, que será su cabecera, Contratación, Chima, Gámbita, Guadalupe, Guapotá, Hato, Oiba, Palmar, Palmas, Páramo, Pinchote, Simacota y Suaita; y

El de Vélez, compuesto de los Municipios de Vélez, que será su cabecera, Aguada, Bolívar, Chipatá, Cite, Guabatá, Güepsa, Jesús María, La Paz, Puente Nacional y San Benito.

Art. 35. En la cabecera de los Circuitos Judiciales del Socorro y Vélez habrá tres Jueces; en la del Circuito de Guanentá habrá dos; y uno en las de los Circuitos de Barichara y Charalá.

(TOLIMA)

(DISTRITO JUDICIAL DEL NORTE)

Art. 36. El Distrito Judicial del Norte, en el Departamento del Tolima, se divide en los siguientes Circuitos:

El de Honda, compuesto de los Municipios de Honda, que será su cabecera, Victoria, Mariquita y Santana;

El de Herveo, compuesto de los Municipios de Soledad, que será su cabecera, Fresno, Marulanda, Manzanares y Villahermosa;

El de Ambalema, compuesto de los Municipios de Ambalema, que será su cabecera, Guayabal, Lérida, Líbano y Venadillo;

El de Ibagué, compuesto de los Municipios de Ibagué, que será su cabecera, Caldas y Piedras;

El del Guamo, compuesto de los Municipios del Guamo, que será su cabecera, Carmen, Coello, Espinal, Melgar, San Luis, Miraflores, El Valle y Chaparral; y

El de Purificación, compuesto de los Municipios de Purificación, que será su cabecera, Alpujarra, Cunday, Dolores, Natagaima, Prado, Coyaima, Ortega y Ataco.

Art. 37. En las cabeceras de los Circuitos Judiciales de Honda, Ambalema, Guamo y Purificación habrá dos Jueces; y uno, en las de los demás Circuitos expresados en el artículo anterior.

(DISTRITO JUDICIAL DEL SUR)

Art. 38. Divídese el Distrito Judicial del Sur, en el Departamento del Tolima, en los siguientes Circuitos:

El de Pital, compuesto de los Municipios de Pital, que será su cabecera, Carnicerías, Hato, La Plata, Paicol y Agrado;

El de Garzón, compuesto de los Municipios de Garzón, que será su cabecera, Altamira, Elías, Gigante, Guadalupe, Jagua, Naranjal, Pitalito, Santa Librada y Timaná; y

El de Neiva, compuesto de los Municipios de Neiva, que será su cabecera, Aipe, Baraya, Campoalegre, Colombia, Guagua, Hobo, Iquira, Retiro, Unión, Villavieja y Yaguará.

Art. 39. En la cabecera del Circuito de Neiva habrá tres Jueces; dos en la cabecera del Circuito de Garzón; y uno en la del de Pital.

Art. 40. El personal subalterno de los Juzgados de Circuito será el que se determina en el Código de Organización Judicial.

Art. 41. En la cabecera de cada Circuito Judicial habrá un Fiscal,

con excepción de las de los Circuitos de Bogotá y Medellín, en cada una de las cuales habrá dos.

Art. 42. Las veredas, partidos, caseríos ó fracciones que se hayan segregado y se segreguen de un Municipio para ser agregados á otros, harán parte del Circuito Judicial á que pertenezca el Municipio á cuyo territorio hubieren sido agregados.

Art. 43. Autorízase al Gobierno para que determine el Circuito á que deben pertenecer los Municipios de nueva creación yá hecha y los que en lo sucesivo se creén, así como también aquellos que se hubieren omitido en la presente Ley.

Art. 44. Los nuevos empleados que resulten creados por la presente Ley disfrutarán de un sueldo igual al de que gocen los empleados de la misma denominación existentes en el respectivo lugar ó territorio. Caso de que no pueda aplicarse esta regla, el Gobierno fijará provisionalmente los sueldos, mientras la ley los establece de una manera definitiva; y las sumas necesarias se considerarán incluídas en los respectivos Presupuestos.

Art. 45. Los Jueces de Circuito ejercerán sus funciones en la forma prevenida por el artículo 111 del Código de Organización Judicial.

Ley 72 de 1890, artículo 11.

Art. 46. Esta Ley empezará á regir el día 1.° de Enero de 1891; pero el Gobierno y los Tribunales respectivos harán en el mes de Diciembre próximo el nombramiento de los nuevos empleados que por ella se créan.

Art. 47. En los Tribunales en que la presente Ley créa un Magistrado más, al ingresar éste, se hará nuevo repartimiento de todos los negocios judiciales que estén al despacho.

Lo propio se hará en los Circuitos Judiciales en que se aumenta el número de los Jueces.

Art. 48. Derógase cualquiera disposición legal que se oponga á la ejecución de la presente Ley.

Dada en Bogotá, á diez y seis de Noviembre de mil ochocientos noventa.

LEY 119

(24 DE DICIEMBRE),

reformatoria de la 56 del presente año, sobre expropiaciones por causa de utilidad pública.

(Se publicó en el *Diario Oficial* de 15 de Enero de 1891, número 8,303).

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Art. 1.° De la demanda de expropiación con sus documentos, el Juez dará inmediatamente traslado al demandado por el término de cinco días.

Cuando sean más de dos los demandados, luégo que se hayan surtido las notificaciones, se pondrán la demanda y los documentos con que ha sido presentada á disposición de los demandados en la respecti-

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

va Secretaría, por el término de doce días, para que la contesten dentro de ese término. Concluído éste, el Secretario, sin necesidad de petición, pondrá el expediente al despacho á fin de que el juicio siga su curso.

Art. 2.° Si el demandado contestare la demanda conviniendo en la expropiación, el Juez prevendrá á las partes que dentro de veinticuatro horas nombre cada una un perito para el avalúo de la cosa, y nombrará un tercero para el caso de discordia. Si estos nombramientos no se hicieren dentro del término fijado, los nombrará el Juez, de oficio. Practicado el avalúo el Juez declarará dentro de cuarenta y ocho horas la expropiación solicitada y fijará el monto de la indemnización.

Cuando fueren varios los demandados y nombraren distintos peritos, se sorteará por el Juez, de entre éstos, el que deba practicar el avalúo, pues en ningún caso los peritos excederán de tres.

9.°

Art. 3.° Si el demandado no contestare la demanda, dentro del término legal, se entenderá que conviene en la expropiación, y se procederá como en el caso del artículo anterior.

Art. 4.° Si el demandado contestare el traslado de la demanda oponiéndose á la expropiación, se abrirá el juicio á prueba hasta por el término de veinte días común é improrrogable, y en el mismo auto se dispondrá que las partes nombren peritos.

Art. 5.° En todo caso, antes de dictar sentencia, podrá el Juez dictar *uno* ó más autos para mejor proveer, en que ordene que los peritos aclaren, amplíen ó funden su dictamen, si fuere oscuro, insuficiente é infundado. Asimismo ordenará que comparezcan tres testigos, los cuales designará, que sean mayores de treinta años, de buena fama y que tengan las aptitudes necesarias para que declaren sobre los hechos que en concepto del Juez sean necesarios para fallar con acierto; y finalmente, dictará las órdenes del caso para obtener cualesquiera otros datos que juzgue convenientes.

Art. 6.° Concluído el término expresado, se señalará á las partes otro de tres días para que presenten sus alegatos sin sacar los autos de la Secretaría.

El término á que se refiere este artículo es el de veinte días, de que habla el artículo 4.°

Art. 7.° Las pruebas demoradas pueden practicarse y agregarse á los autos hasta la citación para sentencia.

Art. 8.° Transcurridos los tres días que tienen las partes para alegar, el Secretario, sin necesidad de pedimento, lo informará, y previa citación de las partes, se pronunciará sentencia dentro de los diez días siguientes, resolviendo si debe ó nó verificarse la expropiación, y fijando, en el primer caso, la indemnización que debe pagarse al expropiado.

Art. 9.° El Juez para fijar el valor de la indemnización tendrá en cuenta el dictamen de los peritos, las razones en que se funda y las demás pruebas que figuren en el expediente, debiendo expresar las razones de su determinación. Dicho precio se fijará con prescindencia del aumento del valor que hubiere adquirido ó hubiere de adquirir la misma cosa á virtud de la obra ú obras para cuya realización es preciso verificar la expropiación; pero si á una persona se le expropiare la totalidad de su predio, ó la mayor parte de él, en la sentencia definitiva se aumentará el precio de lo expropiado con un veinte por ciento (20°/₀)

en el caso de que el motivo de la expropiación sea el mencionado en el ordinal 6.° del artículo primero de la citada Ley 56.

Ley 105, artículos 77 á 80.

La razón por que se aumenta en un veinte por ciento (20°/₀) el precio de lo expropiado, en el caso de que el motivo de la expropiación sea la apertura de una vía pública de comunicación, es obvia, pues la construcción de estas obras aumenta el precio de las propiedades adyacentes, y no sería equitativo que el propietario ó propietarios que padecen la expropiación fuesen precisamente los únicos que no gozasen de dicho aumento, y sí los demás propietarios que no lo sufren.

Art. 10.° La sentencia que ponga término á la primera instancia en estos juicios es apelable para ante el superior respectivo dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes á la notificación, y el recurso será sustanciado y decidido como el de los autos interlocutorios.

Los demás autos que se pronuncien en estos juicios son también apelables, según las reglas generales.

Art. 11. Ejecutoriada que sea la sentencia en que se decrete la expropiación, y comprobado el pago ó el depósito de la indemnización otorgada al expropiado, el Juez pondrá en posesión de la cosa al demandante.

Los artículos precedentes—1.° á 11—subrogan á los 11 á 14 de la Ley 56 de 1890.—Véase el artículo 15 de la mencionada Ley 56.

Art. 12. En los casos de los números 1.°, 2.° y 3.° del artículo 1.° de la Ley 56 del presente año, "sobre expropiaciones por causa de utilidad pública," si hubiere temores fundados de perturbación de la paz pública; en el caso del número 4.° del mismo artículo, en épocas de epidemia ó cuando haya fundados temores de que se desarrolle, y en el caso del número 5.°, cuando el peligro sea grave é inminente, se observarán las reglas consignadas en los artículos siguientes.

Art. 13. Luégo que el representante de la respectiva entidad tenga en su poder la resolución de que habla el artículo 18 de esta Ley y las pruebas necesarias, pedirá al Juez que decrete la expropiación.

Art. 14. Si el Juez creyere que faltan algunas pruebas, las exigirá, señalándolas claramente. Cuando estén completas nombrará los peritos que deben verificar el avalúo, y hecho éste, y practicadas las demás diligencias que el Juez estime convenientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.°, resolverá sobre la expropiación, y fijará, en su caso, el valor de la indemnización.

En las expropiaciones de que trata este artículo, que son las mencionadas en el 12, no interviene el propietario, ni aun para designar perito, cuyo nombramiento corresponde al Juez. Fúndase este breve procedimiento en la urgencia de los motivos de la expropiación. Para atenuar el rigor de tal procedimiento se concede al interesado el derecho de pedir revocatoria del auto, y se dispone que la apelación de éste se sustancie como la de sentencia definitiva, en vía ordinaria, se subentiende, pues si así no fuera, carecería de defensa el propietario. Además, ningún perjuicio se sigue de observar dicha sustanciación, por cuanto la apelación se concede únicamente en el efecto devolutivo. En estos casos no rige, pues, lo que dispone el artículo 10. Véase el artículo que sigue.

Art. 15. Del auto en que se decrete la expropiación podrá el interesado pedir revocatoria dentro de cinco días, presentando pruebas si á bien lo tiene. Si la reclamación fuere negada podrá apelar, dentro de veinticuatro horas, del auto en que se decrete la expropiación. La ape-

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

lación en este caso se concederá en el efecto devolutivo y se sustanciará como de sentencia definitiva.

En los demás casos de expropiación, es decir, en los no comprendidos en el artículo 12, rige lo que establece el artículo 10.

Art. 16. Si se niega la expropiación ó se revoca el auto en que se ha decretado, puede el demandante apelar, y el recurso se sustanciará como de auto interlocutorio.

Los demás autos son apelables según las reglas generales.

Los cinco artículos que preceden—12 á 16—subrogan á los 17 á 26 de la Ley 56.

Art. 17. En los casos á que se refiere el inciso 9.° del artículo 1.° de la citada Ley 56, se entenderá que las obras de que se trata en dicho inciso son aquellas en las cuales tiene interés el Gobierno ó el público.

Art. 18. Todo asunto de expropiación en casos comunes, debe principiar por una resolución en la que se exprese claramente qué es lo que se debe expropiar, con qué objeto, y con qué motivo. Se expresarán también los pasos que se hayan dado para conseguir lo que se necesita, por contrato libremente celebrado con el respectivo interesado. Esta resolución se dictará por el Gobierno, si se tratare de asunto nacional; por el Gobernador del Departamento, si se tratare de asunto departamental; por el Alcalde, si el asunto es municipal; y en el caso del ordinal 14 del artículo 1.°, el Ordinario eclesiástico pasará al Gobernador del Departamento respectivo los documentos justificativos de la expropiación, para que este funcionario, en vista de ellos, dicte la resolución á que hubiere lugar.

Este artículo subroga al 6.° de la Ley 56.

Art. 19. Deróganse las siguientes disposiciones de la citada Ley 56 del presente año, sobre expropiaciones por causa de utilidad pública: el ordinal 13 del artículo 1.°, el inciso 2.°, del artículo 2.° y los artículos 6.°, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26.

Art. 20. El Consejo de Estado preparará para las próximas sesiones ordinarias del Congreso un proyecto que contenga todas las diposiciones relativas á expropiaciones por causa de utilidad pública, y que sirva de base de discusión de una ley general sobre la materia.

Art. 21. Esta Ley empezará á regir el día en que éntre en vigencia la 56 de este año, que por la presente se reforma.

Véase en la Ley 56—después del título de la misma—la fecha de su publicación: Código Político y Municipal, artículo 54.

Dada en Bogotá, á veinticuatro de Diciembre de mil ochocientos noventa.

LEY 124

(29 DE DICIEMBRE),

sobre sucesión abintestato de extranjeros.

(Se publicó en el *Diario Oficial* de 15 de Enero de 1891, número 8,303).

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Art. 1.° Siempre que llegue á noticia de los Jueces municipales ó de Circuito que en el territorio de su jurisdicción ha fallecido un extranjero sin dejar albacea, cónyuge ó herederos, á cuyo cargo deban estar los bienes dejados por él, procederán inmediatamente á cumplir las disposiciones de los artículos 1237 y 1238 del Código Judicial, y darán cuenta por el inmediato correo al Ministerio de Relaciones Exteriores de la iniciación del procedimiento de oficio, acompañando copia autorizada y por duplicado de la respectiva acta de defunción. Estas copias serán autenticadas por la autoridad local y enviadas por conducto de la Gobernación del Departamento, en donde á la vez también serán autenticadas.

Art. 2.° Es deber de los Alcaldes y Personeros municipales dar aviso á los Jueces de Circuito ó de Distrito municipal de las defunciones de extranjeros de que, por cualquier medio, tengan noticia, á fin de que sin demora se inicie, si antes no se hubiere iniciado, el procedimiento prevenido en el artículo 1.°

Art. 3.° En la práctica de todas estas diligencias, los Jueces procederán de oficio, asociados de su Secretario y de dos testigos que nombrarán de entre los vecinos más notables, y actuarán en papel común, sin perjuicio de que oportunamente se pague al Tesoro el importe del papel sellado que debiera haberse invertido si se hubiese procedido á solicitud de parte.

Art. 4.° Practicadas las diligencias prescritas en los artículos 1237 y 1238 del Código Judicial, los Jueces de Distrito municipal pasarán todo lo actuado al del respectivo Circuito, quien al recibirlo, examinará lo hecho, y rectificará las faltas que note, dictando para ello las providencias que estime oportunas.

Art. 5.° En las cabeceras de Circuito practicarán los Jueces de él las diligencias que correspondan á los Jueces de Distrito á prevención con éstos.

Art. 6.° Declarada yacente la herencia en los términos de los artículos 1239 y 1240 y cumplidas las prescripciones de los artículos 1241 y 1242 del Código Judicial, el curador de la herencia promoverá ante el Juez del conocimiento y con audiencia del Ministerio público, la venta de los bienes muebles corruptibles y de los de fácil extravío ó cuya conservación sea costosa, como los semovientes. Pero esta venta tendrá lugar solamente, si se verifican las siguientes condiciones:

1.ª Que se acredite ante el Juez que debe declararla que los bienes se encuentran realmente en las circunstancias expresadas; y

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

2.ª Que si hubiere empleado consular de la Nación de donde fuere nacional el difunto, tal empleado haya sido consultado al efecto, y haya prestado formal asentimiento para la enajenación de los bienes.

Art. 7.° En los remates que se harán con las formalidades establecidas para la venta de bienes embargados en juicio ejecutivo, será postura admisible la que cubra las dos terceras partes del avalúo dado á los bienes en el inventario á que se refiere el artículo 1242 del Código Judicial, y las adjudicaciones se harán siempre por dinero de contado. El producto será colocado á interés con las debidas seguridades por un plazo no mayor de dos años, siempre que el empleado consular respectivo diere su formal consentimiento; si no se llena tal condición el producto se depositará en las arcas nacionales.

Art. 8.° Si transcurrieren dos años, contados desde la publicación por la imprenta del auto en que se declaró yacente la herencia, sin que se haya presentado algún heredero comprobando que lo es, ó un albacea á quien el testador haya conferido la tenencia de los bienes, y el procedimiento de oficio no hubiere cesado por esta causa, podrá el Juez, en virtud de orden del Ministerio de Relaciones Exteriores, ó á petición del curador y con conocimiento de causa y audiencia del Ministerio público, ordenar que se venda el resto de los bienes hereditarios existentes, ya sean muebles ó inmuebles, procediéndose en todo lo demás como está dispuesto para los remates en juicio ejecutivo. El producto yá no se colocará á interés sino que, junto con el de la venta de los bienes corruptibles y los demás fondos en numerario de la herencia, se depositará en la Tesorería general de la Nación.

Art. 9.° Los Jueces de Circuito, por conducto de la Gobernación del Departamento, remitirán al Ministerio de Relaciones Exteriores una copia autorizada de la diligencia de inventarios de los bienes de la herencia, del auto en que se declara yacente y de las diligencias de remate de los bienes, informando acerca de la fecha y cuantía de los depósitos que por el curador se hayan hecho en la Tesorería general.

Art. 10.° Asimismo enviarán cada dos meses, por el propio conducto, al Ministerio de Relaciones Exteriores, un informe detallado del curso del juicio, indicando puntualmente las providencias dictadas y los motivos de las demoras que hayan podido ocurrir.

Art. 11. Los depósitos que según esta Ley deban hacerse en la Tesorería general no ganarán interés alguno y se mantendrán á la orden del Juez de la causa para disponer su entrega de acuerdo con la liquidación de la herencia, de la que se dará conocimiento al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Art. 12. El curador de la herencia luégo que esté posesionado de su cargo presentará al respectivo Juez las estampillas de habilitación suficientes para ser agregadas á cada una de las hojas de papel común invertido, si la actuación hubiere de practicarse en papel sellado. Estas estampillas serán anuladas en los términos de la Ley 110 de 1880.

Art. 13. Los poderes, actas del registro del estado civil y demás documentos extendidos en el Extranjero y que los interesados exhiban ante los Juzgados y Tribunales para comprobar sus derechos, serán válidos si tienen las autenticaciones exigidas por las leyes colombianas. Autenticados de este modo, se presume que están expedidos conforme á la ley local de su origen, á no ser que parte interesada compruebe lo contrario.

Art. 14. Los Alcaldes, Personeros, Jueces municipales y de Circuito y demás funcionarios ó empleados públicos que por malicia ó descuido dejaren de cumplir cualquiera de los deberes que esta Ley les señala, además de incurrir en las responsabilidades ordinarias, serán castigados con una multa de cincuenta á quinientos pesos.

Art. 15. Las sucesiones intestadas de extranjeros que se hallen pendientes en esta fecha se conformarán en cuanto sea posible á las disposiciones de la presente Ley.

Dada en Bogotá, á diez y seis de Diciembre de mil ochocientos noventa.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

MODELOS

PARA EXTENDER ALGUNOS DE LOS INSTRUMENTOS QUE PASAN ANTE LOS NOTARIOS

INSTRUMENTO DE LEGITIMACIÓN

I

Número.... En el Distrito Municipal de...., Departamento de...., República de Colombia, á *tantos* de *tal mes y año*, ante mí N., Notario.... del Circuito de...., y los testigos instrumentales N. y N., varones, vecinos del mismo Circuito, mayores de edad, de buen crédito y en quienes no ocurre ninguna causal de impedimento, comparecieron el señor N. y la señora N., vecinos de...., mayores de edad, á quienes conozco, y expusieron : que contrajeron matrimonio en *tal* fecha (1), y que como dicho matrimonio no produjo *ipso jure* (2) la legitimación de sus hijos N. y N., naturales de ..., el primero de *tantos* años de edad y el segundo de *tantos*, que tuvieron antes de su matrimonio, les confieren este beneficio, por el presente instrumento. Se hace saber á los otorgantes que éste debe notificarse á los hijos á quienes se refiere, á virtud de lo dispuesto en el artículo 240 del Código Civil (3). Se pagaron los derechos de registro, como consta de la boleta que se agrega, y dice (aquí ella). Se advirtió á los interesados que tienen la obligación de hacer registrar este instrumento dentro de los sesenta días siguientes á la fecha de su otorgamiento (4). Leída esta escri-

(1) El Código Civil no fija término para el otorgamiento del instrumento de legitimación.

(2) El artículo 239 del Código Civil dice cuándo el matrimonio no produce *ipso jure* la legitimación de los hijos.

(3) Puede el hijo á quien se legitima manifestar en la misma escritura de legitimación que se da por notificado y que acepta la legitimación, y firmar la escritura: si esto hiciere, no hay necesidad de otorgar escritura especial de aceptación. Si el hijo no necesitare de tutor ó curador para la administración de sus bienes, puede aceptar ó repudiar la legitimación libremente; pero si necesitare de uno ú otro, no puede aceptar sino por el ministerio ó con el consentimiento de su tutor ó curador general, ó de un curador especial, y previo decreto judicial con conocimiento de causa. La mujer que viva bajo potestad marital necesita el consentimiento del marido, ó autorización de la justicia, en subsidio. En estos casos deben firmar la escritura el tutor, ó el curador, ó el marido, é insertar en ella el decreto judicial que autorice la aceptación: artículo 242 del Código Civil.

(4) El artículo 2.° de la Ley 39 de 1890 fija este término.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

tura á los otorgantes, por ante los testigos expresados, la aprobaron. Firman todos por ante mí.

II

INSTRUMENTO DE ACEPTACIÓN Ó DE REPUDIACIÓN DE LA LEGITIMACIÓN

Número... En el Distrito Municipal de...., Departamento de ..., República de Colombia, á *tantos* de *tal mes y año*, ante mí N., Notario del Circuito de.. ., y los testigos instrumentales N. y N., varones, vecinos del mismo Circuito, mayores de edad, de buen crédito, y en quienes no ocurre ninguna causal de impedimento, comparecieron los señores N. y N., varones, vecinos de...., mayores de edad, á quienes conozco, y expusieron: que habiéndoseles notificado el instrumento de la legitimación que á su favor hicieron el señor N. y la señora N., instrumento que otorgaron ante mí bajo el número *tal* y en *tal* fecha, por la presente escritura declaran que aceptan (1) la referida legitimación. Se pagaron los derechos de registro, como consta de la boleta que se agrega, y dice (aquí ella). Se advirtió á los otorgantes que tienen la obligación de hacer registrar este instrumento dentro de sesenta días. Leída esta escritura á los interesados, por ante los testigos expresados, la aprobaron. Firman todos por ante mí.

III

ESCRITURA DE ADOPCIÓN

Número....En el Distrito Municipal de...., Departamento de...., República de Colombia, á *tantos* de *tal mes y año*, ante mí N., Notario del Circuito de...., y los testigos instrumentales N. y N., varones, vecinos del mismo Circuito, mayores de edad, de buen crédito y en quienes no ocurre ninguna causal de impedimento, compareció el señor N. (2), natural de...., vecino de...., soltero (3) y de edad de *tantos* años (4), á quien conozco, y expuso: que por la presente escritura y con el permiso que le ha otorgado el señor Juez del Circuito de.... (5), como consta de

(1) Si la escritura es de repudiación, no se pondrá que *aceptan*, sino *que repudian*: artículo 243 del Código Civil.

(2) La adopción no puede tener lugar sino entre personas del mismo sexo: artículo 273 del Código Civil.

(3) Si el adoptante fuere casado, necesita el consentimiento de su cónyuge, que firmará también la escritura. Los cónyuges pueden adoptar conjuntamente: artículos 274 y 275 del Código Civil.

(4) No puede adoptar sino el mayor de edad, que tenga quince años más que el adoptivo: artículo 271 del Código Civil.

(5) El del domicilio del adoptado. En todo caso de adopción se necesita el permiso del Juez: artículos 279 y 280 del Código Civil.

la documentación que se me ha manifestado, adopta por hijo suyo á N., natural de...., vecino de...., de *tantos* años de edad, hijo legítimo del señor N. y de la señora N. Estando presentes los padres del menor, manifestaron que prestaban su consentimiento para tal adopción (1). Se pagaron los derechos de registro, como consta de la boleta que se agrega, y dice (aquí ella). Se advirtió á los otorgantes que tienen la obligación de hacer registrar este instrumento dentro del término de sesenta días. Leída esta escritura, firman el señor Juez que otorgó el permiso, el adoptante, el adoptado, los padres de éste y los testigos arriba expresados, por ante mí.

IV

INSTRUMENTO DE EMANCIPACIÓN

Número.... En el Circuito Municipal de...., Departamento de...., República de Colombia, á *tantos* de *tal mes y año*, ante mí N., Notario del Circuito de...., y los testigos instrumentales N. y N., varones, vecinos, mayores de edad, de buen crédito, y en quienes no ocurre ninguna causal de impedimento, compareció el señor N., vecino de...., mayor de edad, á quien conozco, y expuso: que por el presente instrumento, y habiendo obtenido la autorización del señor Juez de este Circuito Judicial, como consta del auto que se inserta (2): declara emancipado á su hijo adulto N., natural de.... y vecino de...., de edad de *tantos* años, quien estando presente manifestó que consentía en ello. Se pagaron los derechos de registro, como consta de la boleta que se agrega, y dice (aquí ella). Se advirtió á los otorgantes que tienen obligación de hacer registrar este instrumento dentro de sesenta días. Leída esta escritura á los interesados, por ante los testigos expresados, la aprobaron. Firman todos por ante mí.

V

INSTRUMENTO DE RECONOCIMIENTO DE HIJOS NATURALES

Número.... En el Distrito Municipal de...., Departamento de...., República de Colombia, á *tantos* de *tal mes y año*, ante mí N., Notario del Circuito de.... y los testigos instrumentales N. y N., varones, vecinos, mayores de edad, de buen crédito, y en quienes no ocurre ninguna causal de impedimento, comparecieron el señor N. y la señora N., vecinos de...., mayores de edad, soltera (3) la señora, á quien conozco, y expusieron:

(1) Sobre personas que deben prestar su consentimiento, véase el artículo 277 del Código Civil.

(2) Aquí se copiará el auto íntegramente: artículo 313 del Código Civil.

(3) O casada, si lo fuere. Para este acto no necesita la mujer la autorización del marido: artículo 182 del Código Civil. En el caso inverso, es decir, cuando la mujer casada es la reconocida, necesita la autorización marital.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

que ellos tuvieron un hijo (1), que fue concebido en tiempo en que los otorgantes podían casarse entre sí legítimamente, y nació el día *tantos* de *tal mes y año*, cuyo nombre es N.; y que de su libre y espontánea voluntad han resuelto reconocer, como en efecto reconocen por el presente instrumento, al expresado N. por su hijo natural. Se pagaron los derechos de registro, como consta de la boleta que se agrega, y dice (aquí ella). Se advirtió á los otorgantes que tienen la obligación de hacer registrar este instrumento dentro de los sesenta días siguientes al de su otorgamiento, y que el presente reconocimiento debe notificarse al mencionado hijo N., como lo dispone el artículo 57 de la Ley 153 de 1887. Leída esta escritura á los interesados, por ante los testigos expresados, la aprobaron. Firman todos por ante mí (2).

VI

TESTAMENTO ABIERTO (a)

Número.... En el Distrito Municipal de..., Departamento de...., República de Colombia, á *tantos* de *tal mes y año*, ante mí N., Notario del Circuito de.... (3) y los testigos instrumentales N. N. y N., varones (4), vecinos de dicho Distrito (5), mayores de diez y ocho años, en quienes no ocurre ninguna causal de impedimento (6), el señor N., á quien conozco y se halla en su entero juicio, de lo cual doy fe, dijo que deseando

(1) Cuando es uno solo de los padres el que hace el reconocimiento, no hay obligación de expresar la persona en quien ó de quien se tuvo el hijo natural: artículo 56 de la Ley 153 de 1887.

(2) La escritura de aceptación ó de repudiación del reconocimiento de hijo natural, puede otorgarse como la de aceptación ó repudiación de la legitimación, con sólo el cambio de las respectivas voces. Véase la nota 3 de la escritura de legitimación.

(a) El encabezamiento, la parte final y las cláusulas primera, segunda y tercera son necesarias, á virtud de lo dispuesto en los artículos 1070, 1072 y 1073 del Código Civil. Las cláusulas cuarta á sexta pueden ser convenientes; queda á juicio del testador decidirlo. La séptima es la sustancia del testamento. Las novena á once son útiles.

(3) El testamento debe otorgarse ante el Notario del lugar donde se encuentre el testador. En los lugares donde no hubiere Notario, ó faltare este funcionario, el testamento abierto se puede otorgar ante cinco testigos: artículo 1071 é inciso final del 1068. Código Civil. Los Secretarios de los Consejos municipales no pueden en ningún caso autorizar testamentos: artículo 2629, segundo inciso del Código Civil.

(4) Las mujeres no pueden ser testigos: artículo 1068 del Código Civil.

(5) Dos á lo menos de los testigos deben ser vecinos del distrito en donde se otorga el testamento; pero siempre se expresará el domicilio de cada uno. Por lo menos uno de los testigos debe saber leer y escribir: inciso final del artículo 1068 del Código Civil.

(6) Los menores de diez y ocho años no pueden ser testigos en los testamentos. Los impedimentos relativos á los testigos en los testamentos se mencionan en el artículo 1068 del Código Civil. Véase el artículo 2583 del mismo Código.

otorgar testamento, lo hacía consignándolo en las cláusulas siguientes: Primera. Me llamo N. N., como he dicho. Segunda. Soy natural de...., Departamento de...., República de Colombia (1), á la cual pertenezco (2), y vecino de...., Departamento de...., y de edad de *tantos años* (3). Tercera. (Aquí expresará el testador si fue ó es casado; los nombres de las personas con quienes hubiere contraído matrimonio, y de los hijos habidos ó legitimados en cada uno, con expresión de vivos y muertos (4). Cuarta.... (5). Quinta.... (6). Sexta.... (7). Séptima.... (8). Octava ... (9). Novena. Para cumplir lo dispuesto en este testamento

(1) O de la Nación á que pertenezca.

(2) Si el testador fuere natural de otra Nación, y se hubiere naturalizado en Colombia, se dirá.

(3) Son inhábiles para testar los individuos mencionados en el artículo 1061 del Código Civil.

(4) El artículo 1073 del Código Civil dispone que esto se diga.

(5) Si el testador quisiere reconocer un hijo suyo como natural, dirá: "Que de su libre y espontánea voluntad ha resuelto reconocer á N. por su hijo natural, como en efecto lo reconoce en el presente testamento," pues el artículo 56 de la Ley 153 de 1887 permite el reconocimiento por acto testamentario. Es conveniente fijar la época del nacimiento del hijo; pero no hay necesidad de indicar el nombre de la persona en quien ó de quien se tubo el hijo, aunque sí debe designarse á éste claramente.

(6) Aquí puede el testador hacer el nombramiento de tutor ó curador de sus hijos. Puede nombrar tutor no sólo á los hijos nacidos, sino al que se halla todavía en el vientre materno, en caso que nazca vivo. Puede nombrar curador á los menores adultos que no han obtenido habilitación de edad; y á los adultos de cualquiera edad que se hallen en estado de demencia, ó son sordo-mudos, que no entienden ni se dan á entender por escrito. Puede también nombrar curador para la defensa de los derechos eventuales del hijo que está por nacer. A falta de padre podrá ejercer estos derechos la madre, en ciertos casos: artículos 444 á 455 del Código Civil, y 53 de la Ley 153 de 1887.

(7) Aquí expresará el testador, si quiere, los bienes que posee; los que tenía cuando contrajo matrimonio, con expresión de su valor; los que recibió de su mujer y el título con que los recibió, y la cantidad de que es reponsable á ésta. También puede expresar las cantidades que debe y las que le deben, con indicación de las personas acreedoras y deudoras.

(8) Aquí expresará el testador cómo distribuye sus bienes, para lo cual debe tener en cuenta lo siguiente:

Cuando hubiere descendientes legítimos, el acervo líquido se divide en cuatro partes: dos para las legítimas rigurosas, de las cuales no puede disponer el testador; una para mejorar á uno ó más descendientes legítimos, y la cuarta parte restante para que el testador disponga de ella á su arbitrio. Cuando no hay descendientes legítimos con derecho de suceder, pero sí otros legitimarios, el testador puede disponer libremente de la mitad de dicho acervo, pues la otra mitad corresponde á dichos legitimarios. Si no hubiere legitimarios, el testador puede disponer libremente del acervo líquido: artículos 1016, ordinal 5.°, 1240 á 1244 del Código Civil.

(9) Se acostumbra que el testador, después de distribuír la parte de bienes de que puede disponer libremente, instituya herederos del remanente. La institución de heredero no tiene, sin embargo, importancia sino en el caso de que no haya legitimarios; ó en el de que el testador no haya dispuesto de las dos cuartas destinadas para legados y mejoras, ó que sobrare algo de éstas. Véase la nota que precede.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

nombro por mi albacea á N. (1), á quien encomiendo lo relativo á mi entierro, que se hará según los ritos de la religión que profeso, que es la ...., y en atención al caudal que dejo. Diez. Señalo por remuneración á mi albacea la cantidad de .... (2), y le encargo que cumpla mis disposiciones en el término más corto posible, sin pasar de .... (3). Once. Le dejo á mi albacea la tenencia de mis bienes (4). Y por el presente revoco y anulo todos los testamentos y demás disposiciones testamentarias que antes de ahora hubiere formalizado, para que ninguno valga, excepto éste que quiero se estime y tenga por tál, y se observe y cumpla en un todo como mi última y deliberada voluntad. Se pagaron los derechos de registro, como consta de la boleta que se agrega, y dice (aquí ella (5). Así lo otorgó, y después de habérsele leído en alta voz por el infrascrito Notario (6), en presencia de los testigos arriba expresados, lo firmó con éstos, por ante mí (7).

VII

TESTAMENTO CERRADO

Testamento.—En el Distrito Municipal de...., Departamento de...., República de Colombia, á *tantos* de *tal mes y año*, ante mí N., Notario del Circuito de.... y los testigos N. N. N. N. y N. (8), varones (9), vecinos

(1) No puede ser albacea el menor aun habilitado de edad, ni las personas mencionadas en el artículo 583 del Código Civil. Se puede también nombrar dos ó más albaceas, y autorizarlos para obrar separadamente: artículos 1327, 1329, 1338 y 1340 del Código Civil.

(2) O el tanto por ciento de mi caudal líquido: artículo 1359 del Código Civil.

(3) El albaceazgo dura el tiempo cierto y determinado que haya prefijado el testador. Si éste no lo fijare, durará un año, contado desde el día en que el albacea haya comenzado á ejercer su cargo: artículos 1360 y 1361.

(4) El testador puede, si quiere, dar al albacea la tenencia de todos los bienes ó de una parte de ellos, y así las facultades del albacea son más amplias: artículo 1353 del Código Civil.

(5) Debe insertarse en la copia del testamento la boleta que acredita el pago del impuesto de registro: artículo 16 de la Ley 39 de 1890. El testamento debe registrarse dentro de los sesenta días siguientes al de su otorgamiento: artículo 2.° de la Ley 39 de 1890.

(6) El testamento se leerá de la manera establecida en el artículo 1074 del Código Civil; si el testador fuere ciego, se leerá conforme dispone el artículo 1076.

(7) Si el testador ó alguno de los testigos no pudiere ó no supiere firmar, se hará lo que disponen los incisos segundo y tercero del artículo 1075 del Código Civil.

(8) En los testamentos cerrados deben ser cinco los testigos: artículo 1078 del Código Civil.

(9) Las mujeres no pueden ser testigos: artículo 1068 del Código Civil.

de dicho distrito (1), mayores de edad, y en quienes no ocurre ninguna causal de impedimento (2), el señor N., natural de...., vecino de...., Departamento de...., en *tal* Nación, de edad de.... (3), á quien conozco, y se halla en su sano juicio, presentó esta escritura cerrada (4), declarando de viva voz ante los testigos mencionados y el infrascrito, que en la referida escritura se contiene su testamento ó última voluntad. Y firma con aquéllos, por ante mí (5).

VIII

PARA LA PRESENTACIÓN DE TESTAMENTO CERRADO

(Véase en la *Codificación Nacional*, Tratado primero, página 70, la Resolución número x).

Número.... En el Distrito Municipal de...., Departamento de...., República de Colombia, á *tantos* de *tal mes y año*, ante mí N., Notario de este Circuito, y ante los testigos instrumentales N. y N., varones, mayores de edad, vecinos de este Municipio, de buen crédito, en quienes no concurre ninguna causal de impedimento, compareció el señor N. N., varón, mayor de edad, vecino de...., á quien conozco, y me presentó, con el objeto de que sea inscrita en este registro, la diligencia puesta en la cubierta de su testamento cerrado, autorizada por el suscrito Notario en esta misma fecha, la cual diligencia dice así: [aquí se copia literalmente dicha diligencia]. Se hace constar que el testador, señor N. N., declaró personal y solemnemente, en alta voz y de un modo claro é inequívoco ante el Notario y los cinco testigos que firmaron la diligencia preinserta, que el pliego que presentó contiene su testamento firmado por él; que dicho pliego está cerrado exteriormente de forma que no se puede extraer el testamen-

(1) Dos á lo menos de los testigos deben ser vecinos del distrito donde se otorga el testamento; pero siempre se expresará el domicilio de cada uno. Dos de los testigos, por lo menos, deben saber leer y escribir: inciso final del artículo 1068 del Código Civil.

(2) Los impedimentos de los testigos se mencionan en el artículo 1068 del Código Civil.

(3) Son inhábiles para testar las personas mencionadas en el artículo 1061 del Código Civil; y en especial, no pueden otorgar testamento cerrado los ciegos, y los que no sepan leer y escribir: artículos 1076 y 1079 del Código Civil.

(4) Si estuviere sellada ó con algunas otras seguridades, se hará constar en la diligencia.

(5) Todo lo dicho se extiende sobre la cubierta del pliego.
Si el testador no pudiere firmar [si es que no firma porque no sabe, entonces no puede otorgar testamento cerrado], ó si alguno ó algunos de los testigos no supieren ó no pudieren firmar, se hará lo que dispone el penúltimo inciso del artículo 1080 del Código Civil. Recuérdese que se ha dicho que en los testamentos cerrados deben saber leer y escribir por lo menos dos testigos: nota 1.
Los testamentos cerrados deben registrarse dentro de los cuarenta días siguientes al de su apertura ó publicación: artículo 2.°, inciso sexto de la Ley 39 de 1890.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

to sin romper la cubierta; y que en la misma cubierta se puso la nota á que se contrae el aparte cuarto del artículo 1080 del Código Civil, la cual quedó textualmente inserta en la presente. Se pagó el derecho de registro, según consta de la boleta que se agrega, y dice [aquí ella]. Se advirtió al otorgante que este instrumento debe ser registrado dentro de cuarenta días. En constancia firma esta diligencia el testador, á quien la leí en presencia de los testigos arriba expresados, quienes firman también, por ante mí.

IX

ESCRITURA DE DONACIÓN ENTRE VIVOS

Número.... En el Distrito Municipal de...., Departamento de...., República de Colombia, á *tantos* de *tal mes y año*, ante mí N., Notario del Circuito de.... y los testigos instrumentales N. y N., varones, vecinos del mismo Circuito, mayores de edad, de buen crédito, y en quienes no ocurre ninguna causal de impedimento, compareció el señor N., vecino de...., y expuso: que de su libre y espontánea voluntad (1) ha resuelto hacer donación gratuita (2) entre vivos, al señor N., de los bienes siguientes: .... (3) .... El señor N. manifestó que acepta esta donación (4). Se hizo saber á las partes que dicha donación debe ser insinuada por el Juez competente (5). Se pagaron los derechos de registro, como

[1] Para saber quiénes pueden ó nó hacer donaciones de bienes propios ó ajenos, véanse los artículos 304, 491, 492, 1444, 1445, 1504, 1844 y 2165 del Código Civil.

[2] Si la donación fuere remuneratoria, deberán tenerse en cuenta las disposiciones de los artículos 1490 á 1493 del Código Civil.

[3] Aquí se expresarán los bienes ú objetos donados.

En las donaciones á título singular se puede pactar que el donatario pague las deudas del donante, ó parte de ellas, y entonces se tendrán en cuenta las disposiciones de los artículos 1477 y 1478 de dicho Código. Si la donación fuere á título universal, no se deben perder de vista las disposiciones de los artículos 1464 á 1466, 1475, 1476 y 1478 del mismo Código; y si fuere fideicomisaria, esto es, con cargo de restituír á un tercero, las de los artículos 1467, 1470 y 1471.

[4] Si la aceptación se hace en representación de otras personas, se expresará así, insertándose el documento que legitime la personería. De los que pueden aceptar en nombre propio ó de otro, hablan los artículos 1446 á 1449 y 1468 del Código citado. Debe tenerse en cuenta que la aceptación no es necesario que conste en la escritura de donación; pero conviene así, porque mientras no intervenga la aceptación, y se notifique ésta al donante, éste puede revocar la donación: artículo 1469 del Código Civil. Si el donatario ha recibido los bienes donados, se expresará así en la escritura.

[5] Se omitirá esta advertencia si no fuere el caso de tal insinuación. Los casos en que ésta se necesita, están detallados en los artículos 1458 á 1464, 1467, 1491 y 1712 del citado Código. Véanse los artículos 1843 y 1844 del mismo.

Si se prohibe al donatario enajenar las cosas donadas, se expresará así, y esta prohibición surte los efectos que le señala el artículo 1489 del Código citado.

Conforme al Código de Cundinamarca podía pactarse que las cosas donadas no eran embargables, y entonces se hacía constar su valor por tasación aprobada judicialmente al tiempo de la entrega; pero este pacto no lo reconoce el Código Civil nacional.

consta de la boleta que se agrega, y dice (aquí ella). Se advirtió á los otorgantes que tienen la obligación de hacer registrar este instrumento dentro de los sesenta días siguientes á la fecha de su otorgamiento. Leído este instrumento á los mismos, ante los testigos expresados, lo aprobaron. Firman todos, por ante mí.

X

ESCRITURA DE CAPITULACIONES MATRIMONIALES

Número.... En el Distrito Municipal de...., Departamento de ...., República de Colombia, á *tantos* de *tal mes y año*, ante mí N., Notario del Circuito de.... y los testigos instrumentales N. y N., varones, vecinos del mismo Circuito, mayores de edad, de buen crédito, y en quienes no ocurre ninguna causal de impedimento, comparecieron el señor N., vecino de .... y de *tantos* años de edad (1), y la señora N., vecina de.... y de *tantos* años de edad, á quienes conozco, y expusieron: que debiendo contraer matrimonio el primero con la segunda, han convenido en otorgar la presente escritura, con el objeto de que en todo tiempo conste qué bienes aportaron ellos al matrimonio, y qué convenciones han tenido á bien celebrar, relativas á dichos bienes, todo lo cual queda consignado en las cláusulas siguientes: Primera. El señor N. aporta al matrimonio los bienes siguientes:.... (2). Segunda. El mismo señor N. es deudor de las cantidades siguientes: ... (3). Tercera. La señora N. aporta al matrimonio los bienes siguientes:.... (4). Cuarta. La misma señora N. es deudora de las cantidades siguientes:.... (5). Quinta. ... (6). Sexta

[1] Si alguno de los dos contrayentes necesitare del permiso de alguna de las personas mencionadas en los artículos 117 á 120 del Código Civil, esta misma persona debe aprobar, si en su concepto fueren convenientes, los pactos contenidos en las capitulaciones matrimoniales. El contrayente que estuviere bajo guarda, por otra causa que la menor edad, necesita autorización de su curador: artículo 1777 del Código Civil.

[2] Se mencionarán los bienes raíces, con indicación de su situación y linderos, los muebles y los créditos activos, de la manera que previene el artículo 472 del Código Civil respecto del inventario de los guardadores, expresando, además, su valor, las servidumbres activas y pasivas, y los demás gravámenes que limiten su dominio ó su uso, y citando los títulos que comprueban el derecho: artículo 1780 del Código Civil.

[3] Aquí se especificarán las deudas, expresando su procedencia; las que constan por escritura ó por documento privado, los plazos y el interés, si lo ganaren: artículo 1780 del Código Civil.

[4] Aquí se especificarán los bienes conforme á lo establecido en la nota 2.ª

[5] Aquí se especificarán como se dice en la nota 3.ª

[6] Si el hombre ó la mujer se hacen alguna donación se dirá aquí, especificando la cosa donada. Si ésta es raíz y el que hace la donación fuere menor, ó se hallare bajo guarda por otra causa que la menor edad, se necesita, además, de la autorización del juez. También se necesita esta autorización si se quiere gravar el inmueble con hipoteca ó servidumbre: artículo 1777 del Código Civil. Es entendido que ninguno de los esposos puede hacer donación al otro por cau-

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

.... (1). Séptima. .... (2). Octava. .... (3). Novena. .... (4). Décima. .. .. (5). Undécima..... (6). Duodécima..... (7). Trece. Tan luégo como el señor N. se haga cargo de los bienes que su esposa aporta al matrimonio, otorgará la escritura ó escrituras correspondientes de recibo. Se pagaron los derechos de registro, como consta de la boleta que aquí se agrega, y dice (aquí ella). Se advirtió á los interesados que tienen la obligación de hacer registrar este instrumento dentro de sesenta días. Leída que fue esta escritura á los otorgantes, por ante los expresados testigos, la aceptaron y aprobaron (8). Firman todos por ante mí.

---

sa de matrimonio, sino hasta el valor de la cuarta parte de los bienes de su propiedad que aportare. Toda donación de esta clase admite plazos, condiciones y cualesquiera otras estipulaciones lícitas, que se expresarán en la escritura: artículos 1842, 1844 y 1845 del Código Civil.

[1] Puede estipularse que la mujer administrará una parte de sus bienes propios con independencia del marido, especificando los bienes. También se puede estipular que la mujer dispondrá de una determinada suma de dinero, que se fijará; ó de una determinada pensión periódica: artículo 1776 del Código Civil.

[2] La mujer puede renunciar su derecho á los gananciales que resulten de la administraciónde1 marido: artículo 1775 del Código Civil; pero juzgamos que, por lo general, no debe renunciarlos, habida consideración á lo dispuesto en los artículos 1809, 1823 y 1853 del Código Civil. La mujer menor, ó que se halla bajo guarda por otra causa que la menor edad, no puede renunciar los gananciales sino con autorización de la justicia: artículo 1777 del Código Civil.

[3] El hombre ó la mujer, ó ambos, pero separadamente, pueden estipular que de los valores propios de cada uno, que aportan al matrimonio, se tome determinada cantidad para adquirir ciertos bienes, que especificarán. Los bienes así adquiridos no entrarán á componer el haber social, pues así lo dispone el artículo 1783 del Código Civil; pero si se quiere, puede decirse en la misma escritura que los bienes que se adquieren no formarán parte del haber social, y se reputarán como de la propiedad exclusiva de aquel de los esposos á quien pertenecen los valores con los cuales se compren.

[4] La mujer puede autorizar al hombre para enajenar ó hipotecar los bienes raíces de ella, que aporta al matrimonio, y que el marido debe restituír en especie: artículo 1810, ordinal 1.° del Código Civil; pero si la mujer fuere menor, ó se hallare bajo curaduría por otra causa que la menor edad, no puede hacer esta estipulación sino con autorización judicial: artículo 1777 del Código Civil. Es entendido que autorizado el hombre para enajenar tales bienes, queda relevado de la obligación de restituírlos en especie, si los enajenare.

[5] Es necesario decir cuáles de los bienes raíces que la mujer aporta al matrimonio deben devolvérsele en especie; y respecto de cuáles está la sociedad conyugal obligada á devolver su valor en dinero. En cuanto á éstos debe procederse como en el contrato de venta de bienes raíces, es decir, determinar las cosas por su situación y linderos, y fijarse claramente su precio: artículo 1781, ordinal 6.° del Código Civil. Puede estipularse lo uno ó lo otro respecto de *todos* los bienes raíces de la mujer.

[6] El hombre ó la mujer pueden eximir de la comunión cualquiera parte de sus especies muebles, que designarán claramente: artículo 1781, ordinal 4.° del Código Civil.

[7] En la misma escritura de capitulaciones puede un tercero (por ejemplo el padre ó la madre de uno de los esposos) hacer una promesa de donación, que se sujeta á las mismas reglas que las donaciones de presente: artículo 1843 del Código Civil.

[8] La aprobación y aceptación de que aquí se habla, se harán por las personas que deban aprobar los pactos contenidos en las capitulaciones matrimoniales, como se dijo en la nota 1.ª de la página anterior.

XI

ESCRITURA DE RECIBO DE LOS BIENES QUE LA MUJER APORTA AL MATRIMONIO

Número.... En el Distrito Municipal de...., Departamento de ..., República de Colombia, á *tantos* de *tal mes y año*, ante mí N., Notario del Circuito de.... y los testigos instrumentales N. y N., varones, vecinos del mismo Circuito, mayores de edad, de buen crédito y en quienes no ocurre ninguna causal de impedimento, compareció el señor N., vecino de ... mayor de edad (1), y expuso: Primero. Que por la presente escritura confiesa haber recibido de.... (2) los bienes que se expresarán, aportados al matrimonio por su mujer la señora N., á saber: .... (3). Segundo. Que el valor total de los bienes que el otorgante confiesa tener recibidos, como pertenecientes á su mujer, es de... pesos, según la estimación que se ha hecho de ellos [4]. Se pagaron los derechos

---

[1] Si fuere menor de edad, se expresará la que tenga; y si no pasare de diez y ocho años, debe concurrir al acto su curador: artículos 312, 314, ordinal 2.°, 340, 343 y 480 del Código Civil.

[2] Aquí se expresará el nombre de la persona de quien recibe, con indicación de su carácter, es decir, si es el padre ó la madre de su mujer, ó su apoderado ó guardador.

[3] Aquí se especificarán con toda claridad, como en la escritura de capitulaciones matrimoniales, es decir, como se previene respecto del inventario de los bienes de los menores en el artículo 472 del Código Civil. Se expresarán la situación y linderos de los inmuebles, y se indicará la procedencia de todos, esto es, si le corresponden á la mujer por herencia paterna ó materna, ó por donación. En este último caso se expresará el nombre de la persona que la hace. Si el marido hubiere hecho una donación á su mujer, se dirá especialmente que él [el otorgante] confiesa tener en su poder los bienes que dio á su mujer como donación por causa de matrimonio, y de que habla la escritura de capitulaciones matrimoniales otorgada ante.... en *tal fecha*, bajo el número.... y son:.... [Se expresarán su situación y linderos].

También debe dejarse constancia del estado de los inmuebles que el marido debe restituír en especie, pues respecto de los otros se presume que la sociedad los compra, por lo cual sólo está obligada á devolver su valor en dinero.

[4] La ley no exige que se haga una estimación general del valor de todos los bienes que recibe el marido; pero sí es conveniente hacerla, para lo cual debe oírse el dictamen de personas imparciales, respecto de los bienes cuyo valor no se ha fijado en las capitulaciones matrimoniales.

No creemos necesario que conste en esta escritura, como se expresa en el modelo que en la actualidad se consulta, que el marido se comprometa á administrar bien y lealmente los bienes; á restituírlos oportunamente á quien corresponda; á responder del deterioro de los cuerpos ciertos, si hubiere culpa grave de su parte, etc. etc., ya porque aunque el marido no lo prometa está obligado á todas estas cosas por ministerio de la ley, y ya porque no es propio de esta escritura, que es de simple entrega y recibo de bienes, hacer tales declaraciones, con razón tanto mayor cuanto rara vez es la misma mujer quien los entrega—que si así fuera, serían admisibles, aunque no necesarias las declaraciones del marido—pues comúnmente se verifica la entrega por personas extrañas, que nada tienen que ver con dichas manifestaciones.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

de registro, como consta de la boleta que aquí se agrega y dice (aquí ella). Se advirtió al otorgante que tiene la obligación de hacer registrar este instrumento dentro de sesenta días. Leído que fue este instrumento al señor N., por ante los expresados testigos, lo aprobó. Firman todos por ante mí.

XII

ESCRITURA DE PAGO CON SUBROGACIÓN

No presentamos modelo para el otorgamiento de esta escritura porque cuando la subrogación se verifica en virtud de convención, rigen las reglas de la *cesión de derechos:* artículo 1669 del Código Civil. Cuando se verifica en virtud de ley, no hay necesidad de que se otorgue escritura de subrogación: ésta se consuma por ministerio de la misma ley, y por consiguiente basta acreditar que ha llegado uno de los casos que señalan las leyes. Véanse los artículos 1667 y 1668, y las citas de éste, del Código Civil.

XIII

ESCRITURA DE VENTA DE UNA FINCA, QUE SE HIPOTECA TAMBIÉN PARA SEGURIDAD DEL PAGO (a).

Número.... En el Distrito Municipal de...., Departamento de...., República de Colombia, á *tantos* de *tal mes y año*, ante mí N., Notario del Círculo de ... y los testigos instrumentales N. y N., varones, vecinos del mismo Círculo, mayores de edad, de buen crédito, y en quienes no ocurre ninguna causal de impedimento, compareció el señor N. [1], vecino de...., mayor de edad, á quien conozco, y dijo: Primero. Que vende al señor N..... [2]. Segundo. Que el precio de la mencionada finca

[a] Las cláusulas 1.ª y 2.ª son las esenciales de este contrato; las otras son más ó menos convenientes.

[1] Los artículos 1851 á 1856 dicen quiénes son ó nó hábiles para celebrar este contrato.

[2] Aquí se designará la cosa que se vende. Si fuere una finca rural se designará por su nombre, si lo tuviere; se indicará su situación, es decir, el distrito ó distritos municipales en que se halla, y sus linderos. Si fuere urbana, se indicará su situación, y se expresarán, además, la calle ó carrera en donde se halla, su número si lo tuviere, y sus linderos. Como se subentiende que la venta comprende todas las partes de la finca encerradas por los linderos, y no vendidas las que no estuvieren dentro de ellos, debe haber mucha claridad en su fijación.

También se comprenden en la venta de un inmueble, *aunque no se expresen en la escritura*, todas las anexidades del mismo, y son tales las cosas de que hablan los artículos 656 á 661 del Código Civil. En consecuencia, si se quiere que alguna de las cosas que se reputan inmuebles, aunque por su naturaleza no lo sean, no queden comprendidas en la venta, preciso es decirlo; así también deben designarse en la escritura las cosas muebles que, por voluntad de las partes, se comprenden en la venta, cuando la ley no las reputa inmuebles, como son las mencionadas en el artículo 662 del Código citado.

es... [1]. Tercero. Que la finca que vende la hubo por.... [2]. Cuarto.... [3]. Quinto.... [4]. Sexto.... [5]. El comprador, señor N., ve.

[1] Aquí se designará el precio, y luégo se dirá si el vendedor lo ha recibido yá á su satisfacción, ó si lo recibe por ante el mismo Notario en el acto del otorgamiento de la escritura, ó si el vendedor concede plazos para el pago. En este caso se fijará el día del vencimiento de cada plazo y la cantidad que respectivamente debe pagarse; expresando, además, si se cobran intereses durante los plazos, y cuáles son aquéllos. Téngase presente que en la fijación de los intereses debe disponerse lo que se estime conveniente para el caso de mora, porque si nada se dice sobre esto, sucede que, vencido cada plazo, rige lo dispuesto en el artículo 1617 del Código Civil respecto de la cantidad que ha debido pagarse.

Si la cosa que se vende se da en pago de alguna cantidad que se debe, no por ello debe prescindirse de la fijación del precio, por ser ésto un requisito esencial del contrato de venta: artículo 1857 del Código Civil.

[2] Aquí se expresará con claridad cuál es el título en virtud del cual el vendedor adquirió el dominio de la finca: si fue por compra, por permuta, por herencia, etc., debiendo designarse la respectiva escritura por su número y fecha, y con expresión del Notario ante quien se otorgó; si fue por herencia se indicará la persona á quien se heredó, y la Notaría donde se protocolizó la causa mortuoria. Finalmente, se dirá que el vendedor entrega al comprador todos los títulos de propiedad que de la finca tiene.

[3] En el modelo que se usa figuran, entre otras, estas dos cláusulas:

"El vendedor declara:

"Que no tiene vendida, enajenada ni empeñada la expresada finca."

Esta declaración no tiene la importancia que se le asigna, porque es evidente que á virtud de ella no quedan insubsistentes la venta, enajenación ó gravamen que se hubieren verificado; además, entraña un peligro, porque no pocos compradores se consideran, con motivo de ella, al abrigo de todo engaño. Preciso es, pues, que se adquiera la costumbre de ocurrir en todo caso á la correspondiente Oficina de Registro, para saber si la finca ha sido enajenada ó gravada. Sin embargo, no está por demás consignar tal declaración; pero en el certificado del respectivo Registrador, que se insertará, deben constar *todas* estas cosas.

Si la finca estuviere gravada debe decirse cuáles son los gravámenes, y lo que respecto de ellos se haya estipulado.

También debe decirse si el dominio de la finca está ó nó limitado por servidumbres, ó por algún otro medio legal; ó si se limita, á virtud de haberlo acordado así los contratantes.

La segunda cláusula es esta:

"Que el justo precio de la finca y su verdadero valor es de *tantos* pesos, expresados."

Esta cláusula es, además de inútil, engañosa, porque infunde la creencia de que el vendedor no puede hacer luégo, por razón de exigüidad del precio, reclamación alguna, lo cual no es exacto, pues la ley permite que la venta se rescinda en caso de lesión enorme: artículos 1946 á 1954, especialmente el 1950 del Código Civil.

[4] En el modelo que se usa se pone en boca del vendedor esta cláusula:

"Que desde esta fecha entrega la finca al comprador con las acciones consiguientes."

Sabido es que aun cuando esto se diga en la escritura, no por ello entra el comprador en la posesión legal de la finca, pues dicha posesión no se adquiere sino á virtud del registro de la escritura. Es, pues, inútil la cláusula; además, tiene el inconveniente de que hay vendedores que se consideran sin la obligación de hacer la entrega material de la finca, lo cual origina no pocas veces dificultades y aun litigios al comprador, por lo cual la cláusula que es objeto de nuestra censura, debe sustituírse con ésta, en el caso de que el comprador aún no haya recibido materialmente la cosa:

"Que hará inmediata entrega material de la finca que vende, por los linderos fijados, obligándose á pagar la multa de *tantos* pesos si el día *tantos* no hubiere verificado la expresada entrega."

[5] Aquí puede decirse, como se dice en el modelo que se ha usado, "que el vendedor queda obligado en los casos de la ley al saneamiento de la finca

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

cino de...., mayor de edad, á quien conozco, dijo: Primero.... [1]. Segundo.... [2]. Se advirtió á los otorgantes la obligación de hacer registrar este instrumento dentro de sesenta días, como título traslaticio de dominio, y como constitutivo de hipoteca [3]. Leído este instrumento á los otorgantes, por ante los testigos instrumentales yá expresados, lo aprobaron, y firman todos por ante mí.

XIV
ESCRITURA DE CESIÓN DE DERECHOS (a)

Número.... En el Distrito Municipal de ..., Departamento de...., República de Colombia, á *tantos* de *tal mes y año*, ante mí N., Notario del Circuito de.... y los testigos instrumentales N. y N., varones, vecinos del mismo Circuito, mayores de edad, de buen crédito, y en quienes no ocurre ninguna causal de impedimento, compareció el señor N., vecino de...., mayor de edad, á quien conozco, y dijo: Primero. Que tiene un crédito contra el señor N. por la cantidad de...., según consta de.... [4];

vendida, ya porque el comprador sufra la evicción de ella, ó ya por los vicios redhibitorios que tenga." Esta cláusula no es indispensable en la escritura, porque la obligación de saneamiento la impone la ley: no hay necesidad de que el vendedor la contraiga expresamente; pero tampoco hay inconveniente en consignarla: artículos 1895. 1914 y 1918 del Código Civil.

Así también, la ley dispone que el vendedor puede estipular que no se obliga al saneamiento; sin embargo, queda sujeto á él si en el pacto ha habido mala fe de parte suya: artículos 1898 y 1916 del Código Civil.

[1] Aquí pueden consignarse los pactos en que se haya convenido, como el de retroventa, el comisorio ó algún otro: artículos 1935 á 1945 del Código Civil.

[2] Aquí dirá el comprador que cumplirá con las obligaciones que este contrato le impone, en el caso de que le imponga algunas, como el pago de las cantidades que quede debiendo á plazos.

[3] Aquí dirá el mismo comprador, en el caso de que no hubiere pagado la totalidad del precio y se hubiere pactado la hipotecación de la finca:

"Que para seguridad del pago de la cantidad *tal*, que queda debiendo, hipoteca la misma finca que compra, por los linderos yá expresados."

Véase el artículo 2.° de la Ley 39 de 1890.

[a] El presente modelo es para el caso en que la cesión verse sobre derechos reales relativos á inmuebles. Cuando se trata de un derecho meramente *personal*, no hay necesidad de otorgar escritura pública, basta que en el título respectivo se anote el traspaso del derecho, con la designación del cesionario y bajo la firma del cedente, y que éste entregue el título á aquél. Si el crédito que se cede no consta en documento, la cesión puede hacerse otorgándose uno por el cedente al cesionario. Cuando el derecho cedido se refiere á inmuebles, débese anotar en el título el traspaso del derecho, con la designación y firma indicadas, en cuanto haya crédito personal: artículos 761 y 1961 del Código Civil.

[4] Aquí se designará la escritura pública en que consta el derecho, por su número y fecha, y con expresión del Notario ante quien se otorgó.

Si el crédito fuere personal se indicará el documento respectivo, designando todas las circunstancias necesarias para que conste su identidad; y si aquél devengare intereses, se expresará esta circunstancia, indicando el tanto por ciento, y los yá devengados.

Si el pago estuviere garantizado con hipotecas ó prendas se especificarán; si con fianza, se indicará el nombre del fiador.

Si el documento fuere mercantil, la cesión se verificará de conformidad con lo dispuesto en el Código de Comercio.

Segundo. Que cede [1] el expresado crédito [2], al señor N. por ... [3]. Tercero. Que hace entrega del respectivo título, por ante mí, al señor N.; título que lleva la correspondiente nota de traspaso del derecho cedido [4]. El cesionario señor N., vecino de...., mayor de edad, á quien conozco, dijo que aceptaba esta escritura [5]. Se pagaron los derechos de registro, como consta de la boleta que aquí se agrega, y dice [aquí ella]. Se advirtió á los otorgantes la obligación que tienen de hacer registrar esta escritura dentro de sesenta días. Leída esta escritura á los otorgantes, por ante los expresados testigos, dijeron que la aprobaban. Firman todos por ante mí.

XV
ESCRITURA DE PERMUTA

Número.... En el Distrito Municipal de...., Departamento de...., República de Colombia, á *tantos* de *tal mes y año*, ante mí N., Notario del Circuito de.... y los testigos instrumentales N. y N., varones, vecinos del mismo Circuito, mayores de edad, de buen crédito, y en quienes no ocurre ninguna causal de impedimento, comparecieron los señores N. y N. [6], vecinos de...., mayores de edad, á quienes conozco, y dijeron: Que han celebrado un contrato de permuta de dos fincas raíces, cuya situación, linderos, procedencia, precios y condiciones del contrato se expresan á continuación. La finca del primero es.... [7]. Dicha finca la hubo el otorgante N..... [8]. El precio de la misma finca ha sido fijado en la cantidad de...., y aceptado por ambos contratantes. Esta finca

[1] Aquí se dirá si la cesión se hace á título de venta ó de permuta. Si se hubiere estipulado que el cedente responde de la solvencia presente ó futura del deudor debe expresarse, porque de nó, el cedente no es responsable de ella, sino únicamente de la existencia del crédito: artículo 1965 del Código Civil.

[2] Inclusos los intereses vencidos, si los hay y así se hubiere convenido con el cesionario, con indicación precisa de la cantidad á que asciendan.

[3] Aquí se dirá si por valor recibido á su satisfacción, ó á plazos. En este último caso se designarán las fechas en que éstos se vencen, y la cantidad que debe satisfacerse al vencimiento de cada uno.

[4] Véase la nota [a].

[5] Se advierte que la aceptación de la escritura por el cesionario no es bastante para que la cesión produzca efecto respecto del deudor y terceros, pues son necesarias la notificación ó la aceptación: artículos 1961 del Código Civil y 33 de la Ley 57 de 1887.

[6] No son hábiles para el contrato de permutación las mismas personas que no lo son para el de venta: artículos 1957, 1851 á 1856 del Código Civil.

[7] Aquí se dirá si es urbana ó rural, y se designará, de la manera dicha en la nota 2, del modelo del contrato de venta, página 204.

[8] Aquí se dirá lo que se dice en la nota 2, del modelo relativo al contrato de venta, página 205.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

está.... [1]. La finca del segundo de los otorgantes es.... [2]. Que siendo los otorgantes dueños de las mencionadas fincas, respectivamente, y estando en posesión legal de ellas, han resuelto de su libre y espontánea voluntad permutar la una por la otra, sirviendo de base los precios que quedan establecidos [3]. Que como la finca de N. vale más que la de N., la diferencia, que asciende á la cantidad de...., la da aquél por recibida á su entera satisfacción [4]. Para concluír declaran, además, los otorgantes ... [5]. Se pagaron los derechos de registro, como consta de la boleta que aquí se agrega, y dice (aquí ella). Se advirtió á las partes la obligación de hacer registrar este instrumento dentro del término de sesenta días, como título traslaticio de dominio, y como constitutivo de hipoteca [si la hubiere]. Leída que fue esta escritura á los otorgantes, por ante los testigos instrumentales yá expresados, la aprobaron, y firman por ante mí.

XVI

ESCRITURAS DE SOCIEDAD

No presentamos modelos para el otorgamiento de estas escrituras porque las respectivas pólizas las redactan siempre personas competentes, para quienes son inútiles los formularios, y no reproducimos los que en la actualidad se consultan, porque los estimamos defectuosos.

XVII

ESCRITURA DE ARRENDAMIENTO (a)

Número.... En el Distrito Municipal de...., Departamento de...., República de Colombia, á *tantos* de *tal mes y año*, ante mí N., Notario

[1] Aquí se dirá si la finca está libre de todo gravamen y de las limitaciones legales que pueden afectar el dominio de los inmuebles conforme al artículo 793 y sus concordantes del Código Civil. Si hubiere gravámenes ó limitaciones, se dirá cuáles son aquéllos y éstas.

[2] Aquí se dirá, respecto de la finca del segundo otorgante, lo que se ha dicho con relación al primero en las notas precedentes de este modelo.

[3] Cuando el precio consiste parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta si la cosa vale más que el dinero; y venta en el caso contrario.

[4] Si la diferencia no se pagare de contado, se fijarán aquí el plazo y los intereses que deban abonarse durante el mismo, y en caso de mora. Puede también estipularse que quede hipotecada la finca para el pago de la deuda, debiendo designarse con claridad cuál de las dos fincas es la hipotecada.

[5] Aquí pueden consignarse las cláusulas á que se refieren las notas 4.ª y siguientes del modelo relativo al contrato de venta, y agregar que ambos contratantes se entregan recíprocamente los correspondientes títulos de propiedad de las fincas.

Puede estipularse un plazo para la recíproca entrega de los inmuebles que se permutan: artículos 1958 y 1863 del Código Civil.

(a) No hay necesidad de que este contrato conste en escritura pública; pero si constare, el arrendatario tiene derecho á que se le respete el arriendo, en caso

del Circuito de ... y los testigos instrumentales N. y N., varones, vecinos del mismo Circuito, mayores de edad, de buen crédito, y en quienes no ocurre ninguna causal de impedimento, comparecieron los señores N. y N., vecinos de...., mayores de edad, á quienes conozco, y dijeron: que han celebrado el contrato de arrendamiento contenido en las siguientes cláusulas. Primera. El señor N. (1) da en arrendamiento al señor N.... (2). Segunda. Se comprenden en el arrendamiento los bienes siguientes....(3). Tercera..... (4). Cuarta..... (5). Quinta. El precio del arrendamiento es de...., (6) que el arrendatario pagará en moneda corriente, por períodos

de que el arrendador venda la finca, ó la transfiera á título oneroso. Si constare por documento privado, el derecho del arrendatario consiste en exigir del arrendador la debida indemnización: artículos 2020, ordinal 2.°, y 2019 del Código Civil.

Si se pactare que el arrendamiento no se repute perfecto mientras no se firme escritura, podrá cualquiera de las partes arrepentirse hasta que así se haga, ó hasta que se haya procedido á la entrega de la cosa arrendada: artículo 1979 del Código Civil.

[1] El arrendador.

[2] Se designará la cosa que se arrienda, por su situación y linderos, como se indica en la nota 2, página 204, del modelo sobre venta. La fijación de los linderos tiene por objeto prevenir ciertas dificultades que pueden ocurrir en caso de litigio entre las partes contratantes. Además, si el predio arrendado fuere rústico, y el arrendatario conociere su extensión y linderos, es responsable al arrendador si no le da oportuno aviso de cualquiera usurpación que se verifique: artículo 2040 del Código Civil.

[3] No hay necesidad de mencionar, para que se reputen comprendidos en el arrendamiento, porque de derecho lo están, las cosas que adhieren al inmueble, como las casas, graneros, é ingenios, por ejemplo, que se hallan en el predio rústico que se arrienda. Es en el caso contrario cuando deben mencionarse, es decir, cuando á virtud de estipulación no se comprenden en el arrendamiento.

También se consideran incluídas en el arrendamiento, y por ello no hay necesidad de mencionarlas para el efecto indicado, aquellas cosas que, aunque muebles por su naturaleza, la ley las declara inmuebles: artículos 657 á 661 del Código Civil; pero tanto éstas como las primeras deben mencionarse para que conste su existencia y estado, á fin de que á la terminación del contrato pueda hacerse responsable al arrendatario que no las devuelve.

Si se arrienda una casa ó aposento amueblado, se entiende, á menos de estipulación contraria, que el arriendo de los muebles es por el mismo tiempo que el del edificio: artículo 2032 del Código Civil.

Si se arrienda un predio con ganados, deben consignarse las estipulaciones convenidas, en el caso en que difieran de lo establecido en el artículo 2042 del Código Civil.

Si hubiere árboles y bosques, se consignarán las estipulaciones acordadas, si fueren diferentes de lo establecido en el artículo 2038, inciso 2.°

[4] Se hará constar, en cuanto fuere posible, el estado en que se halla el inmueble, pues si nada se dijere, se presume haberlo recibido en regular estado de servicio, y que se hallan, también en buen estado, las cosas de que habla el artículo 2029 del Código Civil.

[5] Se determinarán los objetos á que se destina la cosa que se arrienda; caso de no expresarlos, se subentienden aquellos á que la cosa es naturalmente destinada; ó que deben presumirse de las circunstancias del contrato, ó de la costumbre. Si se tratare de casa ó edificio, no puede destinarse á un objeto ilícito: artículos 1603, 1996, 2031 y 1546 del Código Civil.

[6] Se dirá si el precio del arrendamiento se refiere á años, meses ó días. A falta de estipulación, los pagos se harán conforme á la costumbre del país, y

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

vencidos y con estricta puntualidad. Sexta.... (1). Séptima.... (2). Octava.... (3). Novena.... (4). Décima.... (5). Once.... (6). Se pagaron los derechos de registro, como consta de la boleta que se agrega, y dice (aquí ella). Se advirtió á los otorgantes la obligación que tienen de hacer registrar este instrumento dentro de sesenta días. Leída esta escritura á las partes contratantes, ante los testigos expresados, la aprobaron. Firman todos por ante mí.

XVIII

PODER ESPECIAL PARA DETERMINADO NEGOCIO

Número.... En el Distrito Municipal de...., Departamento de..., República de Colombia, á *tantos* de *tal mes y año*, ante mí N., Notario del Circuito de.... y los testigos instrumentales N. y N., varones, vecinos del mismo Circuito, mayores de edad, de buen crédito, y en quienes no ocurre ninguna causal de impedimento, compareció el señor N., vecino de...., mayor de edad [1], á quien conozco, y dijo: que confiere poder

á falta de costumbre, de la manera que establece el artículo 2002 del Código Civil.

El precio puede consistir en dinero ó en frutos naturales de la cosa arrendada: artículo 1975 del Código Civil.

[1] Se fijará el día en que el arrendador debe entregar la cosa al arrendatario, ó se dirá que yá se entregó desde el día *tal*.

No hay para qué decir que el arrendador se obliga á mantener la cosa en estado de servir para el objeto á que se destina, haciendo al efecto las reparaciones necesarias; á librar al arrendatario de toda turbación ó embarazo; á no mudar la forma de la cosa, etc. etc., porque todo esto lo previene la ley.

[2] Se hará constar lo que se haya estipulado sobre reparaciones *locativas*-pues si nada se dijere, prevalece lo dispuesto en el artículo 1985 del Código Civil, Así, puede convenirse en que las reparaciones locativas provenientes de los deterioros ocasionados por fuerza mayor ó caso fortuito, ó que dependen de la mala calidad de la cosa arrendada, se hagan también por el arrendatario: artículos 1985, 1998, 2028, 2 029 y 2030 del Código Civil.

No hay necesidad de hablar sobre mejoras útiles, ó necesarias, porque los artículos 1993 y 1994 del Código Civil son equitativos, y disponen lo conveniente.

[3] Si se ha estipulado la prestación de fianzas, ó la constitución de hipotecas para seguridad del pago de la renta y de las indemnizaciones á que tenga derecho el arrendador, se hará constar aquí lo convenido.

[4] También se hará constar lo que se estipule para el caso de mora en el pago de la renta, especialmente cuando se trata de predios rústicos, pues respecto de los urbanos el artículo 2035 del Código Civil dispone alguna cosa. Pudiera estipularse que en el caso de mora por treinta días en el pago de la renta, se considera vencido el plazo fijado para la duración del arriendo.

[5] Puede fijarse tiempo forzoso para una de las partes y voluntario para la otra: artículo 2011 del Código Civil.

[6] Se hará constar si se concede al arrendatario la facultad de subarrendar; pero no hay necesidad de decir que no se le concede dicha facultad: artículo 2004 del Código Civil.

[7] El varón casado, mayor de diez y ocho años, y el que ha obtenido habilitación de edad, pueden constituír apoderado: artículos 339 y 340 del Código Civil.

amplio al señor N., mayor de edad, y vecino de.... para que proceda á celebrar el contrato *tal* [1]. Se pagaron los derechos de registro, como consta de la boleta que se agrega, y dice [aquí ella]. Se advirtió al otorgante la obligación de hacer registrar este instrumento dentro de sesenta días. Leída que fue esta escritura al otorgante, por ante los expresados testigos, la aprobó. Firman todos por ante mí.

XIX

PODER GENERAL PARA PLEITOS

Número.... En el Distrito Municipal de...., Departamento de.... República de Colombia, á *tantos* de *tal mes y año*, ante mí N., Notario del Circuito de.... y los testigos instrumentales N. y N., varones, vecinos del mismo Circuito, mayores de edad, de buen crédito, y en quienes no ocurre ninguna causal de impedimento, compareció el señor N., vecino de...., mayor de edad [2], á quien conozco, y dijo: que confiere poder amplio y general al señor N., vecino de.... mayor de edad [3], para que lo represente ante los Juzgados y Tribunales de la República y la Corte Suprema de Justicia, promoviendo, siguiendo y terminando todos los pleitos, causas y negocios en que sea parte directa ó indirecta el otorgante, ya como demandante, ya como demandado. Para que desista cuando lo juzgue conveniente de las acciones ó gestiones que tenga pendientes, pudiendo terminarlas por medio de transacción [4]. Para que remate bienes en juicio por cuenta de los créditos que reclame en nombre del otorgante, y reciba los bienes rematados. Para que reciba la cantidad ó cosa materia del juicio. Para sustituír este poder con las limitaciones que tenga á bien. Para revocar sustituciones. Para que interponga los recursos de casación y revisión que tenga á bien, y se haga parte en los que

[1] Aquí debe expresarse con exactitud y claridad el acto ó contrato para el cual se confiere el poder.

[2] El varón casado, mayor de diez y ocho años, y el que ha obtenido habilitación de edad, pueden constituír apoderado: artículos 339 y 340 del Código Civil.

[3] Todo varón que sea hábil para comparecer en juicio por sí solo, puede ser nombrado apoderado, con las excepciones que establecen los artículos 324 y siguientes del Código Judicial. La mujer sólo puede ejercer poder de sus padres ó de su marido, y esto en los casos especiales de que habla el artículo 325 del mismo Código.

[4] Véase el artículo 338 del Código Judicial. La facultad de transigir no comprende la de comprometer, ni viceversa; por lo cual, si se quiere autorizar al apoderado para que someta las cuestiones que ocurran á la decisión de arbitradores, debe decirse expresamente: artículo 2167 del Código Civil.

Como para transigir se necesita de poder especial, en que se especifiquen los bienes, derechos y acciones sobre que se quiere transigir, deben determinarse en el poder los asuntos que pueden ser materia de transacción: artículo 2471 del Código Civil.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

otros interpongan y puedan afectar sus derechos. Y finalmente, para que haga en juicio todo lo que el poderdante haría, pues el poder que para ello se requiera, se lo confiere por el presente. Leído que fue este instrumento al otorgante, ante los testigos arriba expresados, lo aprobó. Firman todos por ante mí.

XX

PODER GENERAL PARA PLEITOS Y NEGOCIOS (a)

Número....En el distrito municipal de...., Departamento de...., República de Colombia, *á tantos* de *tal mes y año*, ante mí N., Notario

[a] Con el objeto de que se conozcan las dificultades que se presentan para la formación de este modelo, y para que se haga un uso acertado de él, nos permitimos hacer algunas indicaciones, á las cuales llamamos la atención de todas las personas que se hallen en la necesidad de otorgar poder general para negocios.

El artículo 2158 del Código Civil dice:

"El mandato no confiere naturalmente al mandatario más que el poder de efectuar los actos de administración, como son pagar las deudas y cobrar los créditos del mandante, perteneciendo unos y otros al giro administrativo ordinario; perseguir en juicio á los deudores, intentar las acciones posesorias é interrumpir las prescripciones, en lo tocante á dicho giro, contratar las reparaciones de las cosas que administra; y comprar los materiales necesarios para el cultivo ó beneficio de las tierras, minas, fábricas ú otros objetos de industria que se le hayan encomendado.

"Para todos los actos que salgan de estos límites, necesitará de poder especial."

Los detalles de este artículo, es decir, los actos que especialmente se mencionan, como son el pago de las deudas y el cobro de los créditos, el poder demandar á los deudores é intentar las acciones posesorias, etc., no son los únicos que constituyen el giro administrativo ordinario; tales actos se citan á manera de ejemplo, pues hay otros, numerosísimos, de igual ó menor importancia, que pertenecen indudablemente al giro administrativo ordinario, aunque no se expresan en el artículo. Así, el mandatario á cuyo cuidado se pone la administración de una hacienda, debe estar y está facultado, natural y necesariamente, para todos los actos que requiere la buena administración de la misma: venta de ganados, siembras, recolección de frutos, conducción de éstos á ciertos lugares de expendio, pago de salarios, etc.; si estos actos no estuvieran comprendidos entre los de mera administración, es claro que las funciones del mandatario serían en extremo limitadas, casi nulas, y que sería preciso conferirle poderes para todas y cada una de estas pequeñas cosas, lo cual no es conforme con el espíritu de la disposición legal.

Pero siendo tántos y distintos los actos que constituyen, respecto de cada mandatario, el giro administrativo ordinario, ¿cómo se sabe, en un caso dado, si determinado acto pertenece ó nó á dicho giro? Es cierto que puede ocurrir alguna dificultad á este respecto; pero la naturaleza del mandato que se confiera determinará siempre, con bastante claridad, los actos que pertenecen á la administración ordinaria. En caso de duda, el mandatario está en el deber de consultar al mandante, y para cuando esto no pudiere hacerse, la misma ley dispone que se interpreten con alguna más latitud las facultades del mandatario.

Repárese que la ley no puede establecer otra cosa, por lo mismo que es imposible preverlo y determinarlo todo; lo cual justifica, al mismo tiempo, la interpretación que hemos fijado al artículo en que nos ocupamos, es decir, que los actos en él mencionados son meros ejemplos.

Preciso es, pues, en cada caso de duda tener en cuenta la *naturaleza* del mandato que se haya conferido.

Hay otro artículo del mismo Código, que viene á propósito, y es el 2159, que dice:

del Circuito de...., y los testigos instrumentales N. y N., varones, vecinos del mismo Circuito, mayores de edad, de buen crédito, y en quienes no ocurre ninguna causal de impedimento, compareció el señor N., vecino de...., mayor de edad, á quien conozco, y dijo: que instituye man-

"Cuando se da al mandatario la facultad de obrar del modo que más conveniente le parezca, no por eso se entenderá autorizado para alterar la sustancia del mandato, ni para los actos que exigen poderes ó cláusulas especiales.

"Por la cláusula de libre administración se entenderá solamente que el mandatario tiene la facultad de ejecutar aquellos actos que las leyes designan como autorizados por dicha cláusula."

Después de haber reflexionado sobre los artículos transcritos,—2158 y 2159—y sus concordantes, creemos estar en lo cierto al establecer que la ley reconoce tres clases de actos, en relación con las funciones del mandatario, á saber:

1.ª Actos de mera administración, que son los que puede ejecutar todo individuo á quien se instituye simple mandatario.

2.ª Actos de libre administración, que son los que las leyes designan como autorizados por dicha administración; y

3.ª Actos enteramente especiales.

Así pues, en los poderes generales debe conferirse, primeramente, el cargo de mandatario, con la expresión genérica de los negocios para los cuales se confiere el mandato: por ejemplo, para negocios de comercio, ó para tales ó cuales de la industria agrícola, ó de la fabril, á fin de dar á conocer la *naturaleza* del mandato, y consiguientemente determinar la clase de actos que constituyen el giro administrativo ordinario.

En segundo lugar, debe consignarse en tales poderes la cláusula de *libre administración*, para que el mandatario pueda ejecutar los actos que las leyes designan como autorizados por esta cláusula. De pronto no recordamos otros artículos que contengan dicha cláusula que estos: 1468, 1638 y 1688 del Código Civil.

Por el 1468 se dispone que nadie puede aceptar una donación sino por sí mismo, ó por medio de una persona que tenga poder especial suyo al intento, *ó poder general para la administración de sus bienes*.....

Por el 1638 se dispone que la diputación para recibir el pago puede conferirse por *poder general para la libre administración* de todos los negocios del acreedor, ó por poder especial para la *libre administración* del negocio....

Por el 1688 se establece que el mandatario no puede novar si no tiene especial facultad para ello, ó no tiene *la libre administración* de los negocios del comitente, ó del negocio á que pertenece la deuda.

En tercer lugar, deben determinarse separadamente los actos especiales á que se extiende el mandato; y decimos *separadamente*, porque si en una cláusula de carácter general se comprenden ó se pretende comprenderlos todos, se violan la letra y el espíritu de la ley. Se viola la letra, porque el inciso segundo del artículo 2158 del Código Civil, que habla del mandato, en general, dice: "Para todos los actos que salgan de estos límites—dichos límites son los relativos al giro administrativo ordinario,—necesitará de *poder especial*"; y nosotros entendemos por poder especial no sólo un instrumento ó una escritura especial, sino también una cláusula ó una autorización especial. Y no habría objeto en exigir poder ó cláusula especial, si fuera lícito comprender en una proposición de carácter general todos los actos especiales. Se viola el espíritu de la ley, porque es manifiesto que ésta no permite la concesión de un poder *ilimitado*, sino á lo más de uno *general*, y con razón, porque es muy difícil encontrar un mandatario de las aptitudes suficientes, de la actividad que se requiere, del interés bastante y de la probidad necesaria para que represente en absoluto al mandante. Es raro, rarísimo encontrarlo, y por esto la ley, cuyo objeto es amparar los derechos de todos, ordena la concesión de poderes especiales, aun después de concedida la libre administración.

Verdad es que por medio de cláusulas especiales puede llegarse á conferir un poder casi tan extenso como se quiera; pero desde luego, este poder no es absolutamente ilimitado, pues si deja de mencionarse algún acto, es claro que el mandatario no puede ejecutarlo. En el supuesto de que por el medio indi-

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

datario al señor N., vecino de.... y mayor de edad, para.... (1); y al mismo tiempo le da poder general con libre administración. El mismo otorgante dijo que confería poder especial al expresado señor N., para lo siguiente:

Primero. Para que represente al otorgante en todos los asuntos que le interesen, sean ó nó contenciosos, que en la actualidad cursen ante los Tribunales de la República, ó ante cualesquiera oficinas públicas; y para que lo represente ante los mismos Tribunales ú Oficinas, según corresponda, en todos los pleitos que se le promuevan, ó le convenga promover, y en todas las reclamaciones ó gestiones que interesen al otorgante, inclusos los recursos de casación y revisión.

Segundo. Para que á nombre del otorgante haga cesión de bienes, y lo represente ampliamente en el juicio de concurso de acreedores á que hubiere lugar; y para que intervenga en las cesiones de bienes de sus deudores, y en los juicios de concurso consiguientes.

Tercero. Para que desista de los pleitos yá intentados ó que intentare; y para que someta á la decisión de árbitros ó arbitradores las cuestiones pendientes, ó que ocurrieren.

Cuarto. Para que transija *tales* ó *cuales* pleitos ó cuestiones (2).

Quinto. Para que conceda moratorias á sus deudores, y les otorgue las rebajas que estime equitativas.

Sexto. Para que cobre todos los créditos del otorgante, dé los correspondientes recibos y haga extender las debidas cancelaciones; y á su vez, para que pague todas las deudas del otorgante, obtenga los recibos necesarios y exija las cancelaciones debidas.

---

cado pudiera conferirse un poder tan amplio como se quiera, es lo cierto que el mandante procedería con pleno conocimiento de lo que hacía; y el mandatario, á su vez, sabría qué actos le era permitido ejecutar en nombre de aquél. No sucede así cuando, á virtud de una cláusula general, se concede poder para todo, pues bien puede suceder que haya actos que el mandante no quiera que se ejecuten; y otros, que sean dudosos para el mandatario.

Necesítase, pues, cláusula ó autorización especial para todos los actos que salgan del giro administrativo ordinario, y que no estén comprendidos por las leyes en la libre administración que se otorgue.

En el modelo consignamos algunas cláusulas relativas á actos especiales. *En cada caso el mandante dirá si quiere que se consignen todas, ó cuáles, y agregará aquellas que las circunstancias requieren.*

Finalmente, téngase entendido que el hecho de conferir, por una cláusula de carácter general, poder para todos los actos que son especiales, es cosa del todo inútil, pues los juzgados y tribunales no pueden reconocer personería á un mandatario que á virtud de dicha cláusula ha ejecutado un acto para cuya realización la ley exige poder especial, es decir, cláusula ó autorización especial.

(1) Para todos los negocios del poderdante, que consisten en esto:..... ó para *tales asuntos* de comercio; ó para la administración de *tales* ó *cuales* empresas. Es decir, debe determinarse la *naturaleza* del mandato.

(2) El artículo 2471 del Código Civil dice que "todo mandatario necesita de poder especial para transigir," y además exige que en el poder se especifiquen los bienes, derechos y acciones sobre que se quiera transigir.

Séptimo. Para que enajene los bienes muebles del poderdante, con excepción de (1), y para que los dé en prenda de las obligaciones que afecten al mismo otorgante, ó en mutuo ó comodato, con excepción de *tales*, que no enajenará, ni dará en prenda, ni en mutuo, ni en comodato.

Octavo. Para que enajene los bienes raíces del poderdante, con excepción de (2).

Noveno. Para que hipoteque los bienes raíces del poderdante, en garantía de las obligaciones que lo afecten, con excepción de (3).

Diez. Para que dé á interés los dineros del poderdante, con un plazo qne no exceda de...., y con las debidas seguridades; y á su vez para que tome dinero á interés y dé las cauciones convenientes.

Once. Para que dé en arrendamiento, con las debidas seguridades, ó en anticresis los mismos bienes raíces del otorgante, con excepción de (4).

Doce. Para que tome en arrendamiento ó en anticresis bienes raíces, cuando lo estime conveniente; y para que reciba bienes muebles en prenda, mutuo ó comodato.

Trece. Para que adquiera el dominio de los bienes muebles y de los raíces, cuya adquisición sea conveniente para el otorgante en concepto del mandatario; y para que lo obligue, en consecuencia, como deudor y dé las prendas, fianzas ó hipotecas que convenga.

Catorce. Para que constituya servidumbres sobre sus predios, y acepte las que se impongan á su favor.

Quince. Para que acepte con beneficio de inventario las asignaciones á título universal que se le hagan, pudiendo repudiarlas si lo estima conveniente; para que acepte ó repudie las que se le hagan á título singular, y para que intervenga en los correspondientes juicios de sucesión.

Diez y seis. Para que libre, acepte, endose y negocie letras de cambio y pagarés á la orden, satisfaciendo ó cobrando su importe á los respectivos vencimientos, y obtenga los respectivos protestos por falta de aceptación ó de pago.

Diez y siete. Para que confiera poderes especiales en determinados asuntos; para que delegue el presente en todo ó en parte cuando sea ne

---

(1) Los que el otorgante quiera que no se enajenen, como los libros de su biblioteca, ó los que constituyen el ajuar de su casa, ó los que tienen valor de afección, los cuales deberán especificarse. Se puede, en sentido inverso, designar más bien los muebles que se permite vender.

(2) Los bienes raíces que el otorgante quiera que no se enajenen. En vez de designar los bienes que se exceptúan, se puede decir cuáles son, especificándolos, los que el mandatario puede enajenar. En este caso sería conveniente señalarlos por sus linderos.

(3) Con las mismas limitaciones de que habla la nota que precede.

(4) Véase la nota 2.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

cesario, y para que en todo caso revoque delegados, y nombre otros, cuantas veces lo estime conveniente.

Se pagaron los derechos de registro, como consta de la boleta que que aquí se agrega, y dice (aquí ella). Se advirtió al otorgante la obligación que tiene de hacer registrar este instrumento dentro de sesenta días; y habiéndosele leído ante los testigos expresados, lo aprobó. Firman todos por ante mí.

XXI

ESCRITURA DE MUTUO CON FIANZA Ó HIPOTECA

Número.... En el Distrito Municipal de...., Departamento de...., República de Colombia, á *tantos* de *tal mes y año*, ante mí N., Notario del Circuito de.... y los testigos instrumentales N. y N., varones, vecinos del mismo Circuito, mayores de edad, de buen crédito, y en quienes no ocurre ninguna causal de impedimento, compareció el señor N., varón, vecino de.... y mayor de edad, á quien conozco, y expuso: que ha recibido en mutuo, y á su entera satisfacción, del señor N., la cantidad de.... [1]. Que pagará la expresada cantidad el día *tantos* [2]. Que durante el plazo pagará el interés de.... por ciento [3], al vencimiento de [4]. Que en caso de mora en el pago del principal, el otorgante pagará *tanto* de interés [5], sin perjuicio de ejecución. Que en el caso de mora en el pago de los intereses correspondientes á [6], termina *ipso facto* el plazo

[1] Pueden darse en mutuo cosas fungibles que no sean dinero, y en tal caso deben especificarse con toda claridad, por cuanto es obligación del mutuario restituír igual cantidad de cosas del mismo género y calidad: artículo 2223 del Código Civil.

[2] Si no se fijare término para el pago, no habrá derecho á exigirlo dentro de los diez días subsiguientes á la entrega, es decir, no puede exigirse el pago sino después del vencimiento de los diez días: artículo 2225 del Código Civil.

Si se pactare que el mutuario pague cuando le sea posible, el Juez, atendidas las circunstancias, fijará un término: artículo 2226 del Código Civil.

[3] Debe fijarse el período de tiempo á que se refieren los intereses, es decir, si el interés que se causa es con relación al día, al mes ó al año. Téngase en cuenta, además, que si el interés convencional excede de una mitad al que se probare haber sido interés corriente al tiempo de la convención, será reducido por el Juez á dicho interés corriente, si lo solicitare el deudor: artículo 2231 del Código Civil.

Se puede estipular intereses en dinero ó cosas fungibles: artículo 2230 del Código Civil.

[4] Debe expresarse el período á cuyo vencimiento es obligación pagar los intereses, porque puede suceder que el interés que se cause se refiera á un período distinto de aquel en que debe hacerse el pago de los mismos: así, el interés puede ser de *tanto* por ciento al *año*, y convenirse en que el pago de los intereses se verifique por mensualidades.

[5] Si no se fijare el interés que debe pagarse durante la mora, rige lo dispuesto en los artículos 1617 y 2232 del Código Civil.

[6] Aquí se dirá el período de tiempo que las partes fijan como el máximum de la mora que puede haber en el pago de los intereses, el cual puede ser igual al que regula los pagos.

concedido para el pago de la expresada cantidad de.... dada en mutuo. [1]. Para garantizar el pago de la expresada cantidad, intereses y costas da.... [2]. Estando presente el mutuante, señor N., expuso que acepta esta escritura. Se pagaron los derechos de registro, como consta de la boleta que aquí se agrega y dice [aquí ella]. Se advirtió á los otorgantes que tienen la obligación de hacer registrar este instrumento dentro de sesenta días. Leída que fue esta escritura á las partes contratantes (3), por ante los testigos expresados, la aprobaron. Firman todos por ante mí.

XXII

ESCRITURA DE CANCELACIÓN

Número.... En el Distrito Municipal de ..., Departamento de...., República de Colombia, á *tantos* de *tal mes y año*, ante mí N., Notario del Circuito de.... y los testigos instrumentales N. y N., varones, vecinos del mismo Circuito, mayores de edad, de buen crédito, y en quienes no ocurre ninguna causal de impedimento, comparecieron los señores N. y N., vecinos de.... mayores de edad, á quienes conozco y expusieron: que otorgaron en *tal* Notaría [4] una escritura pública, bajo el número.... con fecha *tal*, que se halla al folio.... del libro protocolo respectivo, por la cual.... [5]. Y por cuanto yá se han cumplido las obligaciones consignadas en dicha escritura [6] la declaran cancelada. Se pagaron los derechos de registro, como consta de la boleta que aquí se agrega, y dice [aquí ella]. Se advirtió á los comparecientes que tienen el deber de hacer registrar esta escritura dentro de sesenta días. Leído que les fue

[1] Creemos que debe fijarse sanción para el caso de mora en el pago de los intereses, á partir del vencimiento del término de que habla la nota anterior; y nos ha parecido equitativo que la sanción consista en reputar vencido el plazo para el pago de la cantidad principal, pues no se podría estipular interés por los intereses atrasados: artículos 1617 ordinal 3.° y 2235 del Código Civil.

[2] Aquí se indicará la caución con que se garantiza el pago, que puede ser fianza, prenda ó hipoteca.

Si fuere fianza debe expresarse si el fiador se obliga, ó nó, como fiador solidario. Si prenda, debe indicarse el estado de la cosa. Si hipoteca, deben expresarse su situación y linderos.

[3] Y al fiador (si lo hubiere).

[4] El artículo 2.° de la Ley 8.ª de 1888—*Codificación Nacional*, Tratado primero, número 266 de orden—dispone que la cancelación de una escritura se puede hacer ante cualquier Notario. La resolución del Ministerio de Gobierno, de fecha 10 de Marzo de 1888, inserta en la *Codificación Nacional*, Tratado primero, página 75, número XIX, determina el procedimiento que debe observarse para llevar á efecto la cancelación. Téngase también en cuenta lo que disponen los artículos 2611 y 2612 del Código Civil.

[5] La ley dispone que en la escritura de cancelación se exprese el contenido del instrumento primitivo, en la parte respectiva, se subentiende; pero de manera que haya perfecta claridad: artículo 2612, inciso primero del Código Civil.

[6] O esto otro: en la parte mencionada de dicha escritura.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

á los otorgantes este instrumento, por ante los expresados testigos, lo aprobaron. Firman todos por ante mí.

XXIII

ACTA DE PROTESTO DE UNA LETRA DE CAMBIO

En el Distrito Municipal de...., Departamento de...., República de Colombia, á *tantos* de *tal mes y año*, ante mí N., Notario del Circuito de.... [1] y los testigos N. y N., varones, vecinos de.... [2] mayores de edad, y en quienes no ocurre ninguna causal de impedimento, compareció el señor N. y presentó una letra de cambio con el fin de que se requiera al señor N., contra quien está girada la letra, para que éste.... [3]. Dicha letra dice así :.... [4]. Requerido que fue el expresado señor N. [5], para los efectos indicados [6] manifestó.... [7]. El requerido señor N. quedó apercibido para el pago de los daños y perjuicios consiguientes á la falta de [8], á reserva de los derechos del propietario contra las demás personas responsables al pago de la letra [9]. Conteniendo la letra indicaciones [1] respecto de los señores N. y N., el infrascrito Notario los requirió igualmente en el orden en que están mencionados [2], para que [3], y manifestaron.... [4]. Los expresados señores N. y N. quedaron también apercibidos para el pago de los daños y perjuicios en los mismos términos que el señor N., contra quien está girada la letra, y con la reserva dicha [5]. Para constancia se firma esta diligencia á la hora de [6] por los que han intervenido en ella [7] y los testigos expresados, por ante mí [8].

[1] El artículo 859 del Código de Comercio dice que en defecto de Notario se ocurrirá al empleado de que habla el Capítulo 7.°, Título 1.°, Libro 5.° del Código Civil (del Código Civil de Panamá, pues á él se refería necesariamente el de Comercio del mismo Estado, adoptado por la Ley nacional 57 de 1887); y dicho empleado era el Secretario de la respectiva Corporación municipal. El artículo 2629 del Código Civil nacional vigente—análogo al 2738 del Código de Panamá—facultaba, sin limitación alguna, á los mismos Secretarios de las Corporaciones municipales, en los lugares que no fueran cabeceras de Notaría, para las diligencias de protesto; pero conforme al artículo 5.° de la Ley 100 de 1888 —*Codificación Nacional*, Tratado primero, número 269 de orden—no pueden intervenir en tales actos cualesquiera Secretarios, sino aquellos á quienes el Gobierno haya conferido autorización, y siempre que la cuantía de la letra no exceda de quinientos pesos. En el libro protocolo que deben llevar los Secretarios de los Consejos municipales á quienes se invista del carácter de Notarios, debe extenderse la presente acta.

[2] Los testigos deben ser vecinos del domicilio del librado ó aceptante: artículos 859 y 866 del Código de Comercio.

[3] Acepte la letra, ó la pague, según el caso; ó exponga la razón por que no la acepta, ó la paga: artículos 860 y 865, ordinal 2.° del Código de Comercio.

[4] Se copiarán literalmente la letra, endoso, aval é indicaciones, y aceptación si la hubiere, en el mismo orden en que aparezcan en la letra: artículo 865, ordinal 1.° del Código de Comercio.

[5] Caso de no encontrar en su morada ó establecimiento á la persona contra quien estuviere girada la letra, el Notario hará el requerimiento á sus dependientes, si los tuviere, y en su defecto á su mujer, hijos mayores, ó criados también mayores. No teniendo mujer, hijos ó criados mayores, ó ignorándose su domicilio, la diligencia se entenderá con el Personero municipal ó con el Alcalde del distrito: artículo 861 del Código de Comercio.

[6] Véase la nota [3].

[7] Se extenderá literalmente la respuesta que diere el requerido, ó la atestación de que no dio ninguna: artículo 865, ordinal 2.° del Código de Comercio.

[8] Aceptación, si de ella se tratare; ó pago, si sobre ello versare el requerimiento, pues las letras se protestan ya por falta de aceptación, ya de pago: artículos 865, ordinal 3.°, y 856, inciso segundo del Código de Comercio.

[9] Véase el artículo 865, ordinal 3.° del Código de Comercio.

ADVERTENCIAS IMPORTANTES

1.ª Por descuido del autor se omitió en la parte final del modelo relativo al contrato de venta, esto, que en los demás modelos se lee:

"Se pagaron los derechos de registro, como consta de la boleta que aquí se agrega, y dice (aquí ella)."

2.ª Los Notarios no pueden extender instrumento alguno de los que conforme á la ley están sujetos á la contribución del registro sin que se les presente el comprobante de haberse pagado tal contribución; comprobante que debe agregarse al respectivo instrumento original, y en éste se hará mención de haberse pagado la contribución, con referencia al comprobante. En las copias que del instrumento se expidan se insertará literalmente el contenido del comprobante: artículo 16 de la Ley 39 de 1890, y comentario del artículo 13 de la misma.

3.ª El Notario debe conocer á las personas que le piden la prestación de su oficio: si no las conoce, debe proceder de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2589 del Código Civil.

[1] Si no las contuviere se omitirá esta parte.

[2] Véanse los artículos 863 y 865 ordinal 2.° del Código de Comercio.

[3] Es aplicable en este caso lo dicho en la nota 3 de la página anterior.

[4] Aquí lo dicho en la nota 7 de la página anterior.

[5] Véase el artículo 865, ordinal 3.°

[6] Debe indicarse la hora, que debe ser antes de las tres de la tarde: artículos 865 ordinal 5.° y 869.

[7] Por las personas á quienes se hubiere hecho el requerimiento. Si no firmaren se dejará constancia de que no sabían, ó no podían, ó no quisieron firmar: artículo 865, ordinal 4.° del Código de Comercio.

[8] El Notario debe dejar copia del acta de protesto á la persona con quien se hubiere entendido la diligencia, so pena de nulidad: artículo 862 del Código de Comercio.

Todo protesto que no esté conforme con las prescripciones legales, es ineficaz: artículo 867 del Código de Comercio. Dichas prescripciones se han consultado cuidadosamente al formar el presente modelo.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

4.ª Los Notarios responden de la parte formal, no de la sustancial, de los actos y contratos que autorizan. Responden también de que los testigos instrumentales y, en su caso, los de abono, reúnen las cualidades que la ley exige: artículos 2590 y 2591 del Código Civil.

5.ª Cuando algún acto ó contrato, ó cuando alguna cláusula del acto ó contrato le pareciere ilegal al Notario que debe autorizarlo, tiene el deber de advertirlo á las partes, sin rehusar en ningún caso la autorización: artículo 2590 del Código Civil.

Acerca de la capacidad y aptitud de los otorgantes, véanse los artículos 2591 á 2593 del Código Civil.

6.ª Los otorgantes mismos pueden redactar el instrumento, de manera que contenga las designaciones necesarias, según su naturaleza, y en este caso las funciones del Notario se limitan á insertar el escrito, poniéndole el encabezamiento y pie correspondientes: artículo 2596 del Código Civil.

7.ª Cuando alguno de los otorgantes figure en nombre de otro, debe presentar el documento que lo autorice para ello, y el Notario insertará este documento en la escritura.

8.ª Cuando se trate de actos ó contratos para cuya celebración se necesite previa autorización judicial, el Notario insertará íntegramente en la escritura la sentencia ó decreto respectivo, que el interesado debe presentar en copia auténtica. Si se trata de la enajenación de bienes raíces que sean de propiedad de un menor ó de un individuo puesto en interdicción, se insertarán también en la escritura las diligencias ó actas en que conste que la enajenación se ha hecho en subasta pública; y esto mismo se observará cuando se trate de la venta de bienes de igual naturaleza, hecha por un albacea.

9.ª En todos los actos y contratos que ejecute ó celebre el tutor ó curador *en representación del pupilo*, deberá expresar esta circunstancia en la escritura del mismo acto ó contrato, so pena de que, omitida esta expresión, se repute ejecutado el acto ó celebrado el contrato en representación del pupilo, si fuere útil á éste, y no de otro modo: artículo 500 del Código Civil.

10.ª El mandatario puede, en el ejercicio de su cargo, contratar á su propio nombre ó al del mandante: si contrata á nombre de éste, debe expresarlo en la escritura, porque de nó, se considera que ha contratado á su propio nombre, y entonces no obliga respecto de terceros al mandante.

11. Cuando se quiera subrogar un inmueble á otro perteneciente á una de dos personas unidas en matrimonio, en los casos del artículo 1789 del Código Civil, se expresarán en la escritura las circunstancias mencionadas en dicho artículo, según el caso; y se insertará la respectiva autorización judicial cuando la subrogación se haga en bienes de la mujer: artículo 1791 del Código Civil.

Finalmente, téngase en cuenta todo lo dispuesto en los artículos 2594 y 2595, 2608 y 2069 del Código Civil.

12. En las copias que expidan los Notarios, de escrituras que hayan de registrarse, se cuidará de que en la última página de tales copias quede el espacio suficiente para poner las notas de inscripción ó registro y anotación correspondientes, de manera que éstas no queden en pliego ú hoja separada.

En cuanto al registro de los instrumentos sujetos á esta formalidad, téngase en cuenta los artículos 2657 á 2670 del Código Civil, especialmente el 2665 del mismo; los artículos designados en la *Codificación Nacional*, Tratado primero, con los números 273, 274, 290 y 291 de orden, y la Ley 39 de 1890.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

DOS DISERTACIONES

SOBRE

PUNTOS RELACIONADOS CON EL MATRIMONIO

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

I

SEPARACION DE HECHO DE LOS CONYUGES

¿El Código Civil permite á las mujeres casadas separarse de hecho de sus maridos? ¿El mismo Código establece, ó debe establecer alguna sanción que impida dicha separación, ó la haga cesar? ¿No será preferible que la ley la reconozca y la regle?

Conforme al Código Civil, no puede suspenderse la vida común de los casados sino por motivos de divorcio, es decir, por causas muy graves y debidamente comprobadas, pues el mismo Código establece expresamente que el marido debe protección á la mujer, y la mujer *obediencia* al marido; que éste tiene *potestad* sobre la persona y bienes de la mujer, y *derecho* para obligarla á vivir con él y seguirle adondequiera que traslade su residencia. Pero como, no obstante estas prevenciones, es notorio que las separaciones de hecho son numerosas, y que se verifican entre cónyuges de distintas categorías sociales, ocurre preguntar: ¿deberá permanecer indiferente el legislador ante un hecho de tánta significación, siendo como es el matrimonio el sólido fundamento de la familia, y, en consecuencia, esencial elemento de la moralidad, del orden y de la civilización? Imposible es, se nos dirá, que tan importante materia pudiera ser desatendida por el legislador; pero también se nos dirá que la tarea de éste se reduce únicamente á establecer sanciones que hagan efectivas las prevenciones legales que están en vigor, es decir, sanciones que hagan real la potestad del marido, é indeclinable la obediencia de la mujer.

Dos son los principales medios á que el legislador puede ocurrir en el caso de que se trata. Consiste el uno en disponer que la mujer que se separe de hecho de su marido, no pueda exigir alimentos, aunque tenga bienes propios en poder de éste; y que si está separada de bienes, asuma el marido la administración de todos, á fin de que la carencia de recursos la obligue á volver al hogar. Desde luego es claro que esta sanción no afecta á la mujer cuya propia familia la recibe en su casa; á la mujer que ejerce ó puede ejercer una profesión lucrativa; ó á quien una mano extraña dispensa favor. Esta sanción pesa únicamente sobre las mujeres que carecen de los mencionados recursos, esto es, sobre las desvalidas, que son precisamente las que más necesitan el amparo de la ley.

Hay expositores muy respetables que, ante la ineficacia de la sanción de que hablamos, opinan que debe ocurrirse á la intervención de la fuerza

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

pública. "Dos *gendarmes*, se ha dicho, harán volver al domicilio conyugal á la mujer insubordinada, procediendo de un modo análogo á como se procede para restituír al propietario la posesión de la cosa de que injustamente ha sido privado." Aparte de que la semejanza de caso es inadmisible, como lo hace notar un lucido expositor del Derecho Francés, porque la mujer no es *cosa*, débese observar que el efecto del empleo de la fuerza es meramente transitorio, pues restituída la mujer al lado del marido, se halla en posibilidad de separarse nuevamente, porque éste no tiene ni debe tener facultad para mantener á su mujer aprisionada en su propia casa. Esta sanción adolece también del inconveniente indicado respecto de la primera, á saber: que no se ejerce sino sobre la mujer que carece de todo apoyo. Que se nos diga si habrá padres ó hermanos que impasibles vean sacar de su casa, por la fuerza, á la hija á quien con ternura aman, á la hermana á quien de veras quieren y que implora su protección. Felizmente este caso rara vez acontece, respecto de personas de cierta posición social, ya por ser contrario á las costumbres, ya porque la ley civil no prescribe expresamente el empleo de la fuerza (1); pero en poblaciones poco civilizadas, y tratándose de mujeres de condición humilde, ha sucedido varias veces que la autoridad ha empleado la fuerza para obligar á éstas á vivir con sus maridos.

Así pues, el rigor de la ley no se ejerce sino sobre ciertas mujeres y en determinados lugares.

Ahora bien: demos por sentado que el legislador establece expresamente las sanciones de que hablamos, y que ninguna mujer puede substraerse de ellas, sea cual fuere su posición social, es decir, que por hambre y desnudez ó por medio de la fuerza se consigue siempre restituír la mujer al hogar que abandonó, ¿qué se consigue con esto? Hacer efectiva, se dice, la potestad marital; satisfacer á la sociedad, haciendo que la mujer rebelde obedezca á su marido y no dé escándalo; y en fin, restablecer la vida conyugal. Pero esto es precisamente lo que preguntamos. ¿Qué beneficio se obtiene con acercar uno á otro, por la fuerza, dos seres que no se tienen voluntad y que, por lo mismo, no pueden vivir en paz y tranquilidad? ¿Esto es el matrimonio? ¿Los efectos benéficos de esta institución dependen, acaso, del hecho material de que los casados vivan juntos? ¿Es por medio de la violencia como se restablece esa unión dulce que la Iglesia bendijo, que sólo el amor formó y sólo él ha podido conservar? La mujer, á quien por hambre y desnudez, ó por la fuerza se obliga á vivir con un hombre á quien aborrece con toda la fuerza del odio, ¿será la fundadora de una familia virtuosa? ¿será el digno modelo de sus hijas? El verdadero escándalo no consiste en que la mujer viva separada de su marido, sino en las escenas violentas que se verifican y repiten frecuentemente cuando viven juntas dos personas que no se avienen; escenas que la familia presencia y la sociedad conoce. Este es el verdadero escándalo, respecto del cual la sociedad tiene, sin duda, interés en que cese cuanto antes. Por otra parte, ¿podrá darse mayor crueldad que sujetar á una infeliz mujer á que reciba las caricias de un hombre que le inspira repugnancia profunda, y á quien odia y detesta? Cuando una mujer se halla en semejante situación, es preciso que sea supremamente virtuosa para que no atente contra la vida de su marido ó contra la suya propia, ó para que no se pervierta; y si de todas estas

(1) El Código Civil no dispone el empleo de la fuerza; pero el de Policía sí lo estatablece, como lo indicamos al fin de esta exposición.

tentaciones tiene la satisfacción de triunfar, nada de raro tendría que la constante presión que el sufrimiento ejerciera sobre su espíritu, perturbara el uso de su razón.

¿Qué dispone el Código Civil en esta materia? Se limita á establecer las obligaciones y derechos entre los cónyuges. El artículo 178 simplemente dispone que el marido tiene derecho para obligar á su mujer á vivir con él y seguirle adondequiera que traslade su residencia; pero no estatuye el modo de hacer efectivo este derecho. Nuestro artículo es idéntico al 133 del Código de Chile, de donde se tomó, y respecto de este artículo dice el ilustrado comentador chileno, señor Jacinto Chacón, lo siguiente:

"El empleo de la fuerza pública no es permitido sino en los casos determinados por la ley. No se diga que si la ley civil calla á este respecto, es porque la designación de los apremios corresponde al Código de Procedimientos. El Código Civil, en lo que toca á las relaciones de familia, siempre que el apremio personal es necesario, lo prescribe, y señala con precisión las circunstancias, casos y modos de ejecutarlo. Si, pues, nuestro Código hubiese tenido intención de autorizarlo contra la esposa, lo hubiera declarado tan explícitamente como lo ha hecho respecto del hijo de familia. (Véase el artículo 262 del Código colombiano, correspondiente al 233 del chileno).

"Por otra parte, nuestro Código distingue netamente las relaciones de familia de las obligaciones en general, y, por tanto, los apremios que se emplean para obtener el cumplimiento de las convenciones ordinarias, no pueden ejercerse para hacer efectivas las obligaciones y derechos entre los cónyuges (1).

"Por esta razón los medios coercitivos indirectos son, en este caso, aconsejados preferentemente."

El señor Chacón transcribe luégo una parte del pasaje que sobre este punto se halla en la obra de Mourlon: *Répétitions écrites.*—Libro 1.°, Cap. 6.°, § 2.°, en la nota.

Hé aquí todo el pasaje que viene á propósito:

"¿Ninguna ley autoriza el arresto y menos la prisión aun temporal de la mujer que huye del domicilio de su marido!!"

"¿No es cierto que toda obligación legal debe estar apoyada por una sanción, por cuanto sin ésta no existiría aquélla?

"Sin duda. Pero ¿es necesario, para que una obligación exista civilmente, establecer un medio tan enérgico como el empleo de la fuerza? No por cierto. La mayor parte de las obligaciones no tienen esta sanción. Táles son las que consisten en *hacer*, y táles son, para tomar ejemplo en esta misma materia, los deberes de protección y fidelidad entre los cónyuges. Los deberes de cónyuge á cónyuge son incompatibles con la intervención de *gendarmes*. Su sanción se halla en otra parte, y consiste en el derecho que tiene el cónyuge que ha cumplido sus deberes de promover contra el culpable juicio de divorcio, ó de rehusarle toda especie de protección y de socorro. Puede suceder que esta sanción sea ineficaz; pero la intervención de la fuerza armada ¿siempre haría volver á la senda del deber á la esposa que de ella había salido?

"Cuando la ley quiere, al lado de un deber de familia establece el derecho de obtener su cumplimiento por medio de arresto ó prisión; y

(1) La nota que sobre esta materia se halla en la obra del señor Chacón, Título VI, Seccion 1.ª, § III, pág. 116, es sumamente interesante.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

no solamente estatuye esta sanción de un modo formal, sino que tiene el cuidado de disponer lo conveniente para el empleo de ésta, á fin de prevenir el abuso.

"Se dirá que los jueces tienen el derecho de hacer ejecutar sus decisiones *por todos los medios* practicables, cuando, como en el caso presente, la ley no ha señalado especiales. Pero tan amplio derecho no está escrito en ninguna parte, ninguna ley lo ha consagrado, y los jueces no pueden hacer ejecutar sus decisiones sino por los *medios que la ley les ha fijado.*"

El señor Chacón concluye su comentario así:

"Por esto, sin duda, en la discusión del Código francés ningún orador propuso el empleo de la fuerza para obligar á la mujer á seguir al marido y á vivir con él.

"Si, pues, nuestro Código ha tomado á la letra del francés su disposición, y lo ha hecho en vista de las doctrinas diversas que el silencio de este Código ha suscitado, es evidente que desde que no prescribe expresamente el apremio personal, *no quiso autorizarlo en asuntos matrimoniales.*"

En resumen, decimos nosotros, nuestro Código Civil consagra el principio de la *potestad marital*, la *obediencia* de la mujer al marido, y el *derecho* de éste para obligarla á vivir con él y seguirle adondequiera que traslade su residencia; pero no establece sanción para la efectividad de estas prescripciones, precisamente porque cualquiera que estableciese sería ilusoria.

Tampoco puede emplearse ningún medio preventivo, porque la separación de los cónyuges es efecto de la relajación del vínculo de amor que los unía, lo cual, á su vez, es efecto de hechos sobre que la ley no puede obrar de un modo directo, pues á menudo sucede que la causa eficiente de las desavenencias y disgustos, son pequeñas imperfecciones de la mujer ó del hombre, ó de ambos, insignificantes en sí mismas, pero de efectos desastrosos por su acción continua; la mezquindad en el hombre, la prodigalidad en la mujer ó el abandono de alguno de sus deberes como esposa ó madre; la falta de cultura, ó la dureza de carácter en uno ú otro, y otras cosas análogas, pequeñas al parecer, son frecuentemente la causa del desamor entre los esposos, y claro es que la ley carece de medios directos para evitar la mezquindad ó la prodigalidad; para hacer á la mujer amable, dulce, paciente y resignada, y para que el hombre sea considerado, afectuoso y culto. Por tanto, creemos que la ley no debe oponerse á la separación voluntaria de los esposos, ó de uno de ellos, pues cuando así lo determinan, es porque yá no pueden avenirse, porque la vida común es difícil, si no imposible, y porque la continuación de ella daría ocasión, indudablemente, á serios disgustos, tal vez á hechos inmorales, causa de graves escándalos y de un rompimiento eterno; mientras que la separación voluntaria y oportuna, deja á lo menos una vislumbre de esperanza en el sentido de la reconciliación. En nuestro concepto, es la virtud lo único que puede suplir la falta de afecto entre los esposos, y hacer llevadera la vida. Sólo con paciencia, resignación y grandeza de alma puede una infeliz mujer soportar á un marido vicioso, que le infiere ultrajes á cada momento: es practicando estas virtudes excelsas como puede subsistir un matrimonio que se halla erizado de espinas. Sin embargo, pueden ser tántos los sufrimientos, que no haya al fin otro remedio que la separación. Si la virtud es impotente, atendida la

fragilidad humana, para impedir la separación en muchos casos, menos podrá impedirla la ley.

Por otra parte, es inútil determinar los motivos justificativos de la separación, pues, por regla general, es imposible dar en juicio la prueba de su existencia, porque si no el mayor número de ellos sí los más graves y ofensivos no se verifican sino en lo más oculto del hogar, sin otro testigo que Dios, y ¡cuántas cosas no habrá que la mujer no puede ni siquiera revelar á sus más íntimas amigas porque el rubor se lo impide! La moral, la religión y la opinión pública, no la ley, son las únicas fuerzas que en esta materia ejercen acción saludable y eficaz.

Hé aquí varios conceptos de uno de los más distinguidos jurisconsultos modernos, M. Laurent, relativos á la doctrina que consagra el artículo 213 del Código Napoleón, en cuanto á la obediencia que debe la mujer á su marido; conceptos que reproducimos porque nuestro artículo 176 del Código Civil es, en dicha parte, copia de aquél.

"Tengo pocas autoridades que invocar contra la ley de desigualdad y obediencia que el Código Napoleón impone á la mujer; y me permitiré añadir que la opinión de los legistas tiene poco peso cuando se trata de extirpar una doctrina tradicional que remonta hasta la más remota antigüedad. Ellos son hombres de tradición: han sostenido la necesidad del tormento en el siglo en que la humanidad lo enalteció; han defendido el empleo de la fuerza hasta el último extremo, y en sus filas la pena de muerte ha encontrado los más decididos partidarios. Aun en cuestiones que son, ante todo, de carácter privado, tales como la de la tasa del interés, se les ha visto, en Francia, pronunciarse contra el derecho de los contratantes, al par que los economistas pedían la libertad; sin embargo, á pesar de su resistencia, el progreso se ha realizado. Ellos se opondrán también á la abolición de la potestad marital y al establecimiento de la igualdad de derechos respecto de la mujer; no sé si su resistencia triunfe por el momento, pero tengo la firme convicción de que la potestad del marido terminará, como ha terminado la del padre y como ha terminado la de los reyes, en cuanto al poder absoluto de uno y otro, se entiende....

"He hablado en esta exposición de un comité que se formó en 1866 para estudiar la reforma de las leyes civiles. En la sesión del 25 de Junio, en que se discutió la cuestión de la potestad marital, asistieron Jules Fabre, Vacherot, Courcelle-Seneuil, Joseph Garnier, André Cochu, el doctor Clavel, Charles Lemonnier, Hérold, Clamagéran, Jules Ferry, Paul Boiteau, Henri Brisson et Emile Acollas, relator. La reunión decidió, por unanimidad, la supresión, en el artículo 213, del deber de obediencia impuesto á la mujer. Un miembro opinó que se debía mantener el deber de protección del marido; y se le respondió que la protección era un deber recíproco, aunque de distinta naturaleza; que si se le consagraba legalmente respecto del marido para con la mujer, era preciso consagrarlo también de parte de la mujer para con el marido; que la protección, sin la reciprocidad, era el principio de autoridad bajo una forma atenuada, que entrañaba la obediencia. Después de esta discusión resolvieron, de común acuerdo, suprimir del todo el artículo 213.

"El artículo 214 obliga á la mujer á seguir al marido á todas partes, adonde él juzgue conveniente que debe establecerse. Un miembro tomó la defensa de esta disposición. La igualdad de los derechos, dijo, no significa que sean idénticos. El marido y la mujer tienen funciones y obligaciones diferentes: deben, pues, tener también derechos diferentes. El marido es quien debe proveer á la subsistencia de la familia: es, pues, á

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

él á quien toca determinar el domicilio y la residencia. Se le respondió que esta doctrina, justa en teoría, tiende, en cuanto á la fijación de domicilio, á la subordinación de la mujer. Es cierto que si el matrimonio quedase como está, habría conflictos diarios entre los cónyuges, si no estaban de acuerdo el marido y la mujer respecto de la residencia que éste escogiera; pero debe esperarse que las causas de desavenencia que existen hoy entre el marido y la mujer desaparezcan en un círculo social donde el matrimonio esté establecido sobre su verdadera base. Para la elección del domicilio, como para todos los intereses comunes, es preciso apelar al efecto y á la razón de los consortes, sin otra sanción que la posibilidad del divorcio.

"Estas observaciones tuvieron todos los votos, y el principio de igualdad en las relaciones de los esposos se aceptó de una manera absoluta.

"No vacilamos en afirmar que la potestad marital, tal como Portalis la defiende, está en oposición con las costumbres, los sentimientos y las ideas de la sociedad moderna. Si nos remontáramos al origen de la potestad marital, encontraríamos por todas partes la fuerza; pero no hay objeto en ello, pues el mismo Portalis lo confiesa.... A pesar de que el Código sostiene la vieja tradición, la igualdad reina de hecho en un gran número de matrimonios.... La protección y la obediencia no dominan en ellos, sino el afecto, lazo de las almas; no es un amo quien impone su voluntad, ni una esclava quien obedece: es por vía de deliberación común y de consentimiento mutuo como se deciden los asuntos domésticos.

"Pero, exclama Portalis, ¿cómo puede subsistir una sociedad de dos personas si no se le da voz de mando á uno de los asociados? Portalis olvida que pueden existir muy bien sociedades de dos personas, sin que la una tenga preponderancia sobre la otra. Si los asociados tienen alguna disensión, el tribunal decide. Lo mismo sucede en la sociedad conyugal, á pesar de la potestad marital. Cuando el marido rehusa dar autorización á la mujer para que ejecute un acto jurídico, ella puede dirigirse á la justicia. Cuando el marido no suministra á la mujer todo aquello á que ella tiene derecho, le queda también el recurso de recurrir al juez. ¿Por qué no se organiza un recurso para todos los casos en que los esposos estén en desacuerdo?

"El Código italiano ha dado el primer paso en esta vía, aunque con suma timidez. El artículo 213 del Código Napoleón dice: 'El marido debe protección á su mujer, y la mujer obediencia á su marido.' El Código italiano también dice que el marido debe proteger á su mujer; pero nó que la mujer debe obediencia á su marido. La alteración es significativa, pero es ilógica en el sentido de que es incompleta; el legislador no se ha atrevido á consagrar la ley servil de la obediencia, pero tampoco ha proclamado la santa ley de la igualdad. No se sabe si el Código italiano sostiene la postestad marital, ó si la desconoce. La palabra misma no se halla en él; pero en el fondo parece que se reconoce dicha potestad.

"Este Código dice que el marido es el jefe de la familia, y que la mujer está obligada á seguirle adonde él juzge conveniente fijar su residencia; pero ser jefe no quiere decir ser amo, y la obligación de seguir al marido adonde él resida no es sino un deber especial, que no significa que la mujer deba siempre obedecer al marido. La obediencia no figura en el texto legal; la mujer es una esclava emancipada que no goza aún de todos los derechos de una persona libre.

"Esta misma situación ambigua se halla en la consecuencia más importante que se deriva de la potestad marital, á saber: la incapacidad de la mujer. El Código italiano coloca á la mujer entre los incapaces (artículo 1106); pero dice uno de los autores de este Código, Pisanelli, que esta no es la incapacidad absoluta del Código Napoleón. Cosa notable: el primer proyecto, el de Miglietti, abolía la autorización marital. Esta innovación hizo lanzar terribles gritos á los viejos legistas que había en Italia; se dijo que el ministro violaba el arca santa del derecho, y que la familia iba á disolverse, y con ella la patria. ¿Sería que Miglietti había tomado la idea de la igualdad jurídica de la mujer de algún demócrata socialista? Nó. El la tomó de la legislación austriaca que regía en la Lombardía y en Venecia; y si hay un régimen conservador en el mundo, es el de Austria. Los jurisconsultos lombardos alegaban excelentes razones en apoyo de la ley que otorga á la mujer la misma capacidad que al marido, pues la ley austriaca no consagra esta capacidad igual: ella conserva á la mujer casada el derecho que tiene como soltera y como viuda. El sistema de la incapacidad de la mujer casada, y de la capacidad de la mujer no casada, es un tejido de inconsecuencias. Durante el matrimonio, y bajo el régimen de la comunidad, la mujer permanece completamente extraña á la administración de los intereses comunes; tampoco puede administrar sus bienes, y solamente cuando se trata de enajenar los propios se le permite intervenir en provecho de su marido y con su autorización. Si enviuda, yá se le reconoce capaz, plenamente capaz, aunque entonces ha perdido el apoyo y el consejo de su marido; ella dirige su familia, sus intereses y los de sus hijos, y se ha visto á más de una mujer restablecer los negocios y levantar la fortuna que por la mala administración del marido se había perdido. ¿Cómo se verifica este milagro? Capaz mientras está soltera, se hace incapaz el día de su matrimonio, y vuelve á ser capaz el día que tiene la desgracia de perder á su marido. El buen sentido austriaco no cree en estos cambios milagrosos. Sin embargo, la viva oposición de los legistas italianos triunfó en apariencia. El Senado, conservador por esencia, quería el sostenimiento de la autorización marital; la Cámara de diputados era favorable á la abolición del derecho tradicional. Transigieron: la autorización se conservó, pero no esa autorización del Derecho Francés. Difícil es decir cuál es el nuevo sistema. Las transacciones sacrifican los principios y dan por resultado necesariamente un sistema incoherente y contradictorio. Sin embargo, estos avenimientos suelen tener grande importancia: son una semi-victoria ganada sobre la tradición, pues no hay media potestad marital, como no hay media soberanía. Desde que el principio de la potestad está minado, está perdido. Pisanelli dice que las disposiciones del Código italiano no son la última palabra del legislador. El porvenir dirá esa última palabra, proclamando la igualdad de derechos de los esposos.

....

"El *Ante Proyecto* no reproduce el artículo 213 del Código Napoleón, que se acaba de examinar, y que dice:

'El marido debe protección á su mujer; la mujer obediencia á su marido.' Yo he dado las razones de ello. La obediencia entraña la dependencia servil; y la protección, en relación con la obediencia, significa dominación. Estas no son, desde luego, las relaciones que deben existir entre esposos. ¿Qué es el matrimonio? Napoleón ha dicho que *es la unión de las almas.*

"Yo cito frecuentemente estas palabras, tanto porque son la expresión de los sentimientos y de las ideas de la humanidad moderna, cuanto por ha-

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

ber sido proferidas, no por un filósofo ó un poeta, sino por un hombre de Estado. Séame, pues, permitido suponer, sin ser acusado de utopía, que el matrimonio reposa sobre el afecto recíproco de los esposos, y que cuando el afecto existe es inútil el principio de la obediencia. Si el afecto ha desaparecido ó no ha existido jamás, no hay sino mera apariencia de matrimonio, y si esto sucede, ¿será posible que la ley de la obediencia reemplace á la ley del amor? No por cierto. Antes de obligar á la mujer á que obedezca, es preciso saber cuál de los dos esposos tiene razón. ¿Por qué suponer que la tiene siempre el marido? ¿Acaso porque él es más fuerte? No hay legislador que se atreva á reconocer el imperio de la fuerza. La ley no sabe ni puede saber si el marido tiene razón de exigir la obediencia, ó si la mujer tiene razón de rehusarla; la ley no puede hacer otra cosa que autorizar la separación de los esposos que viven en estado permanente de discordia; no habiendo comunidad de sentimientos, no debe haber vida común.

"¿Podrá resultar algún inconveniente de la abolición de la ley de obediencia? El Código de Italia no la ha conservado; por sí misma nada significa: es meramente una teoría tradicional. Hoy nadie pretendería tomarla al pie de la letra. ¿Es la obediencia absoluta, pasiva, la que el legislador ha querido imponer á la mujer? Esto sería anonadar su personalidad y reducirla al estado de esclava. Hay, pues, un límite en la obediencia; ¿cuál es éste? ¿dónde comienza el derecho y al mismo tiempo el deber de desobedecer? Estas cuestiones no pueden resolverse en una ley. Es preciso abandonar el deber abstracto de la obediencia, sin perjuicio de prever el caso de conflicto entre los esposos. El Código mismo adopta este camino. El marido que rehusa autorizar á la mujer para celebrar un acto jurídico, implícitamente le prohibe á ésta celebrarlo; y sin embargo, la ley permite á la mujer que no obedezca: ella puede solicitar autorización de un Tribunal. Así pues, la justicia interviene para decidir quién tiene razón, la mujer ó el marido. ¿Por qué no adoptar el mismo procedimiento en todos los casos en que haya conflicto serio entre los esposos?

"El conflicto se presenta desde luego en lo que concierne á la cohabitación. Este es un deber común. Si uno de los esposos rehusa llenarlo, si la mujer no quiere habitar con su marido, ó si el marido no quiere recibir á la mujer, ¿qué se hará? No hay cuestión que haya sido más controvertida que ésta, y sobre el terreno en que se la coloca es insoluble. La doctrina y la Jurisprudencia investigan el apremio directo ó indirecto que pudiera emplearse para obligar á la mujer á continuar la vida común, pues de ordinario se trata de la mujer. ¿Por qué abandonaría ella el domicilio conyugal y por qué rehusa volver á él? Los autores y los Tribunales no se preocupan por los motivos que haya podido tener para apartarse de su marido. ¡La mujer desobedece y es preciso que obedezca! Lo que se quiere, pues, es que obedezca; sin embargo, esto mismo no se permite á la mujer respecto del marido que abandona el hogar, para forzarlo á que vuelva á él. Semejante permiso sería un atentado á la potestad marital, dice Demolombe. De manera que la vida común, que es la esencia del matrimonio, es una obligación estricta para la mujer: *dos gendarmes*, si es necesario, la obligarán á cumplirla; pero al marido no puede compelérsele por la fuerza! ¡Hé ahí á lo que conducen los principios de la desigualdad, de la dominación del marido y de la subordinación de la mujer.

"No acepto la intervención de los *gendarmes* cuando se trata del marido ni cuando de la mujer. La fuerza directa ó indirecta empleada

para restablecer la vida común, me parece un contrasentido. Se puede, por el rigor, determinar á la mujer ó al marido á volver al domicilio conyugal; pero ¿esto será restablecer la vida común? Es el caso de repetir las palabras que el primer Cónsul dirigió á los legistas del Consejo de Estado: 'No sabéis en manera alguna lo que es el matrimonio.'"

En cuanto á la separación de hecho, de que hablamos, hé aquí las palabras del mismo ilustrado jurisconsulto:

"Cuando es preciso ocurrir á la fuerza pública para restablecer la vida común, preciso es decir que no hay vida común, es decir, comunidad de sentimientos y de afectos, que son el vínculo de las almas. Así pues, DÉBESE RECONOCER ESTE HECHO Y REGLARLO. El único medio legal que hoy existe, es el divorcio ó la separación de cuerpos; pero este medio *extremo* es siempre penoso aun en el caso mismo de ser necesario. El legislador debe abrir á los esposos el camino de prevenir un rompimiento definitivo; si no se previene, á pesar de todo, esto mismo demuestra la necesidad de la separación voluntaria.

"Esta separación la llamo de *hecho* para distinguirla de la *separación de cuerpos* que relaja el vínculo del matrimonio. La separación de hecho únicamente acredita que la mujer ó el marido no quieren cohabitar, y aunque es indudable que la separación interrumpe la vida común, es lo cierto que todos los medios que se han imaginado para quebrantar la resistencia del esposo que ha abandonado el domicilio conyugal, no producen otro efecto que agriar los ánimos y hacer inevitable el rompimiento definitivo. Yo propongo por esto, regularizar este estado de cosas, á título de ensayo. El juez autorizaría á los esposos para vivir separadamente, después de haberlos oído en la Cámara del Consejo....

"No debe temerse el escándalo judicial, porque el escándalo existe desde antes de ocurrir á la justicia. Cuando una mujer deja el domicilio conyugal, lo saben todos los que tienen interés en ello. A este mal pondría remedio la intervención del juez en el sentido de hacer cesar la violación de la ley, por cuanto el hecho que ha ejecutado el esposo que la ha violado, lo autoriza luégo la justicia. Una vez que la ley reconociera la separación de hecho, el escándalo extrajudicial cesaría y aun podría prevenirse las más de las veces; pues en vez de huír la mujer del domicilio conyugal, demandaría la autorización de vivir separadamente, y durante la instancia la mujer podría, con la autorización judicial, dejar el domicilio del marido. De esta manera el debate no pasaría á las vías de hecho; sería judicial desde el principio, y desde el principio también la autoridad podría usar de su influencia sobre la demandante, y haciendo comparecer ante sí al otro cónyuge, obtener una reconciliación....

"Las ventajas de esta separación de hecho son incontestables. Libres uno de otro, sin la continua excitación que producen las disputas ó las vías de hecho, los esposos reflexionarán sobre las consecuencias que trae consigo un rompimiento definitivo, pues saben que si la prueba á que ellos mismos se someten no produce luégo el efecto de unirlos, puede ser demandado el divorcio; que aún es tiempo de prevenir una separación que puede ser eterna. La triste situación de los hijos, como consecuencia de la suspensión de la vida común, conmoverá el corazón de los padres, y la familia y los amigos podrán interponer sus influencias....

"Si la ley espera que los esposos puedan reconciliarse aun establecido el juicio de divorcio, con mayor razón puede esperar la reconciliación cuando no han pensado en divorciarse; pues si ha habido disgustos, desavenencias, disputas, si la vida común es difícil y aun insoportable, la vida

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

separada también tiene amarguras y penas; los esposos experimentarán una y otra, y puede ser que la prueba calme las disensiones....

"La *separación de hecho* no entraña necesariamente causas de divorcio, pues las desavenencias y aun la incompatibilidad de carácter no son causa de él: el desacuerdo de los esposos puede interrumpir la vida común, y el juez en vano los obligaría á restablecerla: su mandato no tendría sanción; mejor es, pues, que los esposos hagan su voluntad, dado que la reconciliación no puede imponérseles....

"La separación de que se trata, autorizada por el juez, sería un gran bien para la clase proletaria, pues los matrimonios se hacen en ella generalmente con imprudencia extrema. En los contrayentes no hay instrucción, ni educación, y se halla casi extinguido el sentimiento moral, por lo cual son numerosas las demandas de divorcio; de ahí tántas mujeres abandonadas por sus maridos, ó que huyen del domicilio conyugal. Yo conozco muchos obreros, entre los más cultos, á quienes el matrimonio infunde temor porque han visto con sus propios ojos, algunas veces en su misma familia, el espectáculo de la brutalidad: los hombres se embriagan con el dinero de su salario, ó cuando hay quien les dé fiado, y luégo maltratan á su mujer y á sus hijos, sin motivo alguno y sólo por el placer de ser brutales. En cuanto á las desgraciadas mujeres que procuran con su propio trabajo subvenir á las necesidades de su familia, el marido se apodera de su salario para gastarlo en la taberna; si ellas abandonan el hogar, el marido les quita cuanto tienen, un mueble ó un vestido, para venderlo ó empeñarlo en el Monte de Piedad. Para estas infortunadas sería una felicidad la separación de hecho que les permitiese, á lo menos, trabajar con calma para darles pan á sus hijos."

Compendiando nosotros lo expuesto, estimamos que es absolutamente necesario reconocer la *separación de hecho* de los cónyuges, ya porque cuando el vínculo del afecto ha desaparecido, las desavenencias son constantes, repetidos los disgustos y la vida común imposible; ya porque no habría objeto en que ella continuase, y ya porque la separación es inevitable, pues no hay sanción suficientemente eficaz que la impida. Así pues, atendida la importancia que en sí tiene la separación, es deber del legislador reglarla de un modo conveniente.

La intervención del juez es, desde luego, necesaria para prevenir las vías de hecho; para autorizar una conferencia amigable entre los cónyuges, en presencia de personas respetables, á fin de procurar la reconciliación entre ellos, y para que si ésta no se verifica, se determinen los derechos y deberes de cada uno, en conformidad á lo que dispongan las leyes.

En el Código de Policía del extinguido Estado de Cundinamarca, sancionado el 8 de Enero de 1859, se halla un capítulo sobre *Potestad doméstica*, en el cual se disponía:

Que cuando un marido solicitara el auxilio de la policía para recuperar á su mujer, por haberse fugado de la casa, se practicaran las diligencias concernientes para su aprehensión, y, obtenida, se entregara al reclamante; pero que si la mujer exponía algún *motivo legal* que autorizara su separación de la casa, se la depositara en otra, hasta que por la autoridad competente se decidiera definitivamente sobre la separación.

A la mujer se le ha considerado, pues, cual si fuera *cosa;* se la buscaba, y, obtenida, se entregaba á su dueño. Sin embargo, se dirá, la mujer podía alegar un *motivo legal*, y en este caso se la depositaba en la casa

que el marido elegía entre cuatro que el jefe de policía le presentaba. Pero ¿cuáles eran los motivos *legales* que la mujer podía alegar? El Código no los establecía; y seguramente no podían ser otros que los determinados por la ley civil para fundar una demanda de divorcio. De manera que cuando la separación de la mujer era ocasionada por el trato áspero del marido, por su mezquindad, por la antipatía que la mujer le profesaba, por la repugnancia invencible y profunda que el marido le inspiraba, como estos hechos no estaban erigidos en causales de divorcio, la pobre mujer era entregada á ese hombre á quien odiaba, se le forzaba á vivir con él, se le obligaba á recibir sus caricias! Esto es cruel, es bárbaro; propio de tiempos que felizmente pasaron yá para las sociedades civilizadas.

Hé aquí otras disposiciones del mismo Código, que no necesitan comentario:

Si la mujer reincidía en la fuga, podía imponérsele encierro correccional por quince días á seis meses.

Si ella se quejaba de trato cruel, y daba la prueba debida, se la depositaba si había motivo para temer la repetición del mal trato. El jefe de policía podía también obligar al marido "á dar caución de no abusar en lo sucesivo de los *derechos* que tiene," y mediante la caución, se obligaba á la mujer á volver á casa del marido. De manera que la garantía para la mujer era una caución que, en caso de infracción, se satisfacía pagando una cantidad de dinero.

Si por la conducta relajada del marido, ó *inmoderados* tratamientos á su mujer, había lugar á justas quejas de parte de ésta, el jefe de policía apercibía al marido, lo apercibía simplemente, y *sólo en el caso* de que no se corrigiera le imponía la pena de arresto, ó la de reclusión hasta por tres meses.

Cuando la mujer, sin *causa legal* (hemos dicho que el Código no definía las causas legales de que habla, y que probablemente se refería á los motivos que pueden alegarse para el divorcio) rehusaba vivir con su marido, se la apercibía por el jefe de policía, y si continuaba en su rebeldía, podía imponérsele arresto, encierro correccional, ó reclusión *por el tiempo que quisiera el marido*, con tal que no pasara de seis meses.

Estas disposiciones están condenadas por la justicia y la civilización; pertenecen á las remotas edades en que la mujer era reputada *cosa*; pero no á la época actual. Hoy la mujer es la dulce compañera del hombre. Con razón la Iglesia católica dice al varón, en momento muy oportuno y solemne: "Esposa os doy, y no sierva."

La Ordenanza número 38 de 1888, expedida por la Asamblea del departamento de Cundinamarca, modificó las disposiciones del Código de Policía, de que acabamos de hablar. A virtud de las nuevas disposiciones, la mujer no está yá obligada á alegar *causas legales* que justifiquen el abandono del hogar, sino motivos *razonables*; pero si no le parecieren táles al jefe de policía, éste debe entregar la mujer al marido. En caso de reincidencia de la mujer, sin motivo suficientemente razonable, se le debe imponer, no yá la pena de quince días á seis meses de encierro correccional que prescribía el Código, sino la de reclusión hasta por UN AÑO, *á voluntad del marido*. Esto se dispone con el fin de restablecer la *vida común* de los casados, y de llevar al seno del hogar la *armonía y el amor!!*

Un procedimiento análogo se ha establecido en la memorada Ordenanza para el caso en que la mujer rehuse trasladarse al lugar que el marido escoja para residir.

Las nuevas disposiciones son tan inaceptables como las antiguas. La

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

circunstancia de que la mujer pueda alegar motivos *razonables*, es cosa poco favorable para ella, ya porque se presta fácilmente á la arbitrariedad del jefe de policía; ya porque los motivos, aunque muy justos y razonables, pueden ser de tal naturaleza que la mujer no se atreva á alegarlos por decoro, por honestidad.

Convenzámonos que el matrimonio no es ni debe ser la unión forzada y violenta de dos personas que no se avienen.

La moral, la religión, con las censuras que la Iglesia ha establecido; la opinión pública, respecto de las mujeres cultas; el interés de la familia en impedir la separación de los esposos, cuando no hay para ella causa suficiente; el amor á los propios hijos, y las amarguras que á su vez trae consigo la separación misma, son móviles tan poderosos, y su acción tan natural y constante, que lo que no se pueda obtener por ellos no se consigue por la fuerza.

Nuestras ideas en esta materia se resumen, en lo relativo á los puntos principales, en las siguientes proposiciones:

1.ª La separación de la mujer debe permitirse en todo caso, con derecho á administrar ella libremente sus bienes, si fuere mayor de edad.

2.ª Si el marido alega y justifica debidamente, en juicio sumario, la tendencia de la mujer á pervertirse, se la debe depositar en una casa honesta, á petición de aquél, y en casos graves colocársela en una de corrección; sin perjuicio de que recaiga sobre lo mismo sentencia definitiva en juicio ordinario. En este caso la administración de los bienes debe estar á cargo del marido si da las cauciones necesarias.

3.ª La alimentación de la mujer depositada ó detenida debe ser de cargo del marido.

Si la mujer tuviere bienes propios que administre el marido, la pensión alimenticia debe ser mayor; el juez la regulará.

4.ª El marido que abandona su hogar debe ser obligado á suministrar á su mujer é hijos todo lo necesario; sin perjuicio de lo que se disponga en la sentencia que se dicte á virtud del juicio de divorcio á que haya lugar.

Hé aquí, finalmente, lo que dispone el Derecho Canónico en esta delicada materia:

"Las causas por las cuales conceden las leyes eclesiásticas el divorcio temporal son, entre otras:

"1.ª El peligro del alma: cuando un cónyuge compele al otro á cometer grave pecado, v. gr., de robo, asesinato, envenenamiento, ó de impureza. *Canon idolatria* 5. et can. seq. causa 28 cuaest 1.—Canon *de illa* 6. et. c. quanto 7. De *divortiis*, etc.

"2.ª El peligro del cuerpo: porque siempre que por motivo de la cohabitación amenaza á uno de los cónyuges grave daño corporal, que no puede evitarse sino por medio del divorcio, puede divorciarse, porque ni el derecho natural ni el divino prohiben que evitemos este grave mal corporal.

"3.ª La sevicia ó el furor del marido: Cap. *ex transmissa* 8. et cap. *litteras* 13. De *restit. spoliat.*

"4.ª La molesta cohabitación: por la frecuencia de querellas, disensiones y riñas que suele excitar el mal carácter inveterado de uno de los cónyuges, porque el temor de estas molestias es grave y cae en varón constante, y por tanto en un matrimonio de esta clase peligra la salud del cuerpo y la del alma. Enríquez.—Sánchez.—Layman.—Pirrhins, etc."

(Schmalzgrueber. Pars IV. Titulus XIX. De *Divortiis*).

Nuestro Código reconoce la causal 3.ª de las cuatro mencionadas, es decir, la *sevicia ó el furor del marido.* Constitnyen esta cansal los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra si con ellos peligra la vida de los cónyuges, ó se hacen imposibles la paz y el sosiego domésticos; pero no reconoce la causal 4.ª: *la molesta cohabitación*, que la constituyen motivos menos graves que los que informan la 3.ª, es decir, todos aquellos defectos de cualquiera de los cónyuges que originan constantes disgustos, que hacen imposible la vida común, y ponen en peligro la salud del cuerpo y la del alma.

En el Derecho Canónico no se pierde, pues, de vista lo que es natural y razonable tener presente: la paz del hogar.

Debemos también hacer notar que, tratándose de divorcio meramente temporal, se sigue un procedimiento breve y sumario. Tenemos conocimiento de varios matrimonios en que el Prelado de esta Diócesis, el ilustrado canonista Monseñor Arbeláez, autorizó el divorcio temporal, previa audiencia de los cónyuges, y sin necesidad de seguir el largo y enojoso juicio ordinario que se sustancia para decretar el divorcio definitivo.

La legislación canónica concede, pues, lo que el legislador civil no ha sabido conceder: *el divorcio temporal.* Nótase en el fondo de aquella legislación un sentimiento de benevolencia y compasión por la mujer, á quien se conmina con censuras que tienen la inapreciable ventaja de que ejercen su influencia continuamente, en el caso en que la propia conciencia esté diciendo que se obra mal. El legislador civil procede en sentido opuesto: á la mujer que no puede hacer vida común con el marido porque lo aborrece, y lo aborrece porque es mezquino, insociable, desaliñado en su persona, insufrible en todo sentido, á esa mujer se la aprisiona en una casa de corrección para que *adquiera paciencia y resignación*, y cuando vuelva al hogar *ame mucho á su marido y sea apacible y dulce con él!!*

Satisfacción sentimos en censurar estas cosas, porque la tenemos muy grande en decir la verdad y clamar contra toda injusticia.

Por fortuna se puede excusar la aplicación de las mencionadas disposiciones de policía: ya porque, no teniendo carácter de leyes (1), no pueden sobreponerse á la letra ni al espíritu de la ley civil, que no ha establecido sanción alguna para el caso de separación; y ya en consideración á lo estatuído en los artículos designados en la *Codificación Nacional*, Tratado 1.°, con los números 77, 78 y 79 de orden.

(1) El Código de Policía es una simple ordenanza.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

II

RETROACTIVIDAD

DE LAS LEYES RELACIONADAS CON EL MATRIMONIO

Un distinguido literato, que ha ejercido intervención notable en los sucesos políticos del nuevo régimen llamado Regeneración fundamental: ya como uno de los autores del proyecto de Constitución que sirvió de base para la expedición de la que en la actualidad rige, ya como Delegatario, ya como Consejero de Estado, escribió sobre la misma materia en que vamos á ocuparnos, varios artículos que *El Correo Nacional*—números 41, 43, 51 y 53—acogió en el año próximo pasado, y los cuales nos han determinado á escribir esta disertación.

Dicho escritor, al dar principio á su exposición, dijo:

"La reparación es principio de equidad universal.

"Los males causados por una ley injusta deben ser reparados por una ley justa.

"De aquí la facultad de hacer leyes llamadas retroactivas, para reparar en lo posible injusticias legales, y no con otro fin, que sería á su vez injusto.

"Los males yá causados son en parte irreparables ... La retroactividad de una ley reparadora no consiste en volver atrás para reformar hechos cumplidos, irrevocables, sino para mudar la calificación jurídica de aquellos que sirven de causa á efectos que deben producirse *después* de la promulgación de la ley....

.....

"Siendo peligrosa la facultad de hacer leyes retroactivas, debe restringirse, pero no desconocerse. Tal prohibición absoluta impediría toda reparación, aunque incompleta, como se ve por el ejemplo propuesto de la abolición de la esclavitud."

En pocas palabras. El mencionado escritor afirma:

1.° Que es por medio de leyes retroactivas como se reparan en lo posible las injusticias legales que se hayan cometido, pues dice que si fuera prohibido expedir dichas leyes, se "impediría *toda* reparación."

2.° Que la retroactividad de una ley reparadora *no consiste en volver atrás* para reformar hechos *cumplidos*, sino para *mudar* la *calificación jurídica* de las causas, á fin de modificar los efectos que hubieran de producirse.

Nada ha podido disponer mejor el ánimo de los lectores, en el sentido de aceptar la retroactividad que se asigna luégo á las leyes sobre matrimonio, que decirles:

Los males de una ley injusta deben ser reparados por una ley justa. Cierto es que la ley reparadora debe ser retroactiva; pero téngase entendido que la retroactividad no altera los hechos cumplidos.

No alterándose los hechos cumplidos, el lector ha tenido que deducir que las leyes reparadoras, aunque retroactivas, no vulneran ningún derecho adquirido, y, no vulnerándolo, es claro que tales leyes son perfectamente aceptables y en alto grado benéficas.

Luégo veremos si estos conceptos del escritor de *El Correo Nacional* son exactos, y si él es consecuente con ellos.

Para que haya claridad en la presente disertación juzgamos necesario examinar tres puntos previos.

Punto primero. ¿Qué se entiende ó debe entenderse por *injusticia legal?*

El *derecho* es anterior á la ley; la misión de ésta es reconocerlo y asegurarlo. Si reconoce y asegura como *derecho* lo que por su propia naturaleza no es tál, instituye una *injusticia legal;* y desde luego es evidente que en esto hay diversidad de gradaciones, desde la simple injusticia hasta la injusticia máxima.

Ahora bien: es innegable que tan luego como se reconozca que una ley ha establecido una injusticia legal deben hacerse las reparaciones posibles, para lo cual el legislador debe tener la facultad de expedir leyes *reparadoras.*

Punto segundo. ¿En qué consiste la reparación de una injusticia legal?

Nadie podrá negar que consiste en prevenir un mal que amenaza, un mal futuro; en impedir la continuación de uno que es actual, presente, y en satisfacer por el mal sufrido.

a). La ley que prohibiera á las mujeres casadas disponer libremente, en testamento, de cualquiera parte de sus bienes, establecería una injusticia legal, que no podría repararse sino para lo *futuro*, derogando ó reformando la ley; pues el mal de que las mujeres que hubiesen muerto, durante el régimen de la ley, sin poder disponer de sus bienes por acto testamentario, es un mal irreparable.

b). Admítase la existencia de una ley que prohiba á los padres corregir á sus hijos. El mal actual, consistente en que los hijos no puedan recibir correcciones paternas por las faltas que diariamente están cometiendo, puede corregirse, ya derogando, ya reformando la ley en el sentido de permitir ciertas represiones. Asimismo se previene el mal de que en lo futuro los padres no pudieran corregir á sus hijos. El mal causado por la falta de las oportunas correcciones paternas es irreparable. De la misma manera se corrige—derogando ó reformando la respectiva ley—el mal actual de que una mujer casada deba *obediencia* al marido.

c). En caso de confiscación de bienes, la ley que ordenara la restitución, repararía un mal presente: el consistente en las consecuencias ocasionadas por el despojo, es decir, los sufrimientos positivos, por una parte, y los negativos por otra. Si la misma ley ordenara la *satisfacción* de los perjuicios ocasionados, repararía, en parte, un mal causado. La reparación de los males causados, en el sentido de *satisfacerlos*, rara vez puede verificarse, por lo cual la reparación de una injusticia legal no consiste, generalmente, en otra cosa que en impedir la *continuación* de un mal actual, ó en *prevenir* la existencia de uno futuro.

Cuando se impide la *continuación* del mal, proveniente de una injusticia legal, se obtienen beneficios negativos y positivos: los negativos consisten en dejar de sufrir—lo cual es un bien,—y los positivos, en los bienes que pueden obtenerse en virtud del cambio de situación. La cesación del mal es un beneficio para la sociedad y para los individuos que

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

eran víctimas de él; hay, pues, en este caso personas perfectamente asignables.

Cuando se *previene* un mal que amenaza, se obtienen, generalmente, beneficios negativos, consistentes no yá en *dejar* de sufrir, sino en *no sufrir;* y positivos, por cuanto se goza de los bienes que haya de producir la reforma ó la derogación de la ley. Aunque en este caso no hay, como en el anterior, personas perfectamente asignables, no por ello puede decirse que los beneficios son ilusorios, pues la sociedad goza de ellos.

¿Podrá desconocerse el carácter de *reparadoras* de una injusticia legal á las leyes que *previenen* los males que ésta puede ocasionar? Creemos que nadie osará desconocerles ese carácter. Ahora bien: como estas leyes no son retroactivas, pues obran únicamente sobre lo por venir (ejemplo *a*); como tampoco son retroactivas muchas de las que tienen en mira corregir un mal actual (ejemplo *b*), juzgamos que no está en lo cierto el ilustrado escritor de *El Correo Nacional* cuando dice que si se prohibiera en absoluto expedir leyes retroactivas, se impediría *toda* reparación.

Veamos algunos casos de leyes reparadoras que se hallan en relación con los conceptos que hemos transcrito del mencionado escritor.

d). Una ley califica de ilegítimos á los hijos en quienes no concurren ciertas condiciones. Previo un examen imparcial y reflexivo, se advierte que hay en ello injusticia legal, y con tal motivo se expide una ley en que se dispone que desde que la misma éntre en vigor, los hijos reputados á la sazón *ilegítimos*, serán *legítimos*, y lo serán también los que luégo nazcan en las condiciones dichas.

La nueva ley vuelve atrás, evidentemente, no para reformar un hecho cumplido, sino para *mudar una calificación jurídica:* los hijos calificados de ilegítimos los califica de legítimos, lo cual se hace con el fin de que los efectos por venir, respecto de los hijos que eran ilegítimos, sean diferentes de lo que serían si la nueva ley no se hubiera expedido. Este es el caso de reparación de injusticia legal que estuvo en la mente del escritor de *El Correo Nacional*, cuando emitió los conceptos que hemos reproducido al principio de esta disertación.

e). Si la ley colombiana que derogó las que permitían la vinculación de los bienes raíces, con prohibición de enajenarlos, se hubiera limitado á derogarlas, es claro que sólo habría reparado un mal futuro; pero como además declaró la nulidad de las cláusulas existentes, que establecían tal prohibición, la reparación se refirió también á hechos que eran actuales al tiempo de la expedición de la ley nueva, pues se hizo posible la enajenación de los bienes que á la sazón se hallaban vinculados, con lo cual se modificó un hecho presente.

Esta ley volvió, sin duda, atrás; obró sobre un hecho cumplido: las cláusulas que prohibían la enajenación de los bienes vinculados, y las anuló. En este caso no hubo, como en el anterior (*d*), simple mudanza de calificación jurídica, á no ser que para el mencionado escritor sea lo mismo *anular* un acto de que se trata, que *mudar realmente su calificación jurídica*, como se muda cuando se dice: tales hijos reputados *ilegítimos*, serán de hoy en adelante *legítimos*.

Hay conformidad en los dos ejemplos que preceden (*e* y *d*) en que las leyes son reparadoras, en que vuelven atrás para modificar efectos por venir, y que no obstante su acción retrospectiva, no vulneran ningún derecho adquirido, pues á lo más podrán afectar simples esperanzas. Hay desconformidad en dichos dos ejemplos, en lo relativo á la manera como se obra sobre lo pasado: en el caso (*d*) se muda simplemente una calificación jurídica; en el caso (*e*) se anula un acto, una cláusula, y de este modo se modifica lo presente.

En ambos casos las leyes son retroactivas por cuanto vuelven atrás; pero como no vulneran ningún derecho adquirido, se las considera *retroactivas en primer grado*. Algunos jurisconsultos las llaman *retrospectivas*, simplemente.

Los dos ejemplos que siguen difieren esencialmente de los dos que preceden.

f). La ley que abolió la esclavitud fue reparadora en un doble sentido: impidió que en lo sucesivo se constituyeran nuevos esclavos; y reparó un mal presente, dando libertad á los esclavos que había á la fecha de su expedición. En este segundo aspecto la ley volvió atrás, no como en los casos precedentes (*e* y *d*), pues *desconoció y anuló el derecho* de los amos, y así, *vulneró un derecho adquirido* al amparo de antiguas leyes.

g). Supóngase que por ser permitidas las donaciones universales fuera lícito á un padre de familia donar todos sus bienes y dejar en la ruina á sus hijos. La ley que se limitara á prohibir tales donaciones pondría remedio á un mal futuro. Si anulaba todas las yá consumadas, ó algunas de ellas, á partir de cierta época, la reparación afectaría hechos cumplidos y *vulneraría derechos adquiridos*.

Las leyes que vulneran, como éstas, derechos adquiridos, se llaman *retroactivas en segundo grado*.

De lo expuesto se deduce:

1.° Que hay leyes reparadoras de injusticias legales que no tienen carácter retroactivo (ejemplos *a* y *b*).

2.° Que las leyes reparadoras que son retroactivas vuelven sobre lo pasado, necesariamente, unas veces para mudar tan sólo una calificación jurídica (ejemplo *d*); otras, para alterar un hecho cumplido, á fin de modificar ya un estado presente, ya efectos por venir (ejemplo *e*), sin vulnerar derechos adquiridos; y otras, vulnerándolos (ejemplos *f* y *g*, al fin).

No es, pues, del todo exacta la afirmación del escritor de *El Correo Nacional* de que la "retroactividad de una ley reparadora no consiste en volver atrás para reformar hechos cumplidos, irrevocables, sino para mudar la calificación jurídica de aquellos que sirven de causa á efectos que deben producirse *después* de la promulgación de la ley."

Y ¡cosa extraña! el ilustrado escritor propone luégo, en su apoyo, el ejemplo de la ley sobre abolición de la esclavitud, la cual no se limitó, en esencia, á mudar una calificación jurídica,—como se muda en el ejemplo *d*—pues volvió atrás, no para *reformar*, simplemente, sino para *desconocer*, para *anular* un hecho pasado: el *derecho* que los amos habían *adquirido* sobre los esclavos. Si esto sucedió, se nos dirá, es porque tales suelen ser los *efectos de la mudanza de una calificación jurídica*, pues el legislador se limitó á declarar que los que en la actualidad eran *esclavos*, serían en adelante hombres *libres*, con lo cual no hizo sino mudar una calificación jurídica. El lector reconocerá que este no es el espíritu del pasaje que acabamos de transcribir, pues lo que el escritor quiere en él es desvanecer la idea de que las leyes reparadoras retroactivas *vulneran derechos adquiridos*, y que se crea que su acción se limita á una simple mudanza de calificación jurídica. (Ejemplos *e*, segundo inciso, y *g*, al fin).

Punto tercero. ¿Será lícito expedir leyes, sean ó no retroactivas, para reparar las injusticias legales cometidas? Si el legislador, cegado por la pasión, ó extraviado por intereses de partido, eleva á la categoría de

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

derecho lo que en sí no es sino una grande injusticia; ó si en un momento de irreflexión ha expedido una ley tal, que á la hora presente ha producido, está produciendo ó amenaza producir grandes males, ¿carecerá de la facultad de satisfacer en lo posible los yá causados, de remediar los actuales y de prevenir los futuros?

Examinemos esta cuestión.

En cuanto la acción legislativa se limite á reparar males presentes ó futuros, sin volver atrás (casos *a* y *b*), no se presenta ningún inconveniente de carácter general.

Si hubieren de expedirse leyes de efecto retroactivo en primer grado, no hay motivo que pudiera justificar una regla general en sentido opuesto. Sin embargo, en este caso se requiere mayor prudencia aún que en los casos *a* y *b*, porque es preciso que realmente haya una buena razón justificativa de la ley que se pretende expedir, pues las leyes retroactivas en primer grado, frecuentemente lastiman algunas esperanzas, y éstas no deben herirse inconsideradamente: las esperanzas constituyen uno de los mayores halagos de la vida. ¿Qué sería de una persona que no tuviera esperanzas? La carencia de ellas contribuye en mucho á que la vejez sea un tanto triste, pues en esa época de la vida se ven extinguidas ó marchitas las que fueron las más dulces ilusiones y esperanzas.

Tratándose de expedir leyes retroactivas en segundo grado, yá se presentan serias dificultades, porque si la reparación de una injusticia legal es un bien, á su vez es causa de un mal que puede ser muy grave, cual es la violación de los derechos adquiridos. Hablando de estas leyes retroactivas dice un jurisconsulto chileno muy notable, que son *violentas* y *expoliatorias*.

Pero bien: ¿es ó nó lícito expedir estas leyes? ¿Podrá formularse alguna regla general? Esta cuestión no puede resolverse sino tomando por criterio *el bien público*, y vamos á ensayar resolverla.

h). Hemos dicho que las injusticias legales consisten en reconocer y asegurar como *derecho* lo que en sí no es tál, y que en esto hay diversidad de gradaciones, desde la simple injusticia hasta la injusticia máxima. Ahora bien: hay hechos que han sido elevados á la categoría de *derechos*, ya á virtud del empleo de la fuerza, puesta al servicio de ambiciones personales ó de secta; ya por la influencia de las pasiones de partido; ya porque en su principio han podido parecer buenos ó indiferentes, ó poco nocivos para la sociedad, á lo menos á los ojos de cuantos deseaban que tuviesen aquel carácter; pero á medida que los intereses sociales se han desarrollado y multiplicado, á medida que los pueblos han ido estrechando sus relaciones de amistad y comercio, á medida que se ha avanzado en cultura y civilización, ha sucedido que semejantes ilegítimos derechos han ido presentando carácter perjudicialísimo en alto grado; se ha advertido respecto de algunos, como la esclavitud, que eran la violación de la ley moral, de la ley de caridad y justicia predicada por Jesucristo, y que su maligna influencia perturbaba las relaciones económicas y políticas de la sociedad, por lo cual era preciso desconocerlos, anularlos, extirparlos del cuerpo social como se arranca el cáncer del cuerpo humano.

i). Por esto, en momento propicio se han dictado las leyes adecuadas para tal objeto, las cuales han sido necesariamente retroactivas en segundo grado. Desde luego es evidente que se ha hecho muy bien en dictarlas, y que en lo sucesivo deben expedirse leyes de la misma naturaleza, en casos análogos, porque así lo exige, sin duda alguna, *el bien público*.

Hé aquí algunos casos en que ha habido, en concepto de los partidos políticos que han ejercido el poder público en este país, injusticias legales que era preciso reparar y que se repararon por medio de leyes retroactivas en segundo grado.

El partido liberal, vencedor en la contienda armada de 1860 á 1862, estimó como un mal gravísimo, perturbador de las relaciones económicas y políticas, que las entidades llamadas de *Manos muertas* fuesen dueñas del gran cúmulo de bienes que poseían, y con tal motivo se expidieron los decretos y leyes de desamortización que todos conocemos. Como se desconoció el derecho actual de los poseedores para continuar poseyendo sus bienes, no obstante el derecho adquirido por los mismos bajo el amparo de leyes preexistentes, la ley fue retroactiva en segundo grado; y no de otra manera habría podido extirparse lo que se consideró como una injusticia legal.

El constituyente de 1886 consagró en la Constitución que en la actualidad rige, una disposición análoga á la anterior, es decir, una disposición de efecto retroactivo en segundo grado. Nos referimos al artículo constitucional que declaró que las minas de oro, de plata, de platino y de piedras preciosas que existen en el territorio nacional son de propiedad de la República. Es claro que esta disposición *despojó* á los dueños de predios del derecho que respecto de las minas que hubiera en éstos les habían reconocido las leyes; lo cual se hizo porque se estimó que había injusticia legal en que el dueño de un predio lo fuera de las minas que en él existieran; que era preciso que éstas pasaran al dominio de la Nación para que pudieran cederse á quienes las descubrieran. En una palabra: se juzgó que el derecho que en las minas tenían los dueños de los respectivos predios, era contrario al *bien público*.

En este caso, como en el anterior, fue preciso dictar una ley retroactiva en segundo grado, pues era imposible corregir de otro modo lo que se estimaba como un grave mal.

Que en los dos casos de que acabamos de hablar haya habido ó nó una verdadera injusticia legal que mereciera reparación, es cosa que no afirmamos ni negamos aquí, porque no es propio discutirlo en este lugar. Para nuestro propósito basta recordar que se ha legislado en el sentido indicado, esto es, que habiéndose estimado que había injusticias legales que corregir, se expidieron leyes retroactivas en segundo grado.

Los convencionistas franceses de 1794, dominados por la idea de implantar el gran principio de la igualdad, estimaron como una injusticia legal que los bienes hereditarios no se distribuyesen por iguales partes, y con tal motivo expidieron la ley de 17 nivoso del año II, en que establecieron tal principio; pero no se limitaron á establecerlo para lo por venir, sino que lo extendieron á particiones yá consumadas, las cuales *anularon*, no obstante las leyes, costumbres y disposiciones contrarias, y retrotrajeron la anulación hasta el 14 de Julio de 1789, fecha de la toma de la Bastilla. Esto hicieron en 1794. Con razón dice, respecto de esta ley, un notable escritor liberal, francés: "Esto era pagar caro los beneficios de la igualdad en materia de sucesiones, porque para asegurarlos, el legislador violaba la propiedad, base del orden civil y político."

j). Si lo expuesto acredita que hay injusticias legales que no pueden corregirse sino expidiendo leyes que vuelvan atrás y vulneren derechos adquiridos, no menos comprueba que la facultad de expedir tales leyes es en *extremo peligrosa*, porque el legislador interesado en expedirlas es quien califica de injusticias legales los derechos adquiridos que él mismo pretende vulnerar. Muy buena y digna de aplauso fue la ley co-

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

lombiana de carácter retroactivo que abolió la esclavitud; ¿podrá decirse lo mismo de la ley francesa que anuló las particiones? ¿Cómo ha estimado el partido que fue vencido en 1861 las leyes sobre desamortización? ¿Cómo se estimará en lo por venir la Ley 123 de 1887 que gravó con un impuesto llamado *derecho complementario de título* á los actuales dueños de bienes desamortizados, que los adquirieron á virtud de contrato celebrado bajo la garantía de la ley, y en consideración á la promesa de seguridad que necesariamente les inspiró la palabra del Gobierno mismo como parte contratante? Porque, si era justa la reparación, si era necesario que "las fincas marcadas antes con el sello odioso de su origen, entraran, con mayor valor, en la circulación," como dice el mismo ilustrado escritor de *El Correo Nacional*, la reparación debió hacerse, indudablemente, del Tesoro público, es decir, á costa de la Nación entera, y no con gravamen exclusivo de los actuales poseedores (1), cuyos derechos, provenientes de un contrato lícito, merecían tanto respeto como cualquiera otro. Si el *bien público* hacía necesaria y aun urgente la reparación, también exigía que se respetaran los derechos adquiridos, porque, como dice Merlin con sobra de razón, el legislador que se permite expedir leyes violatorias de sus promesas, mancilla su propia honra y quebranta una de las primeras reglas del orden social.

k). Peligrosísima es, pues, la facultad de expedir leyes de efecto retroactivo en segundo grado; lo es tánto, que no hay quien no se incline á creer, cuando se halla dominado por la dolorosa impresión de los abusos que dondequiera se han cometido, que sería preferible que el legislador careciera en absoluto de la facultad de dictarlas, con razón mayor si se observa que la sociedad misma corrige las grandes injusticias legales, en esos momentos de exaltación y locura que se llaman revoluciones. Sin embargo, nosotros creemos que, tratándose de reparar injusticias de la naturaleza de las mencionadas en el párrafo (*h*) de este tercer punto, debe tener el legislador la indicada facultad, pues ellas se corrigen mejor bajo el imperio de la paz y el orden, no cuando la razón y la calma han desaparecido; pero debe procederse con suma prudencia y con temor.

Respecto de los otros casos de injusticia legal, cuya reparación no pueda conseguirse sino por medio de leyes retroactivas en segundo grado, la prohibición de expedirlas debe ser *absoluta*. Justifiquemos esto con un ejemplo. Tomamos precisamente el caso que es objeto principal de los artículos de *El Correo Nacional*.

l). El legislador civil ha creído que el matrimonio, considerado desde un punto de vista diferente del religioso, es asunto que cae bajo su jurisdicción, por ser un verdadero contrato (2), como que lo constituye el concurso de dos voluntades. Fundado en ello ha establecido prohibiciones relativas á la edad y calidad de los contrayentes; ha prescrito solemnidades para su celebración, tanto para asegurarse del consentimiento de quienes lo contraen, cuanto para la constancia de la celebración del contrato mismo; ha establecido los derechos y deberes recíprocos de los cónyuges; las obligaciones y derechos entre los padres y los hijos, y finalmente, ha dispuesto siempre lo que ha considerado justo en cuanto al derecho de sucesión, en todo lo cual ha procedido sobre la base de que el

(1) Quien esto escribe ni remató bienes desamortizados, ni ha tenido que pagar *derecho complementario de título*.

[2] La circunstancia de ser el matrimonio un contrato constitutivo de un estado civil, y consideraciones de bien público, han determinado al legislador á establecer las prevenciones de que aquí se habla.

estado de las personas se halla y debe hallarse bajo el dominio del legislador. Ahora bien: en cada uno de los extinguidos Estados se expidieron leyes en que se dispuso que el matrimonio, *como contrato civil*, es decir, como hecho constitutivo de un estado jurídico, debía celebrarse ante determinado funcionario, para que hubiera seguridad de que era real el consentimiento de ambas partes, y de ello quedara constancia en un instrumento público, esto con el fin de que los derechos y deberes *civiles* propios de dicho estado, pudieran hacerse efectivos llegada la ocasión. Estimando que eran esenciales las solemnidades prescritas para la celebración del contrato, se declaró que si se prescindía de ellas no había matrimonio. En consecuencia, los hijos habidos de cualquiera unión que no se verificase de conformidad con la ley, no eran legítimos, y no gozaban de los derechos que la misma asignaba á los que tenían este carácter. En este estado de cosas, vino el cambio de instituciones que ha traído la *Regeneración fundamental*, y se consideró como injusticia legal el que fuesen ilegítimos los hijos habidos en los matrimonios exclusivamente católicos, y careciesen con tal motivo de los derechos que las leyes asignaban á los legítimos.

Si esto era una injusticia legal, á los ojos del moderno legislador, ¿cómo debía corregirla? Sin inconveniente alguno podía disponer que los hijos que nacieran de matrimonio católico se reputaran legítimos; también pudo establecerse, sin que hubiera perjuicio en ello, que los yá nacidos en esos matrimonios tuviesen el mismo carácter, á fin de que *en adelante* gozasen de los derechos consiguientes, siendo uno de ellos el heredar á sus padres cuando llegase el momento de deferirse la herencia de éstos, es decir, cuando los padres muriesen. ¿Debería acaso haberse dispuesto también que tales hijos tenían derecho á recoger las herencias *yá deferidas*, es decir, las herencias que por ministerio de la ley vigente habían pasado á las personas á quienes ésta llamaba á suceder? En otros términos: ¿pudo expedirse, en este sentido, una ley de efecto retroactivo en segundo grado? Examinemos este punto.

Los efectos de semejante ley consistirían, desde luego, en despojar de los bienes hereditarios á los que eran actuales poseedores, para que los poseyesen las personas á quienes de repente se investía del carácter de herederos. Se tomarían, pues, los bienes de quienes los habían adquirido, no por el fraude ni la violencia, sino por ministerio de la ley, para pasarlos á manos de otros que ni los habían poseído, ni habían tenido la esperanza de poseerlos nunca, porque la ley ni les había dado tal esperanza, ni se la había arrebatado. Ahora bien: la ley de los extinguidos Estados se refirió enteramente á lo *futuro*, á los hijos *por nacer*, por cuanto se limitó á disponer que para que el matrimonio tuviera existencia *legal* y produjera efectos era necesario que se celebrase con arreglo á ciertas solemnidades. Lógico era, pues, no reputar legítimos, y no reconocerles derechos á los hijos habidos de uniones no contraídas con arreglo á la ley; y si cuando ellos vinieron al mundo ningún derecho tenían, si ninguna esperanza se les formó luégo, es claro que nada se le quitó; sin embargo, la ley retroactiva de que hablamos violaría el *derecho* de los poseedores, en favor de los que ninguno tenían. ¿Admitirán comparación los males provenientes de quitarles lo suyo á quienes lo poseen, para darlo á quienes no son sus dueños? Como las adquisiciones primitivas se verificaron por disposición de la ley, los adquirentes tuvieron esperanza de poseer siempre; fundados en ella arreglaron sus negocios, resolvieron lo conveniente sobre la educación y colocación de sus hijos, atendieron á

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

sus previsiones para el estado de vejez; en una palabra: dispusieron su plan de vida sobre la base de seguridad que les inspiró la ley. ¿Será justo, será equitativo arrebatar estos derechos, burlar estas esperanzas en beneficio de personas que, sabiendo ó debiendo saber—pues la ley era expresa—(1) que carecían de derechos, jamás pudieron tener ni siquiera una fundada esperanza? A quien se quitan todos sus bienes ó una parte de ellos para darlos á otro, se le coloca en situación de no poder atender á sus necesidades como antes, se le priva de los goces á que estaba habituado, y el nuevo poseedor entra á disfrutar de satisfacciones nuevas. ¿La desgracia de aquél será equivalente á la felicidad de éste? Consúltese el lector á sí mismo, y dígasenos si, dadas condiciones iguales, no es siempre mayor la pena de la pérdida que el goce de la adquisición.

Hé aquí otra razón. Desde que se reconociera como principio aceptable que para reparar injusticias legales era lícito dictar leyes retroactivas en segundo grado, es decir, leyes que violaran derechos adquiridos, aunque no se tratara de injusticia máxima, ¿qué seguridad se tendría para lo por venir? ¿sobre qué base se podría arreglar un plan de vida, dado que á la hora menos pensada podría arrebatársele á uno lo que poseía? Un sentimiento de desconfianza se difundiría necesariamente; los hombres se volverían suspicaces y recelosos, pues dondequiera verían un peligro; las transacciones se harían difíciles y aun imposibles muchas veces, por el temor de ver uno comprometida su fortuna cuando esperaba acrecentarla ó asegurarla; las promesas de la ley de nada servirían, porque aunque ésta fuese expresa, clara y terminante, una disposición retroactiva todo lo anularía, ningún derecho dejaría en pie. Con semejante orden de cosas, continuado, ¿á qué quedaría reducida la sociedad? Ruina, y miseria, y desolación é inmoralidad serían las consecuencias obligadas de la falta de seguridad. ¿Despojando á las personas de sus bienes, y difundiendo la desconfianza es, acaso, como se consulta el *bien público*? ¿es así como se hace la felicidad de los asociados?

Vamos ahora á prevenir una objeción dirigida á los conceptos emitidos con relación al caso particular en que nos hemos ocupado. Podría decírsenos que habiendo reconocido nosotros mismos que el *derecho* es *anterior* á la ley, no podemos empeñarnos en sostener que el legislador debe respetar un pretendido derecho, que no tiene en su apoyo sino la ley que en mala hora lo estableció. Concretando el cargo. Si el moderno legislador estima como una injusticia legal muy grande, se nos dirá, que la ley no reconociera el carácter de legítimos á los hijos habidos en matrimonio católico,—no pudiendo haber otros de igual ó mejor condición—y si por no haberlo reconocido pasaron á manos extrañas los bienes que en rigor pertenecían á dichos hijos, la ley en virtud de la cual entran éstos en el goce de los bienes que les pertenecen es estrictamente justa, pues ordena una simple *restitución*; en consecuencia, no hay, se nos observará, verdadero despojo, como decimos nosotros, sino el reconocimiento de un legítimo derecho.

La respuesta es muy fácil, porque la cuestión en sí es muy sencilla, y sólo puede oscurecerla el interés de partido, ó ciertas opiniones inexactas que no han recibido la verificación ulterior debida.

ll). El derecho es anterior á la ley, hemos dicho, y esto está hoy fuera

(1) Es precepto legal, que se halla en consonancia con la ciencia de la legislación, *que nadie puede alegar ignorancia de la ley.*

de duda. Si se erige en *derecho* una grande iniquidad, no porque así se declare deja ésta de ser lo que en sí es; no porque el legislador lo quiera, se convierte lo malo en cosa lícita y buena. Los hombres no mudan la naturaleza de las cosas. Un hecho es derecho porque está en su naturaleza serlo, y cuando el legislador así lo declara, lo que hace es reconocer una verdad. Esto es lo que hemos querido significar cuando hemos dicho que *el derecho es anterior á la ley*. Pero no es menos cierto que cuando el legislador declara un derecho, aun cuando el hecho que es objeto de la declaración no tenga este carácter conforme á su propia naturaleza, es reconocido como tál—como derecho—por todo el mundo, y no hay quien en sus negocios y en el arreglo de sus asuntos no proceda en conformidad á la declaración legislativa: las leyes reglan la conducta de los hombres, y si alguno pretendiera sustraerse á la regla, ó proceder en sentido opuesto, se quedaría aislado, ó correría la suerte del nadador que lucha contra la corriente. Así pues, todos los hombres arreglan sus actos á las prevenciones de la ley; si de otro modo procedieran serían ingobernables; las leyes no tendrían objeto, y sería irrealizable el *bien público*, que es el gran fin del legislador. La persona que adquiere un derecho legal está, pues, en posesión de una cosa sagrada, que debe respetársele, porque si así no se procede se pierde la confianza en las promesas de la ley, ésta deja de ser regla segura de conducta, y sobrevienen infinidad de males. Por esto se ha considerado siempre y se considerará como un *despojo*, como una *expoliación* el desconocimiento de un derecho legal. Sólo en los casos excepcionales de que hemos hablado, es decir, tratándose de derechos reconocidos que constituyen *injusticia máxima*, que perturban las relaciones sociales, que contrarían las leyes que rigen el progreso de la humanidad, es cuando, en obsequio del *bien público* mismo, debe ser permitido vulnerar derechos adquiridos. (Véanse los párrafos *h*, *i*, *j*, *k*).

Volvamos al caso concreto que en forma de objeción hemos presentado.

m). ¿Será, en verdad, una injusticia legal muy grande que las leyes de los extinguidos Estados no reconocieran carácter de legítimos á los hijos habidos en matrimonio católico? ¿Deberá hacerse una reparación por los hechos *cumplidos*?

n). En primer lugar, no es exacto que las leyes hicieran una declaración expresa en este sentido. El legislador, teniendo en consideración los naturales efectos del matrimonio, lo consideró asunto de su incumbencia: estableció, como hemos dicho, solemnidades para su celebración, y todo lo que juzgó necesario, sobre la base de que el estado civil de las personas es del dominio exclusivo del poder civil. Esto se creyó, y es doctrina que honradamente profesa todo un partido político. La ley no prohibió la celebración del matrimonio católico. Estableció el *civil*, como *fuente de derechos y obligaciones civiles*, y los determinó claramente. ¿Por qué los que contrajeron matrimonio católico no lo contrajeron después civil? Se pusieron en rebelión con la ley, la menospreciaron, la violaron abiertamente, y luégo hay personas que se quejan de las consecuencias.

ñ). En segundo lugar, ¿qué partido político, si tiene la debida cordura, podrá vanagloriarse de que los principios que profesa son la verdad misma? ¿Quién podrá afirmar que son derechos *inconcusos* los que se hallan en conformidad con esos principios, y que es solemne mentira y error inexcusable cuanto les sea contrario? Sería el colmo de la soberbia el pensar de esta manera, tratándose de doctrinas que están sometidas al debate de los partidos, y cuando uno, no menos respetable que aquél que se crea en pose-

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

sión de la verdad, lejos de aceptar dichos principios, sinceramente los ha combatido por estimarlos inexactos, y ha elevado á la altura de instituciones los contrarios. Permitido le es al partido que gobierna abrogar las instituciones que no halle conformes con sus ideas, y reemplazarlas con otras que lo estén; pero no le es lícito llevar su obra demoledora hasta el punto de volver atrás para anular los derechos que reconoció el partido contrario. Si esto se permitiera, la instabilidad reinaría como principio; pero ella no se aviene con la seguridad y el orden, con el reposo y la tranquilidad social: ella es contraria al *bien público*. Si no es exacto esto que decimos, al partido que haya de suceder al que en la actualidad gobierna le será lícito no sólo reformar y derogar las leyes que son fruto de las doctrinas que sustenta la *Regeneración fundamental*, sino que podrá anular los derechos hoy reconocidos, diciendo que no son tales derechos, y llevar su acción destructora hasta el punto de desconocerlo y anularlo todo. La sociedad no puede, sin conmoverse profundamente, soportar estos cambios bruscos.

Queda así desvanecida la objeción.

Estas ideas se hallan en consonancia con las de los jurisconsultos más respetables del mundo entero. Oigamos á uno distinguidísimo:

"Vanamente se invocará el interés general en favor de la retroactividad de las leyes, pues el mayor interés que los hombres reunidos en sociedad pueden tener, es que sean respetados sus derechos. Ni aun bajo pretexto de salud pública se puede arrebatar á los ciudadanos los derechos que han adquirido. Nada más funesto que la máxima de la *salud pública*, cuando se entiende en el sentido de que para salvar la sociedad es lícito al legislador despojar á los individuos de sus derechos. Esto es destruír la sociedad, pretextando al mismo tiempo conservarla. En efecto, la sociedad no tiene otro objeto que mantener y asegurar los derechos de sus miembros: lastimar los derechos individuales es herir á la sociedad misma. En Francia, la *salud pública* ha servido de pretexto para todos los golpes de Estado, y de golpe de Estado en golpe de Estado se ha llegado á anonadar todo respeto por el derecho y la ley: este es el régimen de la fuerza.

"El interés general no excusa jamás la violación de la propiedad; al contrario, el más grande interés de la sociedad es que los derechos de los particulares sean mantenidos y respetados."

Mas ¿qué objeto hay en decir todo esto? se nos preguntará. El mismo escritor de *El Correo Nacional* ha comenzado su exposición diciendo:

.... "La retroactividad de una ley reparadora *no consiste en volver atrás* para reformar *hechos cumplidos, irrevocables*, sino para *mudar la calificación jurídica* de aquellos que sirven de causa á efectos que deben producirse *después* de la promulgación de la ley."

Esto, y el ejemplo que toma de la Ley de 2 de Junio de 1853, con relación á la nulidad de las cláusulas que prohibían la enajenación de los bienes vinculados—sobre lo cual hemos hecho notar que no hay efecto rigurosamente retroactivo, porque no se vulnera ningún derecho adquirido,—patentiza que el escritor á que nos referimos ni cree ni sostiene que las leyes reparadoras de las injusticias legales deben ser retroactivas en segundo grado; lejos de eso, la retroactividad de tales leyes la hace consistir *únicamente* en referirse á un hecho pasado *para mudar su calificación jurídica*, á fin de que se "produzcan efectos posteriores distintos de los que de otra suerte habrían de producirse."

Sin embargo, dice también el mismo escritor:

"Si en un país donde está establecida la esclavitud, la ley dice: 'Queda abolida la esclavitud, pero seguirán siendo esclavos los que actualmente lo son mientras no sean manumitidos por sus amos, por respeto al derecho de propiedad que éstos adquirieron,' esa ley no será retroactiva. Si *todos* los esclavos quedan *inmediatamente* libres. LA LEY SERÁ REPARADORA.... (1), el efecto de esta reparación será general é inmediato, y la ley, por lo tanto, RETROACTIVA.

"Del propio modo, si se declaran legítimos los matrimonios católicos efectuados en cualquier tiempo, la ley será retroactiva si los hijos legítimos de anteriores matrimonios católicos, PUEDEN RECIBIR LUEGO EL BENEFICIO RESULTANTE DE AQUELLA CALIFICACIÓN RETROSPECTIVA; de otra suerte, la ley NO TENDRÁ CARACTER RETROACTIVO.

....

"Los que POR VIRTUD DE ANTERIORES LEYES recogieron en provecho propio, herencias que PERTENECÍAN (¿?) á huérfanos y viudas, cometieron un acto PROFUNDAMENTE INMORAL que la ley posterior HA QUERIDO REMEDIAR EN PARTE.

....

"La acción personal por el valor de las legítimas y porción conyugal, contra aquellos que en provecho propio recogieron la herencia de huérfanos y viudas, dejándolos en la miseria, se JUSTIFICA PLENAMENTE (¡¡!!) EN UN RÉGIMEN DE REGENERACIÓN FUNDAMENTAL."

A ¿qué nos atenemos? Primero se dice que la retroactividad de una ley reparadora consiste *únicamente* en *mudar una calificación jurídica*; y luégo se sostiene lo contrario: que se pueden anular hechos *cumplidos* y *vulnerar derechos adquiridos*.

Esto último es la creencia sincera del ilustrado escritor; así lo comprueban sus ulteriores palabras y el contexto de su exposición.

Nosotros profesamos, también sinceramente, la creencia contraria. Juzgamos que las leyes retroactivas que vulneran derechos adquiridos conculcan el derecho de propiedad, y en este punto de vista las consideramos perniciosísimas, porque tal derecho es para nosotros base del orden social y de la felicidad pública.

—

Yá es oportuno ocuparnos en el examen de la retroactividad que debe asignarse á las disposiciones legales relacionadas con el matrimonio.

En el proyecto de ley sometido á la consideración del Consejo Legislativo, y que con modificaciones sustanciales es hoy la Ley 57 de 1887, figuraba el siguiente artículo, que fue aprobado en segundo debate, y luégo modificado:

"Art. 4.° Son válidos, para todos los efectos civiles y políticos, los matrimonios que se celebren conforme al rito religioso á que los contrayentes se sujeten para celebrar el matrimonio." (2)

La respectiva comisión introdujo en el proyecto el artículo transcrito, después de haber examinado el 134 del Código Civil del extinguido Estado de Cundinamarca, que dice:

"Son válidos, para los efectos civiles y políticos, los matrimonios celebrados ante los respectivos Ministros de los cultos, conforme á los cánones ó constituciones religiosas á que los contrayentes se hayan sujetado para celebrar el matrimonio."

Repárese que en este artículo se habla de los matrimonios *celebrados;* y en el del proyecto, de "los matrimonios que se *celebren*," cambio que se hizo deliberadamente, con el fin de que la disposición se refiriese enteramente á lo futuro, y no tuviera en manera alguna carácter retroactivo.

(1) Ponemos de VERSALILLA los pasajes á los cuales deseamos llamar la atención.
(2) *Diario Oficial* número 6,962, página 210, columna segunda.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

En una de las veces que el mencionado proyecto de ley volvió á segundo debate, uno de los honorables Delegatarios modificó el artículo 4.° en estos términos:

" Son válidos, para todos los efectos civiles y políticos, los matrimonios que se celebren conforme al rito católico." Así se aprobó, y éste es el artículo 12 de la Ley 57 de 1887.

El mismo honorable Delegatario que modificó el artículo 4.° del proyecto, presentó luégo el siguiente artículo, que fue aprobado, y que figura en la citada Ley 57:

" Art. 19. La disposición contenida en el artículo 12 tendrá efecto retroactivo. Los matrimonios católicos, celebrados en cualquier tiempo, surtirán todos los efectos civiles y políticos desde la promulgación de la presente ley.

" La mujer que al tiempo de la expedición de esta ley se halle casada católica mas no civilmente, podrá conservar la administración de sus bienes, y celebrar con el marido, dentro del término de un año, capitulaciones matrimoniales."

Para determinar el grado de retroactividad que puede asignarse al mencionado artículo 12, examinemos separadamente cada una de las partes del artículo 19.

Dice la primera:

" La disposición contenida en el artículo 12 tendrá efecto retroactivo."

Como el artículo 12 se refiere á los matrimonios que se *celebren*, y no á los *celebrados*, es claro que al dar al artículo 12 efecto retroactivo, quiso decirse que también gozarían del beneficio de la validez *todos* los matrimonios católicos *yá celebrados*, y celebrados en cualquier tiempo, pues el artículo no fija, como se ve, época determinada. Prevaleció, pues, la opinión contraria á la de la comisión que presentó el proyecto que se discutía: ésta no acogió, como se ha dicho, la disposición del artículo 134 del Código del extinguido Estado de Cundinamarca, por cuanto se refería á los matrimonios *yá celebrados*, y no le parecía bien dar á la nueva disposición efecto retroactivo; pero el Consejo juzgó conveniente dárselo, y se lo asignó de un modo expreso.

o). La declaración de validez de los matrimonios católicos *celebrados*, produjo, á partir de la fecha en que empezaron á regir los artículos 12 y 19, transcritos, estos efectos: los casados católicamente fueron consortes; el marido entró en el goce de la potestad marital, y adquirió la administración legal de los bienes de su mujer, si de hecho la tenía (1). La mujer, á su vez, se halló en el caso de obedecer á su marido, de seguirle adondequiera que trasladase su residencia, y se hizo incapaz para contratar, y comprometerse, y comparecer en juicio, etc. etc. En esa misma fecha, los hijos de tales matrimonios, de ilegítimos que eran, se hicieron legítimos; quedaron sujetos á los deberes que impone la patria potestad y adquirieron los derechos correlativos. Este ha sido el resultado de asignarle al artículo 12 carácter retroactivo en *primer grado*.

p). Por ministerio de la ley *nació*, pues, por decirlo así, un estado civil, el de matrimonio, respecto de las personas que lo habían contraído católicamente,—en lo cual consiste la acción retroactiva—*y á partir* del momento en que tuvo existencia legal, comenzó á producir *todos* los efectos civiles propios de su naturaleza. A virtud de esta acción retroactiva, los hechos ocurridos desde la celebración del matrimonio católico hasta la

(1) Pues el artículo 19 dice que si la mujer tiene la administración de sus bienes, la conserve.

fecha en que principiaron á regir los artículos 12 y 19, citados, no se modificaron, ni los derechos adquiridos sufrieron lesión alguna, pues el estado civil de matrimonio, de que hablamos, NO EXISTIÓ *sino en el momento mismo* en que la Ley 57 entró en vigor.

Ahora bien: ¿debe limitarse la acción retroactiva del artículo 12 al primer grado? El artículo 19 habla en términos absolutos: " La disposición contenida en el artículo 12 tendrá efecto retroactivo." Como el legislador no limita de modo alguno este efecto, es indudable, se nos dirá, que deben asignársele al artículo 12 todos los efectos retroactivos posibles.

Hé aquí las razones por que nos decidimos, sin vacilación, á limitar al primer grado la acción retroactiva del citado artículo.

q). 1.ª No obstante que la Constitución, en lo relativo á la retroactividad de las leyes, no es perfectamente clara y explícita, es innegable que establece, si no como principio absoluto, sí como regla *general* (1), el precepto de que el legislador no puede desconocer ni vulnerar derechos adquiridos; y como el artículo 19 no dice de un modo *expreso* que la disposición contenida en el artículo 12 tenga efecto retroactivo en segundo grado, lo razonable es no asignárselo, porque si se le asigna, se desconocen y vulneran derechos adquiridos, y se contraría la regla general que la Constitución consagra. Si las leyes deben interpretarse de manera que haya entre ellas la debida correspondencia y armonía, es claro que del mismo modo deben interpretarse las leyes y la Constitución; más aún: ésta es punto de partida, es modelo, es pauta, y en consecuencia, deben hacerse á las leyes las limitaciones necesarias para que armonicen con la Constitución, á menos que la ley contenga disposición expresa que pugne con aquélla, cosa que no sucede en el caso presente. (2)

En pocas palabras: por el hecho de reconocérsele al artículo 12 efecto retroactivo en primer grado, se cumple lo que dispone el artículo 19; y no asignándosele efecto retroactivo en segundo, se respeta la Constitución; y

r). 2.ª Porque el contexto del artículo 19 excluye la retroactividad en segundo grado. Veámoslo. Desde el momento mismo en que una ley entra en vigor, comienza á producir sus efectos. En consecuencia, desde que la Ley 57 empezó á regir, comenzaron á producirse todos los efectos consiguientes á la acción retroactiva del artículo 12; es decir, desde ese momento fueron válidos y produjeron efectos los matrimonios católicos celebrados. Pero el artículo 19, después de establecer que la disposición consignada en el 12 tendrá efecto retroactivo, dice:

" Los matrimonios católicos, celebrados en cualquier tiempo, surtirán todos los efectos civiles y políticos desde la promulgación de la presente ley."

Por una parte no había para qué hablar de los matrimonios católicos celebrados en cualquier tiempo, porque la acción retroactiva del artículo 12 comprende *todos* los matrimonios celebrados en *cualquier tiempo*, pues no se limita á determinada época. Tampoco había para qué decir que tales matrimonios producirían todos sus efectos desde que la ley fuese promulgada, porque no podía suceder que promulgada ésta, y habiendo, en consecuencia, empezado á regir (3), no hubieran de regir también tanto el artículo 12 como el 19 de la misma; y además, porque el régimen de tales artículos no podía consistir en cosa distinta del hecho de que los

(1) Véase el párrafo *u*.
(2) Véase en la Codificación Nacional, Tratado primero, el número 12 de orden.
(3) A virtud de disposiciones expresas del Código Civil, vigentes á la sazón, las leyes regían desde que se promulgaban.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

matrimonios católicos celebrados produjesen efectos civiles y políticos, pues el artículo 12 habla de ellos. Ni había para qué agregar en el 19 que se producirían *todos* los indicados efectos, porque el mismo artículo 12 dice: "Son válidos para *todos* los efectos civiles y políticos, los matrimonios que se celebren conforme al rito católico." Menos pudo tenerse en mira decir que los efectos de la ley eran *posteriores* y no *anteriores* á ella, pues los efectos de una causa cualquiera no existen con anterioridad á la causa misma (1), y no había objeto en consignar semejante cosa en la ley.

El consabido pasaje del artículo 19 está, pues, demás si se le interpreta de cualquiera de las maneras indicadas. No así si se admite que lo que quiso decirse fue que la existencia legal de los indicados matrimonios principiaba *desde* que la ley entrara en vigor; que la validez de los mismos se refería á los efectos por venir, es decir, á los subsiguientes á la promulgación de la ley, no á los actos pasados, á los hechos cumplidos. Dicho pasaje, aunque impropio y vago, significó y significa en nuestro concepto que no se quería en manera alguna que á virtud de la validez de los matrimonios se vulnerasen derechos adquiridos. Si esto no significara el citado pasaje, sería del todo inútil; pero sabido es que las leyes no pueden interpretarse de manera que carezcan de objeto.

Así pues, á virtud de la interpretación asignada al artículo 19, resultó lo siguiente:

1.° Que todos los matrimonios católicos celebrados con anterioridad á la Ley 57, y que no tenían existencia legal, la tuvieron, por cuanto se validaron;

2.° Que la validez de tales matrimonios *principió* en el momento en que la ley comenzó á regir, pues no se dijo que debían reputarse válidos á partir de la época en que se celebraron; y desde ese momento comenzaron á producirse *todos* los efectos que las leyes asignan al matrimonio; y

3.° Que la retroactividad del artículo 12 no puede, en consecuencia, extenderse al segundo grado.

Estas son y han sido nuestras opiniones, y por ello pusimos este breve comentario al artículo 19, que ratificamos hoy.

"Si los matrimonios católicos *celebrados* no surten efectos civiles y políticos (2) sino desde la promulgación de esta ley, es claro que la retroactividad de que se habla consiste únicamente en asignar, *de ahora en adelante*, efectos legales á un acto que no los producía, lo cual *no constituye efecto retroactivo*," es decir, efecto rigurosamente retroactivo.

s). Ciertamente, si á partir del momento en que la ley comenzara á regir era cuando los matrimonios católicos celebrados tenían carácter de válidos, ninguno de los hechos anteriores era afectado, y por lo mismo

(1) El ilustrado escritor de *El Correo Nacional* ha juzgado que no falta quien crea que hay efectos anteriores á la causa que los produce, pues dice:

"La reparación efectiva es siempre *ulterior*, bien que dependa de una calificación relativa á un hecho anterior. Por esta razón toda reparación legal es forzosamente incompleta, y el término *retroactividad*, en el sentido que vulgarmente se le supone, absurdo.

"Una ley puede ser retroactiva, pero su efecto no es ni jamás podrá ser retroactivo, sino inmediato, y el ser inmediato y general es lo que caracteriza la fuerza retroactiva de la ley. (¿?) Hay, pues, leyes retroactivas; efectos retroactivos no puede haberlos." ....

Estos conceptos del mencionado escritor han podido ser motivados por un breve comentario que escribimos respecto del artículo 19 de la Ley 57, y que aquí reproduciremos en lugar conveniente.

(2) Esto es lo que prácticamente significa la validez de los matrimonios católicos.

no se vulneraba ningún derecho, pues todos los actos ejecutados y todos los contratos celebrados desde que dichos matrimonios se verificaron, hasta el día en que rigió la ley que los declaró válidos, eran actos y contratos que se reputaban ejecutados ó celebrados por personas totalmente extrañas, como que la validez del matrimonio no comprendía dicho período.

Tan luego como se promulgó la Ley 57, á todo mundo sorprendió la retroactividad que se asignó al artículo 12. Ocurrieron dudas y dificultades, y se pidieron, personalmente, explicaciones á varios miembros del Consejo Legislativo, lo cual hizo necesaria una declaración legal explicativa, que se consignó en la Ley 153 de 1887, y fue esta:

"Art. 50. Los matrimonios celebrados en la República en cualquier tiempo conforme al rito católico, se reputan legítimos, y surten, desde que se administró el sacramento, los efectos civiles y políticos que la ley señala al matrimonio, en cuanto este beneficio no afecte derechos adquiridos por actos ó contratos realizados por ambos cónyuges, ó por uno de ellos, con terceros, con arreglo á las leyes civiles que rigieron en el respectivo Estado ó territorio antes del 15 de Abril de 1887.

"Queda así explicado el artículo 19 de la Ley 57 de 1887, con arreglo al 21 de la presente."

Como se ve, el artículo 50 hace una declaración no comprendida en los artículos 12 y 19, que hemos examinado, á saber:

Que la validez de los matrimonios católicos se retrotraía á la fecha en que se administró el sacramento.

¿Qué significa esta declaración?

Tomada *aisladamente*, significa esto:

Que los matrimonios católicos celebrados en el tiempo en que las leyes no les reconocían existencia civil, la tuvieron *desde* que se verificaron; y en consecuencia, que los actos y contratos subsiguientes *debieron* ajustarse á las leyes que entonces regían respecto de los matrimonios válidos. Mas como no pudieron conformarse á tales leyes, por cuanto esos matrimonios no constituían estado jurídico, es claro que pueden ser desconocidos ó vulnerados los derechos que se adquirieron á virtud de actos ó contratos que eran nulos por estar prohibidos á los casados, ó sujetos á ciertas formalidades que no se cumplieron; siendo permitido á terceros interesados el ejercicio de las acciones conducentes á la efectividad de los derechos que apareja la nulidad de aquellos actos ó contratos.

Si esta consecuencia, que nosotros establecemos, no fuera exacta, nada significarían estas palabras del artículo 50:

"Los matrimonios celebrados en la República.... se reputan legítimos, y *surten, desde que se administró el sacramento*, los *efectos civiles* y políticos que la ley señala al matrimonio...."

De paso haremos notar que esta acción retroactiva es tanto más violenta é injustificable cuanto les fue imposible prevenirla, de otra manera que contrayendo matrimonio civil, á las personas que lo contrajeron puramente religioso. En efecto: tratándose de actos ó contratos que se hallaban sujetos á formalidades, ó que estaban prohibidos á los cónyuges, en los matrimonios civiles, los que únicamente habían contraído matrimonio católico se hallaron en condición excepcional, porque aquellas prohibiciones ó formalidades no les afectaban en manera alguna; al par que los mismos actos ó contratos eran permitidos á todas las personas no casadas. Por ejemplo, las donaciones y las ventas entre cónyu-

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

ges son prohibidas, y permitidas á los demás. Como los que sólo contrajeron en aquella época matrimonio católico no eran cónyuges, uno respecto de otro, las prohibiciones indicadas no se referían á ellos; y como, por otra parte, donar y vender eran actos perfectamente lícitos, no había razón legal ni moral que les impidiese verificarlos. Sin embargo, á virtud de la pretendida acción retroactiva del artículo 50, hoy se reputarían nulos tales actos.

Este es, en nuestro concepto, el alcance que tiene la sola declaración de validez de los matrimonios católicos, á partir de la fecha de su celebración.

Ocupémonos ahora en considerar los límites que á esta acción retroactiva fija el artículo 50, *pero prescindiendo de su último inciso.*

Dispónese en dicho artículo que la validez que se reconoce á los matrimonios católicos no afectará los "derechos adquiridos por actos ó contratos realizados por ambos cónyuges, ó por uno de ellos, con terceros," si su realización se verificó con arreglo á las leyes que entonces regían. Luego es claro que los derechos que se hayan adquirido á virtud de actos ó contratos que los cónyuges no hayan realizado *con tercero*, pueden ser desconocidos y vulnerados. Por ejemplo, si uno de los cónyuges hizo una donación al otro, que la aceptó, este acto no produjo un derecho adquirido por el cónyuge donatario, ó mejor dicho, aunque realmente lo produjo en la fecha en que se verificó, hoy puede desconocerse y vulnerarse el derecho, porque el acto se realizó entre los dos cónyuges únicamente, y porque las donaciones entre marido y mujer estaban prohibidas; cosa que debieron tener en cuenta ambos cónyuges, aunque á la sazón ellos no tenían tal carácter ante la ley. En cuanto á las donaciones hechas por los cónyuges, ó por cualquiera de ellos, á personas *extrañas* que las aceptaron, están consumadas, y los derechos que se adquirieron no pueden, como aquéllos, desconocerse ni vulnerarse.

Establécese, pues, una diferencia sustancial en los efectos de una misma clase de derechos adquiridos, según que ocurra ó nó una condición secundaria—acto realizado por uno de los cónyuges con tercero—y no preestablecida por la legislación que regía.

Consideremos otro caso.

Las asignaciones testamentarias que se hicieron por uno de los mismos cónyuges en favor de extraños, no obstante tener hijos en su matrimonio.

Hé ahí un acto realizado por uno de los cónyuges, pero cuya realización no se verificó *con* tercero, como sucede con el acto de la donación, que se consumó ó perfeccionó por la aceptación que de la misma hizo el tercero á quien se refiere. Una asignación testamentaria es un acto que realiza la *sola* persona que lo verifica, que se hace irrevocable con su muerte y que *favorece* á un tercero, que no concurre, repetimos, á su realización. Los derechos nacidos de este acto ¿podrán ser vulnerados á virtud de la retroacción de la validez del matrimonio? ó ¿quedarán comprendidos en la excepción que establece el artículo 50?

El escritor de *El Correo Nacional* sostiene, como luégo veremos, que dicho acto es precisamente uno de los comprendidos en la excepción, y uno de los principales. No obstante la respetabilidad de aquella opinión, nosotros creemos que faltando como falta el requisito legal *de la realización del acto* CON *tercero*, no se halla comprendido en la excepción.

Queda, pues, perfectamente establecido que conforme al artículo 50,

sladamente considerado, y prescindiendo de su carácter explicativo, haya derechos adquiridos que pueden ser desconocidos y vulnerados, y otros que no pueden serlo.

Veamos ahora qué relación existe entre este artículo y el 21 de la misma ley, que dice:

"El matrimonio podrá, por ley posterior, declararse celebrado desde época pretérita, y válido en sus efectos civiles, á partir de un hecho sancionado por la costumbre religiosa y general del país; en cuanto este beneficio retroactivo no vulnere derechos adquiridos bajo el imperio de la anterior legislación."

Como se ve, es terminante y absolnta la prevención de este artículo.

Puede el matrimonio declararse válido retroactivamente, *en cuanto no se vulneren derechos adquiridos.*

Ahora bien: se nos dirá que siendo manifiesta, como es, la oposición entre estos dos artículos—50 y 21—prefiere indudablemente el 50, por ser posterior, por tener cierto carácter de especialidad, y porque puede estimarse que regla íntegramente la materia.

Para fijar el orden de preferencia de estas dos disposiciones debe comenzarse por averiguar si hay oposición real entre ellas, ó si su manifiesta contrariedad proviene de la manera como se interpreta el artículo 50, esto es, en el sentido de que conforme á él hay derechos adquiridos que pueden desconocerse y vulnerarse.

Siendo el artículo 50, como en él mismo se dice, *explicativo* del 19 de la Ley 57, no puede interpretarse de la manera dicha, porque no está en la naturaleza íntima del artículo que es objeto de la explicación—el 19—el que se vulneren derechos adquiridos, como yá lo hicimos notar (párrafos *r* hasta *s*), y porque explicar una ley es declarar el genuino sentido de ella por medio de palabras que lo hagan perceptible; mas no asignarle efectos diametralmente opuestos á los que le son propios.

Hay más: fíjese la atención en estas palabras del artículo 50:

"Queda así explicado el artículo 19 de la Ley 57 de 1887, *con arreglo* al 21 de la presente," es decir, en consonancia, en armonía con él. El artículo 50 debe, pues, interpretarse de manera que haya conformidad entre él y lo que dispone el 21; luego es inaceptable la interpretación que se asigna al primero,—al 50—porque ella excluye la conformidad requerida entre las dos disposiciones.

Finalmente, se afirma que, conforme al artículo 50, los únicos derechos adquiridos que no pueden ser afectados por la retroacción de validez de los matrimonios católicos celebrados, son los que tienen origen en actos ó contratos realizados por ambos cónyuges ó por uno de ellos con tercero, por cuanto se hallan *expresamente* exceptuados; pero que los demás derechos adquiridos, como no se hallan comprendidos en la excepción, pueden desconocerse y vulnerarse. Unicamente por vía de *deducción* es, pues, potestativo decir que hay derechos adquiridos que pueden ser vulnerados; no porque sea terminante el texto del artículo, y no siéndolo, no puede, conforme al artículo 6.° de la Ley 153 de 1887, fijársele aquella interpretación, porque no lo permite la regla general que la Constitución establece, de que los derechos adquiridos "no podrán ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores."

¿Cuál es, pues, la genuina interpretación del artículo 50?

Para fijarla con acierto es preciso tener en cuenta la naturaleza de este artículo. Consta que él es *explicativo* del 19 de la Ley 57 de 1887, es decir, que su objeto es resolver dudas, allanar dificultades ocurridas, ó que se

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

preveían. Del texto mismo de dicho artículo se puede deducir cuáles fueron esas dudas, ó por lo menos cuáles estimó táles y halló conveniente el Consejo resolver. Una de las dudas fue esta: ¿Desde cuándo se reputan válidos los matrimonios católicos celebrados: desde el momento de su celebración, ó desde la fecha en que entró en vigor la ley que los validó? En presencia de esta duda, el legislador dijo: Se reputan legítimos y surten efectos civiles y políticos "desde que se administró el sacramento," declaración que se hace conforme al artículo 21 de esta ley; y con razón se citó este artículo, porque la primera parte de él dispone que el matrimonio puede, por ley posterior, declararse celebrado desde época *pretérita*, y válido en sus efectos civiles, á partir de un hecho sancionado por la costumbre *religiosa* y general del país.

Otra duda fue esta: habiéndosele asignado efecto retroactivo al artículo 12, ¿qué suerte corren los derechos adquiridos por actos ó contratos celebrados por ambos cónyuges ó por uno de ellos con tercero? El legislador resolvió: esos derechos no se afectan en manera alguna, lo cual se declara con arreglo al artículo 21, pues este artículo establece que la validez retroactiva de los matrimonios católicos no puede vulnerar derechos adquiridos bajo el imperio de la anterior legislación.

El Legislador juzgó que no era necesaria ninguna otra *explicación*, y tan satisfecho se muestra de haber dicho *todo* lo que era preciso, que habiendo podido guardar silencio, se expresa de este modo:

"Queda así *explicado* el artículo 19 de la Ley 57 de 1887, *con arreglo* al 21 de la presente."

Tál es, en nuestro concepto, la genuina inteligencia del artículo 50.

No creemos que se pueda, con justicia, acusársenos de haber procedido con arbitrariedad: sólo hemos consultado el carácter esencial de aquel artículo; á lo cual se agrega la circunstancia de que así interpretado, las dificultades desaparecen y las dudas quedan resueltas.

Ahora bien: ¿cuál debe estimarse como la verdadera interpretación de una misma disposición: la que desvirtúa su naturaleza íntima, es decir, que de *explicativa* que es la disposición se convierte en *preceptiva* únicamente?; ¿la que establece notoria contrariedad entre la disposición que se interpreta y otra anterior de la misma ley, cuando la voluntad manifiesta del Legislador fue proceder en consonancia con dicha anterior disposición?; ¿será admisible aquélla que pugna abiertamente con la regla general consignada en la Constitución, y con el principio de Legislación universal de que las leyes no deben tener efecto retroactivo? O más bien, ¿debe reputarse legítima, verdadera y por lo tanto aceptable, la interpretación que, lejos de producir los inconvenientes indicados, lo concilia y armoniza todo perfectamente? El lector decidirá.

Al convencimiento profundo que tenemos acerca de la exactitud de nuestras deducciones se agregan, en este caso, circunstancias que lo afirman satisfactoriamente, porque disipan el temor que naturalmente inspira la propia debilidad é insuficiencia de quien más de una vez se ha convencido de la facilidad que hay de incurrir en graves y frecuentes errores. Dichas circunstancias consisten en el hecho de estar en el fondo acordes nuestras opiniones con las muy respetables de la Corte Suprema, de la Honorable Cámara de Representantes y del Congreso de la República.

En efecto, aquel Supremo Tribunal, en sentencia proferida con fecha 14 de Julio de 1890, declaró (1) que el artículo 50 de la Ley 153 "es *de-*

(1) Dicha sentencia se halla al fin de esta disertación.

ficiente en cuanto establece que los *únicos* derechos adquiridos que no pueden ser vulnerados por el expresado beneficio son los que provengan de actos ó contratos celebrados por ambos cónyuges, ó por uno solo de ellos con tercero, puesto que restringiendo la terminante regla general que en el 21 se establece, modifican su sentido." En consecuencia, la sentencia reconoció á la parte demandada los *derechos adquiridos* de que se hallaba en posesión, pues tál ha sido el resultado de la no admisión del recurso de casación.

En nuestro modo de ver, y conforme á lo yá establecido, el artículo 50 no adolece de *deficiencia*, como dice la Corte, pues en él no se establece que los *únicos* derechos adquiridos que no pueden ser vulnerados por el beneficio de la validez del matrimonio son *estos* ó *aquellos*, nó: es que siendo *explicativo* el artículo, se limitó á resolver las dificultades ó dudas que habían ocurrido hasta la fecha de su expedición. En este sentido el artículo es completo. Repárese que si se considera como meramente preceptivo, carece de objeto, dada la existencia del 21, que es claro, terminante y general. No obstante esta ligera diferencia en cuanto á la manera de apreciar el artículo 50, nos hallamos de acuerdo en lo sustancial con la memorada sentencia, pues en ella no se da efecto retroactivo en segundo grado á los artículos 12, 19 y 50.

Con motivo de la decisión de la Corte Suprema, de la cual hablamos, la parte demandante, que fue la perjudicada, denunció ante la Cámara de Representantes, por violación de ley expresa, á los Magistrados que habían acordado el fallo; pero la Comisión de infracción de Constitución y leyes de la misma Cámara presentó sobre ello un informe, en que se reconoce expresamente la exactitud de los considerandos de la sentencia, y el cual termina con este proyecto de resolución, que fue aprobado:

"No estimando la Cámara fundado el denuncio de la señora Clementina Sandoval contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, señores doctores Salomón Forero, Ramón Guerra Azuola, Luis M. Isaza y Joaquín Martínez E., por haber dictado sentencia definitiva contra ley expresa, resuelve:

"Archíveso el presente denuncio."

Por último, en la Ley 105 de 1890 se consignaron estas dos importantes disposiciones:

"Art. 248.....

"En las sucesiones *ab intestato*, deferidas bajo el imperio de la anterior legislación, en ningún caso se reconocerá como herederos á individuos distintos de aquellos á quienes se hubiere deferido la herencia conforme á la misma legislación; lo cual no es contrario á la acción de reforma en las sucesiones testamentarias (1).

"Art. 253.....

.....

"No se incluirán en los inventarios ni estarán sujetos á partición los

(1) *Nota importante.*—Si esto sucede en las sucesiones *ab intestato*, con razón mayor en las testamentarias, respecto de las asignaciones que las leyes permitían á los testadores que hiciesen; pero como había quienes sostuvieran que "el pensamiento del legislador de 1887 fue *respetar* como ley anterior, *capital*, la *voluntad expresa* ó presunta de los padres de familia, *ya fuese contraria á la ley civil*, ya se acogiese á ella; y NO LA LEY CIVIL, en cuanto se ingería en la constitución de la familia y en la *adjudicación de los bienes patrimoniales* contra la *voluntad expresa* ó presunta de los dueños," se juzgó necesario, para que no se diese á las leyes semejante interpretación, disponer que en las sucesiones testamentarias tenía lugar la acción de reforma, esto, para que no prevalezca nunca la voluntad del testador sobre la ley misma, que sea contraria.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

bienes propios del cónyuge sobreviviente, adquiridos por él durante el matrimonio, si conforme á las leyes vigentes al tiempo de la adquisición, vinieron á ser de su propiedad exclusiva." (1)

En resumen. Ni el artículo 12, ni el 19 de la Ley 57 de 1887, ni el 50 de la Ley 153 del mismo año, pueden aplicarse, en manera alguna, en el sentido de vulnerar derechos adquiridos, pues la retroactividad que el 19 asigna al 12, se limita al primer grado, es decir, tiene porúnico objeto validar los matrimonios católicos celebrados en el tiempo en que, conforme á las leyes vigentes, no producían efectos civiles ni políticos; y el artículo 50, como explicativo que es, se dirige á resolver las dudas, ó allanar las dificultades que el Consejo Legislativo tuvo en mira al expedirlo, lo cual hizo en consonancia con el artículo 21 de la misma ley, que prohibe afectar los derechos adquiridos bajo el imperio de la anterior legislación.

El escritor de *El Correo Nacional* dice que cuando se expidió el artículo 19 de la Ley 57 de 1887 había algunos que sostenían que la ley no podía tener en ningún caso efecto retroactivo, lo cual era resultado de la preocupación de la doctrina que había imperado antes en principio. "Que parece que el mismo legislador que había expedido la Constitución, y que era su más autorizado intérprete, quiso *descabezar el resabio*," y con tal fin dijo en el artículo 19: "La disposición contenida en el artículo 12 *tendrá efecto retroactivo*."

Felizmente este deseo no ha podido realizarse: así lo acreditan el fallo de la Corte Suprema, de que hemos hablado; la aprobación implícita que le impartió la Cámara de Representantes, y los artículos 248 y 253 de la Ley 105. El resabio subsiste, y abrigamos la esperanza de que subsistirá para bien de la sociedad entera, pues mientras ésta continúe creyendo que no es lícito, sino en los casos de injusticia máxima de que hemos hablado—párrafo *h*—expedir leyes que vulneren los derechos adquiridos, el principio de la seguridad tendrá solidez mayor, lo cual significa esto: respecto del derecho de propiedad, acrecentamiento de la riqueza, desarrollo fecundo de la industria, necesidades mejor satisfechas, bienestar individual y felicidad pública.

Estas ideas nos traen el recuerdo de un pasaje que se halla en las obras de un notable publicista, muy conocido entre nosotros, el cual reproducimos, porque viene muy á propósito:

"Cuanto más se respeta el principio de la propiedad, tanto más se afirma en el espíritu del pueblo. Los pequeños atentados contra este principio preparan los mayores. Ha sido necesario mucho tiempo para llevarle al punto en que le vemos en las sociedades civilizadas; pero una fatal experiencia nos ha hecho ver con cuánta facilidad puede ser alterado, y cómo el instinto salvaje del latrocinio recobra el ascendiente sobre las leyes. Los pueblos y los gobiernos no son en esta parte otra cosa que unos leones amansados; pero si llegan á probar la sangre, se vuelve á encender su ferocidad natural."

Juzgamos conveniente, para abundar en claridad, reproducir aquí algunos de los conceptos que contiene la exposición del escritor de *El Correo Nacional*, y hacer sobre ellos breves consideraciones.

En impugnación del principio absoluto de la no-retroactividad de las leyes dice el escritor:

---

(1) Véase el artículo 1821 del Código Civil.

"La Constitución de 1886 restringió el principio, y dijo:

'Art. 31. Los derechos adquiridos con justo título conforme á las leyes civiles por personas naturales ó jurídicas, no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores.'

"En primer lugar se excluyeron de la no-retroactividad absoluta los títulos emanados de leyes políticas, constitucionales, fundamentales....

"En segundo lugar, respecto de leyes civiles se exige el requisito del 'justo título.' *Justo título*, ahí, no es sinónimo de *título adquirido conforme á leyes civiles*. Si lo fuese, la condición no tendría objeto, sería inoficioso ese importante término, ineficaz é ilusorio su contenido."

Esto es cierto, en parte, porque el artículo constitucional no versa en realidad de verdad sobre la adquisición de un *título*, sino sobre la adquisición de *derechos, mediante un título justo;* pero como el artículo no ofrece sobre esto duda alguna, juzgamos innecesario que el ilustrado escritor se permita advertir que *justo título* no es, ahí, sinónimo *de título adquirido conforme á leyes civiles*.

Seguramente quiso decirse que la frase constitucional: "..... *derechos adquiridos con justo título*...." no equivale á esta: *derechos adquiridos conforme* (con arreglo) *á leyes civiles;* porque si se establece identidad entre las dos expresiones, la condición requirida por el artículo no tiene objeto, es inoficioso el importante término *justo título*. En esto tiene razón el escritor; pero inmediatamente á continuación del pasaje que se acaba de transcribir, dice que justo título "equivale á decir: 'derechos adquiridos conforme á leyes civiles, siempre que por leyes civiles no se entienda una *institución* que el legislador posterior, por ley retroactiva, declare notoriamente inicua é incapaz de conferir justo título.'"

Acabamos de admitir que no debe establecerse equivalencia entre las dos mencionadas expresiones, pero ¿por qué ha de ser necesario, para que no haya identidad entre ellas, que "*por leyes civiles* no se entienda una *institución* que el legislador posterior, por ley retroactiva, declare notoriamente inicua....? ¿Por qué? No percibimos la verdadera razón en que se funda este juicio.

La dificultad se reduce á esto:

¿Debe interpretarse el primer aparte del artículo 31 de la Constitución, de manera que no haya identidad entre las dos consabidas expresiones? Sí. ¿Cuál es esa interpretación? El escritor de *El Correo Nacional* juzga que para que no haya identidad, el medio es *restringir* el significado de la *expresión* constitucional *conforme á leyes civiles*, de modo que por tales leyes "no se entienda una *institución* que el legislador posterior, por ley retroactiva, declare notoriamente inicua." Pero este proceder es enteramente arbitrario, pues no hay razón para restringir el significado de aquella expresión, que el legislador emplea de un modo absoluto. Si se adoptara como regla de interpretación el principio de que es potestativo restringir, á voluntad, el significado de los términos empleados en las leyes, es claro que no habría disposición que no pudiera interpretarse en el sentido que cada cuál quisiera, conforme le conviniera interpretarla, y bien se comprende cuáles serían los resultados de ello.

El mismo escritor nos suministra, en el párrafo que hemos transcrito, el medio de resolver la dificultad.

u). En dicho aparte se dice que "en primer lugar se excluyeron de la no-retroactividad absoluta los títulos (los derechos adquiridos, quiso decirse, pues de ellos se trata) emanados de leyes *políticas, constitucionales, fundamentales*." ¿De dónde deduce el escritor que se excluyeron de la

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

no-retroactividad absoluta los títulos emanados de tales leyes? Indudablemente lo deduce de la circunstancia de que el inciso constitucional sólo habla de *leyes civiles*. La interpretación natural del pasaje: "Los derechos adquiridos con justo título con arreglo á las leyes civiles.... no podrán ser desconocidos ni vulnerados...." es, pues, esta: "Los derechos adquiridos á virtud de causa capaz, conforme á las leyes civiles, de producir la adquisición de ellos, no podrán ser desconocidos, etc." De manera que los derechos que se adquieran á virtud de causa capaz de producir su adquisición porque así lo establezcan las *leyes políticas, constitucionales, fundamentales*, esos derechos sí pueden desconocerse y vulnerarse, por cuanto el inciso constitucional únicamente exceptúa los emanados de *leyes civiles*. La expresión: *conforme á las leyes civiles*, tiene, pues, por objeto limitar esta otra, que es genérica: "los derechos adquiridos con justo título." Si se elimina aquélla, resultaría que yá no se hablaba de *determinados* derechos adquiridos, con justo título, sino de *todo* derecho adquirido con justo título, cualquiera que fuese la naturaleza de la ley de donde emanase la adquisición, esto es, ya fuese *civil*, ó *penal*, ó *política*, ó *constitucional*. Esta es, en nuestro concepto, la natural, la genuina interpretación del memorado inciso, y por lo mismo juzgamos que el distinguido escritor de *El Correo Nacional* no está en lo cierto cuando dice que por leyes civiles no debe entenderse una *institución* que el legislador posterior, por ley retroactiva, declare notoriamente inicua é incapaz de conferir justo título.

Algo más. Las instituciones de un país se establecen por medio de leyes civiles, penales, etc., según sea el carácter de la institución. Ahora bien: el objeto que el distinguido escritor ha tenido en mira al fijar al inciso constitucional la interpretación que le asigna, ha sido establecer fundamento para sostener que los derechos civiles adquiridos pueden ser desconocidos y vulnerados, aunque su adquisición se haya verificado con *escrupulosa observancia de las respectivas leyes*, por cuanto al legislador le sería potestativo decir, en cualquier tiempo: declaro que tal institución, por mí establecida, es notoriamente inicua é incapaz de conferir justo título, y en consecuencia, no estimo legítimamente adquiridos los derechos que lo hayan sido al amparo de éstas ó aquellas leyes. Hé aquí cómo el mencionado escritor confirma los anteriores conceptos:

"Un individuo, ó el fisco, pudo adueñarse de los bienes que, según la voluntad presunta del dueño, que murió sin hacer testamento, y según el derecho natural, correspondían á sus hijos legítimos no reconocidos por la ley. Esa apropiación fue legal; lo que no quita que el legislador la considere *injusta, por fundarse en una institución inmoral, inicua*."

.....

"Los que por virtud de *anteriores leyes* recogieron en provecho propio, herencias que pertenecían á huérfanos y viudas, cometieron un acto *profundamente inmoral* que la *ley posterior ha querido remediar en parte*."

Y no menos confirma nuestros conceptos aquel pasaje de que la acción reivindicatoria contra los actuales dueños se *justifica plenamente en un régimen de regeneración fundamental*.

Pero el legislador no puede, sin violar el artículo 31 de la Constitución, vulnerar los derechos que se han adquirido con observancia de la ley civil, pues el precepto es claro y expreso; la esencia de él, como se ha visto, es esta:

Los derechos adquiridos á virtud de causa capaz, conforme á *leyes civiles*, de producir su adquisición, no pueden ser desconocidos ni vulnerados; pero los emanados de leyes políticas, constitucionales, penales, etc., sí pueden serlo (1).

Por último, hemos dicho, especulativamente hablando, párrafo (*k*), que el legislador debe tener la facultad de reparar las injusticias legales de la naturaleza de las mencionadas en el párrafo (*h*). También dijimos, párrafo (*i*), que se ha hecho bien en dictar, y que en lo sucesivo deben expedirse leyes con tal objeto; pero advertimos aquí que esto no significa que sea potestativo expedirlas conforme á la Constitución que en la actualidad rige (2).

Dice el distinguido escritor:

"Apenas se hubo publicado aquella ley (la 57 de 1887), dijeron algunos que el citado artículo 19 no podía tener *efectos retroactivos*, aunque en él se declarase expresamente que los tendría; porque, ¿cómo podían ser *retroactivos* efectos producidos *después* y no *antes* de la publicación de la misma ley? ¡Como si alguna vez pudiesen producirse efectos anteriores á la declaración! En ese punto de vista nada puede ser retroactivo, porque nada lo es materialmente, porque lo que fue no puede dejar de ser ni haber sido de otro modo."

En esto tiene razón el escritor. En cuanto á nuestras propias opiniones, véanse los párrafos *r* hasta *s*, y de éstos, especialmente los dos últimos.

En explicación del artículo 50 de la Ley 153 de 1887, dice el escritor que la frase:

"*Desde que se administró el sacramento*, es 'algo impropia, porque los efectos civiles no se surten desde época pasada, sino después de la promulgación de la nueva ley.'"

La impropiedad no está en el empleo de dicha frase, pues bien puede declararse celebrado el matrimonio desde época pretérita, cosa que permite hacer el artículo 21 de la misma Ley 153; la impropiedad está en decir, como se dice, que los matrimonios católicos celebrados *surten desde* aquella época los efectos civiles y políticos que la ley señala al matrimonio. Véanse los dos últimos párrafos de la página 253.

Agrega el escritor:

"Quiere decir (dicha frase) que desde aquel tiempo ó momento se consideran nulas las leyes que desconocían el matrimonio celebrado ante la Iglesia, y que esa calificación de nulidad es base anterior de reivindicaciones futuras."

Si esto fuera exacto, que no lo es,—párrafos *s* y siguientes—sería impropio, muy impropio, haber *anulado* dichas leyes, porque su anulación produce necesaria y consecuentemente la de muchos actos que se han ejecutado en observancia de leyes claras y terminantes, lo cual no debe ser, porque el objeto de una declaración de nulidad es invalidar lo que se hace *en contravención de la ley:* tál es el motivo por que se anulan los actos y contratos que se verifican con violación de ciertas leyes. Anular

---

(1) El precepto constitucional de que hablamos no tiene otra excepción que la establecida, aunque de un modo imperfecto, en el segundo inciso del artículo 31; la cual se refiere, en nuestra opinión, á los casos de expropiación por utilidad pública.

(2) Nos permitimos indicar que cuando la Constitución permita la expedición de estas leyes, deben establecerse en la misma las precauciones necesarias para impedir los abusos. Por ejemplo, creemos conveniente que debe preceder á la expedición de una ley retroactiva el dictamen favorable de la Corte Suprema, apoyado con el voto de cinco Magistrados, por lo menos; y que la ley se vote en dos Legislaturas ordinarias sucesivas, con la aprobación, en segundo y tercer debates, de las dos terceras partes de los miembros del Congreso.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

los que se han realizado en cumplimiento de la ley, y anularlos precisamente por ser conformes á ella, no sólo es impropio sino inicuo. Es por esto por lo que el legislador no anula las leyes, sino las reforma ó deroga.

Continúa el escritor:

"Como la frase *desde la promulgación de esta ley*, había servido, aunque sin fundamento ninguno, para impugnar la retroactividad, el legislador dice ahora—*desde que se administró el sacramento*, para deshacer la objeción y confirmar la retroactividad en términos intergiversables."

Véanse los párrafos *r* hasta *s*.

"*En cuanto este beneficio no afecte derechos adquiridos, por actos ó contratos realizados por ambos cónyuges, ó por uno de ellos con terceros.* Aquí está la limitación, no precisamente del principio de retroactividad, sino de los casos sobre que ésta debe recaer. Los *principales actos* ó contratos que esta limitación comprende son *testamento* y ulterior matrimonio civil."

Véanse los tres últimos párrafos de la página 254.

"¿Por qué no dijo el legislador lo que algunos malamente sostienen que quiso decir, á saber: 'En cuanto este beneficio no afecte *cuale quiera derechos adquiridos por terceros conforme á la anterior legislación*?'"

El legislador no lo dijo en el artículo 50, porque yá lo había dicho, en términos más generales aún, en el artículo 21 de la misma ley; y porque el artículo 50 era explicativo (véase el penúltimo párrafo de la página 255, y el que le sigue).

El escritor contesta su propia anterior pregunta diciendo:

"Porque así la frase *desde que se administró el sacramento*, no tendría valor, sentido, ni intención alguna; porque, diciendo eso se habría contradicho; ninguna reivindicación sería posible; la retroactividad no habría sido limitada, sino anulada, y el artículo 19 de la Ley 57, no explicado sino anulado."

Estos conceptos son enteramente inexactos, y fruto de las ideas que profesa el escritor. Para éste los artículos en cuyo examen nos ocupamos —12, 19 y 50—son enteramente inútiles si no se les asigna carácter retroactivo en segundo grado; lo cual proviene del deseo de que se vulneren los derechos adquiridos al amparo de una institución—el matrimonio civil—que para el escritor es odiosa, y que la considera inmoral é inicua.

Sin necesidad de dar efecto retroactivo á las mencionadas disposiciones, vamos á ver que la consabida frase tiene perfecto sentido; y valor, por cuanto produce efectos, é intención manifiesta.

Declarada la validez de los matrimonios católicos, á virtud de la acción retroactiva que el artículo 19 de la Ley 57 dio al 12 de la misma, se juzgó, con razón, que su existencia legal no comenzaba sino á partir del momento en que dicha ley principió á regir, es decir, que los matrimonios celebrados no habían existido legalmente en el período comprendido entre el día en que se celebraron y el en que la Ley 57 entró en vigor. Esto se creyó hasta el momento en que rigió el memorado artículo 50; de ahí en adelante se ha reconocido existencia legal á tales matrimonios con relación al período indicado, precisamente porque el artículo dice que se reputan legítimos *desde que se administró el sacramento*; y como la interpretación que nosotros asignamos al artículo 50 no impide que se reputen legítimos los matrimonios católicos, á partir de aquella fecha, es claro que la frase consabida tiene *perfecto sentido*, sin necesidad de acoger la interpretación que fija el escritor de quien hablamos.

No hay necesidad de dar al artículo 50 carácter retroactivo en segundo grado para que tenga valor aquella frase, es decir, para que produzca efectos, pues los produce muy importantes dada la interpretación que fijamos al artículo.

Héloslos aquí:

Todos los hijos habidos en tales matrimonios son legítimos, por ministerio de la ley, desde el momento en que nacieron; y en consecuencia, pueden, en representación de sus padres difuntos, recoger las herencias aún no deferidas, pues las que lo han sido yá, constituyen derechos adquiridos que deben respetarse. Sin la frase dicha, esto es, si los matrimonios católicos celebrados no se reputasen legítimos desde que se administró el sacramento, sino desde que entró en vigor la Ley 57, sucedería que los hijos de los matrimonios yá disueltos cuando se expidió dicha ley, no serían legítimos, ni podrían legitimarse por los medios conocidos, ni representar á sus padres como herederos. Esto, por la sencilla razón de que á virtud de lo dispuesto en los artículos 12 y 19 de la Ley 57 no habría sido posible reconocerle existencia legal á un estado civil que yá no la tenía de hecho, que se había extinguido. Luego sí produce efectos la memorada frase, sin necesidad de darle al artículo 50 efecto retroactivo.

Por último, producir estos efectos, que no son de carácter retroactivo, fue la intención del legislador al expedir el artículo 50, como que éste se refiere al 21 de la misma ley, artículo que el lector conoce.

Lo expuesto demuestra que el legislador no se contradice—admitida la interpretación que nosotros fijamos—aunque no son posibles las reivindicaciones que tanto desea el distinguido escritor; y que al artículo 19 se le reconoce la retroactividad que es compatible con las demás disposiciones legales, y con el respectivo artículo de la Constitución.

El escritor de *El Correo Nacional* califica—véanse en la página 249 los pasajes transcritos—de *profundamente inmoral* el acto que millares de personas ejecutaron aceptando las herencias que les fueron deferidas, por ministerio de la ley, con motivo de no tener la condición de legítimos los hijos habidos en uniones contraídas con menosprecio de las leyes preexistentes que establecían requisitos y solemnidades para la celebración del matrimonio. También sostiene el escritor—véanse los pasajes citados—que dichas herencias *pertenecen* á los huérfanos y viudas de los matrimonios católicos, y que la reivindicación de los bienes hereditarios por parte de tales viudas y huérfanos, se *justifica plenamente* en un régimen de *regeneración fundamental*. En el pasaje que se halla á la página 260 dice el escritor que fue *legal* la apropiación de los bienes por las personas á quienes fueron deferidas las herencias, lo que no impide que el legislador considere injusta la apropiación, por fundarse en una institución *inmoral, inicua*.

Luégo se expresa así:

"Hay leyes santas no escritas, de que no puede prescindir el jurista, ni el legislador, ni nadie que no pretenda erigir en doctrina social la regla darwiniana—*el fuerte devora al débil*.—Ni hay forma de injusticia más claramente condenada por Dios, que el despojo del huérfano y la viuda."

No es exacto que se haya despojado al huérfano y la viuda de los bienes que les pertenecieron. Las leyes que el distinguido escritor impugna como injustas, inmorales é inicuas, no son tales en manera alguna. El legislador, al expedirlas, se refirió enteramente á lo *futuro*; no vulneró ningún derecho adquirido: se limitó á reconocer el matrimonio civil como hecho constitutivo de un estado jurídico; á establecer requisitos y solemnidades para la celebración de aquél, y á asignarle á dicho estado efectos

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

civiles y políticos, prescindiendo en absoluto del matrimonio religioso, cualquiera que fuese el rito con arreglo al cual se celebrase. Los que contrajeron matrimonio católico, por ejemplo, y luégo lo contrajeron también civil, en observancia de lo que la ley disponía, ningún quebranto han sufrido; las consecuencias fatales que hoy se deploran, afectan únicamente á los que menospreciaron la ley, á los que la desobedecieron, y también á sus hijos. La objeción que se hace es, pues, muy singular: se combate la ley con los efectos perniciosos que ha producido, *no el cumplimiento de ella*, SINO SU VIOLACIÓN!! Así también las mejores leyes, las más interesantes y necesarias, deben ser las peores leyes si se desobedecen ó no se cumplen, porque muy funestos tienen que ser los efectos que resulten de no obedecerlas, ó no cumplirlas.

No negamos que se procedió con imprudencia expidiendo leyes contrarias a las ideas reinantes, á los hábitos adquiridos, á las preocupaciones formadas; juzgamos que debió procederse con circunspección, y no llegar de repente al fin deseado. Tál es el único cargo que puede hacerse; pero no el de que dichas leyes sean inmorales é inicuas, porque el legislador tiene *perfecto derecho* tanto para constituír como para reglar los estados civiles. Finalmente, el escritor de *El Correo Nacional* emite los siguientes inadmisibles conceptos:

"Nuestras leyes eran, en realidad, contradictorias, porque al mismo tiempo que admitían la sucesión forzosa, excluían á los hijos legítimos (¡?) por falta de la mera formalidad del llamado 'matrimonio civil' ... La ley adjetiva prevalecía contra la ley civil sustantiva, la formalidad contra la verdad de las cosas.

. . . . . .

". . . . . .al mismo tiempo la ley excluía virtualmente en muchos casos á los hijos legítimos y al cónyuge sobreviviente (¡?) por falta de la formalidad 'del matrimonio civil,' algo así como la 'peseta de papel.'"

¡Conque la *institución* del matrimonio civil es una mera *formalidad!* y las leyes que establecen requisitos y solemnidades para la celebración de aquél, leyes *puramente adjetivas!!*

No faltará quien diga que estos conceptos, que revelan el más profundo menosprecio por las leyes sobre matrimonio civil, son fruto de un exagerado espíritu de partido; nosotros, que conocemos personalmente al ilustrado escritor, y creemos en la sinceridad de sus convicciones, no podemos decir lo mismo, sino que tales conceptos son resultado de ideas adquiridas desde muy temprana edad, y no sometidas luégo á una paciente y cuidadosa verificación.

La escuela liberal sostiene, con sobra de razón en nuestro concepto, que el estado civil de las personas, en general, y el matrimonio en particular, es asunto del dominio exclusivo del legislador civil, como fuente de derechos y obligaciones civiles, de manera que corresponde á dicho legislador establecerlo y reglarlo conforme lo exija el *bien público*. La escuela conservadora cree y sostiene lo contrario. Existiendo esta oposición en principios, no hay otro medio de poner á la sociedad al abrigo de las fatales consecuencias que puede traer el cambio continuo de instituciones, en materia tan importante como delicada, sino *respetar siempre los derechos adquiridos*. (Véanse los párrafos *n* y *ñ*). ¡Quiera Dios que este principio sea regla invariable de conducta para todos los partidos políticos!

MANUEL J. ANGARITA.

Hé aquí la sentencia de la Corte Suprema, de que se hace mérito en la presente disertación:

Corte Suprema de Justicia.—Bogotá, Julio catorce de mil ochocientos noventa.

Vistos:—Clementina Sandoval demandó en su propio nombre ante el Juez 4.° del Circuito de Bogotá, al Municipio de este mismo nombre, representado por su Personero y por el Agente Fiscal del Circuito, para que se le condenase á restituírle una casa situada en el barrio de Las Nieves de esta ciudad, antigua carrera de Bárbula, calle 2.ª, número 33, hoy calle 20, cuadra 4.ª, número 96, y deslindada así: por el Norte, con casa de Alberto Mayorga; por el Sur, calle de por medio con las de Antonio Rivera y Atanasio Delgado; por el Oriente, con casa desamortizada del Monasterio del Carmen, y por el Occidente, con casa desamortizada de Capellanía de Egipto. Demandó también los frutos naturales y civiles desde el cuatro de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete, fecha en que el Juez 1.° ejecutor en asuntos civiles fue á hacerle entrega de dicha casa.

Alegó como derecho para promover esta demanda, que siendo dueña de la expresada finca por habérsele adjudicado en la mortuoria de su padre Patricio Sandoval, y el Distrito demandado poseedor de ella, tiene contra éste la acción que conceden los artículos 946 y 950 del Código Civil, y puede exigirle los frutos en la forma prescrita en el capítulo 4.°, título 12, libro 2.° del citado Código; y la fundó en estos hechos: que es hija de Patricio Sandoval; que éste murió y ella fue declarada su heredera; que adquirió también los derechos que en esa herencia pudiera tener su madre como cónyuge sobreviviente; que en dicha mortuoria se le adjudicó por su haber hereditario y los derechos de su madre la expresada casa, y esta adjudicación fue aprobada por el Juez, registrada la sentencia que la aprobó y protocolizado el expediente; que su padre adquirió dicha casa por haberla rematado ante la Junta del Ramo de bienes desamortizados, y haberle otorgado, en virtud de esto, el Agente general de estos bienes la correspondiente escritura de venta; que muerto su padre, su abuela Melchora Ortiz vendió los derechos hereditarios que pudiera tener en la mencionada casa, como heredera de su hijo, pero exceptuando la parte que pudiera corresponder á la demandante; y que sin haber cansa mortuoria de su padre, y sin haber hecho adjudicación de la referida casa y por tanto sin decreto judicial que diera la posesión efectiva de ella, y sin haberse registrado este decreto, el comprador de los derechos hereditarios de Melchora Ortiz vendió, no estos derechos sino la finca íntegramente, por lo cual ésta fue transmitiéndose con este vicio á distintas personas, hasta que llegó á poder del actual poseedor demandado. Presentó copia de la escritura que le otorgó á Patricio Sandoval el Agente general de bienes desamortizados con fecha diez y siete de Septiembre de mil ochocientos setenta y cuatro, número quince; copia de la hijuela ó cartilla de adjudicación que á la demandante se le hizo de la expresada casa, en la sucesión de su finado padre Patricio Sandoval; y un certificado del Registrador de Instrumentos públicos de Bogotá, en el que consta que la mortuoria de dicho Sandoval no había sido registrada antes del doce de Agosto de mil ochocientos ochenta y siete.

El Personero del Distrito y el Agente Fiscal denuncian el pleito á Carmen Sánchez, que fue quien vendió la finca en referencia al demandado; pero aunque la denuncia fue admitida, la vendedora no se presentó

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

á defender el juicio. El Personero contestó, aunque extemporáneamente, la demanda y negó todos los hechos de ésta, excepto el que afirma que la casa en cuestión fue de bienes desamortizados y que la remató Patricio Sandoval; y apoyó su negación en que la única heredera de Sandoval fue su madre Melchora Ortiz; en que la casa fue bien vendida por los anteriores dueños de ella, y el juicio de sucesión recientemente seguido por la demandante sólo tiene por objeto despojar al Distrito del legítimo dominio que tiene sobre ella; en que á la muerte de Sandoval dicha demandante no era hija legítima de éste, ni Mercedes Sánchez su cónyuge sobreviviente, por no haber sido celebrado el matrimonio conforme á la ley civil entonces vigente; en que á Clementina Sandoval se la declaró heredera de Patricio mediante una partida de matrimonio eclesiástico que yá no podía tener efecto retroactivo sobre los hechos consumados; y en que cuando se le adjudicó á la demandante la casa en cuestión, el Distrito era dueño de ella por haberla comprado legalmente á Carmen Sánchez, y por tal motivo es nula la hijuela ó cartilla de adjudicación. Terminó proponiendo la excepción de prescripción, que no fue admitida por haber sido propuesta extemporáneamente.

Dentro del término de prueba, la demandante reprodujo la escritura é hijuela que presentó con la demanda, y presentó también su partida de bautismo. El demandado presentó la escritura por la cual Patricio Sandoval obtuvo la casa; la de la venta que Melchora Ortiz hizo de sus derechos hereditarios en la sucesión de su hijo, el citado Sandoval, á Joaquín Pardo; la de la venta que éste hizo de la casa á Alberto Sandoval; y otras de varias ventas sucesivas de la misma casa, hasta la de tres de Septiembre de mil ochocientos setenta y cuatro, número mil ochocientos veintidós, otorgada ante el Notario 2.° de Bogotá, por la cual Carmen Sánchez vendió la referida finca al Presidente del Consejo de Instrucción primaria del Distrito de Bogotá, y para el servicio de la instrucción pública. Presentó también, en copia, la diligencia de la entrega que de la mencionada casa hizo á Clementina Sandoval el Juez 1.° ejecutor de Bogotá, por comisión y en cumplimiento de un auto del Juez 2.° del Circuito, el cuatro de Octubre de mil ochocientos ochenta y siete, y el auto por el cual el Tribunal de Cundinamarca declaró nula y de ningún valor esta entrega; y unas declaraciones de testigos levantadas fuera de juicio.

Terminó la instancia por la sentencia de fecha tres de Julio de mil ochocientos ochenta y nueve, por la cual se declaró que la referida casa pertenece en dominio y posesión á la demandante y se condenó al Municipio de Bogotá á restituírsela junto con los frutos percibidos por él desde que debió contestarse la demanda, pero reconociéndole derecho á que el reivindicador le abone las expensas invertidas en la conservación de la finca y el valor de las mejoras útiles hechas antes de la contestación de la demanda.

Pasó el asunto al conocimiento del Tribunal de Cundinamarca, por apelación que contra esta sentencia interpuso la parte demandada. En la segunda instancia dicha parte presentó, entre otras pruebas, la partida de defunción de Patricio Sandoval, la de su casamiento con Mercedes Sánchez, copia del juicio de sucesión del mismo, seguido por Clementina Sandoval y en que se declaró á ésta heredera suya en su carácter de hija legítima habida en su matrimonio católico; y algunos otros títulos que acreditan la transmisión de la casa en cuestión á los que la poseyeron antes de que pasara á ser del Municipio de Bogotá; y concluída la substanciación, el Tribunal profirió la sentencia de nueve de Diciembre último, por la cual revocó la apelada y absolvió al Municipio de Bogotá de todos y cada uno de los cargos contra él formulados en la demanda.

Contra esta sentencia interpuso la demandante recurso de casación fundado en la causal 1.ª del artículo 38 de la Ley 61 de 1886, por haberse infringido las disposiciones substantivas de los artículos 12 y 19 de la Ley 57, y 50 de la Ley 153, ambas de 1887, y en la causal que establece el artículo 110 de dicha Ley 57, por versar la referida sentencia sobre el estado civil de la recurrente. El recurso fue concedido, previa la consignación del depósito de cincuenta pesos y de la prestación de la fianza de costas de que hablan los artículos 43 y 44 de la Ley 61 y 111 de la 57, que se acaban de citar.

Como se han llenado los requisitos que establece el artículo 50 de la referida Ley 61, pues el recurso se interpuso en tiempo hábil, se consignó el depósito legal, y la sentencia es de aquellas contra las cuales dicho recurso puede interponerse, la Corte procede á decidir si ella es anulable por alguna de las causas mencionadas.

De las respectivas partidas que obran en los autos, referentes al estado civil de las personas, aparece que Patricio Sandoval contrajo matrimonio con Mercedes Sánchez, conforme al rito católico, el dos de Septiembre de mil ochocientos sesenta y cinco; que falleció el diez y ocho de Junio de mil ochocientos sesenta y seis, y que durante ese matrimonio, en Noviembre de mil ochocientos sesenta y cinco, nació la demandante Clementina Sandoval. Todos estos hechos se verificaron cuando estaba rigiendo en Cundinamarca la Ley de 30 de Agosto de 1864, según la cual sólo producían efectos civiles y políticos los matrimonios que se celebraran ante los funcionarios y con las formalidades que establecía el Código Civil de dicho Estado.

Según esto, es indudable que Clementina Sandoval, á la muerte de su padre, no tenía los derechos de hija legítima de éste, pero ni siquiera los de hija natural, porque no fue reconocida en la forma y términos que establecían las leyes entonces vigentes. Conforme al artículo 37 de la Ley 153 de 1887, en la adjudicación y partición de una herencia ó legado, se observarán las reglas que regían al tiempo de su delación.

Las disposiciones del citado Código que reglaban la sucesión intestada excluían de ésta á los hijos ilegítimos (título 2.° del libro 3.°)

La sucesión en los bienes de una persona se abría en el momento de su muerte (artículo 1,024 del mismo Código). La herencia de una persona se defería al momento de su muerte á aquellos á quienes ella designaba en su testamento ó á quienes llamaba la ley á heredarla, si moría intestada. Las personas llamadas por el testamento ó por la ley á la herencia, se llamaban asignatarios, y la delación era el actual llamamiento que les hacía la ley para que aceptasen ó repudiasen la asignación (artículos 1,022 y 1,025 del Código citado).

Aplicando estas disposiciones al caso presente, es claro que Clementina Sandoval no era asignataria á la muerte de su padre, porque como era hija simplemente ilegítima y estaba excluída de la sucesión, la ley no le hizo entonces llamamiento para que aceptara ó repudiara ninguna asignación, ó en otros términos, no le hizo delación de la herencia, y por consiguiente no se la defirió ni adquirió derecho á ella por no ser heredera. La delación se hizo á los que entonces eran herederos de Sandoval conforme á las leyes, y en virtud de eso ellos adquirieron derecho á esa herencia. No siendo asignataria la demandante, el juicio que con tal carácter promovió años después para que se le adjudiquen los bienes que

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

qnedaron por muerte de su padre, y la reivindicación de esos bienes, fu n dada en tal adjudicación, carecen de razón legal.

No obstante esto, dicha Clementina fue declarada heredera de su padre Patricio Sandoval, por sentencia del Juez 2.° del Circuito de Bogotá, de fecha veintiséis de Noviembre de mil ochocientos ochenta y seis, en virtud de que la Ley 22 de 1888 llamó á la sucesión, á falta de hijos legítimos, á los habidos en matrimonio eclesiástico ; y con este título promovió juicio mortuorio de su citado padre. En veintiséis de Marzo de mil ochocientos ochenta y siete se hizo el inventario de los bienes de la sucesión, los cuales se redujeron á la casa cuya reivindicación ha sido materia de la presente controversia; y dicho inventario fue aprobado por anto de quince de Junio del mismo año. Terminó el juicio por la adjudicación que se hizo á Clementina Sandoval, como única heredera de la referida casa. La adjudicación fue aprobada por sentencia judicial de catorce de Julio del referido año, que se declaró ejecutoriada por anto de treinta del mismo mes. Protocolizado el expediente se le expidió á la demandante la copia de la hijuela ó cartilla de adjudicación, y apoyada en este título promovió el presente juicio.

Antes de aprobarse esta adjudicación, el Juez, á petición del apoderado de dicha Clementina, y fundado en que el matrimonio católico de Patricio Sandoval con Mercedes Sánchez es válido conforme al artículo 19 de la Ley 57 de 1887 que tiene efecto retroactivo, la declaró heredera legítima de éste como hija de ese matrimonio. La adjudicación se le hizo, pues, como á hija y heredera legítima de Sandoval. Sin embargo de esto, la sentencia materia del recurso le ha desconocido este carácter y el derecho que con ese título alega á la cosa demandada, como bien perteneciente á la sucesión de su padre, y tal decisión se ha fundado en que el matrimonio católico de que la demandante nació, no produjo efectos civiles conforme á la citada Ley de 30 de Agosto de 1864. vigente cuando se celebró, y por consiguiente ella no es hija legítima de Sandoval, y en que tampoco es hija natural porque no fue reconocida ; y esto es lo que ha dado origen al recurso de casación, pues se cree que con esta decisión dicha sentencia ha infringido los artículos 12 y 19 de la Ley 57 de 1887, y el 50 de la Ley 153, del mismo año, y que por este motivo se halla en la primera de las causales de nulidad que establece el artículo 38 de la Ley 61 de 1886.

El primero de los artículos citados de la Ley 57, sólo dice esto: "Son válidos para los efectos civiles y políticos los matrimonios que se celebren conforme al rito católico." Aquí no hay ninguna palabra ó frase que pudiera tomarse como fundamento para establecer que esta disposición se refirió á hechos pasados ; ella se dio para lo futuro.

Vino luégo el artículo 19 de la misma Ley 57 y dijo : "La disposición contenida en el artículo 12 tendrá efecto retroactivo. Los matrimonios católicos celebrados en cualquier tiempo, surtirán todos los efectos civiles y políticos desde la promulgación de la presente ley" ; pero la Corte ha entendido, y así lo expresó en otra ocasión, que la retroactividad de que habla esta disposición no se refiere sino á la validez para los efectos civiles y políticos que confiere á un acto anterior á ella que no los producía, pero no á los efectos de actos anteriores á la misma ley, supuesto que sólo asigna efectos de esa clase á los que se surtieran después de su promulgación. Dicho artículo 19, pues, únicamente quiso hacer válidos los matrimonios católicos que se hubieran celebrado en cualquier tiempo, una vez que el artículo 12 solamente legitimaba los que se celebrasen

desde que la expresada ley entrase en vigencia. La frase explicativa "los matrimonios católicos celebrados en cualquier tiempo, etc.," determina con toda claridad que este es el sentido del primer miembro de este artículo ; pero como según éste los efectos de esa legitimación no se surtían sino desde la promulgación de la ley, no hay duda que los derechos adquiridos anteriormente no quedaron sujetos á su imperio.

En explicación de dicho artículo 19, la Ley 53 de 1887 sancionó la disposición de su artículo 21, según la cual el matrimonio podrá por ley posterior declararse celebrado desde época pretérita ; y válido en sus efectos civiles á partir de un hecho sancionado por la costumbre religiosa y general del país, en cuanto este beneficio retroactivo no vulnere derechos adquiridos bajo el imperio de la anterior legislación ; y la de su artículo 50, que en aplicación de esta regla dijo : "Los matrimonios celebrados en la República en cualquier tiempo conforme al rito católico, se reputan legítimos, y surten, desde que se administró el sacramento, los efectos civiles y políticos que la ley señala al matrimonio, en cuanto este beneficio no afecte derechos adquiridos por actos ó contratos realizados por ambos cónyuges, ó por uno de ellos, con terceros, con arreglo á las leyes civiles que rigieron en el respectivo Estado ó Territorio, antes del 15 de Abril de 1887. Queda así explicado el artículo 19 de la Ley 57 de 1887, con arreglo al 21 de la presente."

Yá se ha visto que este artículo 21, con arreglo al cual el que acaba de copiarse explica el 19, establece en términos precisos que el beneficio de retroactividad de que él habla, sólo puede tener lugar en cuanto no vulnere derechos adquiridos por leyes anteriores. Luego el artículo 50 copiado es deficiente en cuanto establece que los únicos derechos adquiridos que no pueden ser vulnerados por el expresado beneficio, son los que provengan de actos ó contratos realizados por ambos cónyuges, ó por uno solo de ellos, con tercero, puesto que restringiendo la terminante regla general que en el 21 se establece, modifica su sentido.

Dicho artículo 21 tiene la generalidad y extensión del 31 de la Constitución, que también hace parte del Código Civil, y es reproducción de éste en cuanto aplica su doctrina á la retroactividad que otorga al matrimonio católico. El 50, pues, se aparta de la regla constitucional en cuanto contraría la terminante doctrina que ella establece. Pero como el artículo 6.° de la misma Ley 153 dispone en su parte final, que cuando no se trate sino de una disposición deficiente, se aplique en el sentido más conforme con lo que la Constitución preceptúe, es obvio que el referido artículo 50 debe aplicarse en el sentido constitucional. Aun los mismos términos en que ese artículo está concebido indican que así debe ser, pues él siempre salva los derechos adquiridos por terceros.

Ahora bien : según lo que arriba se ha expuesto, Clementina Sandoval no era heredera de Patricio Sandoval á la muerte de éste. La herencia de Patricio se defirió en el momento de su muerte á los que entonces eran sus herederos, quienes adquirieron derecho á ella en virtud de esa delación. Luego aunque posteriormente, y á virtud de las citadas disposiciones de las Leyes 57 y 153 de 1887 que han legitimado el matrimonio católico de Patricio Sandoval con Mercedes Sánchez desde que se les administró el Sacramento, haya pasado Clementina Sandoval á ser hija legítima de aquéllos, como nacida de ese matrimonio, esto no puede deshacer los efectos de actos anteriores á esas mismas disposiciones, ó sea vulnerar derechos adquiridos por terceros; y, en consecuencia, hoy no puede declararse á dicha Clementina heredera de Sandoval para que én-

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

tre en una herencia que se defirió en mil ochocientos ochenta y seis á los que á la muerte de éste eran sus herederos, conforme á las leyes entonces vigentes, y que en virtud de esto adquirieron derecho á ella. Cierto es que Clementina Sandoval fue, no obstante esto, declarada heredera legítima de Patricio Sandoval, y que con esta declaración siguió un juicio mortuorio en que se le adjudicó la casa que quedó á la muerte de su padre, y que fundada en este título ha entablado la presente demanda de reivindicación de dicha finca; pero tal declaración no puede producir el efecto de invalidar los derechos que adquirieron los herederos de Sandoval cuando se les defirió la herencia, ni ella puede, en consecuencia, servirle de título para reivindicar una finca de que dispusieron los que por ministerio de la ley recibieron la herencia y por haber dispuesto de ella vino á ser del actual poseedor. En dicho juicio mortuorio, yá que se siguió, debió observarse la regla del artículo 37 de la Ley 153 arriba copiado, y conforme á ésta debió adjudicarse la herencia de Patricio Sandoval, observando las reglas que regían al tiempo de su delación.

Por lo expuesto se viene en conocimiento de que la sentencia objeto del recurso es legal, puesto que en su parte dispositiva reconoció que la demandante no tiene derecho, á título de heredera legítima de Patricio Sandoval, á la casa cuya reivindicación demandó del actual poseedor, que es el Municipio demandado, y lo absolvió de todos y cada uno de los cargos de la demanda, y que en consecuencia ella no es violatoria de las disposiciones substantivas de los artículos 12 y 19 de la Ley 57 de 1887 y 50 de de la Ley 153 del mismo año, ni ocurre en ella la primera causal de las que determina el artículo 38 de la Ley 61 de 1886.

Cierto es que en su parte motiva la referida sentencia expresó el concepto, en términos absolntos, de que el matrimonio católico del cual nació Clementina Sandoval no produce efectos por haberse celebrado en contravención á la Ley de 20 de Agosto de 1864, y que los artículos 12 y 19 de la Ley 57, y el 50 de la Ley 153 yá citados, no pueden aplicarse sino á los casos en que, á la fecha de su sanción, no se hubiere disuelto el matrimonio; pero aunque este concepto no sea del todo exacto, no por ello deja de ser legal la parte dispositiva de la mencionada sentencia, como yá se ha demostrado. Que no es exacto el expresado concepto, lo demuestran los mismos términos del artículo 50 citado, pues él reputa legítimos los matrimonios católicos celebrados en la República en cualquier tiempo, desde que se administró el sacramento y desde ese mismo día surten sus efectos civiles y públicos, y por consiguiente el de que se habla quedó incluído en esa legitimación, aunque se haya disuelto por la muerte del esposo; la hija nacida en él es legítima para todos los efectos que su legitimación produce en cuanto no afecte derechos adquiridos; y es legítimo el cónyuge sobreviviente. Si dicha hija legítima no puede entrar hoy en la herencia de su padre, es sólo por las razones de que arriba se ha hecho mérito.

Pero si este concepto del Tribunal se aparta de la verdadera inteligencia de las disposiciones legales que se examinan, no puede aceptarse tampoco el argumento que hace el apoderado de la recurrente, de que la Ley de 30 de Agosto de 1864 no sólo ha quedado derogada sino anulada, que es como si no hubiera existido, y que por ello no puede reconocérsele efecto alguno ni hacerse derivar de ella ningún derecho. Si esta proposición se admitiera resultaría que quedaban de hecho nulos todos los matrimonios que se contrajeron conforme á esa ley, no sólo los que se celebraron entre cónyuges que además de contraer el matrimonio civil

contrajeron también el eclesiástico, sino los puramente civiles; que eran nulos los efectos civiles que esos matrimonios produjeron, y en consecuencia dejaban de ser legítimos los hijos habidos en ellos; había cambio de estado civil; dichos hijos yá no serían herederos de sus padres, y otros vendrían á disputarles la herencia deferida á la muerte de éstos; y que los esposos perderían también este carácter.

No se niega que dicha ley produjo gravísimos males, porque como pugnaba contra las creencias religiosas y las costumbres del país, era desobedecida por la generalidad de las gentes, y los que la cumplían lo hacían sólo por llenar una fórmula legal y evitar los daños que de no llenarla se les seguirían, y que con el hecho de quitarle sus efectos civiles al matrimonio católico, redujo á una triste condición legal á los hijos nacidos de estos matrimonios, los privó de los bienes de sus padres y les causó otros muchos daños graves, no obstante ser hijos legítimos ante Dios y la sociedad: todo esto es cierto, y por eso corregir estos males y reparar en lo posible los daños yá causados, fue lo que el legislador se propuso con las disposiciones que se han examinado de las Leyes 57 y 153 de 1887; pero esto no podía hacerlo sino dentro de la equidad y sin desconocer derechos yá adquiridos por terceros, ni desbaratar actos consumados, porque esto causaría otros males, sacrificaría otras víctimas y produciría por su violencia un grave trastorno social. Por eso el efecto retroactivo de que se ha hablado, tiene límites cuyo objeto es evitar estos males.

Lo alegado de que Melchora Ortiz, madre de Patricio Sandoval, no era heredera de éste, que lo que ella vendió á Pardo fueron sus derechos hereditarios, pero salvando lo de la demandante, y que lo que Pardo vendió fue la casa de la sucesión sin haber adquirido el dominio de ella, por lo cual se transmitió con este vicio á los demás compradores hasta el actual poseedor, carece de fundamento. Si Melchora Ortiz no era heredera, podrían disputarle la herencia aquellos que la adquirieran á la muerte de Sandoval por habérseles deferido entonces legalmente; pero nó la demandante, porque yá se ha expresado que ella no era heredera á la muerte de su padre conforme á las leyes anteriores vigentes.

Por lo expuesto la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara que no es anulable por las causales alegadas la sentencia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca que ha sido objeto del presente recurso de casación interpuesto por Clementina Sandoval.

Se condena á la parte recurrente al pago de las costas y á la pérdida del depósito, que se aplicará al Lazareto de Agua de Dios.

Notifíquese, cópiese, publíquese y devuélvase el expediente.

LUCIO A. POMBO.—Luis M. Isaza.—Salomón Forero.—Ramón Guerra A.—Froilán Largacha.—Joaquín Martínez E.—Mariano de Jesús Medina.—*Gabriel Rosas*, Secretario.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

YERRO TIPOGRAFICO

En la página 255, primer renglón, se lee:

sladamente considerado, y prescindiendo de su carácter explicativo, haya.

Léase:

aisladamente considerado, y prescindiendo de su carácter explicativo, hay.

INDICE GENERAL

DE LAS MATERIAS QUE CONTIENE ESTE SUPLEMENTO

Pág.

CONSTITUCIÓN NACIONAL.—Anotaciones relativas á varios artículos de la misma ..... 1 á 9

NINISTERIO DE GOBIERNO.—Resoluciones sobre puntos relativos al Código Político y Municipal ..... 10 á 12

— Resoluciones sobre asuntos civiles ..... 12 á 19

LEYES DE 1890

LEY 4.ª, que deroga una disposición y reforma otra del Código de Organización Judicial 20

LEY 6.ª, por la cual se crean algunas provincias en el departamento de Antioquia 21

LEY 14, por la cual se da una autorización al Gobierno, sobre Bancos. 22

LEY 33, relativa al departamento de Panamá 22

LEY 37, por la cual se autoriza el establecimiento de un Monte de Piedad, y se concede un auxilio 24

LEY 39, por la cual se establecen los derechos de registro de instrumentos públicos y privados 25

LEY 56, sobre expropiaciones por causa de utilidad pública 33

LEY 65, por la cual se reforma el artículo 31 del Código de Comercio. 41

LEY 72, que reforma la 147 de 1888, sobre organización judicial 42

Gastos judiciales 45

LEY 77, por la cual se devuelve una facultad á los bancos particulares y compañías anónimas 47

LEY 84, sobre recompensas militares 48

LEY 89, por la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose á la vida civilizada 65

LEY 95, sobre reformas civiles 71

LEY 96, sobre creación del Monte Pío Militar 79

LEY 102, referente á algunas provincias del departamento del Cauca .. 80

LEY 105, sobre reformas á los procedimientos judiciales 81

Definiciones y disposiciones preliminares 81

Demanda en general 81

Demandante y demandado en general 84

Apoderados 84

Depósito ó secuestro 85

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

Pág.
Notificaciones y citaciones 87
Posiciones 89
Excepciones 91
Actuaciones 92
Términos 95
Remisión de autos 96
Confesión de parte 97
Testigos 97
Peritos 98
Inspección ocular 99
Articulaciones 99
Impedimentos y recusaciones 99
Acumulación de autos 100
Desistimiento 101
Autos y sentencias 102
Costas 103
Ejecución de las sentencias 106
Apelaciones 106
Nulidades 108
Juicio ordinario por demandas de mayor cuantía. Primera instancia 112
Segunda instancia 114
Juicio ordinario por demandas de menor cuantía. Primera instancia 116
Segunda instancia 116
Juicio ejecutivo 118
Tercerías en los juicios ejecutivos 127
Juicio de sucesión por causa de muerte. Diligencias judiciales para evitar el extravío ó la pérdida de los bienes hereditarios. 131
Petición de herencia 132
Inventarios y avalúos 132
Partición de los bienes de la sucesión 136
División de bienes comunes 136
Deslinde y amojonamiento de propiedades 137
Juicios posesorios 137
Denuncio de obra nueva 141
Nombramiento y remoción de guardadores 141
Amparo de pobreza 141
Juicio por arbitramento 143
Interdicción judicial 146
Juicios de capellanías 146
Disposiciones varias 147
Enjuiciamiento en negocios criminales. Disposiciones preliminares. 149
Arresto ó detención provisional del sindicado 149
Defensores 150
Acto en que se declara ó nó con lugar al seguimiento de causa 150
Prisión del procesado 151
Indicios 152
Celebración del juicio 152
Apelaciones y consultas 152
Reforma y revocación de autos 153
Impedimentos y recusaciones 153
Excepciones 153
Procedimiento de la Corte Suprema ó de los Tribunales Superiores en segunda instancia 153
Juicios de responsabilidad 154

Pág.
Visitas de cárceles 154
Disposiciones varias 155
Recurso de casación y revisión. Recurso de casación. Objetos de este recurso, y casos en que él puede interponerse 155
Causales que dan derecho á interponer el recurso de casación 157
Preparación y admisión del recurso de casación en asuntos civiles. 162
Sustanciación y determinación del recurso por la Corte en asuntos civiles 163
Recurso de casación que interpone el Ministerio Público 165
Admisión, sustanciación y determinación del recurso en asuntos criminales 165
Intervención de la Corte en el caso de sentencias contrarias 166
Recurso de revisión. Casos y tiempo en que puede interponerse este recurso 167
Sustanciación y determinación del recurso de revisión 168
Quiénes pueden interponer el recurso de revisión en asuntos criminales 169
Asuntos militares 169
LEY 11, por la cual se autoriza al Gobierno para crear Cámaras de comercio 171
DECRETO número 62 de 1891, por el cual se crea una Cámara de Comercio en la ciudad de Bogotá 172
LEY 113, por la cual se establece una contribución nacional para el sostenimiento de Lazaretos 174
LEY 114, por la cual se adiciona y reforma la 110 de 1888, orgánica del Impuesto de papel sellado y timbre nacional 175
LEY 118, sobre división territorial judicial 176
LEY 119, reformatoria de la 56 del presente año, sobre expropiaciones por causa de utilidad pública 185
LEY 124, sobre sucesión abintestato de extranjeros 189
MODELOS para extender algunos de los instrumentos que pasan ante los Notarios 193
DOS DISERTACIONES sobre puntos relacionados con el matrimonio 223
PRIMERA disertación: separación de hecho de los cónyuges 225
SEGUNDA disertación: retroactividad de las leyes relacionadas con el matrimonio 238

Universidad del Rosario | Archivo Histórico

17 DIC 200

349.861 06923
C65s
AUTOR Colombia, leyes, decretos.

TITULO Suplemento a la codificación-nacional.

El préstamo Vence el	NOMBRE DEL LECTOR

100006923

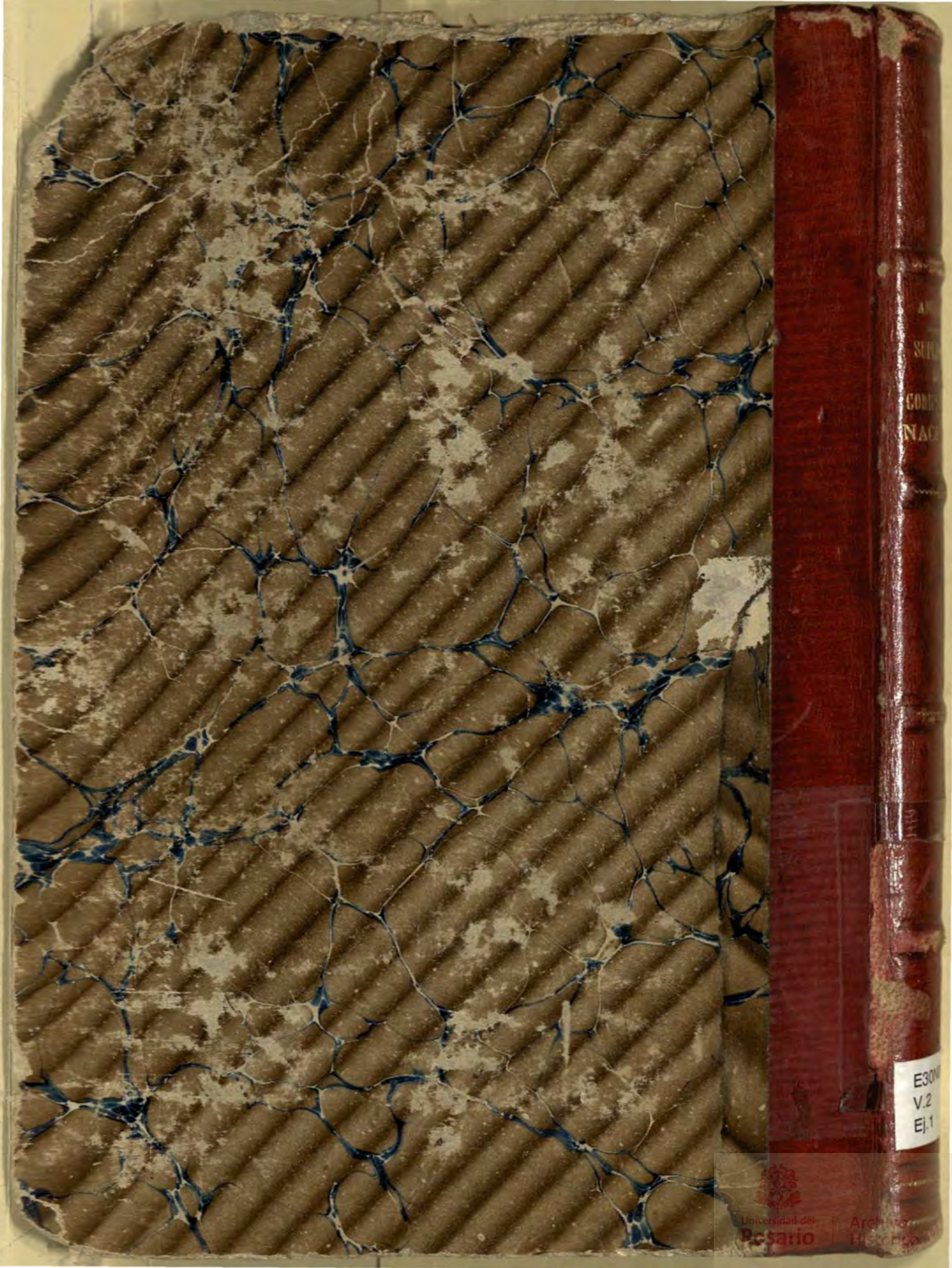
17 DEC 2007
18 DIC 2008
15 DIC 2009
20 DIC 2010

FECHA DE VENCIMIENTO

14 MAR. 2011		
14 ABR. 2011		

PROBIBLIOTECAS LTDA.

Universidad del Rosario | Archivo Histórico


E30
V.2
Ej.1
Universidad del Pesario
Archivo Histórico